



OPEN
GOVERNMENT
GUIDE

Insumos para Plan de Acción 2015-2017
PANAMÁ

Customised Report

www.opengovguide.com




Table of Contents

Introduction	3
Datos de gobierno abierto (Sunlight Foundation y Open Knowledge Foundation)	5
Declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses (Global Integrity)	28
Derecho a la Información (Access Info y Centre for Law and Democracy)	43
Elecciones (National Democratic Institute)	64
Fuerzas policiales y seguridad ciudadana (Open Society Foundation)	86
Gestión documental (International Records Management Trust)	102
Medio ambiente (The Access Initiative)	118
Participación ciudadana (Involve)	134
Presupuestos (International Budget Partnership)	163
Servicios públicos (Twaweza y Involve)	190
Anexo: Estándares y directrices	212
Anexo: Agradecimientos	254

Introduction

At the heart of open government are the ideas of transparency, participation and accountability. As a working definition;

- **Transparency** means the public understands the workings of their government
- **Participation** means public can influence the workings of government by engaging with public policy processes and public service providers
- **Accountability** means the public can hold the government to account for its policy and service delivery performance

 More about definitions can be found at www.opengovguide.com/glossary





The Guide has been developed by the Transparency and Accountability Initiative (T/AI). It aims to support governments and civil society organisations to advance transparency, accountability and participation particularly as part of the Open Government Partnership. It highlights practical, measurable, specific and actionable steps that governments can, and are taking to advance open government.

The full guide covers a broad range of topics, and more are being developed.




Cross cutting topics	Focused topics
Contratación pública	Ayuda al desarrollo
Datos de gobierno abierto	Construcción
Declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses	Elecciones
Derecho a la Información	Fuerzas policiales y seguridad ciudadana
Gestión documental	Impuestos y flujos ilícitos
Participación ciudadana	Industria extractiva
Presupuestos	Medio ambiente
Privacy and Data Protection	Parlamentos
Protección de informantes	Pesca
Servicios públicos	Security sector
	Tierra

 A full index can be found at www.opengovguide.com/topics

Each Topic has been developed by an expert organisation and offers a flexible menu of 'illustrative commitments' which governments could adopt.

-  **Initial steps** – actions that a country can take starting from a relatively low baseline
-  **Intermediate steps** – actions that countries can take once they have already made moderate progress
-  **Advanced steps** – established best practice demonstrated by the most advance performers
-  **Innovative steps** – new approaches which countries are trying out

For each step the Guide lists.

-  **Recommendations** – detailed guidance from expert networks
-  **Standards and guidance** – key principles, guidance, reports, rankings and tools
-  **Country examples** – examples in practice from around the world

The levels of ambition do not imply that countries must work through the steps one by one, or that the country examples given in relation to a particular action implies an overall rating of national progress. Rather, it seeks to offer a flexible framework to support national dialogues about reforms in support of progress towards greater openness.

This document is a customised extract from the full online guide, which is a work in progress. Opengovguide.com is not just a static website. We hope that it will continue to grow with new case examples, resources and ideas. Contact info@opengovguide.com with comments and suggestions.

About T/AI


T/AI is a donor collaborative that aims to seize momentum and expand the impact breadth and coordination of funding and activity in the transparency and accountability field as well as to explore applications of this work in new areas. The collaborative includes the Ford Foundation, Hivos, the International Budget Partnership, the Omidyar Network, the Open Society Foundations (OSF), the Revenue Watch Institute, the UK Department for International Development and the William and Flora Hewlett Foundation

The contents of The Guide are attributable to the contributors for each Topic. The Transparency and Accountability Initiative members do not necessarily endorse the recommendations mentioned in the publication and website.

The Transparency and Accountability Initiative
c/o the Open Society Foundation
Millbank Tower, 7th floor
21-24 Millbank
London SW1P 4QP
United Kingdom
[+44 \(0\)207 031 0200](tel:+442070310200)

www.transparency-initiative.org

Datos de gobierno abierto

 **Autor principal:** [Sunlight Foundation](#) y [Open Knowledge Foundation](#)

Introducción

Los datos abiertos parten de la convicción de que los datos deberían estar disponibles para que cualquiera pueda acceder a ellos, usarlos y volver a publicarlos de la manera que deseen, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. La información del sector público que se pone a disposición del público como datos abiertos se denomina "datos de gobierno abierto". Los gobiernos y sus contratistas manejan grandes cantidades de información como parte de sus actividades corrientes. Por lo general, esto suele generar una situación en la que el estado se transforma en un poderoso monopolio de la información, ya que además puede tener la capacidad de estructurar y homogeneizar las interacciones entre el propio aparato estatal y los ciudadanos. Estas interacciones unilaterales son caras y no dan cuenta de las necesidades de los ciudadanos, además de poder limitar enorme e innecesariamente la acción del gobierno.

La apertura de los datos gubernamentales conlleva consideraciones tanto políticas como técnicas. Entre los beneficios que se pueden obtener si los datos gubernamentales se manejan de forma abierta, se cuentan los siguientes:

- **Transparencia:** En una sociedad democrática que funcione correctamente, la ciudadanía necesita saber qué está haciendo el gobierno. Para ello, necesita acceder libremente a los datos y la información del gobierno para analizar y compartir esa información con los demás ciudadanos.
- **Eficiencia:** Se favorece una mejor coordinación y eficiencia con el gobierno, al hacer que los datos sean más fáciles de encontrar, analizar y combinar, aunando el trabajo de distintos departamentos y agencias.
- **Innovación:** En la era digital, los datos son un recurso fundamental para las actividades sociales y comerciales. Todo, desde subirse a un autobús a encontrar a un médico, depende del acceso a la información, una gran parte de la cual está en manos del gobierno. Al abrir los datos, el gobierno puede ayudar a la creación de modelos de negocio y servicios innovadores que aporten valor tanto a la economía como a la sociedad.

Gran parte de la legislación y de las políticas públicas sobre documentos públicos y acceso a la información ha estado basada en la noción de publicación pasiva: la información pública debía ser solicitada antes de su publicación. Sin embargo, un gobierno verdaderamente comprometido con los datos abiertos es aquel que publica información de manera activa, lo que significa que los datos públicos se recopilan y se divulgan antes de que se reciba ninguna petición al respecto. En otras palabras, la visión de los datos abiertos es que la información gubernamental sea "abierta por defecto". Los datos abiertos también comportan implicaciones técnicas, especialmente por lo que respecta a los formatos escogidos para la divulgación. Los formatos abiertos por excelencia están estructurados y no están protegidos por derechos de propiedad intelectual, lo que permite al público y al gobierno extraer todo el valor posible de esa información, tanto en el momento mismo de su publicación como en el futuro.

Los gobiernos de todo el mundo citan razones muy distintas para justificar sus primeras iniciativas de apertura de datos: la creciente transparencia gubernamental y la rendición de cuentas hasta la catalización de nuevos servicios y aplicaciones digitales para los ciudadanos, pasando por la plena explotación del potencial económico de la información pública y la adaptación de los actuales servicios públicos a las necesidades futuras. Aunque gran parte de este interés de las altas esferas del gobierno es nuevo, hay muchas profesiones y grupos que participan en el diálogo, las políticas públicas y el desarrollo entorno a este asunto, entre los que es obligado nombrar a cargos públicos, periodistas, desarrolladores, reformistas de la transparencia, activistas pro transparencia y, por supuesto, ciudadanos concienciados sobre la importancia de la apertura de los datos públicos.

especializadas

Global Open Data Initiative <http://globalopendatainitiative.org/>

Sunlight Foundation <http://sunlightfoundation.com/>

Open Knowledge Foundation <http://okfn.org/>

World Bank's Open Government Data Working Group <http://data.worldbank.org/>

Web Foundation <http://www.webfoundation.org/>

Open Institute <http://openinstitute.com/>

OGP Working Group: Open Data <http://www.opengovpartnership.org/get-involved/join-working-group>

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Compromiso fuerte de la administración con la apertura de datos
- Identificar ciertos tipos de información pública y publicarlos como datos abiertos

Intermedio

- Desarrollar una política de datos gubernamentales basada en un proceso inclusivo y cuyo alcance se extienda a todo el aparato de gobierno
- Disponer la publicación de nuevos conjuntos de datos

Avanzado

- Crear listados públicos de datos gubernamentales y auditar su disponibilidad y administración
- Crear o designar un ente supervisor
- Involucrar activamente a los usuarios y apoyar su participación
- Obligar a que todas las organizaciones que manejen datos públicos cumplan los compromisos de datos abiertos
- Reconocer nuevos derechos jurídicos que otorguen mayores poderes al público

Innovador

- Crear identificadores únicos para organizaciones, cosas y lugares

Detailed Recommendations

Inicial Step: Compromiso fuerte de la administración con la apertura de datos

Justificación

Los gobiernos que desean cosechar los beneficios de los datos abiertos suelen comenzar por anunciar su compromiso con la idea de los datos abiertos, tras lo cual establecen objetivos ambiciosos pero realistas para la publicación de datos. Comenzar con un compromiso público fuerte hace que los datos abiertos sean una práctica compartida por las distintas áreas del gobierno, y puede sentar unas bases sólidas para que se continúe desarrollando la iniciativa tanto en los aspectos políticos como en los técnicos. Además, el público general, los emprendedores y el sector privado tienen muchas oportunidades para engancharse al proceso.

Los compromisos deberían indicar claramente los beneficios de la publicación activa de datos en formatos abiertos. Además, pueden hacer que los gobiernos acojan a nuevos actores interesados en el proceso de divulgación de datos y de deliberación sobre la información publicada. Además de facilitar la supervisión de toda la iniciativa desde sus inicios, una temprana inclusión del público, tan temprana como para que tenga voz en la redacción del propio borrador del compromiso, aumenta el interés de la opinión pública, permite que los defensores de la causa prioricen sus esfuerzos y congrega el apoyo técnico para los pasos de publicación que deban ser tomados más adelante.

Un compromiso fuerte y bien elaborado puede ser una herramienta muy útil que sirva de punto de partida para la creación de un espacio político en el que cobren sentido otros proyectos reformistas y nuevas políticas, sin perder de vista que se trata tan solo de un primer paso.

Recomendaciones


Comprometerse con los datos abiertos de forma visible y substancial, y desde las más altas instancias jerárquicas que sea posible. Por ejemplo, los pasos fundamentales de distintos gobiernos han sido los siguientes:

1. Una declaración pública desde la jefatura del estado o el jefe del gobierno a todos los ministerios en la que se defiendan y propongan los datos abiertos, estableciendo principios fundamentales, como los formatos abiertos, la falta de protección en materia de derechos de propiedad intelectual y la transparencia. También se deberían establecer acciones o ámbitos prioritarios.
2. Establecer un organismo de coordinación (por ejemplo, un Consejo Ministerial) o un grupo de trabajo que incluya a miembros del gobierno y vea encomendada la tarea de explorar este compromiso y sus implicaciones prácticas.
3. Apoyar los instrumentos legislativos que apoyen la transparencia en las operaciones del aparato estatal, así como la integración de los datos abiertos en consideraciones de políticas públicas.

Estándares y directrices

- Conjunto de herramientas de datos abiertos del Banco Mundial <http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit>
- Manual de datos abiertos de la Open Knowledge Foundation <http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf>
- Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>

Ejemplos por países

 The City Council of Enschede passed a motion recognizing the importance of reusable open data and encouraging citizen participation

At a meeting in March 2011, the City Council of the Dutch city of Enschede passed the Motion *Innovation and Agility with Open Data* where it requested that data should be made open and freely available. The motion recognised that the value of the data held by the city could be enormously enhanced if it was available as open data, allowing citizens to use this data to contribute to economic and sustainable activities.

- <http://www.slideshare.net/TonZijlstra/enschede-netherlands-open-data-motion/>

 The UK Prime Minister set out a broad commitment to open data in a letter to government departments

In May 2010, the UK Prime Minister, David Cameron, sent a [letter to government departments](#) on plans to open up government data. The letter contained the government's initial transparency commitments in relation to central and local government spending transparency, and key government datasets, such as crime data. The Prime Minister sent an additional letter to [Cabinet Ministers](#) on transparency and open data in July 2011 which set out a new set of commitments. These commitments focused on improving data quality and data availability, primarily concerning the National Health Service, education and skills, criminal justice, transport, and government financial information.

- <https://www.gov.uk/government/news/letter-to-government-departments-on-opening-up-data>
- <https://www.gov.uk/government/news/letter-to-cabinet-ministers-on-transparency-and-open-data>

 The US government has made a public commitment to open data

The US Government has made strong public commitment to opening data in recent years. For example, on his first day in Office, President Obama signed the [Memorandum on Transparency and Open Government](#), instructing government agencies to take specific actions to implement the principles of transparency, participation, and collaboration. In addition, the Office of Management and Budget published an [Open Government Directive](#) in December 2009 obliging agencies to expand access to information by making it available online in open formats. Finally, the [Memorandum on Open Data Policy](#) from May 2013 established a framework to help institutionalise the principles of effective information management at each stage of the information's life cycle to promote interoperability and openness.

- <http://www.whitehouse.gov/open>

Inicial Step: Identificar ciertos tipos de información pública y publicarlos como datos abiertos

Justificación

Un primer paso esencial en toda iniciativa de datos abiertos gubernamentales es el proceso práctico de divulgación de la información en formatos estructurados y legibles a máquina (como hojas de cálculo, archivos CSV, datos cartográficos o

documentos oficiales anotados), empleando además una licencia libre en la que se establezca claramente el permiso a terceras partes para utilizar la información contenida en los archivos publicados sin restricciones. Los formatos de datos no estructurados, como imágenes escaneadas de documentos del gobierno, permiten únicamente que los datos se vean, pero no que sean extraídos. La estructura permite que las máquinas rastreen la información en mayor detalle y con mayor precisión, permitiendo búsquedas, clasificaciones y análisis de datos más fáciles y rápidas. Entre los formatos abiertos de datos más habituales se encuentran JSON, CSV y XML (para bases de datos) y HTML o texto sencillo (que solo son semi-estructurados, pero tienen la ventaja de ser flexibles) para los documentos.

Al menos 25 países han publicado datos abiertos gubernamentales (listados en datacatalogs.org). Las publicaciones iniciales y tempranas de nuevos conjuntos de datos facilitan que los gobiernos se comprometan con la publicación activa de datos a gran escala. Es deseable que la selección de cuáles datos son prioritarios y se van a publicar en primer lugar responda a las exigencias de los futuros usuarios, ya sea porque se haya solicitado su publicación de forma expresa o porque se pueda inferir por fuentes indirectas, como las peticiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de información.

A la hora de proponerse la publicación activa de datos a cierta escala, los gobiernos deben aprovechar la oportunidad y publicar los datos en bruto. El acceso en bruto es una manera sencilla pero eficaz de publicar conjuntos de datos completos, permitiendo al público que se descargue toda la información almacenada en una base de datos de golpe. Ya se ofrezca como característica de un portal de datos o bajo la forma de un sencillo botón de "haz clic para descargar" en la web de un organismo público, el acceso a la información en bruto es, a menudo, uno de los pasos más sencillos y directos que puede dar una entidad pública para compartir la información que maneja con los ciudadanos.

Recomendaciones

1. **Averiguar los tipos de datos cuya publicación resulta valiosa para los procesos internos o públicos**, trabajando con funcionarios y cargos públicos, y representantes de grupos interesados significativos. Al priorizar los tipos de datos, es importante tener en cuenta la oportunidad que supone para proporcionar información que, además de revelar cuáles son los procesos de toma de decisiones, también los informe.
2. **Indagar sobre la posibilidad de que los datos sean legibles a máquina y por humanos**, enriqueciéndolos con marcadores semánticos, metadatos e identificadores;
3. **Comenzar a publicar alguna información pública como conjuntos de datos abiertos** – es decir, en formatos estructurados, legibles a máquina, soportados por plataformas independientes y bajo licencias explícitamente abiertas.
4. **Indagar sobre la forma de participación de los distintos ministerios, secretarías y agencias gubernamentales** en la identificación de datos publicables, ya sea en paralelo o de forma coordinada.
5. **Identificar a coordinadores o enlaces** entre los funcionarios y cargos públicos que puedan agilizar las primeras conversaciones sobre publicación de datos en su unidad ministerial.

Estándares y directrices

- Conjunto de herramientas de datos abiertos del Banco Mundial <http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit>
- Definición de datos abiertos <http://opendefinition.org/>
- Los 10 principios de los datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/>
- Manual de datos abiertos de la Open Knowledge Foundation <http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf>
- OpenGovData.io <http://opengovdata.io/>

- Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>
- World Wide Web Consortium: Publicar datos gubernamentales abiertos <http://www.w3.org/TR/gov-data/>

Ejemplos por países

Greece has set up a central catalogue of public data

Greece has set up *Data.gov.gr*, a central catalogue of public data which provides access to public databases from all Greek government bodies. The purpose of the website is to increase public access to high value, machine readable datasets, by cataloguing, indexing, storing and searching the public sector's data and information, as well as providing web services to citizens and other information users.

Data.gov.gr was launched in September 2013 and Ministries will be responsible for ensuring the availability of datasets falling under their jurisdiction in the form of 'open data'.

The website provides a mechanism for citizens to vote for the datasets they wish to see that are not yet publicly available. Citizens' proposals are sent to the relevant public bodies and the datasets are made priorities for publication.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/greece/case-study/inspiring-story-value-open-data>

In Denmark, enabling free access to 'basic data' will save the government an estimated USD 45 million per year

As part of Denmark's eGOVERNMENT strategy 2011-2015, individuals, public authorities and private businesses get free access to retrieve and use what in Denmark is called *basic data*. Basic data is fundamental information that is used by government for day to day administration and includes data about people, companies, addresses, land/properties and administrative geographic data, such as administrative and electoral boundaries.

Once the initiative has been completely phased in, in 2020, there are expected savings for the public sector of about USD 45 million per year as a result of lower administration costs. In particular the cost of buying data from other government organisations will be reduced.

Saving for the private sector, from no longer having to submit the same information to the public sector several times or spend time on buying public data, is estimated to be about USD 87 million per year. It is expected that real estate, insurance, finance, and telecommunications and geospatial companies in particular will benefit directly from open basic data.

- http://uk.fm.dk/publications/2012/good-basic-data-for-everyone/-/media/Publikationer/Imported/2012/Gode%20grunddata%20til%20alle/BasicData_UK_web_2012.10.08.ashx

In Israel the government worked with Google to make transit data more useful

Data.gov.il is a single window portal that aims to give access to public records data produced from information held by the government. The idea is to encourage creative use of the data by civil society and the larger public by providing tools for information presentation, standardized downloading and standard APIs.

When Google Israel tried to use this data to create a transit app they identified many inaccuracies. Google Israel ran its validation tools over the government database and made recommendations for improvement. "We found the e-Gov team very open to the process of validation and improvement. It took 6-10 months of iteration with the government until we were able to create the transit map for 25,000 bus stations and 53 train stations across the country"

- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Israel_0.pdf
- <http://www.Data.gov.il>
- <http://maps.google.co.uk/intl/en/landing/transit/#dmy>

Moldova publishes government data through an Open Data portal

Moldova launched its Open Data portal www.date.gov.md in 2011. The portal brings together disparate and disconnected datasets published by various Ministries and central administration offices under a single umbrella platform. Following technical and financial support from the World Bank, the portal started off with publishing 67 datasets from five public agencies in education, healthcare, economics, finance and agriculture. The number of datasets has since increased rapidly to 672 datasets in mid-2013. New legal provisions for open government data in Moldova, based on European best practices, have been drafted alongside the work on the Open Data portal.

- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Moldova.pdf>

Moldova requires each Ministry to release new datasets

In April 2011, Moldova became one of the first countries in Eastern Europe to launch an Open Data portal. The portal, www.date.gov.md brings together datasets published by various Ministries and central administration offices. The Prime Minister issued a directive which required Ministries to release three new datasets each month.

- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Moldova_0.pdf
- <http://http://www.date.gov.md/>

The government of Chile has published 1,003 datasets

These 1,003 datasets, published on the government website datos.gob.cl are ordered by ministry, categories, and popular tags.

- <http://datos.gob.cl/datasets>

Intermedio Step: Desarrollar una política de datos gubernamentales basada en un proceso inclusivo y cuyo alcance se extienda a todo el aparato de gobierno

Justificación

El núcleo de las iniciativas de datos abiertos de muchos gobiernos es una política cuyo alcance se extiende a todo el aparato de gobierno y que se manifiesta tanto en la publicación de nuevos datos públicos como en el establecimiento de estándares sobre cómo deben publicarse los datos. Esta medida sirve como descripción primaria y substantiva del método que empleará el gobierno para administrar y publicar la información. Las políticas de datos abiertos deberían servir prácticamente como aspiraciones, definiendo, por lo tanto, una visión que explica por qué se implementan dichas políticas, al mismo tiempo que proporcionan pasos prácticos que el gobierno y otras autoridades pertinentes de supervisión deban seguir para ver realizada la implementación. La creación de reglamentos o directrices pueden servir como garantía de unas políticas fuertes y fiables, lo que suele servir para distinguir entre medidas aprobadas de cara a la galería y medidas aprobadas por motivos sustantivos. El acceso a datos abiertos es un concepto amplio, y las buenas políticas de datos abiertos deberían ser relevantes para muchos grupos diferentes. Una política fuerte exige que haya consultas y colaboración con actores interesados dentro y fuera del gobierno, durante el diseño de las políticas y durante la implementación de las mismas. Las políticas de datos gubernamentales abiertos suelen ser mejores cuando se desarrollan de manera iterativa, adaptándolas de manera que los esfuerzos en estado embrionario se refuercen y crezcan, e identificando aquellos aspectos que deben ser revisados. Al estar abiertas (o incluso al necesitar) más revisiones e iteraciones, las políticas de datos abiertos podrán mantenerse al día de las mejores prácticas, avances tecnológicos y evaluaciones de los supervisores de las políticas.

Recomendaciones

1. Crear oportunidades y canales para que los usuarios de los datos participen: desde consultas, cuentas de social media, cuentas de correo electrónico creadas a tal efecto y personal que sea capaz de procesar la información y responder.
2. Realizar consultas amplias e inclusivas para aprovechar la masa crítica de la ciudadanía y construir un proceso legítimo. Asignar responsabilidades específicas sobre la organización de las consultas y prestar especial atención a los grupos que estén siendo excluidos.
3. Solicitar activamente información de los potenciales usuarios de datos sobre a qué tipos de información desean tener acceso, tanto al comienzo del proceso como de forma recurrente.
4. Revisar políticas y barreras existentes sobre acceso a datos abiertos, y reutilizar lo que pueda existir en el país.
5. Asignar responsabilidades específicas para el diseño de las políticas e involucrar a los funcionarios en todos los ámbitos del gobierno. Esto debería incluir la responsabilidad de incorporar sugerencias del público en las políticas.
6. Crear obligaciones para establecer los datos abiertos por defecto: desde estándares de datos a nuevos requisitos para el diseño de sistemas de datos, pasando por la elaboración de leyes que, al contar con estándares de publicación y datos desde el inicio, sirvan para promocionar los datos abiertos.
7. Las políticas deberían incluir plazos límite, objetivos prácticos e indicadores que puedan usarse como medidas del cumplimiento.
8. Sopesar el establecimiento de una única autoridad capacitada para resolver conflictos, supervisar de manera consistente y garantizar el cumplimiento de las políticas aprobadas. Este puede ser el papel de un Comisionado para la Información o de una autoridad de nuevo cuño.
9. Asegurarse de que hay suficiente financiación para la puesta en marcha.
10. Realizar nuevas iteraciones de las políticas tras la publicación con el objeto de reforzarlas.

Estándares y directrices

- Conjunto de herramientas de datos abiertos del Banco Mundial <http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit>
- Manual de datos abiertos de la Open Knowledge Foundation

<http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf>

- Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>

Ejemplos por países

Canada developed an Open Government License

Canada's OGP Action Plan included include a specific commitment to developing a new Open Government Licence. The goal of this commitment was to remove restrictions on the reuse of published Government of Canada information (data, info, websites, and publications), aligning better with international best practices for licensing. Various licences in use to this point were inconsistent, contained restrictive clauses, and were written in language only a lawyer could understand.

- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Inspiring%20Story%20-%20Canada.pdf>

The Australian state of New South Wales opened up its draft open data policy to comments on the web

After consulting with stakeholders, the Australian state of New South Wales released a draft [Open Data Policy](#) in May 2013 for public comment. The public was given about a month to participate in a discussion forum on the website engage.haveyoursay.nsw.gov.au and provide input to the following questions: (1) Which 'open data principles' should be included in the policy?; (2) Which jurisdictions have the best open data policies and why?; and (3) What can governments do to promote open data in the public service?

- <http://engage.haveyoursay.nsw.gov.au/opendata>

The city of Oakland drafted their open data policy using a collaborative method involving open, online comments and public meetings


The 2013 open data policy for the city of Oakland, California, was drafted using a collaborative method in which the public was invited to comment and participate directly in a public hearing.

- https://docs.google.com/document/d/1s7_p8Duj9aH7MmULqBqOU13iKVqeBalD1Gk4Y2v4/edit?pli=1

The Flemish government's open data policy that makes open-by-default the standard

The Flemish government in Belgium approved an open data policy in 2011. The policy contains six main elements:(1) open data is the default option, and public digital availability the norm; (2) re-use of the data is allowed for any purpose; (3) open standards need to be used; (4) data is to be made available at the first source where possible; (5) integral approach to realizing open data, involving all levels of government; and (6) a central data warehouse on Flemish government's own data is foreseen.

- [http:// http://epsiplatform.eu/content/flemish-government-outline-open-data-policy](http://http://epsiplatform.eu/content/flemish-government-outline-open-data-policy)



The US government established a public open source project to facilitate the implementation and evolution of its Open Data Policy

When the US Government established its Open Data Policy it recognised that technology moves much faster than policy ever could. Often when writing policy for technology, agencies are stuck with outdated methods as soon as they publish new policies.

It therefore established Project Open Data on GitHub, a popular code-sharing website used by the 'open source' community. Project Open Data is an online collection of code, tools, and case studies to help U.S. agencies adopt the [Open Data Policy](#). Anyone – government employees, contractors, developers, the general public – can view and contribute by editing the content, adding new pages, or adding tools.

At the onset, the General Services Administration is providing a moderator role – giving oversight and support, but over time, the vision is that contributors both inside and outside of government can be empowered to take on additional leadership roles.

- <http://project-open-data.github.io/>

Intermedio Step: Disponer la publicación de nuevos conjuntos de datos

Justificación

Aunque los gobiernos producen tremendas cantidades de información, y pese a que cada vez más y más personas buscar en internet documentos públicos y otros recursos, solo un pequeño subconjunto de ellos está accesible en internet. Las iniciativas de datos abiertos brindan la oportunidad de identificar conjuntos de datos y documentos que podrían ser publicados o subidos a la red, pero no están disponibles todavía. La identificación y publicación de "nuevos" datos es fundamental para llevar a la realidad cualquier programa gubernamental de datos abiertos, ya que integra las normas de datos abiertos en el procedimiento de la administración.

Ordenar la publicación de "nuevos" datos puede hacer referencia, en algunos casos, a información que se creará, recogerá y divulgará por vez primera, lo que supone una oportunidad única para seguir, desde el primer momento, las mejores prácticas en publicación de datos abiertos. En otras ocasiones, los "nuevos" datos puede tratarse de la identificación de conjuntos de datos ya existentes que deben prepararse para ser publicados como datos abiertos.

La información abarca todo el abanico, desde los datos de registros mercantiles hasta el vídeo, el audio y las actas de una junta municipal. Puede incluir información histórica que ha estado encerrada hasta ese momento en archivos en papel. Se pueden aprobar también disposiciones específicas sobre varios tipos de datos, desde la información sobre transportes a las bases de datos sobre lobbies o el vídeo y el audio de juntas municipales, pero se debería hacer especial hincapié en el lenguaje utilizado para describir qué información está legislada. Adjetivos descriptivos como "valioso" o "prioritario", empleados sin mayor indicación sobre cómo se asignan el valor y la prioridad, pueden generar importantes agujeros legales capaces de ralentizar o detener la divulgación de información de interés público.

Recomendaciones

1. Trabajar con funcionarios y miembros de agentes interesados importantes para identificar tipos de datos valiosos para procesos internos y públicos y dignos de ser publicados.
2. Aprobar legislación sobre datos abiertos que disponga la publicación de clases o subclases concretas de conjuntos de

datos como datos abiertos.

3. Mantener la claridad sobre el alcance de la información "nueva" e identificar a los organismos, comités o entidades que sean imprescindibles para el proceso de digitalización y publicación.
4. Crear obligaciones específicas de actualización continua de los datos abiertos, y aspirar a publicar los datos gubernamentales tan pronto como sean recopilados (en "tiempo real").
5. Publicar datos nuevos online sin protección de la propiedad intelectual ni tasas de acceso, en un formato estructurado y asegurándose de que los datos se actualizan con la suficiente rapidez.

Estándares y directrices

- Conjunto de herramientas de datos abiertos del Banco Mundial <http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit>
- Manual de datos abiertos de la Open Knowledge Foundation <http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf>
- Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>

Ejemplos por países

 In Japan, the Parliament's National Library plans to digitise its entire collection to make available online

The National Diet Library of Japan, the country's only national library, is on its way to full-text digitisation, which will make Japanese literary artefacts widely available and searchable online.

- <http://www.futuregov.asia/articles/2011/aug/05/japan-digitises-national-diet-library/>

 In Slovakia, government contracts are published online

Corruption in public procurement in Slovakia has been a long-standing problem. Problems in public procurement occur through the manipulation of tenders before or after the awarding of the bid, for example by limiting competition through setting unreasonable conditions, or not fully enforcing contracts, or changing them significantly after tendering. One key example was the 'Notice Board Scandal,' a high profile procurement scandal which took place in 2007 when the Ministry of Development published a tender request for construction services totalling 119.5 million Euros on a small notice board in the hallway inside the ministry building where few could see it. A firm that was known to have close ties to the head of the ruling party won the contract. More than a year after the fact, the scandal came to light and was invalidated by the Slovakian Office of Public Procurement.

Slovakian law was overhauled in response to the 2011 update of the EU Procurement Directives and the concern over high profile public procurement scandals. Major reforms included:

1. The introduction of e-procurement, in which dissemination of tenders, tender documents, the submission of bids and the publication of notification of awards is done publicly through a single portal;
2. The introduction of reverse auction mechanisms for procuring goods and services
3. Mandatory publication of all public contracts on a centralized online government contract repository.

In the Slovak Republic, [Act No. 546/2010 Coll.](#) supplementing Act No. 40/1964 requires all public contracts, with certain limited exceptions, to be published online. To avoid secret contracts, any unpublished contracts are declared to be

unenforceable. The Government [Public Procurement Office](#) manages Slovakian procurement rules. This office publishes the official Public Procurement Journal, legal interpretation of the Public Procurement Act, maintains a [register of procurement documents](#) and operates the procurement portal, which is called [EVO](#).

These reforms have made it significantly easier for organizations and people outside the government to access public data about procurement. Previously access tender documents and other procurement data was granted primarily through requests under Freedom of Information Laws (FOI). If requests were not granted and appeals could take so long that the information was no longer relevant.

Now, through EVO all of that information is published including the contract itself and information on the bids received and the process of contracting.

The availability of data has lowered the barriers to entry for participating in the oversight process. This has enabled much greater public participation in uncovering suspect procurements. Before the reforms, exposing corruption relied on whistleblowers alerting journalists or watchdogs of suspicious proceedings. Now more tips come from local activists and individuals. For example teachers, highlighted information about large Ministry of Education procurements for flowers and alcohol and the Ministry of Finance conducted an audit.

Opening up the information makes it possible compare contractors and look at patterns across cities and institutions. Local people who may know who the mayor is friends with, and which local businesses have relationships with people of influence are able to spot issues that a researcher farther removed from the process might not be able to.

Despite these positive developments corruption in Slovakian public procurement remains a challenge. While the availability of data has been a positive step, there remain barriers to using it, and where there is no real threat of enforcement, transparency and disclosure are limited in their ability to bring about effective change. Researcher using the data say that rationalizing the manner in which the data is released and formatted would make it easier to use, reducing the cost of finding corruption and increasing the likelihood that improper processes will be uncovered. The NGOs TI-Slovakia and Fairplay Slovakia maintain an online [Open Contracts](#) website built off the procurement data scraped and structured from public sources. This portal visualizes procurement expenditures by procurers, suppliers, sectors and regions as well as provides downloadable structured procurement data in bulk. Having data available in these formats also enabled TI-Slovakia to conduct broader analyses than were previously possible.

Standardised data formats, bulk downloading, structured formats like XML would make it easier to use the data. Another key problem is that there are no data licenses attached to public data so it is not clear how it can be used. Additional information about pre-tender requirements would also be valuable.

Formal mechanisms and institutional means of sanction also need to be strengthened. The Sunlight Foundation concludes that "Most significantly, transparency alone, it appears, cannot change deeply ingrained corrupt practices in a short time span. Transparency can only highlight the problem, and provide tools for oversight and investigation. Enforcement mechanisms, both formal and informal, must be brought to bear to sanction those whose transgressions are revealed by transparency-enabled oversight."

[Source: Sunlight Foundation case study]

- <http://sunlightfoundation.com/blog/2013/08/12/case-study-public-procurement-in-the-slovak-republic/>
- <http://www.zmluvy.gov.sk/>
- <http://www.otvorenezmluvy.sk/>

 The Brazilian ministry of finance publishes large amount of budget data in machine-readable formats

Brazil has developed a number of instruments for fiscal transparency. The most well known initiative perhaps is the transparency portal www.portaltransparencia.gov.br/, which was started in 2004 and which draws together information from across the federal government. The portal includes information on public revenues, budgets and spending as well as income and assets of public servants and information on procurement. It is updated daily and provides searchable,

open access to the data, as well as offering specific sections focused on areas of particular interest such as the World Cup and the Olympics.

The portal aims to provide information which can be easily accessed and used. For example budget lines are tagged with popular names (for example 'bolsa familia' as well as the official title 'Transferência de renda e apoio à família no acesso à saúde e a à educação'). The information in the budget portal is provided in the form of open, machine readable data, so that it can be used and reused by civil society, media and other organisations to create analysis, visualisations and tools to navigate the information.

As the practice of transparency has developed, so too has the legal framework. In 2012 Brazil established a new Transparency Law obliging all Brazilian public entities (executive, judiciary and legislative bodies at the federal, state and municipality levels, as well as in the federal district) to publish detailed budget data online in real time. The transparency initiative is led by the Office of the Comptroller General. Significant effort has been put into education and dialogue, both within and outside of government, to understand user information needs, to support users to use the data and to generate high quality information flows.

As part of its first OGP Action Plan Brazil has been providing more budget information on its transparency portal, improving data on social benefits and on contracts. In its second Action Plan there is a plan to rebuild the Transparency Portal completely, based on learning from the first ten years, to improve quality and usability and to connect budget information to datasets on actions. The federal government is now working to encourage states and municipalities to develop their own portals.

[Source: Based on a webinar presentation by Otavio Castro Neves, July 30 2013]

- <http://www.opengovpartnership.org/webinar-introducing-fiscal-openness-working-group>

The Senate of Italy publishes legislative data on its own open data portal

The Italian Senate publishes legislative data on its data portal *dati.senato.it*. The portal provides information for citizens, researchers and journalists to analyse and share information of what is being proposed, discussed and voted in the Senate. The data is released under Creative Commons (CC BY 3.0) for free reuse.

- <http://dati.senato.it/>

Avanzado Step: Crear listados públicos de datos gubernamentales y auditar su disponibilidad y administración

Justificación

Tanto funcionarios y cargos públicos, como los responsables del diseño de políticas públicas y el público general solo pueden pedir o analizar lo que ya saben que existe. Muy a menudo, los cargos públicos no son conscientes de qué información poseen exactamente, o del volumen de los datos almacenados. Un índice o listado completo de la información gubernamental permite que tanto los responsables del diseño de políticas públicas como los propios responsables administrativos sean capaces de determinar si la información se está gestionando adecuadamente, además de permitir que el escrutinio público de dichas consideraciones gane en capacidad. El hecho de que los organismos gubernamentales

rindan cuentas al público sobre la información que manejan garantiza que ésta se administra para el beneficio del interés público y aumenta la eficiencia de las administraciones públicas.

Con el fin de que proporcionen información actualizada, las agencias también pueden ser obligadas a auditar sus recursos informativos con regularidad.

Recomendaciones

1. Aprobar una normativa de alto rango que obligue a todos los órganos de la administración a indexar todos sus datos.
2. Diseñar las variables y etiquetas que acompañarán a todos los conjuntos de datos gubernamentales listados: si es público o no, si podría publicarse, si se puede acceder a la información mediante peticiones de libertad de información, cuál es la justificación o la clasificación para la reserva de publicación, dónde se puede encontrar en el caso de que esté publicada, etc.
3. Publicar los índices de datos en la red para poder enlazar directamente a los conjuntos de datos públicos.
4. Explorar qué oportunidades puede brindar el proceso de auditoría para fomentar que la administración recozca qué información recoge, maneja y comparte.

Estándares y directrices

- Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>

Ejemplos por países

Greece has set up a central catalogue of public data

Greece has set up *Data.gov.gr*, a central catalogue of public data which provides access to public databases from all Greek government bodies. The purpose of the website is to increase public access to high value, machine readable datasets, by cataloguing, indexing, storing and searching the public sector's data and information, as well as providing web services to citizens and other information users.

Data.gov.gr was launched in September 2013 and Ministries will be responsible for ensuring the availability of datasets falling under their jurisdiction in the form of 'open data'.


The website provides a mechanism for citizens to vote for the datasets they wish to see that are not yet publicly available. Citizens' proposals are sent to the relevant public bodies and the datasets are made priorities for publication.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/greece/case-study/inspiring-story-value-open-data>

In Canada, a government wide initiative has been undertaken to identify all government data holdings


The Canadian Data Inventory Project is a government-wide stock-taking of federal data holdings. The inventory consists of the metadata on datasets held within government departments and will be linked, when possible, to specific key policy issues. Other metadata will include the title, subject area and subtopics, time and geographic coverage, data source and size, ownership and contact information and a description of the dataset. Together with this data inventory project, work is also being done to assess data needs and identify data gaps.

- http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5190&Item_Id=122357

 In the U.S. city of San Francisco, the government's open data policy calls for all departments to publish an inventory of data held

According to the [San Francisco's Open Data Policy](#), each City department must make reasonable efforts to make available all datasets under the department's control. In addition, the policy calls for an Open Data Plan to be prepared and to include a summary description of all datasets under the control of each City department.

- <http://sunlightfoundation.com/blog/2013/04/25/open-data-policy-evolution-san-francisco/>

 In the United States, the 2013 Open Data Policy called for federal agencies to perform an audit and create an index of datasets

The US [Open Data Policy](#) from 2013 require agencies to index all of their data (internally), to make a public list of all their public data, and requires all agencies to list all their data that *can* be made public.


- <http://sunlightfoundation.com/blog/2013/05/09/open-data-executive-order-shows-path-forward/>

 The England and Wales Land Registry contains an inventory of all available data

The Land Registry is a UK government department established in 1862, responsible to the Secretary of State for Business, Innovation and Skills. It keeps and maintains the Land Register for England and Wales; one of the world's largest property datasets.

A number of [free datasets](#) have been published since 2012 under the Open Government Licence (OGL) in CSV and Excel formats, and as of January 2013 as linked data. The Land registry is progressively adding more datasets, focusing on those it judges to be of wider public interest, information frequently requested and information that is not available from elsewhere. As part of this process the Land Registry released a dataset inventory to provide a transparent, comprehensive list of the data it holds, clearly outlining whether it can release it as open data, and inviting feedback to prioritise future data releases.

- <http://data.gov.uk/dataset/land-registry-dataset-inventory>
- <http://www.landregistry.gov.uk/media/all-releases/press-releases/2013/land-registry-goes-big-on-open-data>

 The National Audit Office in the UK audited government data holdings and released a report on their findings to the public

The UK National Audit Office scrutinises public spending on behalf of Parliament and has statutory authority to report to Parliament on the economy, efficiency and effectiveness with which departments and other bodies have used their resources.

In 2012 the NAO carried out a cross-government review of the government's progress in implementing transparency.

This included a survey and interview of 16 departments and a review of central and local government data releases to assess compliance with Treasury guidance on departmental spending data, and progress towards implementation of the public data principles developed by the Public Sector Transparency Board.

- <http://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/10121833.pdf>

Avanzado Step: Crear o designar un ente supervisor

Justificación

Una única entidad facultada para resolver conflictos, supervisar de manera consistente y asegurar el cumplimiento de nuevas medidas de datos abiertos es un recurso valioso en cualquier política de datos abiertos. Por lo general, las iniciativas de datos abiertos suelen encargar la supervisión del cumplimiento bien a un cargo previamente existente (como el secretario general de tecnología o de administraciones públicas), bien a una determinada unidad ministerial, aunque se pueden crear nuevos puestos y altos mandos relacionados. Designar un ente supervisor, un panel de revisores o algún organismo semejante es un paso importante para darse cuenta de que verdaderamente es viable implementar las políticas de datos abiertos, además de servir para resolver obstáculos imprevistos que aparezcan durante la puesta en marcha. El trabajo de los organismos de nuevo debe ser independiente y público, y su puesta en marcha puede verse reforzada por la creación de nuevos reglamentos y directrices.


Recomendaciones

Al crear o designar cualquier tipo de ente supervisor se debería prestar atención a la capacidad de hacer cumplir las disposiciones en materia de datos abiertos, contando con herramientas para enfrentarse a casos de resistencia o incumplimiento.

Estándares y directrices

- Conjunto de herramientas de datos abiertos del Banco Mundial <http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit>
- OpenGovData.io <http://opengovdata.io/>
- Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>

Ejemplos por países

 Australia's information commissioner is responsible for all information held by the government


According to the Australian Information Commissioner Act 2010, the information commissioner's function is to report on any matter related to the collection, use, disclosure, management administration or storage of, or accessibility to, information held by the Government.

- <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2010A00052>

 In Canada, the information commissioner investigates access to information complaints and advocates for more proactive disclosure within government

The Information Commissioner in Canada investigates complaints about federal institutions' handling of access requests. The Information Officer also encourages federal institutions to disclose information, and continually makes the case for greater freedom of information through targeted initiatives, such as the annual Right to Know Week, and ongoing dialogue with Canadians, Parliament, federal and provincial institutions.

- http://www.oic-ci.gc.ca/eng/abu-ans_what-we-do_ce-que-nous-faisons.aspx

 In the U.S. state of Utah, a Transparency Advisory Board acts as the oversight authority for the state's open data policy

In the U.S. state of Utah, the Utah Transparency Advisory Board acts as the oversight authority for the state's open data policy. The Board is comprised of six members knowledgeable about providing public access to public financial information. Its responsibilities include making public information more accessible through an information website transparent.utah.gov.

- <http://le.utah.gov/~2013/bills/sbillenr/SB0283.pdf>

Avanzado Step: Involucrar activamente a los usuarios y apoyar su participación

Justificación

Muchas de las iniciativas de datos abiertos que han obtenido mejores resultados no se detienen en la publicación de los datos abiertos, esperando a que ocurra algo más. Maximizar el impacto de la información pública pasa por involucrar activamente a los ciudadanos y a los usuarios de los datos, algo que estas iniciativas practican como vías para entender y responder a las necesidades y las demandas del público. Esta estrategia puede plasmarse en la organización o el apoyo a eventos, talleres, hackathons, concursos, becas de investigación. Además, se puede contratar personal dedicado a estas actividades y crear canales de comunicación con los usuarios.

Recomendaciones

Para involucrar a los usuarios de datos, los gobiernos pueden:

1. Organizar o apoyar eventos, talleres, hackathons, concursos o becas de investigación u otras iniciativas que faciliten la reutilización de la información pública.
2. Asegurarse de que haya funcionarios capaces de involucrar activamente a los usuarios, comprender y responder a las peticiones y demandas de los usuarios de datos (ya sea en eventos o a través de canales online creados para este propósito)
3. Crear canales de comunicación (cuentas en redes sociales, listas de correo, webinars y otros eventos) para involucrar a los usuarios de datos y asignarles recursos suficientes.

Estándares y directrices

- Conjunto de herramientas de datos abiertos del Banco Mundial <http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit>
- Definición de datos abiertos <http://opendefinition.org/>
- Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>
- World Wide Web Consortium: Publicar datos gubernamentales abiertos <http://www.w3.org/TR/gov-data/>

Ejemplos por países

NASA hosted the world's largest hackathon

The International Space Apps Challenge is an international mass collaboration focused on space exploration that takes place over 48-hours in cities around the world. The event embraces collaborative problem solving with a goal of producing relevant open-source solutions to address global needs applicable to both life on Earth and life in space. Themes are Earth Watch, Technology in Space, Human Spaceflight, Robotics and Asteroids. NASA is leading this global collaboration along with a number of government collaborators and 100+ local organizations.

- <https://2014.spaceappschallenge.org/about/>
- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/USA_0.pdf

In Israel the government worked with Google to make transit data more useful

Data.gov.il is a single window portal that aims to give access to public records data produced from information held by the government. The idea is to encourage creative use of the data by civil society and the larger public by providing tools for information presentation, standardized downloading and standard APIs.

When Google Israel tried to use this data to create a transit app they identified many inaccuracies. Google Israel ran its validation tools over the government database and made recommendations for improvement. "We found the e-Gov team very open to the process of validation and improvement. It took 6-10 months of iteration with the government until we were able to create the transit map for 25,000 bus stations and 53 train stations across the country"

- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Israel_0.pdf
- <http://www.Data.gov.il>
- <http://maps.google.co.uk/intl/en/landing/transit/#dmy>

The United States provides novel ways for publicly released data to be used by citizens to solve global challenges

The US National Aeronautics and Space Administration (NASA) have launched an International SpaceApp Challenge. In what turned out to be the largest hackathon in the world, the Challenge brought together space agencies and citizen technologists, scientists and developers to contribute to space exploration missions using publicly released data. The participants used NASA's massive datasets and open source software technology to respond to over 50 challenges designed around software and hardware development, citizen science, and data visualisation. For this year's event 770 solutions were submitted.

The SpaceApp Challenge provides a model of government-citizen collaboration that could be used for other transnational issues, such as the environment, defence or diplomacy.

- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/USA.pdf>

Avanzado Step: Obligar a que todas las organizaciones que manejen datos públicos cumplan los compromisos de datos abiertos

Justificación

Los gobiernos recurren con frecuencia a terceras entidades, contratistas o agencias semipúblicas casi autónomas para prestar servicios públicos, manejar o investigar información pública. Sin embargo, el uso de servicios externos no debería servir de excusa para oscurecer el acceso a la información pública. Si se garantiza que los datos abiertos no se definan únicamente como los datos en posesión de la administración, sino como información recabada, almacenada o procesada en nombre del gobierno, resultará más factible que los datos públicos sean tratados de manera consistente.


Recomendaciones

1. Comunicar a agencias y contratistas la función y el valor de los datos públicos abiertos.
2. Incluir los requisitos de datos abiertos en ayudas y contratos con agencias semipúblicas y otros actores semejantes, como las agencias supraestatales, entidades patrocinadas por la administración y organizaciones autorreguladas.
3. Especificar en los contratos con proveedores privados qué formatos de datos abiertos se emplearán y cómo divulgarán los datos
4. Emplear soluciones open source siempre que sea posible para que sea más fácil compartir los datos con una audiencia amplia.

Estándares y directrices

- Directrices de datos abiertos para contratación pública
<http://sunlightfoundation.com/procurement/opendataguidelines>

Ejemplos por países

 In the US, the White House Office of Science and Technology Policy requires federal agencies that fund research make the results and underlying data available to the public

A memo *Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research* from the Office of Science and Technology Policy from February 2013 includes a requirement for all U.S. federal agencies that spend over \$100 million annually supporting research and development to make the results of that (non-classified) research, as well as the underlying data, available to the public within a year of publication.

- http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf

 The US city of Chicago is developing contract provisions to promote open data in technology related procurements

Chicago's open data policy includes a provision requiring the chief data officer to work with the chief procurement officer to develop contract provisions to promote open data policies in technology-related procurements.

- http://www.cityofchicago.org/city/en/narr/foia/open_data_executiveorder.html

Avanzado Step: Reconocer nuevos derechos jurídicos que otorguen mayores poderes al público

Justificación


Las leyes que regulan el acceso a los datos y la documentación pública no se limitan a la gestión de los procesos internos que culminan en la publicación. También pueden dar mayores poderes de supervisión a la ciudadanía para que ésta pueda no solo velar por su propio derecho de acceso y consulta de la información, sino también apoyar tanto la continuidad en el cumplimiento de las políticas de datos abiertos como la calidad y la integridad de los datos. Estos poderes pueden manifestarse mediante el derecho a denuncia o mediante el refuerzo de los poderes del Defensor del Pueblo, de las agencias anticorrupción y de cualesquiera otros mecanismos que la ciudadanía pueda aprovechar para investigar y resolver disputas relacionadas con los datos públicos.

Recomendaciones

Estándares y directrices

- Conjunto de herramientas de datos abiertos del Banco Mundial <http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit>
- Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>

Ejemplos por países

 In Indonesia, individuals have the right to pursue legal recourse if they are prevented from obtaining information under the freedom of information act


The Indonesian Public Information Disclosure Act from 2008 (Article 4) gives individuals the right to file a suit in court if they are obstructed from obtaining, or fails to obtain information for which they entitles.

- <http://ccrinepal.org/files/documents/legislations/12.pdf>

 Many government's FOI laws give citizens the right to sue the government over freedom of information requests

The U.S. Freedom of Information Act, for example, provides a person with the right to sue the government if he/she has had no response to an information request in a fixed period of time.

- <http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined.pdf>

 Some countries, such as Canada, have freedom of information ombudsmen with special legal enforcement powers

In Canada, the Information Commissioner investigates complaints about federal institutions' handling of access to information requests and has strong investigative powers to assist her in mediating between dissatisfied information applicants and government institutions. As an ombudsperson, the Commissioner may not order a complaint to be resolved in a particular way, though she may refer a case to the Federal Court for resolution.

- http://www.oic-ci.gc.ca/eng/abu-ans_what-we-do_ce-que-nous-faisons.aspx

Innovador Step: Crear identificadores únicos para organizaciones, cosas y lugares

Justificación

Muchos conjuntos de datos públicos se refieren a otras entidades. Por ejemplo, los presupuestos nacionales se refieren a departamentos, los registros mercantiles se refieren a las empresas, los registros de organizaciones benéficas a este tipo de organizaciones (entre las cuales también puede haber empresas) y las tablas de rendimiento educativo se refieren a las escuelas. Mientras no exista una manera estandarizada de referirse a organizaciones, lugares y cosas, las referencias cruzadas entre distintos conjuntos de datos deben realizarse manualmente y aportando información contextual. Algunos análisis pueden complicarse o volverse del todo imposibles, porque nombres parecidos pueden referirse a las mismas entidades, pero también pueden referirse a entidades distintas.

Al crear identificadores compartidos para los distintos almacenes de datos, se crean conexiones con los que los datos resultan más manejable y fáciles de adaptar. El valor de dos conjuntos de datos conectados es mayor que la suma de sus partes.

Recomendaciones

1. Crear directrices para la denominación y el uso de identificadores únicos en los conjuntos de datos públicos y en las entidades a los que se refieren.
2. Crear conjuntos de identificadores reutilizables para conjuntos comunes de entidades públicas, como unidades ministeriales, ayuntamientos, escuelas o estaciones de ferrocarril. reusable sets of identifiers for common sets of public entities, such as Government Departments, Local Authorities, Schools and Railway Stations.
3. Trabajar con las administraciones públicas, en colaboración con entidades especializadas en estándares y otros grupos consensuales para unificar identificadores únicos en áreas importantes de colaboración.

Estándares y directrices

- 6 grados corporativos <http://sunlightfoundation.com/sixdegrees/resources/>
- Directrices de datos abiertos para contratación pública <http://sunlightfoundation.com/procurement/opendataguidelines>
- Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos <http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>
- World Wide Web Consortium: Datos vinculados <http://WWW.W3.ORG/DESIGNISSUES/LINKEDDATA.html>

Ejemplos por países

Belgium piloted a system to develop unique identifiers for addresses and streets

The Core Location Pilot 'Interconnecting Belgian National and Regional Address Data' analysed the possibility of developing unique identifiers for addresses and streets in Belgium.

- https://joinup.ec.europa.eu/svn/core_location/pilot/D5.2.1_Core_Location_Pilot-Interconnecting_Belgian_National_and_Regional_Address_Data.pdf

The UK government published guidelines on the use of unique resource identifiers

The UK Government website *data.gov.uk* provides guidance about publishing Linked Data/unique resource identifiers within the UK public sector.

- <http://data.gov.uk/resources/uris>

The US White House requires predictable URLs for committee documents and data

In order to ensure that members of the public have easy access to U.S. legislation, the U.S. White House enacted the 'Standards for the Electronic Posting of House and Committee Documents & Data' in 2011. These standards included a requirement for files to be posted using permanent URL links.

- http://cha.house.gov/sites/republicans.cha.house.gov/files/documents/hearing_docs/2011_12_16_posting_standards.pdf

Declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses

 **Autor principal:** [Global Integrity](#)

Introducción

Cuando los cargos públicos utilizan sus puestos en su propio beneficio, minan la credibilidad de sus instituciones, privan a la ciudadanía de servicios esenciales y desbaratan el desarrollo económico. El conflicto de intereses surge cuando un cargo público aprovecha su posición para su beneficio personal o para el beneficio de otras partes particulares. Este fenómeno señala a la posibilidad de conducta inapropiada, aunque no es condición suficiente para la misma. Así pues, se requiere un régimen reglamentario con normas, orientación y vigilancia que reduzcan el riesgo de conductas antiéticas, ya sean reales o percibidas. Los códigos de conducta y los reglamentos suelen abarcar las siguientes áreas:

1. **Requisitos acerca de las declaraciones patrimoniales**, a través de las cuales se transparentan el patrimonio, los ingresos y las actividades económicas de los cargos públicos.
2. **Reglas sobre conflicto de intereses**, y orientación para identificar y gestionar conflictos de intereses, asegurando que las decisiones de los cargos públicos no se vean contaminadas indebidamente por el interés personal.
3. **Normativas sobre el fenómeno de "puertas giratorias"**, es decir, de los conflictos de intereses que se generan a raíz del movimiento de profesionales del sector público al privado, y viceversa.
4. **Regalos y reglas de hospitalidad**, procurando evitar que los intereses especiales de un grupo busquen ejercer su influencia sobre la administración mediante obsequios a funcionarios públicos o la provisión de servicio valiosos a cambio de favores.

Las declaraciones patrimoniales son herramientas contundentes para fomentar la integridad pública y evitar los abusos de poder. Las prohibiciones incondicionales a las que los gobiernos pueden someter ciertos tipos de conducta se complementan con las declaraciones, una herramienta de supervisión que resuelve conflictos de intereses, además de detectar y perseguir el enriquecimiento ilícito.

Las declaraciones patrimoniales y las políticas de conflictos de intereses pueden reforzar la integridad pública de muchas maneras. Estableciendo pautas sobre qué tipo de comportamiento es aceptable y proporcionando normas y orientación claras sobre conducta ética en el sector público, alimentan una cultura de la integridad. El aumento de la transparencia mediante la publicación activa es una importante herramienta disuasoria que recuerda a los cargos públicos el sometimiento de su comportamiento al escrutinio del público. Además, proporciona una valiosa fuente de información para detectar el abuso y la corrupción (Banco Mundial, 2013). No hay un único enfoque para todos los problemas que permita diseñar un régimen perfecto. Además de ser más fáciles de implementar para los gobiernos que los sistemas de declaración, las prohibiciones absolutas son especialmente pertinentes en contextos donde la capacidad del gobierno o los recursos están muy limitados. En cualquier caso, las declaraciones patrimoniales y de ingresos se usan cada vez más y son considerados un cuerpo creciente de puntos de trabajo a partir de los cuales se pueden perfilar principios básicos de consideración para los gobiernos que planeen adoptar medidas de publicación activa robustas y eficientes.

References

World Bank (2013) Financial Disclosure Systems. Declarations of Interests, Income, and Assets Background Primer prepared by

the Public Accountability Mechanisms (PAM) Initiative of The World Bank Public Sector and Governance Group

Organizaciones
especializadas

Organisation for Economic Co-operation and Development

<http://www.oecd.org/gov/ethics/managingconflictinterestinthepublicservice.htm>

World Bank <http://www.worldbank.org/anticorruption>

Inter American Development Bank <http://www.iadb.org/en/topics/transparency/transparency-and-anticorruption,1162.html>

African Development Bank <http://www.afdb.org/en/about-us/structure/integrity-and-anti-corruption/>

Asian Development Bank <http://www.adb.org/site/integrity/main>

Organization of American States <http://www.oas.org/juridico/english/fightcur.html>

Sunlight Foundation <http://www.sunlight.org/>

Transparency International http://gateway.transparency.org/guides/intro/public_integrity

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Exigir por ley la publicación patrimonial y de ingresos de altos funcionarios y cargos públicos electos
- Regular el empleo privado posgubernamental.
- Regular los regalos a cargos públicos

Intermedio

- Desarrollar un sistema de supervisión para declaraciones de activos y conflictos de intereses

Innovador

- Publicar declaraciones de activos y conflictos de intereses como datos abiertos

Detailed Recommendations

Inicial Step: Exigir por ley la publicación patrimonial y de ingresos de altos funcionarios y cargos públicos electos

Justificación

Divulgar el valor del patrimonio, las responsabilidades y las fuentes de ingreso combate la corrupción, la colusión y el clientelismo en el sector público.

La divulgación al gran público de las declaraciones patrimoniales y de ingresos permite que la sociedad civil ayude a detectar el incumplimiento de las obligaciones de publicación de información financiera, lo que aumenta el escrutinio y complementa las labores de los organismos oficiales de supervisión. Sin embargo, en muchos países las declaraciones no se publican. Según una encuesta realizada por el Banco Mundial en 2012, el 78% de los países cuenta con sistemas de divulgación, pero solamente el 43% publica la información (Banco Mundial, 2012).

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) exige a los partidos nacionales que consideren la posibilidad de establecer medidas en virtud de las cuales los cargos públicos deban revelar "a las autoridades apropiadas... sus actividades externas empleo, inversiones, activos y regalos o beneficios sustanciales".

Las medidas sobre publicación de declaraciones patrimoniales son una herramienta potente, pero es relativamente fácil que lleven a la decepción o a retrocesos políticos si son fruto de un exceso de ambición política a raíz de escándalos de corrupción y no están respaldadas por recursos suficientes. Es muy probable que fallen los sistemas que arrastren desde el inicio el peso de requisitos excesivos, especialmente si no existe las instituciones no cuentan con la capacidad para obligar al cumplimiento, mientras que los sistemas diseñados para alcanzar objetivos realistas tienen mayores probabilidades de éxito. Cuando se diseña un sistema de publicación de declaraciones patrimoniales, es importante reparar en el contexto político local, el institucional y el socioeconómico.

Es aconsejable que los países comiencen con campos prioritarios, adquiriendo poco a poco la voluntad y la capacidad políticas necesarias para emprender reformas más ambiciosas. El sistema podría comenzar por escoger algunos cargos públicos de alto riesgo o de mayor visibilidad pública para llegar a la divulgación del patrimonio de funcionarios de alto rango y jueces. También es posible partir de la declaración patrimonial y de ingresos para llegar a la divulgación de actividades empresariales o de actividades desarrolladas con posterioridad al desempeño público (Banco Mundial, 2012).

Recomendaciones

1. Establecer y comunicar una hoja de ruta clara para desarrollar el alcance y la cobertura del sistema. Es importante aumentar la capacidad del sistema de forma progresiva y saber gestionar las expectativas de la opinión pública de una manera realista. Si la capacidad de gestionar declaraciones patrimoniales aumenta, el sistema se puede expandir y reforzar ampliando el colectivo de personas a las que se obliga a declarar, reforzando los procedimientos de verificación o mejorando el acceso público a la información.
2. Como norma general, la divulgación de declaraciones patrimoniales y de ingresos debería extenderse al menos a los altos cargos de las tres ramas del gobierno (ejecutivo legislativo y judicial), así como a los altos funcionarios.
3. Para que la divulgación de declaraciones patrimoniales y de ingresos obtenga mejores resultados, es importante que las declaraciones sean periódicas e incluyan un conjunto de datos esenciales. La información divulgable debería incluir una combinación de los siguientes elementos
 - o Activos (residencias personales, segundas viviendas, terrenos no edificados, edificios, granjas, inversiones financieras (acciones, trusts, opciones, warrants, futuros, planes de ahorro, pólizas de seguros y planes de pensiones) y activos empresariales (por ejemplo, corporaciones y colaboraciones empresariales), cuentas bancarias, instrumentos sujetos a intereses, efectivo, vehículos (coches, barcos, aviones) y otros activos muebles

sustanciosos (joyería, arte, muebles, ganado).

- Responsabilidades (toda deuda, obligación, tarjeta de crédito, hipoteca, garantía o cosignatario).
 - Fuentes de ingresos (inversiones financieras (por ejemplo intereses, dividendos, anualidades, pensiones, beneficios)).
 - Activos empresariales (por ejemplo corporaciones, colaboraciones empresariales, granjas, propiedades en arriendo, patentes), empleos del sector privado, servicios profesionales (por ejemplo, consultoría u otros contratos pagados, ya sea en el sector privado o el público), consejos de administración, otros empleos públicos, lotería, apuestas y pagos únicos.
 - Regalos (todo regalo o trato beneficioso de cierto valor).
 - Conflictos de intereses potenciales (contratos u ocupaciones no sujetos a contraprestación económica, puestos directivos, participación en asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, sindicatos, así como cargos y empleo después del puesto público).
4. Establecer requisitos claros. Es importante que los formularios sean sencillos y las reglas para completarlos sean sencillas. La información solicitada debe ser precisa y evitar horquillas para evitar ambigüedades y preservar la utilidad del sistema.
 5. Designar a una agencia responsable para la recopilación de las declaraciones y dotarla de la autoridad, competencias y recursos necesarios para realizar una primera verificación de los datos, solicitar información a los cargos públicos o a otras entidades, ya sean públicas o privadas, e indagar a partir de denuncias del público.

Estándares y directrices

- Biblioteca jurídica del Banco Mundial sobre divulgación de información financiera
<http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org>
- Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
- Criterios de elegibilidad de la OGP: Publicación de información relativa a los ingresos y activos de funcionarios electos/públicos <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>
- Directrices para la resolución de conflictos de interés en el sector público
<http://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf>
- Public Office, Private Interests: Rendir cuentas con declaraciones patrimoniales y de activos
[http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public Office Private Interests.pdf](http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf)

Ejemplos por países

 About 137 jurisdictions implement some sort of asset disclosure regulations

Of these 137 jurisdictions, around 45 jurisdictions make disclosures available online including Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Portugal, the United Kingdom, Bulgaria, Croatia, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, and Slovakia.

- http://www1.worldbank.org/finance/star_site/publications/Public-Private-Interest.html

 In India police officers are included in income and asset declaration requirements

The Home Ministry had directed all the officers of the Indian Police Service (IPS) in the country to disclose their assets under the Immovable Property Return (IPR). State level governments have also directed police officers above the rank of Sub-Inspectors to disclose details of their income and assets. Those who fail to comply can be clearance for promotion and service medals. However high rates of non compliance continue to be reported.

- <http://mha.nic.in/ipr/iprmain.htm>
- http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-06-21/india/32351131_1_ips-indian-police-service-home-ministry

Tanzania commits to strengthen asset disclosure regulation as part of its OGP Action Plan

In its Open Government Partnership Action Plan, Tanzania pledges to prepare legislative amendments and regulations to strengthen asset disclosures of public officials.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/tanzania/commitment/accountability-and-integrity>

The Dominican Republic is committed to passing an asset declaration law as part of its OGP Action Plan

In its Open Government Partnership Action Plan, the Dominican Republic commits to enact an asset declarations and illicit enrichment law.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/commitment/promote-enactment-act-affidavit-assets-and-illicit-enrichment-enacted-and-its>

Inicial Step: Regular el empleo privado posgubernamental.

Justificación

Para que las políticas públicas y las decisiones administrativas se lleven a cabo en nombre del interés público, legisladores y reguladores deben ser independientes. Potencialmente, las promesas de empleos privados, encargos de consultoría, puestos directivos u otras fuentes de ingresos podrían desviar el comportamiento de un cargo público. Los reglamentos contra este tipo de transiciones laborales (conocidas en inglés como “revolving doors regulations”) procuran evitar conflictos de intereses, ya sean reales o percibidos, que surgen con la movilidad profesional entre cargos públicos y el sector privado. Se trata de una herramienta importante para mantener la integridad pública y la confianza en el gobierno (Transparency International, 2011).

Estos reglamentos suelen evitar conflictos de intereses potenciales antes, durante o después de cargos en el gobierno mediante la introducción de un lapso de tiempo (o periodo de “enfriamiento”) que regula el movimiento de empleados entre los dos sectores y son una importante salvaguarda contra intentos de comprar el acceso a cargos públicos, preservando la integridad de las instituciones y los servidores públicos.


Recomendaciones

1. Los reglamentos que limitan el empleo en el sector privado después de haber tenido responsabilidades de gobierno debería abarcar a empleados públicos de todas las ramas del gobierno.
2. Los reglamentos deberían definir explícitamente el tipo de oportunidades de empleo posgubernamental que suponen un conflicto de intereses real o potencia, y por lo tanto son susceptibles de control regulatorio. Los cargos que accedan a puestos privados tras haber abandonado el sector público y no supongan conflictos de intereses ni reales ni potenciales no deberán estar sometidos a estas reglas y reglamentos.
3. Los reglamentos deberían incluir períodos de enfriamiento bien definidos, durante los cuales los empleados públicos no puedan trabajar para el sector privado, donde podrían actuar como grupo de presión o tratar de influenciar a sus antiguos colegas.
4. La duración de los períodos de enfriamiento debería variar según la experiencia y el rango de los empleados públicos.
5. Debería considerarse la inclusión en los reglamentos de restricciones sensatas sobre el empleo anterior a la entrada en el sector público y sobre traslados que no supongan la transferencia de competencias y conocimiento de valor desde otros sectores del sector público.
6. También deberían considerarse restricciones sensatas sobre traslados (u otros acuerdos de carácter laboral) de trabajadores provenientes del sector privado a los organismos públicos que puedan aportar a las organizaciones privadas información interna o una ventaja competitiva injusta en la promoción de sus intereses empresariales.
7. Para que realmente funcionen, los reglamentos deberían ser traspuestos como legislación primaria y secundaria
 - La legislación primaria restringe directamente ciertas formas de empleo posgubernamental mediante leyes específicas sobre la integridad, o como parte de una ley de carácter general sobre el empleo público.
 - Las legislaciones secundarias son reglas y decretos autorizados por la legislación primaria. Otra manera de introducir restricciones de “puertas giratorias”, por ejemplo, es el uso de cláusulas sobre empleo posgubernamental en los contratos laborales.
 - También habría que considerar códigos de conducta como formas alternativas de establecer o reforzar normas sobre empleo posgubernamental.
8. Los reglamentos de “puertas giratorias” deberían formar parte de un esfuerzo reformista que incluya legislación sobre grupos de presión y conflictos de intereses.
9. Los reglamentos deberían contener disposiciones que exijan la divulgación del historial de empleo pre y posgubernamental de los empleados públicos.
10. Los reglamentos deberían ser supervisados por una agencia ética independiente que velara por su cumplimiento y tuviera la potestad para emprender investigaciones.
11. Se debería concienciar en profundizar y crear un programa formativo que garantice que todos los empleados públicos tienen conocimiento de la existencia del reglamento y de las obligaciones para con la misma.

Estándares y directrices

- Post-Public Employment: Buenas prácticas para evitar los conflictos de intereses http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/ocd/governance/post-public-employment_9789264056701-en
- Revolving Doors, Accountability and Transparency – Problemas regulatorios y soluciones políticas en la crisis financiera [http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH\(2009\)2&docLanguage=En](http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH(2009)2&docLanguage=En)

Ejemplos por países

 At least 32 countries have restrictions on post-government employment in at least one branch of government

According to data from Global Integrity, the following countries have restrictions on post-government employment in at least one branch of government (this is not a comprehensive list and the quality of the regulations varies between jurisdictions):

Albania, Algeria, Armenia, Argentina, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Colombia, China, Czech Republic, Ethiopia, Ghana, Germany, Kosovo, Georgia, India, Italy, Mongolia, Macedonia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Romania, Russian Federation, Turkey, Serbia, South Africa, United States.

- <http://www.globalintegrity.org/files/GIR2011.pdf>

South Korea commits to monitoring post-public employment as part of its OGP Action Plan

In its Open Government Partnership Action Plan, South Korea has included a commitment to work towards a corruption-free society. Part of this commitment includes strengthening asset disclosure for public servants and monitoring restrictions on post-public employment.

- <http://www.opengovpartnership.org/countries/south-korea>

Inicial Step: Regular los regalos a cargos públicos

Justificación

Los reglamentos sobre regalos a cargos públicos son valiosas salvaguardas contra los intereses especiales que procuran ejercer su influencia sobre la política con obsequios o servicios de valor a empleados públicos. Las directrices legales establecen normas de conducta aceptable y requisitos de divulgación para los empleados públicos.

Al aclarar qué se considera un regalo, cuándo es aceptable y cuándo y cómo debe divulgarse al público, los reglamentos sirven como código de conducta que generan confianza en el público y defienden la integridad de los trabajadores públicos.

Recomendaciones

Para que los reglamentos sobre regalos sean eficaces, es necesario:

1. Tener alcance sobre todos los empleados públicos en las tres ramas del gobierno, desde cargos electos, funcionarios y funcionarios de la justicia.
2. Emplear formulaciones concretas que dejen poco espacio a la interpretación, delineando claramente qué puede ser considerado un regalo y qué tipo de conductas son inaceptables. La definición de regalo debe ser lo suficientemente amplia para incluir tanto objetos como servicios de valor, como alojamiento.
3. Incluir umbrales claramente definidos que permitan la divulgación de todos los objetos o servicios ofrecidos a empleados públicos.
4. Minimizar excepciones y vacíos legales que puedan obstaculizar la divulgación de ciertos regalos, inclusive regalos comunes en ciertas culturas que, sin embargo, puedan suponer un conflicto de intereses en el contexto de la gestión pública.

5. Contar con una agencia ética independiente encargada del cumplimiento del reglamento y con capacidad para imponer sanciones. Podrían explorarse procedimientos de aprobación previa de regalos y alojamiento por un observatorio independiente, como una agencia de auditoría interna o una institución al estilo del defensor del pueblo.

Intermedio Step: Desarrollar un sistema de supervisión para declaraciones de activos y conflictos de intereses

Justificación

El establecimiento de un sistema de supervisión que supervise, oriente y vele por el cumplimiento de los sistemas adoptados tiene una importancia crucial. La efectividad y credibilidad de un sistema de divulgación solo es tan buena como su habilidad de detectar incumplimientos y penalizar a los incumplidores.

Si solamente se pide a los cargos públicos que rellenen un formulario, la amenaza es pequeña para quien desee esconder al ojo público ciertos intereses comerciales y fuentes de ingresos. Por el contrario, auditorías regulares, sumadas a la amenaza creíble de medidas diligentes en caso de incumplimiento pueden desalentar comportamientos impropios. Por lo tanto, un sistema de supervisión debería estar diseñado con los adecuados mecanismos institucionales y procedimentales que garanticen la detección de riesgos, divulguen auditorías e impongan sanciones por incumplimiento. Además, un sistema semejante debe contar con los recursos adecuados y estar bien integrado en el contexto institucional y político más amplio en el que opera (Banco Mundial, 2012).

Es vital comunicar los objetivos del sistema a los oficiales y aconsejarles acerca de los principios que rigen los conflictos de intereses. Las agencias encargadas de la implementación necesitarán contar con las competencias y los recursos necesarios para revisar las declaraciones patrimoniales y de ingresos, de manera que se puedan detectar conflictos de intereses potenciales o reales. Igual importancia tiene la habilidad de asesorar a los usuarios del sistema y de proporcionar a los cargos públicos con la orientación necesaria para identificar y gestionar adecuadamente los conflictos de intereses.

Recomendaciones

- La orientación a cargos públicos sobre cómo puede evitar situaciones en las que los intereses privados puedan influir negativamente en las obligaciones oficiales.
- Desarrollar un sistema de monitorización de activos, ingresos y divulgación de regalos. Mientras que las auditorías periódicas de todas las declaraciones enviadas suponen una carga nada despreciable sobre los reguladores del gobierno, la realización de auditorías al azar sobre un subconjunto más pequeño supondría un paso importante y el lanzamiento de un claro mensaje de transparencia. Un sistema eficiente de auditorías debería contar con las siguientes características:
- Desarrollar un sistema de
- El porcentaje o el volumen de las declaraciones que serán auditadas se anunciaría previamente.
- Para escoger las declaraciones que serán auditadas se debería emplear una combinación de priorización basada en el riesgo y de muestreo aleatorio. La selección aleatoria debería llevarse a cabo mediante un sistema semejante a las loterías y rifas.
- La auditoría sería realizada por una tercera parte independiente. Lo ideal sería contar con un auditor externo no gubernamental (ya sea una empresa de auditoría u otro tipo de entidad).
- Las declaraciones deberán compararse a lo largo del tiempo y en contra de fuentes externas, como la información fiscal, los registros de la propiedad, etc.
- Los resultados completos de la auditoría se publicarían inmediatamente tras su finalización. Además, también

deberían publicarse las tasas de cumplimiento y las medidas correctivas.

Estándares y directrices

- Biblioteca jurídica del Banco Mundial sobre divulgación de información financiera
<http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org>
- Declaraciones patrimoniales y de activos: factores a tener en cuenta al desarrollar un régimen de divulgación
<http://www.cmi.no/publications/file/3396-income-and-assets-declarations.pdf>
- Directrices para la resolución de conflictos de interés en el sector público
<http://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf>
- Public Office, Private Interests: Rendir cuentas con declaraciones patrimoniales y de activos
[http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public Office Private Interests.pdf](http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf)

Ejemplos por países

Argentina, Guatemala, and Indonesia use targeted methods of selecting asset disclosures for verification

In Argentina, the process of selecting which asset disclosures to be verified is based on a targeted method. The top 5 percent (1,600 in 2009) of declarations are systematically verified while the other 95 percent are verified according to categories of risk. The Asset Declaration Unit is able to verify around 2,500 declarations a year.

In Guatemala, verification of asset disclosure content occurs only when officials leave office. The Department for Verification, Analysis and Investigation of Income and Assets compares the final income and asset declaration to the employee's initial and subsequent declarations to detect any significant or unjustified increases in assets.

In Indonesia, a sample of asset declarations is verified, targeting the declarations of officials in high-risk agencies.

- http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/05/09/000333037_20130509102749/Rendered/PDF/774620PUB0EPI00LIC00PUB0DATE0503013.pdf

Peru commits to strengthening the capacity of the Comptroller General to detect possible corruption as part of its OGP Action Plan

In its Open Government Partnership Action Plan, Peru has included a commitment to improve integrity in the public sector. Specific actions to this end include improving the regulatory framework governing income and asset declarations of public officials and employees of the State, as well as strengthening the capacity of the Comptroller General of the Republic to detect possible corruption. Actions also include proposing a specific regulatory scheme to prevent and detect conflicts of interest.

- <http://www.opengovpartnership.org/countries/peru>

Rwanda's Ombudsman carries out audits on randomly chosen asset declarations

The Office of the Ombudsman of Rwanda, established in 2003, is responsible for the collection of declarations and for monitoring submission compliance and verifying the accuracy of approximately six percent of the nearly 5,000 declarations it receives each year. The Office of the Ombudsman chooses which declarations to audit by targeting a portion of filers based on their position, and randomly chooses a sample of declarations to audit. These audits entail not only verifying that the assets and values declared match government and banking records, but also lifestyle checks and house visits.

[Source: World Bank]

- <http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821397961>

Slovenia uses a random sampling method to test asset disclosures

The Integrity and Prevention of Corruption Act from 2010 improved the system of oversight for assets disclosure in Slovenia. For example, it made provision for asset declarations to be chosen for content verification through a random selection process to identify which cases reveal a disproportionate increase in wealth or a discrepancy between the contents of the declarations and information contained in external registries. The number of declarations selected depends on the number of staff available to verify content and, therefore, may vary from year to year. In 2009, 33 percent of all declarations were selected to undergo verification, with a staff-to-declaration ratio of 1 to 413.

- http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/05/09/000333037_20130509102749/Rendered/PDF/774620PUB0EPI00LIC00PUB0DATE0503013.pdf

No hay compromisos en este nivel

Innovador Step: Publicar declaraciones de activos y conflictos de intereses como datos abiertos

Justificación

El acceso público a la información refuerza los mecanismos de responsabilidad social, ya que ciudadanos más informados tienden a demandar mayor rendición de cuentas a los cargos públicos.

La divulgación cuyo acceso es público refuerza la demanda de responsabilidad, al hacer uso de información esencial que se emplea en iniciativas de seguimiento y control. La publicación de declaraciones accesibles y en las que se pueden emplear funciones de búsqueda permiten que tanto los ciudadanos como los medios de comunicación, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil verifiquen información y eleven sus preocupaciones en el momento de descubrirlas. La posibilidad de ser detectado por el escrutinio público debería desincentivar falsas declaraciones y conductas impropias de cargos públicos, reforzando el efecto disuasorio de la divulgación. Además, mejora la confianza en las instituciones al demostrar compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La accesibilidad pública a las declaraciones divulgadas es, por tanto, un factor determinante en su impacto: a mayor visibilidad, mayor es el efecto potencial.

Recomendaciones

- Todos los datos publicados deben poder buscarse en la red. Aunque la accesibilidad pública debe asumir modelos distintos en contextos distintos, en aquellos países donde la penetración de internet sea razonablemente alta, las declaraciones almacenadas deberían estar disponibles online, permitiendo criterios básicos de búsqueda como el declarante, el año de la declaración, su agencia o departamento. Sería útil, por ejemplo, poder comprobar si un cierto número de abogados ha alcanzado acuerdos de consultoría con un mismo contratista del gobierno. Las tasas de cumplimiento, las medidas correctivas y los resultados de las auditorías también deberían ser publicadas en la red (Banco Mundial, 2012.)
- Emplear principios de datos abiertos al poner información a disposición del público en la red (Sunlight Foundation, 2010). Las barreras tecnológicas (como las tecnologías sujetas a propiedad intelectual) o las barreras económicas (como las tasas de acceso) deberían ser eliminadas mediante el uso de formatos de datos abiertos. Además, deberían fomentarse una mayor estandarización y legibilidad por máquinas de los resultados para incrementar la sencillez de análisis y la comparabilidad (Sunlight Foundation, 2013).
- Construir procesos fuertes de responsabilidad social entre las funciones de seguimiento de las agencias encargadas del cumplimiento de la ética gubernamental, de manera que las preocupaciones creíbles expresadas por el público puedan desencadenar investigaciones por parte de las autoridades competentes.

Ejemplos por países

Argentina developed an electronic financial disclosure system

A fully electronic financial disclosure system was introduced in Argentina in 2000 as a response to the enormous logistical challenge of managing a paper system. The impacts have been significant and rapid. Requiring the filer to complete all necessary fields before the form can be submitted has resulted in a reduction in the number of errors or incorrectly filled-out asset declaration forms, and subsequently in an increase in compliance rates. In the year following implementation, submission compliance rates increased from 67 percent to 96 percent and the estimated cost to the government per form decreased from US\$70 to US\$8.

- [http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public Office Private Interests.pdf](http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf)

Around 45 jurisdictions make disclosures available online

These 45 countries include Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Portugal, the United Kingdom, Bulgaria, Croatia, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, and Slovakia, Hong Kong SAR (China), Thailand, Mongolia, and Taiwan (China).

- [http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Using AD for PEP identification.pdf](http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Using_AD_for_PEP_identification.pdf)

Chile has committed to publish asset declarations online as part of its OGP Action Plan

In its Open Government Partnership Action Plan, Chile commits to two projects concerning asset disclosure: one that focuses on integrity in public functions, and one voluntary disclosure of assets scheme to encourage citizen control by publishing asset declarations online.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/chile/action-plan>

 Estonia will create a database of declarations of economic interests as part of its OGP Action Plan

Estonia is focusing parts of its Open Government Partnership Action Plan on actions to prevent corruption and conflicts of interest among public officials. Among the planned activities in this regard is the creation of a database of declarations of economic interests to be finalised by 2014.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/estonia/commitment/prevention-corruption-and-conflicts-interest>

 Georgia developed an online system for public financial disclosure

In Georgia senior public officials are required to make annual disclosures of their assets. But until 2010 they did this in hard copy and the declarations were difficult for citizens to access.

In 2010, the Georgian government decided to develop an online system. All senior officials now submit their asset declarations through the Online Asset Declaration System on the website www.declaration.gov.ge. The submitted declarations are then published instantaneously into a searchable database from which anyone can search for senior officials' declarations and download the information for free.

The [Civil Service Bureau of Georgia \(CSB\)](#), which is the agency responsible for collecting and publishing asset declarations, supports the asset declaration process by sending reminders to the officials via text messages and emails, and providing a hotline and online chat service to help with queries about asset declarations.

The CBS receives around 3000 electronic financial disclosures annually. It has also uploaded the hard copy declarations from 1998 to 2010 making the website the host of over 60,000 disclosure documents (although the early documents are only available as scanned pdf files).

In order to make the financial disclosure system online-base, CSB needed to take a number of actions. First, they had to assess the political situation, carry out political consultations, prepare amendments to the legislation and lobby the Parliament. When this was done, they designed the electronic asset disclosure system (the system design was outsourced at about USD 20,000 plus an annual maintenance cost of about USD 10,000). They then tested the system with focus groups, both citizen-based and focus groups based on senior officials, and provided training to administrative staff at CSB as well as HR representatives of each government agency.

After launching the system, CSB has continued to develop the system and adding more features to it. By the end of 2013, the Online Asset Declaration System will have a mobile phone interface. An evaluation tool to enable the public to make different analytical reports from the database will also be introduced. It also planned that a public financial disclosure monitoring mechanism will be introduced by the end of 2014.

Introducing the online asset declaration system in Georgia has been beneficial for several reasons:

- The public now has more information about the government;
- Watchdogs are in a better position to monitor the honesty and legality of incomes and expenditures of senior officials;
- The government has become more responsive, cleaner and less corrupt; and
- The online asset disclosure system has inspired other government agencies to launch similar e-governance projects.

The Georgian Public Disclosure System was the 2013 winner of the [UN Public Service Awards](#) for its excellence in preventing corruption.

Based on presentation by Irakli Kotetishvili, Director of the Civil Service Bureau of Georgia at an Open Government Partnership Webinar on 21 May, 2013

- https://worldbankva.adobeconnect.com/_a833642795/p4hbmo50fp2/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
- <http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials'-income-and-bonuses>

Mexico has transitioned to online asset declaration

Mexico has transitioned to online asset declaration with the implementation of its Declaranet system. Mexico does not have a fully mainstreamed digital culture, so public servants were initially reluctant to abandon paper-and-ink disclosure forms. To overcome this reluctance, the government created an online instruction portal, provided tutorial sessions, created a toll-free call centre, and set up training centres to help filers declare their assets.

- [http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public Office Private Interests.pdf](http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf)

Moldova will develop an automated information system as part of OGP Action Plan

Moldova's Open Government Partnership Action Plan includes a commitment to ensure transparency of information on income and property of senior officials, judges, prosecutors, and civil servants. As part of this commitment, Moldova will adjust its national legal framework to allow for online submission of income and property declarations of senior officials, judges, prosecutors, and civil servants. In addition, an automated information system for online filing of income statements of public officials will be developed, installed and launched.

- [http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/country_action_plans/Moldova Open Government Action Plan 2012-2013_0.pdf](http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/country_action_plans/Moldova_Open_Government_Action_Plan_2012-2013_0.pdf)

Russia makes summaries of assets disclosures available online

The Russian Federation recently started making summaries of the disclosures of public officials available online. Citizens can access them on the websites of the presidency, the government, and other institutions.


- http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Using_AD_for_PEP_identification.pdf

Ukraine will amend its law on asset disclosure as part of its OGP Action Plan

Ukraine's Open Government Partnership Action Plan contains a commitment to prevent and combat corruption. Specific activities to this end include amending the law to ensure openness of data relating to property, income and expenditure returns, in particular through publishing details of returns by high profile officials at public bodies' official web sites and disclosing data from returns of any public officer upon information request.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/commitment/preventing-and-combating-corruption-0>
-

Derecho a la Información

 **Autor principal:** [Access Info](#) y [Centre for Law and Democracy](#)

Introducción

La legislación sobre el Derecho de acceso a la información (DAI en español, RTI según sus siglas en inglés), al que también se conoce como leyes sobre la libertad de información o leyes de información, establecen un supuesto general según el cual toda la información que está en poder del gobierno debería ser accesible, motivo por el que se deben establecer mecanismos para garantizar dicho acceso.

Los argumentos a favor de garantizar el acceso a la información suelen contemplar el apoyo al buen gobierno, la mayor eficiencia y eficacia de la administración pública, el cumplimiento de normativas y leyes ya aprobadas, la lucha contra la corrupción y la mejoría de los climas de inversión. Aunque cada vez hay más datos que apoyan esta línea de argumentación, sigue faltando una evaluación de las políticas DAI con carácter sistemático, en la que se contemple si dichas políticas se están traduciendo en una mayor transparencia de los gobiernos y en un aumento de la participación en la toma de decisiones (Calland, 2010), y en caso afirmativo, que averigüe también cómo está ocurriendo.

Un gobierno abierto, participativo y que rinde cuentas depende en gran medida de que el público pueda acceder a la información que está en manos de los organismos públicos. El derecho a la información está protegido por las garantías de la libertad de expresión, que son parte integrante de los principales tratados internacionales sobre derechos humanos. Así ha sido reconocido tanto por tribunales internacionales de derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos) como por las más importantes organizaciones internacionales en el campo de los derechos humanos (entre los cuales se encuentran las relatorías especiales sobre libertad de expresión en la ONU, la OEA, la OSCE, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité Jurídico Interamericano), así como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Mendel, 2008).

Un principio fundamental del Derecho a la Información es el de "máxima divulgación". La información solo debería ser ocultada al público cuando sea absolutamente necesario para evitar perjuicios a intereses legítimos, y siempre y cuando no prevalezca un interés público en conflicto con dicho perjuicio.

En junio de 2013, 95 países habían adoptado leyes DAI, un incremento gigantesco con respecto a los 13 países que contaban con este tipo de normas en 1990. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, aunque la aprobación de la norma como resultado de un determinado liderazgo político suele tener una gran repercusión, el mayor desafío es mantener el impulso político necesario para implementar de verdad la ley (Dokenia, 2013).

References

Calland, R., (2010) Review of Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiatives: Freedom of Information, Institute of Development Studies, Brighton. <http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/IETAAAnnex3FreedomofInfoCallandFinal28Oct2010.pdf>

Mendel, T. (2008), Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, 2nd Ed., UNESCO, Paris. http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26159&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Dokenia, A. (2013) Right to Information; Lessons from experience, World Bank, Washington D.C. http://www.right2info.org/resources/publications/publications/wb_implementing-rti_lessons-from-experience_2013

Organizaciones

especializadas

Access Info <http://www.access-info.org/>

Article 19 <http://www.article19.org/>

The Freedom of Information Advocates Network <http://www.foiadvocates.net>

Right2INFO.org <http://right2info.org/>

freedominfo.org <http://www.freedominfo.org/>

Centre for Law and Democracy <http://www.law-democracy.org/live/>

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, (Alianza Regional) <http://www.alianzaregional.net/>

Africa Freedom of Information Centre <http://www.africafoicentre.org>

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Aprobar una ley que reconozca el derecho a la información y esté a la altura de los estándares internacionales
- Crear estructuras institucionales para la puesta en marcha del DAI
- Divulgar información gubernamental de forma activa
- Formar a funcionarios en la gestión de archivos documentales y la implementación de medidas DAI

Intermedio

- Ampliar el alcance de la publicidad activa
- Fomentar la concienciación pública sobre el derecho a la información
- Garantizar que cada autoridad pública emplee sistemas DAI

Avanzado

- Equiparar la legislación y las prácticas sobre Derecho de Acceso a la Información con los estándares internacionales más avanzados en la materia
- Establecer sistemas de seguimiento y evaluación de mejores prácticas en materia de Derecho de Acceso a la Información
- Revisar y reformar la legislación sobre secretos de Estado

Innovador

- Emplear tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso a la información

Detailed Recommendations

Inicial Step: Aprobar una ley que reconozca el derecho a la información y esté a la altura de los estándares internacionales

Justificación

La pieza básica para asegurar el derecho a la información es la aprobación de una ley que reconozca el derecho a la información como un derecho fundamental. Las relatorías especiales internacionales para la libertad de expresión en la ONU, la OSCE, la OEA y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, entre otros, han hecho un llamamiento para que los estados aprueben legislación en este sentido. Es importante procurar que sea reconocido como un derecho fundamental si ello no ocurre ya ni en la Constitución, ni en la jurisprudencia ni en la legislación, ya que el anclaje más sólido para una ley DAI es el reconocimiento del derecho a la información como derecho constitucional.

Para ser eficaz, toda ley debe proporcionar un marco sólido que garantice el acceso ciudadano a la información en manos del gobierno, en el que se incluyan todas las ramas del gobierno (ejecutiva, legislativa y judicial), demás autoridades públicas en todos sus rangos (nacional, regional o local), así como los órganos que ejercen el poder estatal, desempeñan funciones públicas u operan principalmente con financiación pública. Los estándares internacionales aportan benchmarking de mínimos para estas leyes.

Recomendaciones


Allí donde no exista una ley de acceso a la información, debería aprobarse una norma que esté a la altura de los estándares internacionales. Allí donde ya esté en vigor una ley de este tipo, debería revisarse y enmendarse, en su caso, para ponerla a la altura de los estándares internacionales. Los criterios principales que debe contener la norma son los siguientes:

1. Reconocimiento del derecho a la información como derecho humano, conjuntamente con un amplio supuesto a favor de la apertura que sea de aplicación para toda la población (incluyendo a quienes no tienen la ciudadanía) y a toda la información independientemente de su formato, que esté en posesión de todos los organismos públicos. Se incluye en esta definición a empresas y organismos públicos, y organizaciones privadas que estén llevando a cabo funciones públicas o estén operando con fondos públicos.
2. Obligación de publicar una amplia gama de información de manera activa.
3. Procedimientos sólidos para realizar y procesar peticiones. Deberán ser sencillos, gratuitos (peticiones sin coste, tasas limitadas y centralizadas para reproducir la información) y expeditivos (máximo de 20 días para dar respuesta), y que comporten, en el caso de que sea necesaria, la prestación de asistencia a los peticionarios (inclusive formatos accesibles a personas con discapacidad).
4. Un régimen limitado de excepciones que se base en evitar el daño a intereses protegidos, en la prevalencia del interés público y la divisibilidad, en aquellos casos en que una parte de un documento está exento.
5. En caso de conflicto, el principio de que el derecho a la información es prioritario sobre otras leyes que lo limitan, como las leyes de secreto.
6. Un derecho amplio de apelación, ante un organismo independiente de supervisión y ante los tribunales, en todos los casos en que no se cumpla la ley, e incluyendo las omisiones en la publicación activa.
7. Protección hacia las publicaciones de buena fe y sanciones para quien obstruya de forma dolosa el acceso a la información.
8. Un paquete de medidas complementarias, como la obligación, respaldada por sanciones a quien rehúse publicar información sin motivo suficiente, de que todos los organismos públicos informen sobre las peticiones recibidas y sobre el tratamiento dado a las mismas.

Estándares y directrices

- Criterios de elegibilidad de la OGP: Acceso a la información <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>
- Declaración de los mandatos especiales de 2004 <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&IID=2>
- Principios de ARTICLE 19 <http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf>
- Principios de Tshwane sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información <http://www.right2info.org/exceptions-to-access/national-security>
- Rating de RTI <http://www.rti-rating.org/>

Ejemplos por países

 23 countries have recently adopted RTI laws which reflect the progress made in international standard setting

23 countries obtained scores of 100 points or more out of a possible 150 points on the RTI Rating. The average age of the laws in the top 20 countries is just 5 years. Features of the stronger laws include that they establish clear procedures for requesters and have strong oversight bodies.

- http://rti-rating.org/country_data.php

Inicial Step: Crear estructuras institucionales para la puesta en marcha del DAI

Justificación

Para que una ley DAI tenga éxito, es necesario que se apoye en un marco institucional adecuado, capaz de emprender medidas activas para su puesta en marcha.

Hay tres mecanismos institucionales básicos para implementar leyes DAI. Primero, cada autoridad pública debe designar a un funcionario dedicado a la recepción y el tratamiento de peticiones. A menudo, este funcionario también será responsable de tomar las acciones necesarias para instalar otros sistemas exigidos por la ley. Segundo, es muy útil establecer un punto central en el gobierno que oriente y realice un seguimiento de la implementación. En último lugar, la ley debería ordenar la creación de un organismo de supervisión independiente, como una comisión o un comisionario de información con poderes para revisar las reclamaciones sobre peticiones. Esta autoridad supervisora también deberá realizar actividades para concienciar al público en el ámbito del derecho a la información (Neuman, 2011).

Recomendaciones

1. Cada autoridad pública obligada por el cumplimiento de la normativa DAI debería nombrar a uno más funcionarios en calidad de expertos en información, los cuales desempeñarán la función de recibir y tramitar las peticiones de información, así como coordinar la implementación de la norma en su ámbito facultativo.
2. El ejecutivo debería designar un punto central (un órgano o comité de rango superior) con la responsabilidad de apoyar la implementación y realizar un seguimiento de la misma en toda la administración pública

3. Debería establecerse un organismo de supervisión independiente, o comisión de información. Este organismo tendría una función doble, pues por una parte cursa las reclamaciones, y por la otra emprende medidas de carácter promocional. Además, estará debidamente facultado y contará con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, como la revisión de documentos, la inspección de instalaciones, la prescripción de divulgar información, y la imposición de medidas estructurales en organismos públicos con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas DAI.

Estándares y directrices

- Centro Carter: Herramienta para evaluar la implementación de la legislación en materia de acceso a la información http://www.cartercenter.org/peace/americas/access_to_information/IAT/index.html
- Web del Banco Mundial sobre mecanismos públicos de rendición de cuentas <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23352107~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html>

Ejemplos por países

 In Canada rules on the right to information are overseen by the Department of Justice

This function for managing right to information, in Canada, served by the [Department of Justice](#)

 India has central and state level information commissions

India has a system of a central and state-level [information commissions](#), and the [Department of Personnel and Training](#) (DoPT) serves as the central focal point for right to information.

 Mexico has set up a federal institute for access to information (IFAI)

The institution supporting right to information legislation is, in the case of Mexico, the [Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos](#) (Federal Institute for Access to Information and Data Protection or IFAI).

Inicial Step: Divulgar información gubernamental de forma activa

Justificación

Para la mayoría de las personas, la consulta de información publicada de forma activa, y no las peticiones de información (Darbishire, 2011) es la manera más práctica de acceder a la información de los organismos públicos, del gobierno y de las organizaciones que actúan en representación del gobierno. Muchas secciones de esta guía se ocupan de la publicación activa de información relacionada con distintos sectores, como los [presupuestos](#), la [ayuda al desarrollo](#), las [industrias](#)

[extractivas](#) y las [declaraciones patrimoniales de cargos públicos](#). Además de estos compromisos, es muy importante que todos los organismos públicos pongan a disposición del público una plataforma mínima sobre sus actividades, funcionamiento, el gasto de la financiación pública, así como los servicios y prestaciones que sirven. In addition to these sectoral commitments, it is very important for all public bodies to make available a minimum platform of information about what they do, how they function, how they spend public funds, and the service and benefits they provide.

Todo esfuerzo es poco cuando se trata de garantizar que la información publicada de forma activa se presenta de una manera fácil de encontrar y comprender para el ciudadano de a pie.

Recomendaciones

Los organismos públicos deberían publicar activamente los siguientes tipos de documentos:

- **Institucionales:** Documentos jurídicos fundamentales, reglamentos internos, funciones y poderes.
- **Organizativos:** Información sobre personal, nombres y direcciones de contacto de los funcionarios.
- **Operativos:** Estrategias y planes, políticas, actividades, procedimientos, informes, así como evaluaciones e informes generados por los mecanismos y los organismos supervisores.
- **Decisiones y instrumentos formales:** Inclusive documentación secundaria o contextual.
- **Servicios públicos:** Descripciones de los servicios que se ofrecen, orientación, folletos, formularios e información sobre tasas y plazos.
- **Presupuestos:** Proyección de presupuestos, ingresos y gastos reales, informes de auditoría.
- **Juntas abiertas al público:** Incluyendo información sobre qué juntas están abiertas al público y cómo se pueden presenciar.
- **Toma de decisiones y participación:** Procedimientos de toma de decisiones, mecanismos para consultas de participación pública y toma de decisiones.
- **Subvenciones y subsidios:** Beneficiarios de subvenciones y subsidios, objetivos, cuantías e implementación.
- **Contratación pública:** Información detallada sobre procesos y criterios de contratación pública, así como contratistas resultantes; copias de los contratos e informes de ejecución de los mismos.
- **Listas, archivos documentales y bases de datos:** Listas, archivos documentales y bases de datos, disponibilidad online y/o en la sede del organismo.
- **Publicaciones:** Publicaciones, indicando si son gratuitas o tienen coste.
- **Dispute Resolution:** Mecanismos a los que puede acudir el público para expresar dudas, reclamaciones o apelar las decisiones o actos de la institución
- **Información sobre DAI:** Cómo hacer peticiones, reclamar y apelar, información de contacto del agregado de información.

Además, el poder legislativo deb garantizar que todos los registros de la actividad parlamentaria se publiquen de forma proactiva, mientras que el poder judicial deberá divulgar activamente las decisiones de todos los tribunales, independientemente de su rango.

Deberían celebrarse consultas al público para averiguar qué información es más útil, procurando que su publicación activa sea una prioridad. Se debe publicar activamente la información solicitada con mayor frecuencia.

Ejemplos por países

 Chile's transparency portal brings together open datasets and information requests

Adopted in 2009, Chile's Public Information Access Law or Transparency Law, dictates that on a monthly basis, the government and all related bodies such as the Senate, Chambers of Congress, the Central Bank, the Judicial Powers, the armed forces and the municipalities, must publish key information including lists of staff, salaries and benefits, organisational structure, budget, expenses, revenue, details about trips, and about the businesses contracted by the government. Government bodies also have to respond to all citizen requests for information within a 20-day period.

In 2013 the Transparency Portal of the State of Chile was launched, through a joint effort between the General Secretariat of the Presidency and the Council for Transparency. Citizens are able to find proactively disclosed open datasets and make and track requests for information under the transparency law.

The portal makes it easier for citizens to ask for public information, encouraging people to use the transparency law in an active way. By bringing all the information requests together it enables statistical information to be collected, and provides a help desk to advance in the promotion of the right of access to public information in Chile.

- <http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/>

Georgia issued a decree requiring proactive publication of government information

Civil society organisations in Georgia have long been concerned that the country's Freedom of Information act was not strongly implemented. Information requests had to be mailed in, and sometimes were ignored or responded to with incomplete information.

However, on 1 September, 2013, the government issued a decree on Electronic Request and Proactive Publication of Public Information. This Decree, which is based on the recommendations from a group of civil society organizations obliges all agencies under the supervision of the Executive to release information on their activities electronically, free of charge and in easy-to-use, open format. The decree sets out seven categories of information for proactive disclosure:

- General information on the public agency – its structure, functions, founding documents, annual reports, strategies, action plans, as well as biographies and contact details of the leadership and the staff;
- Names and contact details of FOI officers, relevant regulations, procedures and forms of appeal, FOI reports and statistics;
- Employment vacancy announcements, rules of competition, results of the competition and procedures for appealing these results, number and categories of the employed staff
- Procurement plans and tenders
- Budgets and details of staff remuneration, expenditures, grants and public assets
- Laws and official documents pertaining to the activities of the public agency
- Information on the services, taxes, fees and other revenues of the public agency

The list of information requirements was developed as a result of a series of consultations between civil society organizations and the government. An electronic request system is being developed for additional information.

The decree only applies to central government and its agencies. Parliament, the judiciary, elected local bodies – and the independent regulators do not have to comply but can choose to do so voluntarily.

- <http://blog.opengovpartnership.org/2013/09/proactive-publication-of-information-as-a-common-standard-in-georgia/>

Mexico's access to information law provides for proactive disclosure of information

Mexico's Federal Law on Transparency and Access to Public Information (2002) establishes that frequent requests should result in proactive disclosure of information. It requires public bodies to publish "relevant and useful information," and specifies that one way to determine this category is that it "corresponds to the most frequent questions made by the public." The sophisticated electronic request-tracking system developed in Mexico helps to capture data on frequent requests.

- http://freedominfo.org/documents/mexico_ley.pdf

The Indian Right to Information Act lists the types of information that must be published on a proactive basis

Section 4 of the Indian Right to Information Act from 2005 provides a long list of types of information that must be published on a proactive basis, as well as mechanisms to ensure that this is accessible to those who need to access it.

- <http://www.rti-rating.org/pdf/India.pdf>

The Peruvian Law of Transparency and Access to Public Information contains extensive proactive publication obligations

Title IV of the Peruvian Law of Transparency and Access to Public Information contains extremely detailed and extensive proactive publication obligations, particularly in the area of public finances, upon which it focuses.

- <http://www.ccrinepal.org/files/documents/legislations/11.pdf>

Inicial Step: Formar a funcionarios en la gestión de archivos documentales y la implementación de medidas DAI

Justificación

Es necesario que los funcionarios tengan conocimiento de sus responsabilidades en materia de leyes para que puedan aplicarlas debidamente.

Para ello, es importante que el funcionariado reciba formación sobre cómo garantizar que los documentos se generan y se guardan en sistemas de archivo fiables, que puedan asegurarse de que los archivos están debidamente controlados y sujetos a calendarios precisos de conservación y borrado. También es importante asegurarse de que los funcionarios reciban formación sobre cómo cumplir con sus obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la ley DAI. Lejos de tratarse solamente de formación en los aspectos jurídicos y técnicos, sino, a menudo se hace imprescindible que los funcionarios pasen por un proceso de cambio cultural, con el paso de una mentalidad defensiva y secretista a una forma nueva de plantearse su actividad profesional bajo el escrutinio público que dicta la ley.

Desde un punto de vista práctico, tiene sentido comenzar las actividades formativas con los expertos en información y otros empleados cruciales. Sin embargo, es importante que a largo plazo se forme a todos los funcionarios: solamente así se garantiza que los empleados de la administración pública comprendan sus obligaciones legales, además de apoyarse en una mayor cooperación con los expertos en información.

Todos los funcionarios deberán recibir formación en materia de DAI, aunque se trate de contenidos básicos. Esta formación se podrá ofrecer de distintas formas, dependiendo de cómo se gestione la función pública en el país: desde la inclusión de módulos DAI en la formación que ya se está impartiendo, hasta la docencia por parte de los expertos en información, pasando por la inclusión de contenidos DAI en la preparación de acceso al empleo público.

Recomendaciones

1. Identificar qué tipo de formación y orientación deben recibir los funcionarios para evaluar y divulgar archivos, conjuntos de datos y otros recursos informativos, con el fin de cumplir con las obligaciones indicadas en la ley DAI.
2. Revisar toda la oferta formativa existente en materia de gestión de archivos y DAI, e identificar las partes susceptibles de actualización.
3. Asignar recursos presupuestarios adecuados para llevar a cabo las acciones formativas.
4. Proporcionar formación básica pero especializada a todos los expertos en información, miembros del punto central y empleados del organismo supervisor. A largo plazo, se debería ampliar la oferta para que todos los empleados públicos puedan recibir esta formación.
5. Impartir cursos especializados para jueces, garantizado que el derecho de acceso a la información figure entre los conocimientos exigidos a futuros jueces.
6. La formación debería dedicar cierto espacio a las aportaciones de la sociedad civil, ya que abren la perspectiva de los peticionarios de información.
7. Revisar la formación y la orientación para garantizar que sigan siendo relevantes y eficaces con el transcurso de los años.

Estándares y directrices

- ARTICLE19: Curso de formación para funcionarios http://https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Publikacije_ostalih_pooblascencev/Article_19_foitrainersmanual.pdf

Ejemplos por países

 The UK Information Commissioner's Office has developed a set of training materials for use in the public sector

The website of the UK Information Commissioner's Office includes a wide set of training materials, including short films on how to manage personal information, and how to comply with the UK Data Protection Act, Freedom of Information Act, and the Environmental Information Regulations.

- http://ico.org.uk/for_organisations/training

Intermedio Step: Ampliar el alcance de la publicidad activa

Justificación

Tanto desde el punto de vista de los usuarios como el de los funcionarios, la publicidad activa de información es un eficaz sistema de DAI: en efecto, es más eficiente para ambas partes que la publicación puntual de información como consecuencia de peticiones concretas (aunque debe reconocerse en todo momento que las peticiones siempre serán un complemento importante de los sistemas de publicidad activa) (Darbishire, 2011).

A largo plazo, debería tenderse a la publicación activa de toda la información que sea posible. Con ello se facilita el acceso del público al tiempo que para los funcionarios se reducen los costes derivados de la implementación de los sistemas de publicidad. La publicidad activa está estrechamente relacionado con los "[datos gubernamentales abiertos](#)", un enfoque según el cual los gobiernos difunden conjuntos de datos en formatos legibles a máquina y reutilizables para permitir que los usuarios analicen, visualicen y empleen esos datos en formas inéditas.

La divulgación activa de nuevos archivos y conjuntos de datos presupone el empleo de controles de calidad que garanticen niveles la calidad y la integridad de la información, además de su permanente actualización. También es importante dar garantías para que la información tenga un formato accesible a quienes puedan estar interesados en ella. Los archivos compuestos por documentos y expedientes en papel son susceptibles de digitalización y de transformación en formatos legibles a máquina, mientras que aquella información afectada por excepciones podría ser eliminada, aunque se publique el resto del documento o archivo del que formaba parte.

La participación activa del público en la identificación de áreas prioritarias para la publicidad activa puede ayudar a crear un calendario de publicidad con priorizado, además de ayudar a que la información se ponga a disposición del público en la forma que le otorgue una mayor utilidad. Esta última consideración también puede llevar al empleo de formas de publicación y difusión de la información no digitales.

Recomendaciones

1. Exigir a las organizaciones gubernamentales que desarrollen, produzcan y divulguen sus propios índices con la información que controlan y las maneras de acceder a la misma. Proporcionar orientación y directrices para que la administración pública emplee descripciones de los archivos y conjuntos de datos fáciles de usar, empleando para ello un formato compartido.
2. Celebrar consultas con grupos de interés, con organizaciones representativas y con el público general con el fin de que estos participantes expresen qué categorías de conjuntos de datos deberían publicarse con carácter prioritario. Probar y refinar la relevancia y el formato de la información publicada de forma activa.
3. Publicar toda la información objeto de peticiones DAI en una base de datos provista de funciones de búsqueda.
4. Además del conjunto de información inicialmente publicado, otras categorías adicionales incluirían los registros nacionales de sociedades mercantiles, las legislaciones y la documentación que cubra todo el ciclo de la [contratación pública](#), así como registros completos de las sesiones parlamentarias y la jurisprudencia, en los que se habiliten funciones de búsqueda.
5. Divulgar los datos en formatos abiertos y legibles a máquina, garantizando que se trate de licencias abiertas y sin restricciones para la reutilización del contenido. Además, deberán presentarse los datos en las lenguas principales habladas por los usuarios y garantizar una actualización regular.

6. En el caso de países con una escasa penetración de internet, el paso más sustancial debería incluir el empleo generalizado de métodos alternativos de publicidad activa que garanticen la llegada a amplios sectores de la ciudadanía.

Ejemplos por países


 A Canadian government website provides the public with information about the government's access to information and privacy programmes

In Canada, the Info Source website provides the public with information about the government's access to information and privacy programmes. The primary purpose of Info Source is to assist individuals exercise their rights under the Access to Information Act and the Privacy Act. Info Source also supports the federal government's commitment to facilitating access to information regarding its activities.

- <http://www.infosource.gc.ca/index-eng.asp>

 In Bulgaria all units of the Ministry of Interior must publish data on FOI requests

Under a special bylaw of the Minister of the Interior in implementation of the Freedom of Information Act, all units of the Ministry of Interior were obliged in March 21,2011 to publish annually aggregate numbers about the requests they receive under the FOI act and to how many of them they actually grant information. (Art.46 of Internal Rules and Procedures for the Activity of the Ministry of the Interior in Implementation of the FOI Act, Adopted with an Order of the Minister of the Interior No I-z-771 of March 21,2011.

 The US Federal Register website provides information on citizen rights and obligations and actions of federal agencies, and provides a forum for public participation in the democratic process

The website is administered jointly by the Office of the Federal Register of the National Archives and Records Administration and the U.S. Government Printing Office.

- <https://www.federalregister.gov>

Intermedio Step: Fomentar la concienciación pública sobre el derecho a la información

Justificación

Si los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y demás actores no conocen la ley DAI, los derechos que la ley les confiere o cómo hacer uso de los mismos, la demanda de información a través de los mecanismos establecidos por la ley será pobre, y los objetivos de apertura que persigue pueden quedar en entredicho. No existe un enfoque único para fomentar la concienciación pública en materia de DAI. En la mayoría de países, una amplia gama de

actores diferentes suelen estar involucrados, como políticos experimentados, organismos públicos, el ente supervisor, la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades en materia educativa. Para garantizar que estos esfuerzos estén presididos por algún ente que se responsabilice de los mismos, es muy útil asignar dicha responsabilidad general sobre la publicidad a una institución central.

Las iniciativas relacionadas con la educación pública son vitales para garantizar que la ciudadanía conozca este derecho. Ello debería incluir la incorporación del DAI como asignatura en los planes de estudio de la enseñanza primaria y secundaria (por ejemplo, en educación cívica o educación para la ciudadanía), así como en distintas asignaturas universitarias y programas de educación superior (como asignaturas de derechos humanos o programas de periodismo y derecho), además de iniciativas más concretas para alcanzar segmentos de la población en situaciones de desventaja.

Este tipo de iniciativas deberían incluir evaluaciones sobre la efectividad y adecuación de los sistemas de información pública, como las encuestas sobre concienciación en materia de DAI o sobre la utilidad de la información divulgada.

Recomendaciones

1. Otorgar la responsabilidad general en materia de formación y promoción a una entidad central - como el punto central o el organismo supervisor.
2. Ciertos tipos de personas y organizaciones del ámbito público deberían estar involucradas en el fomento de la concienciación pública, como políticos veteranos y funcionarios, entidades públicas, el organismo supervisor y las autoridades en materia de educación. Además, especialmente en países de mayor tamaño con un modelo federal y descentralizado, debería participar también las administraciones públicas de regionales y locales.
3. A largo plazo, los esfuerzos de comunicación deberían aumentarse sustancialmente, incorporando el DAI a los planes de estudio de las escuelas y en asignaturas y programas universitarios, además de programas dirigidos a OSC y campañas de educación pública para mejorar las habilidades de búsqueda y uso de la información de la población siguiendo los mecanismos previstos por la legislación DAI.
4. Desarrollar una estrategia de promoción. Dependiendo de las necesidades del país, pueden incluirse eventos de perfil alto en los que se resalte el DAI y participen personalidades importantes, además de materiales orientativos en las páginas web de los organismos públicos y en lugares públicos, como entradas, tableros de anuncios, salas de espera y salas de juntas. Las entidades públicas también deberían practicar la difusión activa en sus comunicaciones habituales con el público, en mensajes de interés público y en noticias difundidas en los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión y cualesquiera otros medios que garanticen una difusión a una audiencia amplia.
5. Debería incluirse el DAI en los programas educativos, por ejemplo a través de sesiones específicas cursos de educación cívica o educación para la ciudadanía en escuelas primarias, además de la inclusión en asignaturas universitarias en materia de derechos humanos y en los campos del periodismo y el derecho. El DAI debería incluirse como un tema específico en la formación exigida a los funcionarios, tanto en el momento el acceso al empleo público como mediante fórmulas de formación continua.

Ejemplos por países

 In Nicaragua right to information is incorporated into school curricula by law

The Nicaraguan RTI law – Law of Access to Public Information from 2007 – provides for the incorporation of the right to information into school curricula at all levels and for the establishment of a national centre for research and teaching on the right to information.

- http://www.rti-rating.org/pdf/Nicaragua_Engl.pdf

Intermedio Step: Garantizar que cada autoridad pública emplee sistemas DAI

Justificación

Es necesario emplear sistemas adecuados para que los organismos públicos cumplan con sus obligaciones en materia de legislación DAI y actúen consistentemente a lo largo del tiempo. Dichos sistemas deben garantizar el procesamiento consistente de las peticiones en el plazo temporal señalado en la ley, y deben indicar con toda claridad la función de los demás empleados públicos a lo largo del proceso (comenzando por la obligación de cooperar con el agregado de información). Si la ley prevé un método de apelación interna, también deberá crearse un sistema para administrar este aspecto. Lo mismo puede decirse de recursos ante el organismo supervisor.

Muchos países que han aprobado leyes ambiciosas de derecho a la información preparan informes anuales para medir los avances e informar tanto al parlamento como al público general. Para que funcionen adecuadamente, es necesario emplear sistemas específicos para la recopilación de información sobre la implementación.

Recomendaciones

1. Desarrollar directrices o modelos de actuación para apoyar a los organismos públicos en el establecimiento de políticas o sistemas formales que les permitan cumplir sus obligaciones en materia de legislación DAI, incluyendo los aspectos relacionados con:
 - Ensuring requests for information are received and processed in accordance with the rules, including the timelines for responding to requests.
 - Ensuring that internal appeals are processed in accordance with the rules.
2. Establecer un sistema para recoger y compilar información con vistas a la preparación de un informe anual sobre implementación.
3. Emplear la preparación del informe anual para mejorar la implementación y para apoyar la reforma de la ley, de manera que pueda equipararse mejor a los estándares internacionales.
4. Incorporar disposiciones sobre cumplimiento que incluyan disposiciones de la ley DAI en los sistemas generales de gestión del rendimiento de organizaciones, dirigidas a gestores del sector público.

Estándares y directrices

- Centro Carter: Herramienta para evaluar la implementación de la legislación en materia de acceso a la información http://www.cartercenter.org/peace/americas/access_to_information/IAT/index.html
- Web del Banco Mundial sobre mecanismos públicos de rendición de cuentas <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23352107~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html>

Avanzado Step: Equiparar la legislación y las prácticas sobre Derecho de Acceso a la Información con los estándares internacionales más avanzados en la materia

Justificación

Las legislaciones ambiciosas en materia de Derecho de Acceso a la Información pueden mejorar el acceso a la información

de muchas maneras. Por ejemplo, reduciendo el alcance de las excepciones, simplificando los procedimientos para tramitar peticiones, o incrementando las medidas de promoción. Es aconsejable que los países que aprueban por vez primera una ley DAI partan ya con estas características, y de hecho muchas de las leyes DAI más potentes son recientes. Los países que ya cuentan con legislación en la materia deberían evaluarla y enmendarla hasta alcanzar una equiparación con las mejores prácticas internacionales.

Recomendaciones

Los gobiernos deberían revisar la legislación en materia de Derecho de Acceso a la Información y proponer enmiendas, con el objeto de equipararla con los estándares internacionales más avanzados.

Key Criteria

Los estándares internacionales más avanzados siguen evolucionando con la constante aparición de mejores prácticas. Estos son algunos criterios fundamentales:

1. La publicidad activa supone la obligación de publicar toda la información que pueda ser de interés general, incluyendo la información divulgada como respuesta a una petición.
2. Apoyo y asistencia generalizados: es exigible que las administraciones procedan a rediseñar la configuración electrónica de la información para poder divulgarla en los formatos solicitados.
3. Aquellos tipos de información que hubieran estado disponibles con anterioridad previo pago, como los mapas geoespaciales, los datos meteorológicos y la información sobre sociedades en los registros mercantiles deben proporcionarse de forma gratuita, sin limitar la reutilización de la información ni cobrar por la misma.
4. La mayor parte de la información se publica con carácter inmediato o con mucha rapidez, reduciendo los plazos máximos (por ejemplo, hasta diez días).
5. Se reduce gradualmente el alcance de las excepciones, que se aplican de forma rigurosa y en ocasiones puntuales.
6. Además de la prevalencia del interés público, hay otra prevalencia explícita para la información que esté relacionada con violaciones de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, corrupción o abuso de poder y amenazas a la salud pública y al medio ambiente.
7. A la hora de denegar el acceso a la información, el peso de la prueba recae en la administración. Se reducen los tiempos para la tramitación de reclamaciones, con un plazo deseable de 30 días.
8. Protección para quienes divulguen actividades delictivas (*informadores*).
9. El derecho se amplía hasta alcanzar a entidades privadas, toda vez que la información exigida sea necesaria para proteger derechos fundamentales.
10. Las medidas de promoción incluyen cursos de formación exigentes, la obligación de concienciar al público, sistemas de gestión de archivos documentales y normas de información y reporte.

Estándares y directrices

- Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: Ley modelo para África sobre acceso a la información http://www.achpr.org/files/news/2013/04/d84/model_law.pdf
- Declaración de los mandatos especiales de 2004 <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&IID=2>
- Principios de ARTICLE 19 <http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf>
- Principios de Tshwane sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información <http://www.right2info.org/exceptions-to-access/national-security>
- Rating de RTI <http://www.rti-rating.org/>

Ejemplos por países

Serbia, India and Slovenia tops the RTI Rating

The top three scoring countries on the RTI Rating were [Serbia](#) (135 out of a possible total of 150 points), [India](#) and [Slovenia](#) (both with 130 points).

- http://rti-rating.org/country_data.php

South Africa's right to information law covers both public and private bodies

The South African right to information law, the [Promotion of Access to Information Act](#) from 2000, applies to both information held by public bodies and information held by private bodies in so far as the information is necessary for the exercise or protection of other rights.

- http://www.dfa.gov.za/department/accessinfo_act.pdf

Avanzado Step: Establecer sistemas de seguimiento y evaluación de mejores prácticas en materia de Derecho de Acceso a la Información

Justificación


Como cualquier otro sistema, los sistemas de Derecho de Acceso a la Información pueden fracasar en la consecución de sus objetivos si no se someten a sistemas sólidos de seguimiento y evaluación que permitan realizar cambios legales o de procedimiento en respuesta a los problemas detectados. En estos sistemas de debería contemplar, para empezar, que todas las entidades públicas recojan periódicamente datos sobre el número de peticiones, las tasas de respuesta, las excepciones en las que se incurra y los tipos de información sujetos a publicidad activa, así como la compilación centralizada de toda esta información. Debería existir un ciclo de retroalimentación con sistemas que garanticen la toma de medidas para resolver los problemas que se detecten. Se debería alentar a que la sociedad civil exprese su opinión sobre posibles mejoras en la implementación, y a que el gobierno convoque procesos de consulta con la sociedad civil y personalidades relevantes de la sociedad.

Es imposible diseñar un sistema DAI que dé respuesta a las necesidades y a los intereses de la población sin consultarles el diseño y la implementación del mismo. Algunos de los puntos donde es más razonable solicitar la opinión del público son los tipos de información que se consideran importante (y que deberían ser objeto de publicidad activa, además de ser recomendable su presentación en formatos más fáciles de usar y entender), qué herramientas de búsquedas no son fáciles de usar (p.e., cada vez que el público no consigue encontrar la información que buscan a pesar de que esté disponible en la red), así como incidencias en los procesos de petición. Para enfrentarse a estos puntos es necesario poner en marcha mecanismos que fomenten la expresión de los pareceres del público, así como la participación en el diseño de los sistemas DAI.

Recomendaciones

1. Deberían ponerse en marcha sistemas sólidos de seguimiento y evaluación que incluyan la recopilación de información abundante, además de garantías para que realmente se tomen medidas que resuelvan los problemas detectados.
2. La promoción de la participación del público en dichos mecanismos de evaluación debería fomentarse mediante encuestas periódicas de concienciación dirigidas a la población en general, así como consultas públicas o grupos de discusión, mediante los cuales se permite que el público participe directamente en los debates sobre cómo mejorar la apertura del gobierno.
3. Debería alentarse a la sociedad civil para que desempeñe un papel principal a la hora de realizar aportaciones, no solo a los gobiernos, sino también a las comisiones o a los agregados de información. Este fin se puede alcanzar mediante la constitución de comités asesores de la sociedad civil.

Ejemplos por países

 Mexico has a system to systematically track statistics on requests and responsiveness from federal agencies

In Mexico, the [Federal Institute for Access to Information and Data Protection \(IFAI\)](#) has set up a system to systematically track statistics on requests and responsiveness from federal agencies.

Federal agencies have incentives to comply with access to information legislation because their response to information requests is permanently monitored by the IFAI. Also, heads of agencies have an incentive to be well evaluated as the IFAI's evaluations are public. No agency wants to be listed as a poor performer.

The IFAI has developed monitoring indicators to assess the extent to which federal agencies fulfil the procedures established in the [transparency law](#) and provide responses to information requests. Different methodologies – quantitative, qualitative and the ‘mystery shopper’ methodology – are used to assess compliance and analyse the state of access to information in Mexico. Official figures on the extent to which public agencies provide information in response to individuals’ requests show an overall positive response rate.

- <http://go.worldbank.org/FWFM9U5M90>

 The UK publishes quarterly and annual reports on the number of FOI requests, response and appeals

The UK government publishes quarterly and annual statistics covering approximately 40 departments of state and other monitored bodies with significant policy-making, regulatory or information-handling functions. Recent data suggest that between three-quarters and nine-tenths of all requests receive a response within the required time frame and that performance has improved in recent years.

- <http://go.worldbank.org/NBINTFKT90>

Avanzado Step: Revisar y reformar la legislación sobre secretos de Estado

Justificación

En muchos países existen abundantes normativas incluyen disposiciones sobre secretos de Estado, y en ocasiones existe incluso legislación específica en la materia. Normalmente estas leyes se aprobaron con anterioridad a la ley DAI, por lo que las obligaciones relacionadas con los secretos de Estado no son consistentes con los estándares de la ley DAI. Como medida inicial, en caso de conflictos la ley DAI debería tener prioridad sobre las leyes sobre secretos de estado. Sin embargo, esta prioridad no podrá solucionar por completo la incompatibilidad de fondo, y no se puede exigir que los funcionarios sepan resolver adecuadamente asuntos legales complejos sometidos a normativas aparentemente incompatibles. Es importante crear un marco legal completamente consistente y coherente con el fin de evitar que se aproveche la incertidumbre jurídica para mantener información en secreto y reducir el número de reclamaciones administrativas y judiciales.

Recomendaciones

Los gobiernos deberían revisar las disposiciones sobre secretos de Estado incorporadas en otras leyes y proponer enmiendas con el objetivo de constituir un régimen de excepciones coherente y consistente, basado en una prueba trimembre según la ley internacional. Según esta prueba, las excepciones deberían: proteger solamente intereses reconocidos; basarse en el daño; y ser susceptibles de anulación cuando se estime que debe prevalecer el interés público.

Estándares y directrices

- Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África <http://www1.umn.edu/humanrts/achpr/expressionfreedomdec.html>
- Declaración de los mandatos especiales de 2004 <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&IID=2>
- Principios de Tshwane sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información <http://www.right2info.org/exceptions-to-access/national-security>

Ejemplos por países

 In Slovenia, all secrecy provisions are laid out in the Classified Information Act

The [Slovenian Classified Information Act](#) from 2006 covers all secrecy provisions in Slovenia. The Information Commissioner of Slovenia has also provided [extensive interpretation](#) of the exemption on 'secret information', namely that it can only be information that complies with the definition and standards in the secrecy law.

- <https://www.ip-rs.si/index.php?id=505>

 In Sweden, all secrecy provisions are concentrated in one law: the Secrecy Act

In Sweden, the updated Public Access to Information and Secrecy Act from 2009 replaced the old access to information act from 1980. All secrecy provisions are stated in this Act.

- <http://www.government.se/sb/d/11929/a/131397>

Innovador Step: Emplear tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso a la información

Justificación

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden emplearse para activar la publicidad de información, tanto activa como pasiva, reduciendo la carga de trabajo de los organismos públicos y mejorando de forma sustancial el acceso a la información de personas físicas y resto de usuarios.

Recomendaciones

El alcance de las iniciativas en este campo seguirá evolucionando con la aparición de nuevas tecnologías. Algunos campos de mejoras potenciales incluyen:

Mejoras sustantivas en la accesibilidad de la información:

- Permitir actualizaciones en tiempo real de documentos y datos, y en especial de los datos financieros.
- Exigir a la administración pública un registro de metadatos sobre las peticiones y su tramitación, publicándola cada día en un portal online para el público.
- Mejorar la granularidad de los datos.
- Etiquetar para facilitar la realización de búsquedas significativas.
- Funcionalidades de búsqueda potentes y personalizadas.
- Emplear formatos y sistemas dotados de interoperabilidad en las páginas webs y la información del gobierno.

Mejoras procedimentales en la accesibilidad de la información:

- Desarrollar un portal ciudadano como punto central para acceder a la información gubernamental, de manera que el usuario tenga la posibilidad de buscar y encontrar información de cualquier organismo público, y de realizar peticiones de información fácil y rápidamente, con procesos para redirigir las peticiones al organismo que tenga acceso a la información y para tramitar las reclamaciones.
- Asegurar que la información se publica en un formato que permita el acceso de usuarios con discapacidades.
- Liberar la información y los conjuntos de datos producidos y recogidos por la administración, o propiedad de la misma, mediante licencias abiertas, con la consiguiente eliminación de todas las tasas y las limitaciones impuestas a la reutilización, ya sea por copyright o por otros medios.
- Establecer el requisito de que el Derecho de Acceso a la Información se diseñe de forma integrada en los sistemas TIC y en la producción de archivos. Por ejemplo, se pueden crear sistemas integrados para segregar de manera automática la información sujeta a excepciones (como los datos personales)
- Permitir una tramitación completamente electrónica de las apelaciones.

Ejemplos por países

Chile's transparency portal brings together open datasets and information requests

Adopted in 2009, Chile's Public Information Access Law or Transparency Law, dictates that on a monthly basis, the government and all related bodies such as the Senate, Chambers of Congress, the Central Bank, the Judicial Powers, the armed forces and the municipalities, must publish key information including lists of staff, salaries and benefits,

organisational structure, budget, expenses, revenue, details about trips, and about the businesses contracted by the government. Government bodies also have to respond to all citizen requests for information within a 20-day period.

In 2013 the Transparency Portal of the State of Chile was launched, through a joint effort between the General Secretariat of the Presidency and the Council for Transparency. Citizens are able to find proactively disclosed open datasets and make and track requests for information under the transparency law.

The portal makes it easier for citizens to ask for public information, encouraging people to use the transparency law in an active way. By bringing all the information requests together it enables statistical information to be collected, and provides a help desk to advance in the promotion of the right of access to public information in Chile.

- <http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/>

Mexico has put in place electronic systems to facilitate RTI

Mexico has put in place three key electronic systems to facilitate RTI:

- Infomex: an electronic platform for making information requests and submitting complaints and appeals. When requests are presented in writing and in person, they are transferred into the e-platform by a staff member so that they can be registered by the system. According to IFAI, 97 percent of all requests were received electronically.
- ZOOM: a tool for searching the database of requests that have been made and answers provided. Each government agency is required to set a link to the ZOOM on their websites.
- POT: a standardised system for accessing the information which is published proactively by public bodies. Users can search through this data by keyword or by type of transparency obligation, thereby providing easy comparison of the data across different public bodies.
- <https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>; <http://buscador.ifai.org.mx/buscador/bienvenido.do>
- <http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=begin>

Norway has developed an electronic public records tool, which is used by central government agencies to publicise their public records online, and which is open for everyone to use

Norway's Electronic Public Records (Offentlig Elektronisk Postjournal or OEP) was developed in the late 1990s by the agency that later evolved into the Agency for Public Management and eGovernment. Originally a password-protected database, the OEP was developed to enable journalists to access public information. Its creation was made possible by the launch of the Noark 3 standard in 1994, which established a standard method of generating and uploading metadata through Electronic Document and Records Management Systems (EDRMS).

The OEP was updated in May 2010 as part of the Norwegian government's commitment to transparency and democracy under the Freedom of Information Act. While the previous OEP enabled public information to be sought by journalists and scientists, the new OEP can be used by any person with internet access.


The OEP is a collaborative tool which central government agencies, approximately 100 of them, use to publicise their public records online. Public records data is stored in a searchable database from which the public can locate case

documents and send requests to the agency responsible for that particular case. The agencies themselves then process the requests sent to them via OEP, and reply to users directly.

The OEP only contains documents from the period after May 2010 and the old, password protected, version is still running parallel to the new OEP. By the end of 2012, the new OEP contained over five million registry entries published by 105 government agencies, processing about 20,000 information requests a month. The greatest number of requests comes from journalists (50%). Citizens and businesses make 22% of requests, public employees 21% and researchers 3%.

- <http://www.oep.no/nettsted/fad/OM-OEP.html>
- http://www.conferpapers.co.nz/wcioi_papers/Arne_Flifet_Paper.pdf

Elecciones

 **Autor principal:** [National Democratic Institute](#)

Introducción

En cualquier país, las elecciones democráticas cumplen dos funciones esenciales: servir como vehículo para que la población exprese su voluntad sobre quién debe tener la autoridad para gobernar, y resolver pacíficamente la competición por el poder de gobernar. Mediante las elecciones democráticas, los candidatos que defienden su cargo se ven obligados a rendir cuentas por su actuación durante la legislatura, mientras que los aspirantes ven en los votos de la ciudadanía la promesa de control sobre su desempeño futuro.

La obligación que los gobiernos tienen de organizar elecciones genuinas, basadas en el sufragio universal e igualitario, está entrelazada con el derecho de los ciudadanos a participar en el gobierno y la cosa pública. El artículo 21 de la [Declaración Universal de los Derechos Humanos](#) (UDHR) afirma que la base de la autoridad del poder público deriva de la voluntad popular, tal y como se expresa en elecciones periódicas y genuinas. El artículo 25 del [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos](#) (ICCPR) afirma que los gobiernos tienen la obligación de garantizar a cada ciudadano, sin discriminación ni restricciones indebidas, el derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido en elecciones genuinas.

Los ciudadanos no solo tienen el derecho de participar en las elecciones, sino también el derecho a saber si el proceso es válido y no está corrompido. El derecho a la información es una parte esencial de los derechos electorales, porque es imposible una participación verdadera sin la información necesaria para tomar decisiones electorales informadas. Tanto el acceso a la información sobre procesos electorales, que incluye los datos electorales en mano del gobierno, como las medidas adoptadas por las instituciones públicas para garantizar la rendición de cuentas en el contexto electoral, son fundamentales para crear y reforzar la confianza ciudadana en la integridad de las elecciones y, por consiguiente, del gobierno que resulta elegido.

Para poder que las elecciones cuenten con todas las garantías, son necesarias medidas administrativas que aseguren la imparcialidad política de las instituciones estatales y de los empleados públicos y que la ley proteja a todos los ciudadanos por igual. Si la población tiene dudas sobre si su participación en el proceso electoral puede resultar en violencia, intimidación, amenazas, pagos políticos u otras formas coercitivas, y a menos que crea que los votos se vayan a contar con exactitud y honradez, surgirán poderosos obstáculos en el camino de la participación y de la credibilidad del mandato electoral. A menos que los rivales electorales tengan garantías, no solo de que podrán participar sin exponerse a esos peligros, sino también de que podrán exigir reparaciones reales por la violación de sus derechos políticos, podrían decidir, bien no participar, bien volcarse en otras formas de "participación autónoma", como la violencia política.

Incluso en las democracias establecidas, existe cada vez una mayor controversia sobre cómo puede mantenerse la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de los administradores del procedimiento electora. Además, allí donde existen importantes problemas electorales y el sistema adolece de falta de transparencia, la confianza en el gobierno puede verse seriamente dañada. Teniendo en cuenta lo difícil que es recuperar este tipo de confianza pública, el daño puede afectar notablemente a la estabilidad del gobierno.

La financiación de la política y de las campañas electorales también es un componente importante de la integridad electoral. El dinero puede cambiar muchas cosas en política. Dependiendo de si proviene de donantes particulares o de grandes compañías, de fuentes legales o del crimen organizado, cambiará quién se presenta a las elecciones, qué capacidad tiene para difundir sus mensajes al electorado, cómo desarrolla sus esfuerzos organizativos e, incluso, cómo podría desempeñar sus responsabilidades en el caso de entrar en el gobierno (Transparency International, 2013; Öhman and Zainulbha, 2009; International IDEA, Political Finance Database; Open Congress, International Campaign Finance Literature Review). Cada vez se está prestando más atención a cómo controlar la influencia del dinero en la política, procurando mantener vivos los aspectos positivos a la vez que se controlan o se contrarrestan las repercusiones

negativas.

References

Transparency International (2013), Buying Influence, Money and Politics in the Balkans, http://www.transparency.org/news/feature/buying_influence_balkans

Magnus Öhman and Hani Zainulbha, 2009, Political Finance Regulation: The Global Experience, International Foundation for Electoral Systems

International IDEA, Political Finance Database, <http://www.idea.int/political-finance/sources.cfm>

Open Congress, International Campaign Finance Literature Review, http://www.opencongress.org/wiki/International_Campaign_Finance_Lit_Review

Organizaciones especializadas

ACE Electoral Knowledge Network <http://www.aceproject.org>

International IDEA <http://www.idea.int>

Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) <http://www.eisa.org.za>

Global Network of Domestic [Citizen] Election Monitors <http://www.gndem.org>

National Democratic Institute for International Affairs (NDI) <http://www.ndi.org>

The Carter Center http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/democracy_reports.html

Transparency International <http://www.transparency.org>

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Establecer un marco legal para garantizar la imparcialidad, la eficacia y la transparencia de las elecciones
- Publicar información sobre los procesos electorales

Intermedio

- Establecer la convocatoria de procesos de consulta como condición previa para cualquier modificación sustancial en el proceso electoral
- Establecer medidas que permitan salvaguardar la imparcialidad administrativa y formar en el acceso a la información sobre las mismas
- Establecer normas abiertas para procesos de contratación pública relacionados con procesos electorales
- Publicar activamente los datos electorales

Avanzado

- Ampliar y profundizar las oportunidades de participar en la decisión de políticas públicas relacionadas con la administración de elecciones
- Autorizar al Defensor del Pueblo para que pueda recibir, investigar y resolver reclamaciones ciudadanas en materia electoral

Innovador

- Establecer un grupo de expertos independientes para que supervise el proceso de contratación y puesta en marcha de innovaciones tecnológicas en el ámbito electoral.

Detailed Recommendations

Inicial Step: Establecer un marco legal para garantizar la imparcialidad, la eficacia y la transparencia de las elecciones

Justificación

De acuerdo con el consenso internacional existente, el punto de partida para salvaguardar la integridad electoral y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas relacionadas con las elecciones pasa por el establecimiento de un marco jurídico que, al asegurar una competencia justa y proteger el voto como una acción libre e informada, sirva como garantía de la confianza en la administración electoral. Este marco jurídico debería garantizar la imparcialidad política de los órganos gubernamentales, así como la eficacia y la transparencia en la administración de los muchos subprocesos complejos, a gran escala y ajustados a plazos que son requisito fundamental en todo proceso electoral legítimo.

También existe consenso internacional sobre cómo los factores relacionados con el ambiente político, tomado en sentido amplio y participado por toda una batería de instituciones gubernamentales y actores no gubernamentales, pueden negar o incluso subvertir por completo, y bajo determinadas circunstancias, la integridad electoral. Los marcos jurídicos deben, pues, garantizar el acceso a mecanismos en el ámbito de la justicia, a una protección equitativa de la ley y a reparaciones reales en el contexto de las elecciones. Más allá de la letra de la ley, se deben tomar pasos visibles para garantizar la neutralidad política, así como la actuación correcta y la apertura de las instituciones estatales, que también son condiciones cruciales para la credibilidad de los procesos electorales ante la ciudadanía. El compromiso de los rivales políticos y de los actores de la sociedad civil con las medidas adecuadas para establecer la transparencia y la credibilidad electoral también es importante.

Los marcos jurídicos nunca son perfectos. Por eso, deben ser evaluados de nuevo, y mejorados con el tiempo y de acuerdo con el aprendizaje de nuevas lecciones y con la incorporación de avances en el sendero de reglas democráticas más avanzadas. En cualquier caso, las normas deben ser conocidas por todos con tiempo suficiente antes de la fecha de las elecciones. El aumento del acceso a datos electorales y demás información relacionada con las elecciones que esté en manos del gobierno debería ser parte del proceso.

Recomendaciones

Un marco jurídico razonable para las elecciones debería:

1. **Delinear un proceso inclusivo con el objetivo de designar un organismo imparcial de administración electoral (por ejemplo, una comisión o junta electoral).** Además de indicarse claramente los criterios para seleccionar a sus miembros, el diseño del proceso deberá ser fruto de un amplio consenso entre los rivales políticos (por ejemplo, mediante una supermayoría parlamentaria compuesta por el partido del gobierno más los partidos de la oposición) y generar la oportunidad para que el proceso sea sometido al escrutinio público. Los requisitos para la selección de los miembros pueden incluir la habilidad de actuar con imparcialidad sobre los rivales políticos, una integridad personal sobradamente demostrada y la capacidad de supervisar procesos electorales complejos. En algunos países, el primero de estos requisitos se diluye, favoreciendo organismos gestores diseñados para que la imparcialidad política se alcance mediante la presencia equilibrada de representantes de distintos partidos políticos. Para elegir al director del organismo se necesitan criterios semejantes, conjuntamente con un proceso de selección en el que también participen los partidos de la oposición.
2. **Incluir procedimientos presupuestarios que garanticen una actuación de la administración electoral imparcial** (autónoma e independientemente de presiones políticas), eficaz (con financiación suficiente y concedida a tiempo), transparente (publicación temprana y accesible de las propuestas presupuestarias y demás documentación relativa a la elaboración de los presupuestos) y responsable (mediante la supervisión parlamentaria y el escrutinio público)
3. **Reconocer el derecho de los rivales electorales como observadores de todo el proceso electoral** para comprobar

que sus derechos son respetados, incluyendo el derecho a obtener información y el derecho a recurrir.

4. **Reconocer los derechos ciudadanos de asociación en organizaciones que supervisen los procesos electorales** (por ejemplo, organizaciones ciudadanas no partidistas y medios de comunicación), acreditando oportunamente y sin restricciones indebidas a estas organizaciones para que puedan actuar como observadores en todos los aspectos relacionados con la administración de los procesos electorales, incluyendo, entre otros aspectos, la delimitación de los distritos electorales, la inscripción de votantes, la emisión del voto, el recuento de votos, la tabulación y la transmisión de los resultados electorales.
5. **Establecer la publicación a tiempo de todas las decisiones del organismo de administración electoral, de la normativa, los reglamentos y el calendario** con las fechas de todos los hitos en el proceso electoral, desde el anuncio de los resultados hasta los asientos de los diputados.
6. **Establecer la publicación inmediata, por parte del organismo de administración electoral, de las denegaciones de reconocimiento jurídico y acreditaciones, debidamente acompañadas de sus correspondientes fundamentos.** Es importante conocer a tiempo la denegación del reconocimiento jurídico de los contendientes electorales, incluido el derecho a voto, del reconocimiento y la acreditación de las organizaciones ciudadanas a efectos de la supervisión de los distintos procesos electorales, o de la acreditación de los medios de comunicación para presenciar los procesos electorales. Además, deben incluirse medios para poder recurrir dichas denegaciones.
7. **Exigir que los datos sobre los pasos vitales previos a la celebración de elecciones,** como la delimitación de las circunscripciones y otros datos censales o el registro de votantes, partidos y candidatos, se sometan al escrutinio público rápidamente para que las personas directamente interesadas y los observadores electorales imparciales puedan cursar las reclamaciones correspondientes.
8. **Establecer la publicación periódica de los resultados electorales** tanto en el lugar donde se emiten y recuentan los votos (por ejemplo, los colegios electorales) como en cada punto de consolidación (centros de consolidación de los resultados de distrito, regionales, provinciales o nacionales); disponer la publicación inmediata de los resultados, cada vez que se produzca la unión de varias tabulaciones, en un formato que incluya tanto los resultados registrados en el lugar de emisión del voto como los resultados agregados.
9. **Establecer la publicación forma inmediata los resultados consolidados en un catálogo apta para** (p.e., una base de datos) que dé acceso a los resultados registrados en el lugar de recuento de los votos (como los colegios electorales), pero también a los resultados agregados, garantizando que el formato de los datos esté suficientemente estructurado como para automatizar su procesamiento y análisis, y exigiendo que los resultados sigan publicados con carácter permanente en formatos de análisis sencillo.
10. **Disponer que todos los medios de comunicación públicos o controlados por el estado sean imparciales hacia todos los candidatos electorales;** sancionar los casos de incumplimiento; procurar que los datos recopilados por aquellas agencias gubernamentales con funciones de control sobre los medios sean publicados a tiempo; y procurar que reciban pronta respuesta las peticiones de información de ciudadanos dirigidas a medios de comunicación estatales y a agencias de control.
11. **Proporcionar un mecanismo para tramitar reclamaciones, revisar el proceso y emitir las sanciones adecuadas** a cualquier empleado público que utilice su cargo, los recursos o el tiempo de los empleados para favorecer o perjudicar a un candidato electoral. Solicitar informes públicos a tiempo sobre la cantidad, la naturaleza y la situación de estas quejas.
12. **Disponer la responsabilidad criminal para quienes violen los derechos de los votantes o de los candidatos electorales, incluidos los empleados públicos** (ya sea mediante soborno, amenazas o retribuciones políticas mediante puestos de trabajo, becas o prestación de servicio, violencia, amenaza de violencia u otras formas coercitivas), y solicitar informes públicos a tiempo sobre la cantidad, la naturaleza y la situación de estas quejas.
13. **Proporcionar a los organismos de administración electoral los poderes y los recursos financieros necesarios para investigar** por sus propios medios posibles negligencias y negligencias de los responsables electorales, incluidas todas las acciones que puedan afectar a los resultados electorales.
14. **Evitar que el acceso a los mecanismos de reclamación electoral y a los procedimientos judiciales relacionados con las elecciones** se vean obstaculizados por cuotas judiciales indebidas y por procedimientos y plazos arbitrarios o de difícil cumplimiento, y asegurar que los pasos necesarios, tanto para tramitar una reclamación como para solicitar

reparaciones administrativas o judiciales, sean lo suficientemente amplios como para poder llevar a buen puerto cualquier demanda razonable, así como reparaciones eficaces y a tiempo.

Estándares y directrices

- Carta Democrática Interamericana http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
- Carta africana de las elecciones, la democracia y la gobernanza <http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/text/Charter%20on%20Democracy.pdf>
- Comentario general 25 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iue72QY8oFMq1RR28eUM15DmoG%2BUkA42vZzn8xBgKE72kZ%2B%2FG27cNpuBZ8Wlla%2BJ4SJOBYSkMpcZa%2BR0%2BP3tAWg%3D%3D>
- Comentario general 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas http://www.ccrprcentre.org/wp-content/uploads/2012/09/A.66.40_Vol.I_S.pdf
- Compendio de normas internacionales para las elecciones de la Unión Europea http://www.needsproject.eu/files/Compendium_of_Int_Standards_3_ES.pdf
- Convención Americana sobre Derechos Humanos <http://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm>
- Diseño de la administración electoral: Manual internacional de IDEA <http://www.idea.int/publications/emd/>
- Diseño de sistemas electorales: el nuevo manual internacional de IDEA <http://www.idea.int/publications/esd/index.cfm>
- Documento de 1990 de la Conferencia de Copenhague [actualmente la Organización] sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa <http://www.osce.org/odihr/elections/14304>
- Justicia electoral: Manual internacional de IDEA http://www.idea.int/publications/electoral_justice/
- La base de datos del Centro Carter de obligaciones en materia de elecciones democráticas <http://www.cartercenter.org/des-search/des/Introduction.aspx>
- Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections- Una Guía de la NDI para desarrollar legislación y comentario jurídico en materia de elecciones <http://www.ndi.org/node/14905>

Ejemplos por países

Canada's electoral management body allows citizens to file complaints online

Elections Canada is an independent, non-partisan agency that reports directly to Parliament. It is responsible for conducting election at all levels of government, administer political financing provisions, monitor compliance and enforce electoral legislation. It is also mandated to conduct voter education and information programmes, and provide support to the independent boundaries commissions in charge of adjusting the boundaries of federal electoral districts.

Elections Canada also has an Access to Information and Privacy Directorate within the commission itself, which is responsible for processing information requests in accordance with Canadian freedom of information legislation.

Elections Canada's website www.elections.ca/home.aspx provides information on a broad range of election processes, including about methods for public scrutiny, information about lodging electoral complaints and historic election data, including turnout and results information. Its website also allows citizens to file complaints, presents definitions of electoral crimes and provides information about cases referred for prosecution.

- <http://www.elections.ca/home.aspx>

 Kenya adopted reforms to allow independent monitoring of electoral processes

Following the 2007-2008 electoral tragedy in Kenya that left over 1,000 people dead and 600,000 displaced in a conflict over presidential election results that were neither sufficiently transparent nor effectively administered, a new constitution was adopted in Kenya along with electoral and judicial reforms. The reforms led to enhanced transparency provisions allowing parties, citizen observers, media and international observers to monitor electoral processes.

The reforms also led to an open and inclusive process for appointing members of the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Appointments of the chairperson and eight members of the IEBC are done through a multi-staged process that involves the President, a Selection Panel and the National Assembly. The Selection Panel is responsible for advertising the positions, public interviews and shortlisting of candidates, who are in turn approved by the National Assembly and appointed by the President. The procedure for the appointment process is regulated by the Constitution of Kenya and the IEBC Act.

The IEBC receives its budget independently from the legislature and is constitutionally mandated as an independent body with specific review by the courts. Though Kenya has yet to pass a freedom of information law, the Article 35(1) of Constitution of Kenya guarantees every citizen the right to access to information held by the state, and state-established institutions, such as the IEBC.

- <http://www.iebc.or.ke/>

 Mexico has a comprehensive electoral code

The Instituto Federal Electoral (or Federal Electoral Institute (IFE)) is a special electoral prosecutor and a special electoral court to resolve disputes concerning federal elections in Mexico.

The Federal Transparency and Access to Public Government Information law applies to the IFE, which adds greater possibilities for transparency in federal elections, and the Constitution provides IFE with autonomy, which among other things allows it to negotiate its budget directly with the legislature.

The main directive body of the IFE is the General Council, consisting of nine members with a right to vote and to participate in debates, and additional members who have the right to participate in debates but who are not entitled to vote. The nine members of the General Council are elected through the vote of two thirds of the members in the Lower Chamber of the Congress, from among proposals put forward by the parliamentary groups of the same Chamber, after an open consultation.

As a requirement, the President Councillor and the Electoral Councillors must not have been registered as candidates for any elective post or have performed any directive position at a national or local level for a political party during the last four years prior to the designation.

- http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/IFE_Nature_and_Attributions/

 South Africa has an Independent Electoral Commission

South Africa's Independent Electoral Commission, established in 1993, is the permanent body created by the South African Constitution to manage free and fair elections at all levels of government. The Commission is selected through an inclusive process.

It provides a range of election related material on its website including electoral timetables, laws and regulations, and annual reports and strategic documents. It also makes available the results data (in a machine-readable format) for every election since 1994 and allows voters to check their registration and voting location.

Its Municipal Demarcation Board provides information related to drawing electoral boundaries and must report annually to the national and each state legislature on its activities.

- <http://www.elections.org.za/content/>

Inicial Step: Publicar información sobre los procesos electorales

Justificación

Para conseguir que la confianza en el funcionamiento general de las elecciones vaya más allá del nivel más básico, es necesario divulgar el funcionamiento interno del proceso electoral, incluyendo:

- supervisión del proceso electoral por el parlamento;
- actividades de otros organismos gubernamentales con funciones relevantes para el proceso electoral, e interacciones de los mismos
- decisiones sobre tecnologías electorales, y contratos públicos sobre materiales electorales delicados
- acotación de los límites entre circunscripciones electorales (elemento central en el principio de igual peso de los votos);
- inscripción de partidos políticos y candidatos en el registro electoral;
- financiación de campañas y partidos políticos;
- inscripción de los votantes;
- votos, recuento, tabulación de los resultados y proclamación de los mismos;
- legislación, sanciones y remedios

Para mejorar la confianza ciudadana en la credibilidad de las elecciones y la consiguiente acción de gobierno, es fundamental que las organizaciones ciudadanas, los medios y el público general tengan la oportunidad de someter a su escrutinio los datos y la información en manos del gobierno dentro de cada una de estas áreas.

Recomendaciones

1. **Publicar e informar activamente al público sobre la legislación y los procedimientos que gobiernan los procesos electorales**, incluyendo los tiempos de espera de las distintas solicitudes, las peticiones de subsanación, las reclamaciones, las definiciones de los delitos de naturaleza electoral y sus correspondientes sanciones.
2. **Publicar y difundir una guía fácil** sobre los derechos y los procesos electorales en la que se explique cómo pueden acceder los ciudadanos, incluidos los candidatos electorales, a los mecanismos para exigir reparaciones con ocasión de incumplimientos de la legislación electoral, tanto por la vía administrativa como por la judicial; cuáles son los

procedimientos que deben ser seguidos y las formas de reparación contempladas; y cuáles son los procedimientos para solicitar información electoral a los organismos de administración electoral y demás agencias públicas.

3. **Solicitar que los órganos de administración electoral y otras instituciones gubernamentales con responsabilidades importantes en el proceso electoral reciban peticiones de información relacionadas con las elecciones y les den respuesta**, trabajando bajo el supuesto de que la información debe ponerse a disposición del público de forma temprana a menos que existan razones bien fundadas, que pueden estar relacionadas con problemas de personal o de orden y seguridad públicos. Estas razones deberán comunicarse al solicitante de información por escrito, con posibilidad de recurrir la resolución negativa.
4. **Nombrar a un agregado de información**, que tendrá autoridad para garantizar que la información se publica debidamente, y la responsabilidad de divulgar entre la ciudadanía los procedimientos concretos para solicitar información.
5. **Proporcionar formación al personal de los organismos de administración electoral** y demás instituciones gubernamentales con responsabilidades en materia electoral (incluido el rango regional o local) sobre derecho de acceso a la información (DAI) en el terreno electoral y sobre procedimientos para proporcionar esa información en los plazos oportunos.
6. **Establecer clases de datos electorales básicos para someterlos a procedimientos de publicidad activa.**
7. **Solicitar que, a un año de la celebración de elecciones importantes, los organismos de administración electoral publiquen los datos anuales y un informe completo.** Todas las instituciones públicas con funciones importantes en el proceso electoral, y entre ellas la fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, deberán preparar un informe anual público al respecto. El informe completo del organismo de administración electoral deberá tratar todos los elementos del proceso electoral, incluyendo las lecciones aprendidas con vistas al fomento de la transparencia, de la participación y de la rendición de cuentas, y acciones que deban ser tomadas para garantizar la eficacia de la administración y la integridad de las elecciones. Estas recomendaciones deberían presentarse ante el parlamento, habida cuenta de su labor supervisora y de la necesidad de que se considere la puesta en marcha de mejoras en el marco jurídico de las elecciones.

Estándares y directrices

- Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos <http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>
- Comentario general 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas http://www.ccprcentre.org/wp-content/uploads/2012/09/A.66.40_Vol.I_S.pdf

Ejemplos por países

Canada's electoral management body allows citizens to file complaints online

Elections Canada is an independent, non-partisan agency that reports directly to Parliament. It is responsible for conducting election at all levels of government, administer political financing provisions, monitor compliance and enforce electoral legislation. It is also mandated to conduct voter education and information programmes, and provide support to the independent boundaries commissions in charge of adjusting the boundaries of federal electoral districts.

Elections Canada also has an Access to Information and Privacy Directorate within the commission itself, which is responsible for processing information requests in accordance with Canadian freedom of information legislation.

Elections Canada's website www.elections.ca/home.aspx provides information on a broad range of election processes, including about methods for public scrutiny, information about lodging electoral complaints and historic election data, including turnout and results information. Its website also allows citizens to file complaints, presents definitions of electoral crimes and provides information about cases referred for prosecution.

- <http://www.elections.ca/home.aspx>

In the UK, the Electoral Commission produces a report after every election

In the UK, the [Electoral Commission](#) is statutorily required to produce a report after every election, including problems and possible instances of malfeasance, as well as recommendations for improvement. After the 2010 general election it issued a special report on the problems experienced at the polls that year along with data about how many people had problems, what types, and where they occurred.

- <http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-reviews-and-research/report-on-2010-electoral-malpractice-cases-published>

South Africa has an Independent Electoral Commission

South Africa's Independent Electoral Commission, established in 1993, is the permanent body created by the South African Constitution to manage free and fair elections at all levels of government. The Commission is selected through an inclusive process.

It provides a range of election related material on its website including electoral timetables, laws and regulations, and annual reports and strategic documents. It also makes available the results data (in a machine-readable format) for every election since 1994 and allows voters to check their registration and voting location.

Its Municipal Demarcation Board provides information related to drawing electoral boundaries and must report annually to the national and each state legislature on its activities.

- <http://www.elections.org.za/content/>

Intermedio Step: Establecer la convocatoria de procesos de consulta como condición previa para cualquier modificación sustancial en el proceso electoral

Justificación

Incluso cuando la confianza en los procesos electorales está afianzada, es fácil que sus cimientos se tambaleen si los candidatos políticos y el público no conocen directamente cómo se establecieron las reglas electorales, cómo se tomaron las decisiones pertinentes y cómo se pusieron en marcha.

Al tomar decisiones de calado sobre los procedimientos electorales y los contratos relacionados, como, por ejemplo, la implantación de un sistema de voto electrónico o la inscripción electrónica de los votantes (lo que equivale a adoptar el uso generalizado de registros electrónicos y la grabación de datos biométricos, respectivamente), mantener la participación pública es vital no solo para mantener la confianza, sino incluso para reforzar los mismos procesos. La participación pública es más eficaz cuando ocurre en la interacción bien con el poder legislativo y sus responsabilidades en materia de supervisión electoral y definición o redefinición de las políticas en este ámbito, bien con los organismos de administración electoral u otras agencias públicas con atribuciones electorales. Esta participación es importante en todos los rangos de la

administración, incluida la local.

Recomendaciones

1. Disponer que los organismos de administración electoral:
 - **Realicen comunicados oficiales de forma oportuna**, empleando al efecto sitios web u otros medios que lleguen a toda la población, cumpliendo con los plazos oportunos y con los temas del programa. Celebrar juntas oficiales abiertas a la participación del público.
 - **Establezcan comités de coordinación** con los candidatos electorales, que se reúnan con frecuencia para discutir la formulación de políticas bajo la competencia del organismo de administración electoral y otros asuntos electorales. En la medida de lo posible, los comités de coordinación también deberían crearse en el ámbito de la administración regional y local.
 - **Realizar consultas públicas sobre las decisiones políticas**, notificando oportunamente al público y a los candidatos los procesos deliberativos orientados a la modificación del proceso electoral, y en el marco de los cuales se ofrecen importantes oportunidades para realizar preguntas y expresarse sobre los asuntos tratados.
2. **Entre otras medidas para abrir el parlamento, establecer la obligación de celebrar procesos de consulta pública cuando se estén formulando políticas sobre los sistemas y los procesos electorales**, independientemente de si se trata de cuestiones legislativas, presupuestarias o de control, proporcionando importantes oportunidades para realizar preguntas y expresarse sobre los asuntos tratados.
3. **Cuando otras agencias públicas, además del organismo de administración electoral, realicen actividades importantes en materia electoral** (por ejemplo, relacionadas con los datos censales, la demarcación de circunscripciones, el reconocimiento legal de los partidos y su regulación, la validación de las candidaturas, la financiación de los partidos políticos, la regulación de los medios de comunicación en el contexto electoral, la regulación de organizaciones no gubernamentales, inclusive la de aquellas organizaciones que trabajen como observadoras en el proceso electoral o estén involucradas de alguna otra manera en este ámbito, y/o seguridad electoral):
 - **Realizar comunicados oficiales de forma oportuna**, empleando al efecto sitios web u otros medios que lleguen a toda la población, cumpliendo con los plazos oportunos y con los temas del programa.
 - **Realizar consultas públicas sobre las decisiones políticas**, notificando oportunamente al público y a los candidatos los procesos deliberativos orientados a la modificación del proceso electoral, y en el marco de los cuales se ofrecen importantes oportunidades para realizar preguntas y expresarse sobre los asuntos tratados.
 - **Acordar el establecimiento de centros conjuntos de seguridad y otras medidas de consulta**, contando con los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, el organismo de administración electoral y funcionarios de seguridad pública, con el objeto de considerar los factores de riesgo en materia de seguridad electoral y las medidas para garantizar la celebración de elecciones no violentas.

Estándares y directrices

- Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos <http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>
- Herramientas de control parlamentario de la Unión Interparlamentaria <http://www.ipu.org/PDF/publications/oversight08-e.pdf>
- Profundizar en la democracia: una estrategia mundial para mejorar la legitimidad de las elecciones <http://www.global-commission.org/report>
- Red de conocimientos electorales ACE <http://www.aceproject.org>

Ejemplos por países

South Africa's Independent Election Commission maintains Party Liaison Committees at the national, provincial and municipal levels for regular consultation and cooperation on electoral matters. These committees are enshrined in the electoral law (Regulations on Party Liaison Committees, 1998) and members at the various levels can access agendas, meeting minutes and other materials on the Election Commission's website. In addition, with regard to public consultations, article 59 of the South African Constitution states that the National Assembly must facilitate public involvement in the legislative and other processes of the Assembly and its committees.

- <http://www.elections.org.za/content/Elections/Laws-and-Regulations-Electoral-Commission/>

Intermedio Step: Establecer medidas que permitan salvaguardar la imparcialidad administrativa y formar en el acceso a la información sobre las mismas

Justificación

En aquellos sistemas políticos en los que se han puesto cimientos sólidos para una administración imparcial y eficaz de los procesos electorales, extendida incluso al acceso público a la información electoral, es obligado reforzar la confianza en el proceso, persuadiendo al público y a los candidatos electorales de que la imparcialidad administrativa está siendo protegida.

La protección contra los conflictos de intereses, ya tengan naturaleza económica o política, y contra otras formas de corrupción, es un elemento central para mantener la integridad del proceso electoral. La divulgación de la información sobre dicha protección es vital para mantener la confianza pública.

Recomendaciones

1. **Publicar claramente los deberes de los empleados públicos (incluidos los que desarrollen sus funciones en el organismo de administración electoral) para evitar y gestionar conflictos de intereses** (de naturaleza económica, política u otra) que puedan perjudicar la integridad del proceso electoral, comunicarlas a todo el personal y nombrar a un comisario de ética a quien se puedan dirigir preguntas sobre el cumplimiento de dichos deberes.
2. **Promulgar límites claramente definidos, dirigidos al personal del organismo de administración electoral y demás empleados público cuyo trabajo influya sobre los procesos electorales, acerca de la aceptación de obsequios** (incluyendo ayudas para viajes) de proveedores, empresas (nacionales e internacionales) y políticos, y definir sanciones duras para quien incumpla las restricciones.
3. **Establecer la divulgación obligatoria del patrimonio personal de los miembros del organismo de administración electoral y del personal administrativo más importante de dicho organismo.**
4. **Promulgar medidas de protección en contra del despido u otras formas de represalia contra las personas que cursen reclamaciones** o comuniquen al público, haciendo acto de buena fe, información relacionada con actos ilícitos o negligentes perpetrados por empleados públicos y potencialmente perjudiciales para la correcta celebración de las elecciones.
5. **Establecer programas formativos para empleados** de todos los rangos del organismo de administración electoral y demás instituciones con responsabilidades electorales (incluidos fiscales y agentes y fuerzas del orden), cuyo contenido trate el marco jurídico, los deberes en materia de derecho a la información, el acceso a los mecanismos

judiciales, procedimientos de reclamación y remedios, conflicto de intereses, limitación de los obsequios, declaraciones patrimoniales, así como otras medidas de rendición de cuentas que permitan reforzar la integridad de los procesos electorales.

Estándares y directrices

- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
- Borrador de resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre protección de denunciantes http://fairwhistleblower.ca/files/fair/docs/ti/Council_of_Europe_Draft_WB_Resolution.pdf
- Código de conducta profesional y ético para la administración de elecciones http://www.idea.int/publications/conduct_admin/
- Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf
- La Convención Interamericana contra la corrupción <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html>
- Managing Conflict of Interests: Marcos, herramientas e instrumentos para evitar, detectar y gestionar el conflicto de intereses <http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/40838870.pdf>

Ejemplos por países

Conflict of interest rules protect the independence of South Africa's Electoral Commission

According to the South African Electoral Act from 1998, election observers must disclose to the Independent Electoral Commission any relationship that could lead to conflict of interest regarding the performance of their duties as observers. The law also states that these observers are not to accept any gifts or favour from a political party, organisation or person involved in the election process, and not participate in any function or activity that could lead to a perception of sympathy for a particular candidate or political party.

- <http://www.eisa.org.za/WEP/soulaws7.htm>

The Philippines Commission on Elections maintains rules on conflict of interest

The Philippines Commission on Elections (COMELEC) maintains explicit requirements against conflicts of interest, acceptance of gifts from suppliers, disclosure and related matters affecting the impartiality of its officials. Resolution No. 9307 'Code of conduct governing procurement activities of the Commission on Elections' includes provisions against conflict of interest, and Resolution No. 7789 provide a detailed 'Code of conduct and ethical standards for COMELEC officers and employees'.

- <http://www.comelec.gov.ph/>

Intermedio Step: Establecer normas abiertas para procesos de contratación

pública relacionados con procesos electorales

Justificación

La confianza pública en las elecciones y el gobierno elegido se basa en el supuesto de que los procesos electorales no se ven afectados por ninguna forma de corrupción, y en la confianza de que los materiales electorales, como las papeletas, las urnas y las tecnologías electrónicas empleadas para compilar los registros de votantes, votar, tabular los votos y transmitir los resultados. Si los procesos de contratación pública se vieran salpicados por la corrupción, la ciudadanía tendría razones de peso para dudar de que los resultados de las elecciones puedan considerarse legítimos. Además, con el empleo creciente de tecnologías electrónicas en las elecciones, para que la ciudadanía comprenda que éstas representan con exactitud la voluntad general, se vuelve fundamental que la contratación, el diseño, la prueba, la certificación, la producción, el mantenimiento y la aplicación de las mismas siga formas transparentes.

Recomendaciones

Exigir que los organismos de administración electoral:

1. **Anuncien con antelación y alcance suficiente su intención de celebrar contratos públicos de naturaleza electoral**, contemplando un plazo mínimo a partir de una cuantía establecida, y con carácter obligatorio en todo lo relacionado con la inscripción en el registro electoral, la emisión de votos, la tabulación de resultados y la transmisión de los mismos, así como otros requerimientos técnicos relacionados.
2. **Publicar una descripción clara del procedimiento de decisión de los contratos públicos.**
3. **Publicar la documentación del contratista en contratos relacionados con las elecciones**, por lo menos en contratos a partir de una cantidad determinada, y con carácter obligatorio en todo lo relacionado con la inscripción en el registro electoral, la emisión de votos, la tabulación de resultados y la transmisión de los mismos.
4. **Exigir la publicación de los nombres de todos los proveedores, y de quienes se hayan presentado a concursos públicos, indicando las cuantías presupuestadas** junto al nombre de la empresa adjudicataria y la cuantía final del contrato.
5. **Poner las medidas necesarias (como seguimiento por parte de representantes de partidos políticos y observadores imparciales) para asegurar la transparencia de todos los aspectos** relacionados con el diseño, la prueba, la certificación, la operación y la auditoría de tecnologías electrónicas electorales relacionadas con la inscripción en el registro electoral, la emisión de votos, la tabulación de resultados y la transmisión de los mismos.

Estándares y directrices

- Contratación abierta: Una nueva frontera para la transparencia y la rendición de cuentas <http://pro-act.org/profiles/blogs/research-highlights-open-contracting-practices-from-around-the-world>
- Recomendación del Consejo de Europa sobre estándares jurídicos, operativos y técnicos para el voto electrónico (2004) <http://https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=778189>

Ejemplos por países

 The Australian Election Commission tenders all contracts over \$10,000 through an open online system

The Australian Election Commission places all open tender opportunities of \$10,000 or more on the Australian government's electronic tender system (AusTender). AusTender provides centralised publication of Australian Government business opportunities, annual procurement plans, multi-use lists and contracts awarded. On July 1 of every year, the Election Commission publishes an annual procurement plan with information on proposed procurement activities for the year ahead.

- <https://www.tenders.gov.au/>

The Philippines Commission on Elections publishes invitations to bid on procurement projects

The Philippines Commission on Elections (COMELEC) provides invitations to bid on procurement projects on its website www.comelec.gov.ph. It also provides periodic bulletins and resolutions of its Bids and Awards Committee concerning suppliers deemed eligible to bid on the project, their bid amounts and the status of the matter. COMELEC's code of conduct governing procurement activities is stated in [Resolution No. 9307](#) from 2011, which provides detailed guidance, including grievance procedures and penalties.

- <http://www.comelec.gov.ph/>

Intermedio Step: Publicar activamente los datos electorales

Justificación

La publicidad activa de datos relacionados con la celebración de elecciones puede ser un paso clave para mejorar la confianza de la ciudadanía en el proceso, de manera que los candidatos, las organizaciones ciudadanas, los medios y el público general comprendan y puedan verificar la integridad del proceso. Los ciudadanos, las organizaciones ciudadanas y las candidaturas deben tener la oportunidad de controlar la precisión de los procesos críticos, detectar omisiones y pedir que se realicen las correcciones necesarias (por ejemplo, en la inscripción de votantes). La rápida divulgación de los datos de los recuentos, si están acompañados de información adecuada sobre la probabilidad de que se verifiquen distribuciones desiguales en la información de distintas zonas geográficas y sobre las diferencias entre los resultados preliminares y los resultados finales, después de los controles y la tramitación de los recursos presentados, ayuda a reducir las tensiones políticas y a mejorar la confianza del público, ya que es más fácil que acepten los resultados los candidatos cuyas expectativas se han visto frustradas.

El compromiso institucional con la lucha contra el fraude electoral y la rendición de cuentas en los procesos electorales se puede demostrar con la divulgación, por una parte, de todas las reclamaciones, infracciones y actividades ilícitas, y por la otra, de todas las medidas acometidas para resolverlas.

Candidatos electorales, observadores ciudadanos, periodistas de datos y académicos podrán contribuir a la integridad electoral mediante análisis y la publicación de hallazgos basados en hechos reales, especialmente si la información se pone a su disposición en formatos de acceso fácil y legibles a máquina, como hojas de cálculo, bases de datos descargables, interfaces de programación de aplicaciones (API), formatos de consulta online y otros métodos semejantes. En muchos países, la divulgación online es la forma más barata y eficiente de llegar a muchos públicos distintos, reduciendo la carga de trabajo de los organismos de administración electoral y otras agencias públicas con responsabilidades electorales. Sin embargo, en los lugares donde el acceso a internet no esté muy extendido o no resulte una solución muy práctica, los datos electorales pueden difundirse en CD-ROM u otros medios baratos y rápidos.

Recomendaciones

Entre los tipos de datos que deberían ser objeto de publicidad activa se encuentran los siguientes:

1. **Datos relacionados con el derecho al voto y la demarcación de las circunscripciones**, incluyendo la descripción de

las circunscripciones (a ser posible en un formato electrónico, como GeoJSON, KML u otro formato relevante), los datos empleados para fijar la demarcación, como el número de ciudadanos con derecho a voto, el número de habitantes pertenecientes a minorías, y el número real de votantes registrados para cada rango electoral.

2. **Una versión consultable del registro de votantes** con un formato preparado para realizar análisis automáticos, tanto en su forma preliminar como definitiva.
3. **Datos sobre el número de objeciones y peticiones de rectificación** al registro de votantes, así como las circunscripciones a las que se refieren y el estado de cosas.
4. **Datos poblacionales** (incluidos los datos sobre edad, género, grupos étnicos y minorías), información geográfica y administrativa de los distritos que se deba tener en cuenta a la hora de verificar la exactitud de los registros de votantes y para demarcar los límites de las circunscripciones.
5. **Información detallada sobre dónde se emiten los votos**, incluida la dirección y los datos de contacto de cada colegio electoral durante el día de las elecciones y, en la medida de lo posible, cuándo y dónde tendrá lugar la emisión de votos anticipados o de votaciones a distancia.
6. **Información sobre la participación (inclusive edad, género, grupos étnicos y minorías)**, incluido el número de votantes registrados y el número de votantes que emiten su voto en el colegio electoral, así como números agregados, por circunscripción y calculados sobre el conjunto del país, además de los resultados electorales, tanto a pie de urna como agregados.
7. **Información detallada sobre el recuento de votos**, incluyendo votos en blanco y votos nulos, el número de votos emitidos por cada candidato, el lugar de emisión del voto, los centros de tabulación intermedia y el centro nacional de consolidación de los resultados, agregado y desagregado por colegios electorales.
8. **Información de elecciones anteriores** (junto a la población relevante y otros datos), incluido el número de votantes registrados y el número de votantes por edad, género, grupos étnicos y minorías, tanto en los centros de votación como por agregado de circunscripción y nacional.
9. **Datos sobre financiación de las campañas**, identificando con claridad todas las contribuciones de donantes y de partidos e indicando el nombre de los contribuyentes.
10. **Datos sobre el número de reclamaciones por infracciones electorales, medidas correctivas y resultados de dichos casos**, indicando el número de investigaciones administrativas, las medidas correctivas y la situación resultante de los casos relacionados con mala administración y actividades ilícitas.
11. **Datos sobre el número de reclamaciones y recursos contra los resultados electorales**, los partidos que la presentan, los remedios empleados, en su caso, y el resultado final.
12. **Datos sobre los incidentes relacionados con casos de violencia electoral**, los tipos y la dimensión de los incidentes y qué cuerpos o fuerzas de seguridad del estado respondieron.
13. **Datos sobre las investigaciones judiciales** en marcha en el ámbito de los abusos electorales, el número de acciones del ministerio fiscal en este ámbito y la sustancia de las acusaciones, los partidos involucrados, los resultados de los casos, el número y la naturaleza de las sanciones, multas y penas de prisión impuestas.
14. **El número de procedimientos contencioso-administrativos y civiles relacionados con proveedores y otros contratistas** en relación con contratos relacionados con las elecciones, el nombre de las partes involucradas, la naturaleza de la demanda y los resultados de los casos (incluidas sanciones, en su caso).

Estándares y directrices

- Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos <http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>
- Comentario general 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas http://www.ccprcentre.org/wp-content/uploads/2012/09/A.66.40_Vol.I_S.pdf
- Open Data Index <http://https://index.okfn.org/>

Ejemplos por países

Croatia publishes elections campaign finances online

In 2011, Croatia enacted the [Political Activity and Election Campaign Finances Act](#). This law requires political parties to disclose detailed financial reports on political campaigns during the campaign period. It also requires parties to open a separate bank account for all financial transactions related to election campaigns to facilitate monitoring.

Croatia has recently taken additional steps to ensure that this law provides for maximum transparency by making all the collected campaign finance data available to the public through a searchable database. Every candidate is now required to fill out a form with certain details and submit it to the national or local Electoral Commission. Each donation and expenditure is identified and itemised, including the name and official registration number of each donor, discounts from the media, the amount of each donation and expenditures, and a general financial report. The Electoral Commission then forwards this to the Digital Information Documentation Office which in turn standardises the data for the database.

- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Croatia.pdf>

In Costa Rica, the Supreme Electoral Tribunal publishes statistics on voter registration

The Costa Rican Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones) regularly publishes on its website www.tse.go.cr statistics on the composition of the voter registry. These statistics encompass provincial, county and constituency levels and include, for example, number of women registered and the change in the total number of registered voters from previous months.

- <http://www.tse.go.cr/>

New Zealand allows voters to register online and provides election results online

The Electoral Commission in New Zealand offers a range of voter services and election related information on its website www.elections.org.nz. For example, it offers voters to register online and check the accuracy of their registration. The website also contains election results by polling station and various enrolment statistics.

- <http://www.elections.org.nz/>

South Africa has an Independent Electoral Commission

South Africa's Independent Electoral Commission, established in 1993, is the permanent body created by the South African Constitution to manage free and fair elections at all levels of government. The Commission is selected through an inclusive process.

It provides a range of election related material on its website including electoral timetables, laws and regulations, and annual reports and strategic documents. It also makes available the results data (in a machine-readable format) for every election since 1994 and allows voters to check their registration and voting location.

Its Municipal Demarcation Board provides information related to drawing electoral boundaries and must report annually to the national and each state legislature on its activities.

- <http://www.elections.org.za/content/>

 The U.S. Federal Election Commission allows users of its website to view candidate finances

The U.S. Federal Election Commission's website www.fec.gov contains a Campaign Finance Disclosure Portal which provides information on campaign finance for individual political candidates searchable by donor name, business name, locality of origin etc.

- <http://www.fec.gov/finance/disclosure/norindsea.shtml>

Avanzado Step: Ampliar y profundizar las oportunidades de participar en la decisión de políticas públicas relacionadas con la administración de elecciones

Justificación

El mayor grado de confianza en los procesos electorales se alcanza cuando los candidatos y las organizaciones de la sociedad civil (a menudo, a través de expertos) pueden añadir su voz en la formulación de políticas y la toma de decisiones sobre los procesos electorales. Explicar activamente cómo se justifican las decisiones tomadas y responder a las dudas acerca de los procedimientos y fundamentos son momentos esenciales para generar y desarrollar la confianza de un público informado.

Recomendaciones

Exigir a los organismos de administración electoral, en todos los rangos de la administración:

1. **La celebración periódica (al menos dos veces al año) de procesos de consulta pública en los que los ciudadanos puedan comentar y hacer sugerencias a asuntos que ellos mismos elijan**, como las maneras de divulgar la información, con respuesta por escrito (también con medios electrónicos) de los organismos de administración electoral, y un informe periódico (por lo menos, una vez al año) en el que se analicen esos comentarios.
2. **Invitar a expertos seleccionados por los partidos políticos y las organizaciones civiles para participar en el proceso de elaboración de los presupuestos y en los procedimientos de contratación pública**, al menos para los contratos que superen una cuantía mínima; crear una web que muestre todos los concursos públicos en marcha, con las correspondientes cuantías y la descripción de los procedimientos de toma de decisiones, y publicar todos los contratos concedidos que superen una cuantía determinada.
3. **Proporcionar al público un calendario en un formato de fácil difusión (por ejemplo, una web) con todas las reuniones programadas y celebradas con proveedores, agentes y políticos.**
4. **Establecer una fórmula para que los candidatos políticos y el público puedan remitir propuestas de demarcación de las circunscripciones** que maximicen la no discriminación y el carácter igualitario del sufragio; exigir que el organismo público al que se haya encomendado la demarcación reciba las propuestas y las tenga en la debida cuenta, organice procesos de consulta pública y publique un informe al respecto, en el que se indique la metodología seguida y la justificación de la demarcación resultante.

5. **Establecer el carácter obligatorio de sesiones parlamentarias abiertas al público que cuenten con testimonios del público, lo que permite revisar el funcionamiento de los procesos electorales**, el rendimiento de los organismos de administración electoral y de demás agencias públicas con responsabilidades electorales. Celebrar sesiones sobre la ejecución financiera de los organismos de administración electoral. El informe del organismo de administración electoral debería ser presentado al parlamento durante el desarrollo de dichas sesiones. Un informe completo con conclusiones y recomendaciones debería ser emitido al final de las sesiones.

Estándares y directrices

- Código de buenas prácticas en el ámbito electoral del Consejo de Europa
<http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9544&Language=en>
- Comentario general 25 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
<http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iue72QY8oFMq1RR28eUM15DmoG%2BUkA42vZzn8xBgKE72kZ%2B%2FG27cNpuBZ8Wlla%2BJ4SJOBYskMpcZa%2BR0%2BP3tAWg%3D%3D>
- Compromisos con las elecciones democráticas adquiridos por los países integrantes de la OSCE
<http://www.osce.org/odihr/elections/13957>

Ejemplos por países

 South Africa's electoral commission publishes a report each year and after major elections

South Africa's Independent Electoral Commission is required to provide an annual report to the National Assembly, including description of its activities and audited financial statements, and a report following major elections. It is also required to issue publicly reports on its readiness before elections.

- <http://www.elections.org.za/content/About-Us/IEC-Annual-Reports/>

Avanzado Step: Autorizar al Defensor del Pueblo para que pueda recibir, investigar y resolver reclamaciones ciudadanas en materia electoral

Justificación

Los procesos administrativos previstos para tramitar las reclamaciones de los ciudadanos en materia electoral pueden ofrecer garantías insuficientes, mientras que, a menudo, recurrir a los tribunales no es asequible ni oportuno para conseguir reparar el agravio detectado. Muchos países cuentan con una institución como el Defensor del Pueblo, que puede encargarse de admitir dichas reclamaciones. Si estos órganos cuentan con atribuciones en materia electoral, o si se les dota de dichas atribuciones en el caso de que no las tengan, pueden resolver con eficacia determinados problemas en el ámbito electoral, mejorando al mismo tiempo la confianza del público en el gobierno.

En ocasiones, el Defensor del Pueblo también puede tomar la iniciativa, supervisando los procesos electorales, buscando mejoras, y ayudando, en definitiva, mediante una interacción constructiva e independiente entre los parlamentos, a los que a menudo deben rendir cuentas, los organismos de administración electoral, el resto de agencias públicas con atribuciones electorales y el público. Como entidad independiente, ya sea amparada bajo el poder legislativo o el ejecutivo, el Defensor del Pueblo y otras entidades similares deberían carecer de conflictos de intereses y estar legitimadas para

actuar en el ámbito electoral.

Recomendaciones

1. **Autorizar al Defensor del Pueblo para que pueda recibir reclamaciones ciudadanas en materia electoral** y tenga la capacidad, tanto de interactuar con el organismo de administración electoral y resto de agencias públicas con atribuciones en materia electoral, como de proponer soluciones para las reclamaciones presentadas y de publicar informes públicos.
2. **Autorizar la supervisión electoral del Defensor del Pueblo** en cuestiones relacionadas con las agencias y los cargos públicos, por ejemplo, ante casos de incumplimiento de los derechos fundamentales de votantes y candidatos en los procesos electorales, el uso de los recursos estatales en beneficio propio, y la incapacidad de las fuerzas de seguridad, la fiscalía y los tribunales para tratar con igualdad a todos los ciudadanos y protegerlos adecuadamente en el contexto electoral.
3. **Exigir al Defensor del Pueblo que se especialice en el campo de los procesos electorales** a lo largo de todo el ciclo electoral, de manera que comprenda y pueda resolver debidamente las cuestiones que dirija la ciudadanía en este campo, como el derecho del gobierno a no divulgar información y datos electorales.
4. **Exigir al Defensor del Pueblo que informe al público** y al poder legislativo, con carácter anual, acerca de sus actividades en el campo electoral, con la obligación de responder de manera oportuna las peticiones ciudadanas de información al respecto.

Ejemplos por países

Kenya's Ombudsman monitored misuse of public resources in the 2013 elections

For the Kenyan elections in 2013, which were the first general elections under Kenya's new constitution, Kenya's Commission on Administrative Justice (the office of the Ombudsman) undertook election monitoring, checked against abuse of power, improper conduct and misbehaviour in public office, observed the election and conducted post election monitoring. The office of the ombudsman then issued a report on its actions, including recommendations: [Championing Values in Hard Times: Election Monitoring and Observation Report No. 4/2013](#)

- <http://www.ombudsman.go.ke/>

The UK Electoral Commission and Parliamentary Ombudsman provide complaints mechanisms

In the United Kingdom, citizens can file complaints either by mail or email with the Secretary to the Commission Board of the Electoral Commission. If the person is not satisfied with the outcome of the complaints process, she or he may appeal to the Parliamentary Ombudsman through the office of his or her Member of Parliament (or the Scottish Public Services Ombudsman for complaints relating to Scottish local government elections).

- <http://www.electoralcommission.org.uk/complaints>

Innovador Step: Establecer un grupo de expertos independientes para que supervise el proceso de contratación y puesta en marcha de innovaciones

tecnológicas en el ámbito electoral.

Justificación

La formulación abierta de políticas públicas y otras medidas orientadas al fomento de la transparencia mediante el desarrollo y la implementación de tecnologías electrónicas electorales son elementos cruciales para construir y mantener la confianza ciudadana. Es necesario contar con especialización técnica avanzada para analizar la eficacia de esas tecnologías.

Con el empleo de tecnologías electrónicas para la inscripción de votantes, la emisión del voto, la tabulación de los votos y la transmisión de los resultados electorales oficiales, tanto partidos políticos como candidatos, observadores ciudadanos imparciales y periodistas que se propongan comprobar la legitimidad del proceso electoral se enfrentan a desafíos muy particulares. A la hora de sopesar la adopción de medidas innovadoras, es importante, por lo tanto, garantizar a público y a los partidos que las tecnologías se están empleando debidamente y que los resultados que registran son exactos.

Una de las innovaciones que puede contribuir de forma significativa a garantizar la legitimidad de las innovaciones tecnológicas son los grupos de expertos independientes, imparciales y fiables, que a su vez deben ser creados mediante procesos transparentes e inclusivos.

Recomendaciones

1. **Crear un grupo de expertos independientes** que revisen las características del desarrollo, certificación, calidad, producción, entrega, mantenimiento y auditoría de tecnologías electrónicas aplicadas al campo electoral, especialmente en lo que respecta al voto electoral, la tabulación de los votos, la inscripción en el registro de votantes, entre otros aspectos.
 - **Incluir la condición de que los expertos del grupo sean seleccionados o aprobados por los rivales políticos y las organizaciones de la sociedad civil.**
 - **Proporcionar financiación suficiente al grupo.**
 - **Garantizar el acceso del grupo a reuniones** en las que se delibere la formulación de las políticas y/o se tomen decisiones acerca de la aplicación de dichas tecnologías electrónicas.
 - **Dar acceso a los informes del organismo de administración electoral, de los proveedores y de cualesquiera otras fuentes relevantes** sobre dichas tecnologías.
 - **Dar al grupo la capacidad de comprobar en tiempo real** las tecnologías durante las elecciones.
 - **Establecer el carácter obligatorio de la publicación de informes con los resultados del grupo de expertos** (con el debido respeto de los intereses y derechos propietarios de proveedores y contratistas), tanto antes de las elecciones como inmediatamente después de su celebración, transcurridos seis meses, y anualmente en períodos no electorales.

Estándares y directrices

- Proyecto de voto electrónico del Consejo de Europa <http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/E-voting/>

Ejemplos por países


 In Belgium, an impartial College of Experts evaluates electronic voting technologies

In Belgium, the College of Experts is appointed by the Chambers of Parliament and is empowered to evaluate the country's electronic voting technologies. The College begins reviewing the automated voting systems 40 days before elections. Members are entitled to request any information from technology vendors, including source codes and

copies of software. They also may visit polling stations, copy software in use on election day and conduct other activities. The College must report its findings to Parliament and the Ministry of Interior within 15 days following elections, and reports are generally published thereafter.

In addition, each political party that has at least two Members of Parliament may designate an IT expert to receive the source codes of the e-voting systems and examine them, while they must keep the source codes confidential.

- http://www.e-voting.cc/wp-content/uploads/downloads/2012/07/199-211_Vegas_Belgian-E-voting.pdf

 The Philippines used an Advisory Council to enable a electronic vote counting to be introduced with confidence


Prior to the Philippines' nationwide transition to electronic counting for the 2010 elections, the national legislature mandated the created of the Commission on Elections Advisory Council, which consisted of nine members from government, academia, the IT community, and civil society.

The Advisor Council participated during all stages of the transition to the new technologies and provided oversight and recommendations to the Philippine's Commission on Elections (COMELEC). In particular, the Council recommended the most appropriate, secure and cost-effective technology; observed and participated as non-voting members of the Special Bids and Awards Committee; participated as non-voting members of the steering committee that implemented the new system; planned and tested the technology; and conducted an evaluation of the new system after the election.

The Advisory Council has been cited as an important factor in building public trust and confidence during the transition.

- http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/philippines-may%202010-elections-finalrpt.pdf

Fuerzas policiales y seguridad ciudadana

 **Autor principal:** [Open Society Foundation](#)

Introducción

Para muchos ciudadanos de todo el mundo, los agentes de seguridad del estado son el contacto más primario con sus gobiernos. Por ese motivo, unas fuerzas de seguridad competentes, honestas y eficaces son uno de los pilares sobre los que se levanta el imperio de la ley. Si las inversiones en el sector de la seguridad ciudadana son insuficientes o ineficaces, las instituciones de seguridad pueden debilitarse, o ser disfuncionales e incapaces de responder y prevenir adecuadamente la delincuencia y la violencia. Dados los extraordinarios poderes y la gran autoridad conferidos a la policía, la rendición de cuentas es especialmente importante a la hora de enfrentarse a problemas tales como la corrupción, la discriminación, el abuso del poder y un empleo anti-democrático de la policía. Para que estos asuntos salgan a relucir y sean objeto de la atención de la ciudadanía, será fundamental que la policía se rija por un sistema de gobernanza sensato y que existan procesos transparentes para la rendición de cuentas.

Distintos países tienen distintos sistemas policiales. La mayor parte tiene varios cuerpos de seguridad, como la policía nacional, estatal o regional, la policía local o municipal, la gendarmería y la policía judicial. Algunas asumen responsabilidades militares y en algunos casos y supuestos, como en emergencias nacionales, las fuerzas militares pueden complementar a la policía, además de poder desempeñar funciones policiales básicas en circunstancias específicas claramente definidas y delimitadas por la legislación. También pueden existir fuerzas o unidades policiales especiales, como la policía fiscal, la militar (o paramilitar) o las unidades antidroga. En cualquiera de sus formas, es importante que la información sobre las leyes y sobre cómo se persiguen las infracciones esté abierta al público y que exista rendición de cuentas de las acciones policiales. Como cualquier otro servicio público, las fuerzas policiales son pagadas por el erario público, motivo por el cual deben, en última instancia, rendir cuentas ante la ciudadanía. Los problemas de seguridad son una preocupación profunda para toda la ciudadanía, pero a menudo son "acaparados" por la policía y las autoridades políticas.

Los principios clave para una policía democrática son los siguientes:

- La policía sirve de forma prioritaria a las necesidades de ciudadanos y grupos de ciudadanos
- La policía debe cumplir la ley
- La policía respeta y protege los derechos humanos, en particular aquellos que sean más importantes para una democracia sin coartadas.
- Los agentes policiales son profesionales y transparentes en sus actividades (Bruce y Nelid, 2005)

La implantación y consolidación de una actividad policial democrática presuponen que los gobiernos vean a la policía como un instrumento para proteger la seguridad y los derechos democráticos de la gente, estableciendo mecanismos e instituciones que garanticen que la policía responde de sus actos y actúa con integridad. Más allá de este punto, también debe subrayarse la importancia de que los propios agentes sean tratados adecuadamente por sus instituciones (la corrupción policial a menudo encuentra su excusa en las condiciones de trabajo de los trabajadores), lo que repercute a su vez directamente sobre la calidad del servicio y sobre la eficiencia policial.

Más allá de ese punto, cada vez cobra un mayor reconocimiento la importancia de la participación ciudadana y vecinal para mejorar la seguridad y el orden públicos, resolver e incluso prevenir la delincuencia. Los departamentos de policía, además, obtienen mayor apoyo cuando el público comprende los procedimientos policiales, cree que son justos y considera que los agentes de policía realmente rinden cuenta de sus actuaciones. Sin embargo, la participación activa de la ciudadanía a escala local necesita de una nueva manera de entender la acción policial (a menudo denominada "community policing"), en

la que la policía está más integrada con los residentes y vecinos, está predispuesta a escuchar, a responder a las distintas preocupaciones y a involucrarse activamente en la vida de la gente. Esto comporta un cambio en los valores de la organización, en el estilo de gestión, formación y evaluación de los oficiales de policía. Los beneficios de este nuevo enfoque son mejores relaciones de vecindad, más legitimidad policial, mayor apoyo ciudadano, una resolución más eficiente de los problemas y más información a disposición de la policía (OSCE, 2008).

Las nuevas tecnologías inauguran oportunidades desconocidas para la obtención de pruebas, asignar recursos policiales mejorando la eficiencia, llevar a cabo un seguimientos del rendimiento policial y de la conducta de los agentes. Sin embargo, también despiertan importantes dudas y preocupaciones en lo que respecta a la privacidad, que deberán ser salvaguardada de manera sólida.

References

Bruce, D and Neild, R, 2005, *The Police we Want: A handbook for oversight of police in South Africa*, Centre for the Study of Violence and Reconciliation

OSCE, 2008, *Good Practice in Building Police-Public Partnerships*, OSCE. <http://www.osce.org/spmu/32547>

Organizaciones especializadas

Open Society Foundation <http://www.opensocietyfoundations.org>

United Nations Office on Drugs and Crim <http://www.unodc.org>

OSCE Polis <http://polis.osce.org>

Transparency International <http://www.ti-defence.org/publications/1431-arresting-corruption-in-the-police>

Altus <http://www.altus.org>

International Network to Promote the Rule of Law <http://www.inprol.org>

DCAF <http://www.Dcaf.ch>

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Publicar información básica sobre los presupuestos policiales, el personal de la policía y el crimen
- Publicar toda la legislación sobre las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como los mecanismos de denuncia y de protección a informantes en el ámbito de los cuerpos policiales

Intermedio

- Desarrollar un sistema de encuestas públicas periódicas sobre delincuencia y labor policial
- Establecer disposiciones relativas a la integridad de los agentes de policía, en conformidad con las buenas prácticas internacionales
- Exigir a la policía medidas más amplias de publicidad activa

Avanzado

- Publicar la totalidad de las estadísticas nacionales sobre delincuencia siguiendo estándares internacionales

Innovador

- Crear mapas on line de criminalidad y actividad policial
- Establecer garantías para que las nuevas tecnologías de vigilancia policial respeten el derecho a la privacidad

Detailed Recommendations

Inicial Step: Publicar información básica sobre los presupuestos policiales, el personal de la policía y el crimen

Justificación

Para poder evaluar el coste de las actividades policiales y la distribución de los recursos de seguridad del estado, de manera que se satisfagan las exigencias de seguridad pública manteniendo el debido gasto en otras áreas prioritarias, es imprescindible contar con información básica sobre presupuestos, partidas contables y tasas de delincuencia. Asimismo, y para que las responsabilidades sean claras, deberán publicarse las jerarquías y el escalafón. Estos datos deberán ser accesibles y publicarse de forma oportuna.

Los datos básicos ofrecen al público una manera de juzgar el rendimiento y la efectividad de las fuerzas de policía. Los datos públicos sobre el rendimiento de los cuerpos policiales también significan que la policía puede obtener el reconocimiento del público cuando tienen éxito. Sin embargo, hay que tener cuidado para evitar incentivos perversos, un riesgo especialmente presente cuando las medidas de actividad se toman como indicadores clave para evaluar el rendimiento (por ejemplo, el porcentaje de delitos resueltos, o el uso de los números totales de identificaciones que se llevan a cabo, sin tener en cuenta los resultados, son usos habituales de medidas de productividad que alimentan prácticas discriminatorias y abusivas sin dar apenas información sobre los resultados reales sobre la seguridad.)

Recomendaciones


1. **Publicar los presupuestos básicos, la estructura jerárquica y la cadena de mando** de las fuerzas policiales nacionales. La información sobre el comisario responsable de la comisaría y los distintos equipos también puede publicarse con carácter local.
2. **Publicar datos básicos sobre la cantidad de personal** (distinguiendo entre oficiales juramentados, personal administrativo, funcionarios de agencias de inteligencia y otras unidades de seguridad); número de oficiales de policía per capita y por región; nombres de las unidades especiales, conjuntamente con sus funciones; número de oficiales asignados a cada una; armamento y equipamiento no letal que se entrega a los oficiales.
3. **Publicar el número de delitos registrados**, distinguiendo entre delitos violentos y delitos contra la propiedad, e indicando, dentro de los delitos violentos, la tasa de homicidios, violaciones, y otros crímenes de violencia de género y de delitos motivados por prejuicios. Se deberían establecer y divulgar definiciones que permitan registrar de manera consistente los tipos de delitos, además de incluir controles de auditoría que supervisen la corrección del número de registros efectuados.
4. **Publicar la tasa de detenciones y de resolución** (tasa de casos procesados en comparación con los resultados de las detenciones, así como remisión a los juzgados en comparación con el número de casos sobreesueltos) de manera continua, oportuna y accesible. También deberían publicarse medallas y promociones extraordinarias.

Todos los datos se deberían publicar de manera oportuna y accesible, teniendo en cuenta los idiomas locales y el acceso a Internet. Los carteles, paneles de anuncios y otros medios deberían usarse para obtener información clave, además de las propias páginas web.

Estándares y directrices

- ONUDD: Conjunto de instrumentos de evaluación de la justicia penal <http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

Ejemplos por países



The National Crime Records Bureau in India publishes annual reports on crime, deaths and imprisonment

The National Crime Records Bureau (NCRB) in the Ministry of Home Affairs is responsible for collecting, maintaining and disseminating crime data. The NRCB has installed a 762 server – based computer systems at District Crime Records Bureau and State Crime Records Bureau across the country. Every year, the NCRB brings out three important publications- (i) Crime in India (ii) Accidental Deaths and Suicides in India and (iii) Prison Statistics in India.

The Bureau of Police Research and Development of the Ministry of Home Affairs puts out an annual publication titled “Data on Police Organisations in India.” The report provides some basic and vital statistics about police in different states/UTs in the country, like sanctioned and actual rank wise strength of police forces, including the women police; police population and area ratio; number of police districts, rural and urban police stations; police budget, including expenditure incurred on police training; extent of transport, communication and computer facilities available to the police; number of police training institutions; number of departmental proceedings initiated against police personnel, etc.

- <http://ncrb.gov.in/>

Inicial Step: Publicar toda la legislación sobre las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como los mecanismos de denuncia y de protección a informantes en el ámbito de los cuerpos policiales

Justificación

En democracia, el trato policial a la ciudadanía debe estar gobernado por procedimientos establecidos, independientemente de quién sea el agente y quién el ciudadano. La dignidad y el respeto en el trato a los ciudadanos, con la debida consideración por la integridad física y la salvaguardia de los derechos personales en los encuentros con la policía, deberían quedar garantizadas por una combinación de dichos procedimientos con formación específica.

Para que la ciudadanía, al relacionarse con los cuerpos policiales, confíe en sus derechos, resulta de vital importancia que la legislación y los reglamentos sean sólidos y se conozcan de forma generalizada.

La amplia mayoría de las personas que se dedican a tareas relacionadas con la actividad policial sienten un compromiso serio con un servicio público honorable y competente, y demuestran un alto grado de integridad, tanto personal como procedimental. Aunque esta afección aumentaría aún más con un apoyo institucional adecuado suplementado por las necesarias acciones formativas, cualquier cuerpo policial necesita contar con mecanismos que sirvan como salvaguardia de la profesionalidad y la honestidad de los agentes. Por ese motivo, es de vital importancia contar con mecanismos de reclamación potentes y con formas de identificar a los agentes de policía concretos, de manera que las personas particulares que sufran situaciones de abusos de poder cuenten con las herramientas suficientes para cursar denuncias.

Recomendaciones

1. **Publicar todas las leyes y reglamentos que establezcan los poderes de los cuerpos policiales, y adoptar dichas leyes allí donde no existan.** Las legislación debería cubrir los reglamentos y procedimientos internos (políticas y estándares sobre las competencias policiales más importantes, como las identificaciones, controles, arrestos, detenciones, o la reglamentación de manifestaciones, entre otros aspectos, además de reglamentos que afecten a la seguridad


privada).

2. **Informar a la ciudadanía sobre los mecanismos oficiales de denuncia** (incluyendo información sobre dónde y cómo se cursa la denuncia, qué tipo de protección se brinda a los informantes, cómo es el proceso de rescisión de denuncias, y cuáles son los plazos de resolución). Publicar información sobre la conducta policial y el derecho a denunciar tanto en lugares relevantes de comisarías (inclusive en celdas y calabozos) como online. Dicha información también deberá estar disponible en ambientes no policiales, y no solo de forma online, con especial presencia en entornos donde la penetración de Internet y la alfabetización sean más limitadas. La información deberá presentarse en términos accesibles (no jurídicos) y en todos los idiomas de uso habitual.
3. **Exigir al personal policial que estén identificados** mediante placas con nombres o números de identificación claramente visibles. Ello debería incluir a los cargos de mayor jerarquía, como comisarios de distrito, comandantes regionales y oficiales de patrulla.
4. **Exigir que el personal de empresas de seguridad privada también estén identificados claramente** con el nombre de la empresa y el número de placa o el nombre.
5. **Ofrecer a los oficiales de policía y otros empleados de servicios públicos, en su caso, la protección indicada en la legislación sobre protección a informantes**, y dar divulgación suficiente a estas medidas.

Estándares y directrices

- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas y directrices complementarias
<http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Background%20documents/CodeofConductforlawEnfOfficials-E.pdf>
- Consejo de Europa: Código Europeo de Ética de la Policía <http://polis.osce.org/library/f/2687/500/CoE-FRA-RPT-2687-EN-500>
- Criterios de elegibilidad de la OGP: Participación ciudadana <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>
- Government Accountability Project: Mejores prácticas internacionales en políticas de protección de denunciantes http://www.whistleblower.org/storage/documents/Best_Practices_Document_for_website_March_13_2013.pdf
- Interpol: Estándares Globales para combatir la Corrupción en las Fuerzas y Servicios Policiales <http://www.interpol.int/Media/Files/Crime-areas/Corruption/Global-standards-to-combat-corruption-in-police-forces>
- OCDE: G20, Marcos de protección de los informantes, compendio de mejores prácticas y principios rectores aplicables a la legislación <http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf>
- ONUDD: Conjunto de instrumentos de evaluación de la justicia penal <http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

Ejemplos por países

 In Brazil police stations show photographs of the team of officers

Posters in police stations show the team officers in charge with photographs, enabling identification of officers. Not only is this more personal, it provides access to all irrespective of literacy, and enhances identification in situations in which a badge number or nameplate may not have been visible).

Intermedio Step: Desarrollar un sistema de encuestas públicas periódicas sobre delincuencia y labor policial

Justificación

Los ciudadanos esperan que la policía combata la delincuencia y sea justa y sensible con las necesidades de la gente en todas sus actuaciones. Las encuestas de satisfacción pública son una herramienta para evaluar la calidad de la interacción entre la ciudadanía y los agentes policiales, ya que permiten que los primeros expresen su parecer, generan comentarios oportunos sobre las actuaciones policiales y pueden ser empleadas como método de rendición de cuentas y para gestionar el rendimiento por parte de las agencias locales. La creación de un mecanismo visible diseñado para recopilar las opiniones de los ciudadanos puede ayudar a generar confianza, transparencia y legitimidad. Las encuestas ciudadanas también pueden proporcionar información sobre el nivel de delincuencia, ya que muchos delitos no se denuncian a la policía.

Aunque las encuestas únicas pueden proporcionar una útil imagen fija, los sistemas más eficaces obtienen información periódica y oportuna que permite realizar un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo. Las encuestas se pueden completar con información como la que proporcionan los mapas de delincuencia, o la información sobre precauciones de prevención.

Recomendaciones

- 1. Diseñar encuestas de satisfacción sobre la delincuencia y la acción policial** para obtener datos periódicos, manejables y oportunos que puedan ser empleados por las fuerzas locales de policía, además de permitir la generación de medias agregadas sobre el rendimiento nacional.
 - Para que los encuestados hablen con total libertad y franqueza es imprescindible que se preserve el anonimato y que las encuestas sean encargadas a investigadores independientes.
 - Las encuestas y los métodos de muestreo deben diseñarse para obtener opiniones de todo el espectro del público. Pueden incluir tanto encuestas representativas (como sería el caso de encuestas telefónicas) y de encuestas de satisfacción del cliente, que permite relatar su experiencia a las personas que han tenido contactos reales con la policía. Los grupos de foco pueden aportar opiniones más detalladas sobre problemas concretos, así como aportaciones de grupos más específicos (jóvenes, grupos étnicos, etc.).
 - Considerar la realización de encuestas telefónicas, automáticas o basadas en la web para reducir costes y mejorar el tiempo de procesamiento y entrega a las agencias (sin que se excluya a personas sin acceso a esos medios ni suponga por sí solo que se esté evitando el sesgo del muestreo).
 - Asegurarse de que la encuesta esté bien difundida entre las personas que han interactuado con la policía, y de que está disponible en las lenguas locales.
- 2. Publicar con regularidad los resultados y celebrar audiencias públicas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para discutirlos.**

Ejemplos por países

Australia holds regular satisfaction surveys on policing

For example the Australian Federal Police assesses client satisfaction is a Key Performance Indicator. The AFP Business Satisfaction Survey (BSS), formerly known as the Client Satisfaction Survey, has been conducted annually since 1999-2000.

The survey is designed to assess the AFP's commitment to its core values, the performance of the AFP in conducting

and undertaking investigations, and working with our clients and stakeholders. The results provide feedback about the AFP's activities and enable the identification of areas of service delivery requiring attention. Those surveyed include staff from organisations that the AFP routinely works with, including commonwealth, state and territory government agencies, foreign governments, law enforcement agencies, industry clients, embassies and diplomatic missions in Australia and overseas.

Intermedio Step: Establecer disposiciones relativas a la integridad de los agentes de policía, en conformidad con las buenas prácticas internacionales

Justificación

Como empleados públicos, cuyo mandato consiste en vigilar el orden y hacer cumplir la ley, la policía es depositaria de una especial confianza por parte de la ciudadanía. El trabajo policial resulta a menudo, por su naturaleza, intrusivo con las personas y los grupos de personas: desde los trabajos de investigación, el registro de locales, la detención de sospechosos, el control de manifestaciones o la interacción con personas vulnerables. La preservación de la integridad y la confianza son ejes de la mayor importancia. Las fuerzas policiales se exponen a notables amenazas de corrupción externa. Algunos ejemplos son el crimen organizado, los narcotraficantes y cárteles de la droga, los medios que ejercen presiones para obtener información, los delincuentes que procuran influir sobre los resultados de la investigación, además de quienes, dentro de la policía, cometen actividades delictivas, como el tráfico de esteroides. Abundan las ocasiones de aceptar sobornos de los ciudadanos o extorsionar (Transparency International, 2012). Otras amenazas de corrupción pueden estar inscritas en la propia cultura policial, pasando desde un "código del silencio" profesional, a la idea de que ciertos tipos de conducta inadecuada en los que se pueda incurrir para obtener información o asegurar una condena son justificables por su contribución a un bien mayor.

Son demasiados los países en los cuales la policía es vista como endémicamente corrupta; en otros, la confianza en la policía se ha visto dañada por unos pocos escándalos de alto nivel. Las fuerzas policiales necesitan tener una visión clara no solo acerca de en qué consiste la integridad, sino también acerca de cómo puede permear sus actividades.

Las fuerzas policiales también están externalizando cada vez más funciones que tradicionalmente les eran propias. La integridad puede verse en entredicho durante el proceso de contratación y por la necesidad de la policía de apoyarse en socios privados para preservar los estándares de integridad durante sus actividades. También pueden aparecer conflictos de intereses en el caso de que altos cargos se retiren para incorporarse al sector privado como prestadores de servicios de seguridad.

Recomendaciones

Cada país se enfrenta a distintos desafíos en materia de corrupción policial, por lo que no existe una hoja de ruta válida para todos. Las estrategias de reforma nacional se deben desarrollar mediante el análisis de las condiciones domésticas y el desarrollo de programas de cambio a largo plazo. Los elementos fundamentales que han tenido éxito son los siguientes:

1. **Adopción de códigos de integridad policial**, apoyados por la orientación fundamentada en los códigos y sistemas aceptados de lucha contra la corrupción.
2. **Creación de sistemas sólidos** de identificación, seguimiento y gestión de riesgos (incluyendo problemáticas como la divulgación incorrecta de información, gratificaciones, amabilidad, contratación y empleo secundario). Implementación de dichos sistemas y apoyo de la misma mediante comunicación interna y actividades formativas, desarrollo de denuncias y canales de información (informantes), controles y sanciones internos, así como supervisión.
3. **La transparencia interna**, bajo la forma de consultas y comunicación abierta entre todos los rangos del escalafón

policial, puede hacer que sea más difícil esconder la corrupción, además de contribuir a restaurar la confianza y la moral de una institución cuyos miembros estén sufriendo por el escarnio producido por un escándalo público.

4. **Divulgación de declaraciones patrimoniales y sistemas de conflictos de intereses** para agentes de policía y altos cargos.
5. **Participación de la sociedad civil** en el desarrollo de argumentos a favor de determinadas reformas en el ámbito policial, manteniendo la presión y ayudando a movilizar el apoyo y la participación del público.
6. **Se puede emplear tecnología para apoyar medidas anticorrupción en la policía.** Por ejemplo, sistemas de pago de multas y permisos sin efectivo, circuitos cerrados de televisión y cámaras ocultas en la vestimenta.
7. **Los oficiales de policía deben tener acceso a los informes de evaluación del rendimiento.** El desarrollo profesional basado en el mérito es un incentivo crucial para poder contar con una policía democrática y responsable.

Estándares y directrices

- DCAF: Kit de supervisión de servicios de inteligencia <http://www.dcaf.ch/Publications/Overseeing-Intelligence-Services-A-Toolkit>
- Public Office, Private Interests: Rendir cuentas con declaraciones patrimoniales y de activos [http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public Office Private Interests.pdf](http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf)
- TI: Detener la corrupción de la policía – La experiencia global de las iniciativas para reformar la corrupción policial http://issuu.com/tidefence/docs/2012-11_arrestingcorruptioninpolice

Ejemplos por países

In India police officers are included in income and asset declaration requirements

The Home Ministry had directed all the officers of the Indian Police Service (IPS) in the country to disclose their assets under the Immovable Property Return (IPR). State level governments have also directed police officers above the rank of Sub-Inspectors to disclose details of their income and assets. Those who fail to comply can be clearance for promotion and service medals. However high rates of non compliance continue to be reported.

- <http://mha.nic.in/ipr/iprmain.htm>
- http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-06-21/india/32351131_1_ips-indian-police-service-home-ministry

The UK established a new integrity package for the police in 2012

Following a series of scandals about police conduct, new code of ethics, and a single set of professional standards in force practice were adopted. Police officers must declare gifts and hospitality, second jobs and sources of income including company directorships, and this is published in a national database. A 'struck-off list' of officers who have been dismissed for misconduct is published and a sanction has been introduced for officers resigning during misconduct proceedings by ensuring such proceedings are taken to conclusion – proven misconduct will result in officers going on the struck-off list.

- https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181705/Accountability_System_Statement_13_04_03_v3.pdf
- <https://www.gov.uk/ensuring-the-highest-standards-of-integrity-in-the-police>

Intermedio Step: Exigir a la policía medidas más amplias de publicidad activa

Justificación

La publicación de información sobre estructuras y cantidad de personal policial, escalas salariales, activos incautados, personas detenidas y métricas de las actividades claves de la justicia penal, es una de las maneras más poderosas para proteger de la corrupción y la mala administración policiales. La publicación de dicha información permite la puesta en práctica de discusiones mejor informadas sobre los enfoques operativos, además de mejorar la percepción pública de la policía. Por ejemplo, al comparar presupuestos policiales, datos sobre delincuencia y sobre las detenciones realizados, el público puede llegar a cuestionar la eficiencia y la buena administración de la policía, así como evaluar si la información sugiere la existencia de buenas políticas o, por el contrario, es síntoma de corrupción y de una gestión mejorable.

La información detallada sobre los patrones de criminalidad, inclusive su distribución, y las tasas de delincuencia, hacen posible que los ciudadanos evalúen la eficacia de las estrategias policiales, o si la policía, en lugar de enfrentarse a los delitos que más afectan a la población, se dedican a favorecer o desfavorecer activamente a grupos específicos.

Recomendaciones

- 1. Establecer nuevas obligaciones de publicidad activa de información, o incluir a los servicios policiales en los regímenes de publicidad activa ya existentes.** La información clave que se debería divulgar incluye:
 - Escalas salariales básicas, cualificaciones exigidas para entrar al cuerpo de policía, procesos de reclutamiento y promoción.
 - Datos sobre los delitos cometidos, desglosados por edad, sexo, arma, en su caso, y población.
 - Datos sobre las personas bajo custodia policial, duración de las detenciones, edad, sexo y área geográfica.
 - Datos sobre activos incautados por la policía (inclusive terrenos, vehículos, armas, drogas y dinero en metálico)
 - Datos estadísticos sobre las denuncias a las fuerzas policiales, tanto si han sido recibidas directamente por la policía o por la judicatura, por cuerpos independientes u oficinas del defensor del pueblo, indicando los motivos de las denuncias y su estado (rechazada, fundamentada, en mediación, aprobada) y todas las acciones disciplinarias tomadas contra los oficiales de todos los rangos y escalafones, incluidos altos cargos civiles o nombramientos políticos en los ministerios. La información individual deberá respetar el derecho a la privacidad de los oficiales.
 - Datos sobre el uso de competencias especiales o reforzadas para luchar con la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas de crimen, incluyendo datos cuantitativos sobre la frecuencia, la cantidad y las categorías de objetivos, la duración, el coste y los resultados. También deberían ser públicos los datos sobre las escuchas y la interceptación de comunicaciones telefónicas o por internet, en especial de correos electrónicos.
 - Información sobre las normas, reglamentos y procedimientos de contratación. Todas las licitaciones y adquisiciones de cierta entidad deben ser públicas, al igual que los nombres de compañías adjudicatarias de contratos, indicando de manera exhaustiva los nombres de todas las empresas contratadas por los servicios públicos de seguridad.
- 2. La información debería publicarse sistemáticamente online, además de divulgarse en el ámbito local mediante los medios y la difusión en comisarías de policía.**
- 3. Los archivos de la policía deberían verse sometidos a una desclasificación obligatoria, transcurrido un determinado período de tiempo, de toda la información relacionada con la policía y los servicios secretos, pudiendo ampliar el plazo solo bajo circunstancias excepcionales, y pasando a archivar todos los documentos desclasificados en archivos de naturaleza civil.** Las normas para clasificar los datos de la policía y otras agencias relacionadas deberían tener

naturaleza legislativa y pública.

Estándares y directrices

- DCAF: Kit de supervisión de servicios de inteligencia <http://www.dcaf.ch/Publications/Overseeing-Intelligence-Services-A-Toolkit>
- ONUDD: Conjunto de instrumentos de evaluación de la justicia penal <http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

Ejemplos por países

Austria has published information on the use of special investigative means

In 2008, the Austrian Court of Audit published a report about the use of special investigative means by the police, including wiretapping, costs, effects, etc

Germany publishes an annual statistical yearbook on crime

The Federal Criminal Police Service (BKA) has, since 1997, published an annual statistical year book for crime trends, together with analysis.

In Bulgaria publishes data on permissions granted for electronic surveillance

In Bulgaria permissions for wiretapping must be granted by the Presidents of the district courts and aggregated data are available in the annual reports of these courts since 2010. This information is aggregated in the annual report of the Prosecutor's office. The same report contains aggregated data about number of crimes committed by the employees of the Ministry of Interior, including police.

- http://www.prb.bg/uploads/documents/docs_3923.pdf

The monthly criminal intelligence gazette is published by the West Bengal police

The Police Department in West Bengal publishes a monthly Criminal Intelligence Gazette online. These kinds of documents were earlier confidential and accessible to police officers only. Now some States are uploading this kind of data on their police websites.

The UK sets 'annual data requirements' for police forces

Section 11(1) and (2) of the Police and Social Responsibility Act requires an elected Local Policing Body to publish any information specified by the Secretary of State by Order. The Secretary of State may also specify by Order the time and manner of publication. The details of the information required to be published includes:

- The total budget of the elected Local Policing Body;
- Information as to each item of expenditure of the Local Policing Body exceeding £500 (other than a crime and disorder reduction grant), including the recipient of the funds, the purpose of the expenditure and the reasons why the body or the chief officer (as the case may be) considered that good VfM [value for money] would be obtained;
- Information as to each anticipated source of revenue of the Local Policing Body other than, in the case of a PCC, the precept);
- Information as to each crime and disorder reduction grant made by the Local Policing Body;
- The salary of each senior employee, and
- A copy of each contract with a value exceeding £10,000 to which the Local Policing Body or the chief officer is or is to be a party.

The Annual Data Requirement (ADR) sets out all routine requests for data made to all police forces in England and Wales under the Secretary of State's statutory powers. Some of the data collected through the ADR form National Statistics that are subject to stringent reporting and validation standards. The ADR requires police forces to submit the financial data used by HMIC in the preparation of its annual Value for Money profiles of police forces.

- https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181705/Accountability_System_Statement_13_04_03_v3.pdf

Avanzado Step: Publicar la totalidad de las estadísticas nacionales sobre delincuencia siguiendo estándares internacionales

Justificación


La información oportuna sobre las estadísticas nacionales de delincuencia es fundamental para poder seguir la evolución de tendencias principales y secundarias, además de permitir realizar comparaciones entre patrones de criminalidad en distintos países. Las encuestas sobre victimización añaden información importante a los datos de la policía y de la justicia penal, que solamente recogen los delitos registrados, pero no la gran cantidad de incidentes no denunciados que se dan en cualquier entorno. Por otra parte, los sistemas de justicia penal pueden estar compuestos de elementos que no funcionan de manera independiente, motivo por el cual, a menudo, aparecen problemas de coordinación entre los varios pasos del proceso penal. La información que recoge el paso de las personas físicas a través de los procesos penales es importante tanto para detectar y remediar el abuso y la corrupción, como para promover el desarrollo de políticas más eficaces y más justas.

La recopilación de datos étnicos es una herramienta vital para detectar y enfrentarse a patrones discriminatorios en el trato a ciertos grupos durante la vigilancia por el cumplimiento de la ley. La policía no debería tener en consideración las características étnicas, religiosas o políticas de las personas investigadas, a menos que sean estrictamente imprescindibles para el proceso por estar directamente relacionadas con el delito. La recogida y la publicación de estadísticas étnicas anónimas, a pesar de ser una herramienta esencial para poder realizar un seguimiento de la discriminación, no deja de ser un asunto delicado en muchos entornos, en los cuales existe el temor razonable de que estos datos étnicos, además de ofender a las comunidades representadas, puedan reforzar los estereotipos sobre la identidad étnica o religiosa. Por ello, las comunidades afectadas deberían tener la capacidad de participar en las decisiones sobre la recogida de este tipo de datos.

Recomendaciones

1. **Todas las autoridades penales pertinentes (tanto funcionarios judiciales como policía) deberían recoger y publicar información más detallada sobre las estadísticas penales, desde las labores policiales hasta la libertad condicional, incluyendo las siguientes:**
 - Datos de la policía. Estadísticas demográficas básicas sobre las fuerzas policiales y personal administrativo, incluyendo sexo, grupo de edad, y grupo étnico o nacionalidad.
 - Estadísticas de la fiscalía. Datos que abarquen todas las etapas de la toma de decisiones por parte del ministerio judicial, como la apertura y la clausura de los casos, la presentación de los casos ante los tribunales, y la sanción de los delincuentes por decisión sumaria.
 - Estadísticas sobre detenciones. Datos recopilados periódicamente sobre las personas bajo arresto policial, en prisión preventiva, en régimen de libertad bajo fianza y bajo vigilancia electrónica, incorporando los fundamentos y acusaciones, la duración de la detención, y la información demográfica básica de los detenidos (edad, sexo, origen étnico, nacionalidad).
 - Estadísticas judiciales. Sistemas integrados de datos relacionados con todos los actores de la justicia penal.
 - Estadísticas sobre las condenas: datos sobre personas que han sido condenadas —es, decir, declaradas culpables de acuerdo a Derecho, desglosados por delito y sexo, grupo de edad, origen étnico y nacionalidad de los condenados.
 - Autoridades penitenciarias o prisiones. Información sobre la cantidad de reclusos, distinguiendo entre jóvenes, mujeres, tipo de institución (seguridad alta, media o mínima), puestas en libertad anticipada, número de personas en libertad provisional. Las cifras manejadas deberían permitir que se analicen las pautas de reincidencia y que se navegue por todo el sistema penal.
2. **Recopilar y publicar anualmente encuestas/informes sobre victimización, de manera que se pueda llevar a cabo un seguimiento de las tendencias principales y secundarias.**
3. **Crear bases de datos abiertas sobre datos nacionales de criminalidad que incluyan las encuestas sobre victimización y estén disponibles** a investigadores académicos, organizaciones de la sociedad civil y el público general, permitiendo sin restricciones la difusión y publicación en otros medios y soportes.
4. **Aportar datos sobre delitos cartografiados o con referencias geográficas.**
5. **Publicar evaluaciones sobre la calidad de la administración, la asignación de recursos y la efectividad, cotejada con la seguridad pública y los delitos ocurridos.**
6. **Los conjuntos de datos deberían estar disponibles online y en formatos abiertos que puedan descargarse con facilidad y cotejarse con otros conjuntos de datos gubernamentales.**
7. **Enviar los datos a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Encuesta internacional sobre criminalidad y victimización y a otras organizaciones regionales (OSCE; Consejo de Europa – CEPEJ).**
8. **Publicar la información policial y sobre delincuencia en los idiomas de uso habitual.**

Ejemplos por países

 The UK conducts annual surveys of experience and attitudes to crime

The Crime Survey for England and Wales, and the Crime Survey for Scotland measure the extent of crime by asking people whether they have experienced any crime in the past year. The full results are published annually each July with quarterly update. The Crime Survey records crimes that may not have been reported to the police and it is therefore used alongside the police recorded crime figures to show a more accurate picture of the level of crime in the country. As well as measuring crime, the survey looks at identifying those most at risk of crime, which is used in

designing crime prevention programmes, people's attitudes to crime and the Criminal Justice System, including the police and the courts and people's experiences of anti-social behaviour and how this has affected their quality of life. From 2009 the survey has included a separate survey to record the experiences of young people aged 10-15.

- <http://www.crimesurvey.co.uk/>

Innovador Step: Crear mapas on line de criminalidad y actividad policial


Justificación

Las nuevas tecnologías están permitiendo que la recogida de información y su divulgación al público sean accesibles en tiempo real. Estas tecnologías permiten alcanzar un mayor detalle, además de nuevas formas para que las comunidades locales y el público visualicen la respuesta policial y la asignación de recursos.

Recomendaciones

1. **Codificar geográficamente los datos sobre policía y criminalidad.**
2. **Generar mapas on line de los delitos denunciados y del uso discrecional por parte de la policía de sus competencias legales**, como controles, cacheos y registros, de manera que las acciones emprendidas de la policía puedan cotejarse, a ojos del público, con las pautas de criminalidad.
3. **Permitir la descarga de datos sin procesar (debidamente anonimizados) como datos abiertos.**

Ejemplos por países

 The www.police.uk website provides street level information about crime and justice outcomes

The UK Home Office run website, www.Police.uk, which provides the public with easy access to street-level information about crime, anti-social behaviour and justice outcomes in their local area in the form of crime maps. The public can also see how crime rates in their area compare with those in other similar areas. By following a link to HMIC's website the public can see how the cost of policing in their force area compares to the cost in other police areas. Users can also find information about their Police and Crime Commissioner. We will be adding comparative information about the finances and staffing of PCC offices.

- <http://www.police.uk>

Innovador Step: Establecer garantías para que las nuevas tecnologías de vigilancia policial respeten el derecho a la privacidad

Justificación

Los organismos policiales recogen, tienen en su poder o acceden a grandes cantidades de información acerca de víctimas, testigos, delitos y sospechosos. Parte de esta información tiene naturaleza privada, parte es confidencial. Esta información debe ser recogida en conformidad a Derecho y empleada solo en la medida en que su uso sea necesario para vigilar el cumplimiento de la ley. Además, hay que evitar que la información sea filtrada o sustraída, cayendo en manos de delincuentes, periodistas o investigadores privados, o incluso de fuerzas del estado que actúen con motivaciones política.

La llegada de nuevos desarrollos tecnológicos están cambiando el futuro de la información. Las personas transmiten grandes cantidades de datos digitales sobre sí mismos y dejan rastros de metadatos sobre su paradero, sus contactos y sus transacciones. También existen tipos de datos que se pueden recoger digitalizar y analizar de forma económica. Por ejemplo, las etiquetas de identificación por radiofrecuencia permiten vigilar los desplazamientos de objetos materiales, así como se secuencia el ADN, o el software de reconocimiento facial o de lectura de matrículas permite explotar los datos de imágenes generadas por circuitos cerrados de televisión. Ya sea tomados de forma individual o colectiva, estos datos se pueden emplear para desvelar la identidad de una persona, su comportamiento y afinidades, su estado físico y de salud, su raza, orientación sexual, origen y puntos de vista; como también se pueden cartografiar la ubicación de una persona, sus movimientos e interacciones a lo largo del tiempo.

Estas tecnologías pueden desempeñar un papel importante tanto en la prevención y en la detección de la criminalidad como en la promoción de la justicia. También se han empleado para apoyar una mayor rendición de cuentas de la policía. Por ejemplo, existen indicios prometedores de proyectos pilotos, que han mostrado cómo el uso de cámaras portátiles incorporadas a la ropa de agentes de policía ha incentivado la interacción respetuosa y legal, reduciendo el empleo de la fuerza.

Por otra parte, todas estas tecnologías también despiertan sospechas acerca de su relación con la privacidad. El seguimiento sistemático o ubicuo tiene una capacidad de revelar información privada que excede sus propios componentes, lo que hace que la aplicación de principios jurídicos a los nuevos contextos tecnológicos sea inadecuado y poco claro. Con el avance en el desarrollo y el uso de estas tecnologías, es crucial que la legislación y normativas cumplan con los derechos humanos internacionales y protejan adecuadamente los derechos de privacidad y de libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que el mero hecho de que las fuerzas policiales y de seguridad del estado recojan y almacenen datos personales, incluido el ADN y material fotográfico, puede constituir una injerencia en el derecho a la privacidad. Incluso cuando los datos están disponibles al público, y se recogen y almacenan sistemáticamente en archivos policiales (*Segerstedt-Wiberg v Sweden* (2007) 44 EHHR 2; *S and Marper v United Kingdom* (2009) 48 EHRR 50).

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones se remiten a los "Principios internacionales de los Principios Tshwane, Principio 10E.

Los estados deberían:

1. **Publicar la información que sea suficiente para que los ciudadanos puedan entender plenamente el alcance, la naturaleza y la aplicación de las leyes** que autorizan la vigilancia de las comunicaciones.
2. **Autorizar a los proveedores de servicios de comunicaciones a que publiquen los procedimientos que aplican en materia de vigilancia**, a cumplir con dichos procedimientos, y a publicar los registros de la vigilancia estatal de las comunicaciones.
3. **Publicar, como mínimo, información agregada sobre el número de peticiones de vigilancia de comunicaciones aprobadas y rechazadas**, así como un desglose de las peticiones por proveedor de servicios, por tipo de investigación y finalidad.
4. **Establecer mecanismos de supervisión independientes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la vigilancia**. Los mecanismos de supervisión deberían tener la autoridad para acceder toda la información potencialmente relevante acerca de la vigilancia, o para evaluar cuándo se está practicando en cumplimiento de la ley, además de evaluar si el estado ha ido publicando la información sobre el uso y el alcance de las técnicas y competencias para la vigilancia de las comunicaciones de forma transparente y exacta. El mecanismo de supervisión independiente debería publicar informes periódicos sobre sus hallazgos.


Las repercusiones operativas de los puntos anteriores para las agencias que vigilan el cumplimiento de la ley hacen que sea necesario:

1. **Revisar las medidas de seguridad de la información policial a la vista de las últimas técnicas y tecnologías** para asegurar que sigan siendo sólidas.
2. **Remitir técnicas y tecnologías, ya sean nuevas o expansiones de versiones anteriores, para que sean examinadas por el poder judicial, además de otros mecanismos de supervisión democráticos**, con el objeto de determinar si respetan las garantías constitucionales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Estándares y directrices

- DCAF: Kit de supervisión de servicios de inteligencia <http://www.dcaf.ch/Publications/Overseeing-Intelligence-Services-A-Toolkit>
 - Principios de Tshwane sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información <http://www.right2info.org/exceptions-to-access/national-security>
 - Principios Internacionales para la aplicación de los Derechos Humanos a la vigilancia de las comunicaciones <http://https://en.necessaryandproportionate.org/text>
-

Gestión documental

 **Autor principal:** [International Records Management Trust](#)

Introducción

La gestión documental es el campo de la administración encargado de controlar, de manera sistemática, la creación, recepción, mantenimiento, uso y acceso de documentos, inclusive los procesos de captura y conservación de pruebas e información relacionada con actividades o transacciones empresariales reflejada en registros, archivos y documentos (ISO 15489).

Tradicionalmente, la conservación de archivos se ha considerado una actividad rutinaria y típica del funcionariado. Sin embargo, una gestión documental eficiente resulta crucial para la eficacia de las decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas.

Una buena gestión documental se ocupa de garantizar que los registros, documentos y expedientes que se crean sean precisos, contengan datos fiables y sigan siendo accesibles, utilizables y auténticos durante el tiempo que sea necesario, sirviendo de base para la mejora de los servicios públicos, el control de la corrupción y el fortalecimiento de la democracia. Con ello se ven beneficiados tanto los demandantes de información, ya que pueden confiar en que obtienen información completa y fiable, como quienes custodian la información, ya que pueden ocalizarla y recuperarla fácilmente, cumpliendo así las necesidades y obligaciones operativas que exigen los principios de transparencia y rendición de cuentas.

En muchos países los documentos, archivos, registros y expedientes en manos del gobierno no se gestionan de acuerdo con los estándares internacionales. Lo que es peor, en algunos países ni siquiera se llevan a cabo los controles mínimos de gestión documental. Además, a menudo la adopción y el uso de las tecnologías digitales sobrepasa la capacidad de gestionar documentación digital, con lo que aparecen nuevos desafíos.

Es difícil encontrar lo que se quiere en archivos mal gestionados. Todavía más difícil es autenticar o preservar los documentos pertinentes. Esto puede llevar a políticas desorientadas, a servicios inadecuados o inapropiados, a financiación mal asignada y a fraude encubierto, todos ellos fenómenos con serias consecuencias para las vidas de los ciudadanos.

Hay políticas de gobierno abierto que tienen éxito, como los datos abiertos y el Derecho a la Información (DAI), y descansan sobre una gestión documental sólida, motivo por el cual cada vez más países están orientando sus programas de gestión documental de manera que apoyen los objetivos de gobierno abierto.

Referencias

ISO 15489:2001 Information and Documentation – Records Management, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31908

Organizaciones especializadas

International Records Management Trust <http://irmt.org/>

International Council on Archives <http://www.ica.org/>

Alliance for Permanent Access <http://www.alliancepermanentaccess.org/>

ARMA International <http://www.arma.org/>

Association for Information and Image Management <http://www.aiim.org/>

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Formar a todos los funcionarios con responsabilidades de gestión documental de acuerdo con el derecho a la información
- Implantar en todas las administraciones públicas una política de gestión documental acorde con los objetivos del derecho a la información y del gobierno abierto
- Nombrar una autoridad pública que lidere la gestión de documentos gubernamentales

Intermedio

- Capacitar a los profesionales en gestión documental
- Incluir requisitos de gestión documental entre las especificaciones técnicas para sistemas TIC nuevos y para actualizaciones de sistemas existentes

Avanzado

- Crear un repositorio digital centralizado que permita acceder de manera permanente a los archivos y datos del gobierno
- Definir requisitos de metadatos homogéneos para toda la administración

Innovador

- Desarrollar una estrategia de control de calidad para conjuntos de datos públicos

Detailed Recommendations

Inicial Step: Formar a todos los funcionarios con responsabilidades de gestión documental de acuerdo con el derecho a la información

Justificación

Para que los funcionarios sean capaces de poner en marcha las leyes de acceso a la información adecuadamente, es imprescindible que sean conscientes de cuáles son las responsabilidades que la propia ley les asigna.

Es importante que se ofrezca a los funcionarios formación sobre cómo generar y mantener documentación en sistemas de almacenamiento registral fiables, asegurándose de que estén debidamente controlados y programando tanto la preservación como la eliminación, además de proteger todos los elementos cuyo acceso deba ser vetado, de acuerdo con las disposiciones en materia de secretos oficiales, privacidad, copyright y otras leyes relacionadas con la información.

Por motivos prácticos, puede ser buena idea comenzar por actividades formativas dirigidas a los agregados de información y otro personal igualmente relevante. Sin embargo, con el paso del tiempo es importante formar a todos los funcionarios. Es básico garantizar que comprenden las nuevas obligaciones que contraen por estar estipuladas en la ley, además de promover una mejor cooperación y apoyo de los agregados de información.

Con el paso del tiempo, todos los funcionarios deberían recibir formación sobre gestión documental y el Derecho de Acceso a la Información. La formación se puede ofrecer de distintas maneras, dependiendo de cómo se gestione la función pública en el país, desde la inclusión de módulos sobre DAI en cursos para personal que ya se están impartiendo, cursos impartidos por los agregados de información en la sede de la autoridad pública en gestión documental, o mediante la incorporación de la formación en DAI a los cursos de acceso para funcionarios.


Recomendaciones

- Identificar la formación y la orientación que necesitan los funcionarios para evaluar la divulgación de registros, documentos, conjuntos de datos y otros recursos informativos, así como para preparar y actualizar las declaraciones de accesibilidad de la información.
- Revisar la formación y la orientación existentes sobre gestión documental e identificar qué partes de la formación y orientación sobre el derecho de acceso a la información, el Gobierno Abierto y los Datos Abiertos se pueden incorporar .
- Proporcionar formación básica pero especializada a todos los agregados de información y demás personal del organismo independiente de supervisión. Con el paso del tiempo, estos contenidos pueden ampliarse para que todos los funcionarios (personal de base o cargos o públicos) reciban formación relacionada con el derecho de acceso a la información.
- Revisar periódicamente la formación y la orientación para garantizar su efectividad y la adecuación de sus contenidos a lo largo del tiempo

Estándares y directrices

- ARTICLE19: Curso de formación para funcionarios http://https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Publikacije_ostalih_pooblascencev/Article_19_foitrainersmanual.pdf
- Curso de formación para funcionarios de CLD <http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2012/08/Manual-Final.docx>

Ejemplos por países

 The UK Information Commissioner's Office has developed a set of training materials for use in the public sector

The website of the UK Information Commissioner's Office includes a wide set of training materials, including short films on how to manage personal information, and how to comply with the UK Data Protection Act, Freedom of Information Act, and the Environmental Information Regulations.

- http://ico.org.uk/for_organisations/training

Inicial Step: Implantar en todas las administraciones públicas una política de gestión documental acorde con los objetivos del derecho a la información y del gobierno abierto

Justificación

Las políticas de gestión documental que se implantan en todas las administraciones públicas establecen procedimientos obligatorios para la creación, administración y conservación de los archivos, registros, expedientes y documentos públicos. Estas políticas tendrán un mayor impacto si están en consonancia con las políticas TIC, de Acceso a la Información y de Datos Abiertos.

Normalmente, es la autoridad con responsabilidad central sobre la gestión documental en el sector público quien debería proporcionar los estándares y las directrices que pertinentes, que pasan por el establecimiento de un departamento especializado de gestión documental en cada organización gubernamental. Así, la gestión documental se puede desarrollar como función organizativa fuerte, a la misma altura que los recursos humanos o la gestión financiera.

Recomendaciones


Una política de gestión documental diseñada para ser implantada en todas las administraciones públicas debería:

1. Desarrollarse teniendo en cuenta a los demás agentes interesados, como los responsables de la gestión de los programas de gobierno abierto, de datos abiertos y de iniciativas de acceso a la información.
2. Establecer objetivos y expectativas generales de la gestión documental.
3. Exigir que las autoridades públicas nombren a cargos con responsabilidades de gestión documental, desarrollen sus propias políticas de gestión documental y establezcan departamentos profesionales con la capacidad de gestionar y administrar archivos, registros, expedientes y documentos.
4. Incluir disposiciones sobre la programación temporal relativa a la preservación y la eliminación de documentos, teniendo en cuenta las necesidades y obligaciones del gobierno desde el punto de vista legal y financiero, además del propio valor administrativo e histórico de los documentos.
5. Establecer responsabilidades generales para realizar el seguimiento del cumplimiento de las políticas y el grado de satisfacción de los resultados previstos.
6. Asegurarse de que la política de gestión documental esté en consonancia con las políticas de acceso a la información, de Gobierno Abierto y de Datos Abiertos.

Estándares y directrices

- ISO 15489:2001 Información y documentación – Gestión de documentos http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31908
- ISO 30300:2011 Información y documentación – Sistema de gestión para los documentos http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=53732

Ejemplos por países

 In 2011, the US President established a government-wide effort to reform records management policies and practices

The Presidential Memorandum – Managing Government Records – was signed by President Obama in 2011, marking the beginning of an executive branch-wide effort to reform records management policies and practices in the U.S. This effort is expected to improve openness and accountability by better documenting agency actions and decisions, and help executive departments and agencies minimise costs and operating more efficiently.

- <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2012/m-12-18.pdf>

 In Mexico the national archive and IFAI issued joint guidelines for the organisation of government archives


Mexico's Federal Law on Transparency and Access to Public Information from 2002 assigned jointly to the Mexican National Archive and the Federal Institute for Access to Public Information in Mexico (IFAI) the task of creating criteria to catalogue, characterise and handle administrative documents. The only guidance that the law provided these entities was that archiving and conservation criteria should be based on international standards and best practices. IFAI and the National Archive have since, for example, created the Automated and Integrated System of Request Tools and Archive Control, which allows users to easily access archiving guidelines and locate documents from all agencies.

- <http://inicio.ifai.org.mx/English/5%20IFAI%20and%20a%20culture%20of%20Transparency.pdf>

 The Government of Canada established a new policy on information management in 2007

The Canadian Policy on Information Management from 2007 offers a whole-of-government approach to records management. The policy states that using a whole-of-government approach to managing information and records supports managers' ability to transform organizations, programmes and services in response to the evolving needs of Canadians.

- <http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?section=text&id=12742>

 The UK has created guidance for public authorities in establishing their own records management policies

In the United Kingdom, the Code of Practice on Records Management (under section 46 of the Freedom of Information Act 2000) constitutes a government-wide policy on records management. It gives guidance on good practice in records management as well as guidance on the review and transfer of public records to an archives office for permanent preservation. The National Archive has published a set of guidance notes to support the good practice recommendations in that Code.

- <http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/rm-code-guide3.pdf>

Inicial Step: Nombrar una autoridad pública que lidere la gestión de documentos gubernamentales

Justificación

Es importante establecer una agencia con responsabilidad legal sobre la gestión documental en el sector público. Se podría tratar de una autoridad nacional de registros, un organismo de gestión de archivos o una serie de organismos regionales o locales con una autoridad equivalente. La agencia necesita tener una misión clara que le permita liderar la gestión documental, garantizando que las decisiones, las acciones y las transacciones del gobierno estén debidamente documentadas. Con vistas a una mayor confianza del público y un mayor grado de apertura gubernamental, también deberá asegurarse de que la ciudadanía tiene acceso a los documentos, registros, archivos y expedientes.

It is important to establish an agency with statutory responsibility for managing records across the public sector. This could be a national records authority, an archives body or a series of state or local bodies with equivalent authority. The agency needs a clear mandate for guiding the management of records and helping to ensure that government decisions, actions and transactions are documented in a trustworthy manner. It must also ensure that records are made available to citizens as the basis for public confidence and openness.

Asimismo es importante que la relación entre el Derecho de Acceso a la Información, los Datos Abiertos y la gestión documental sea cristalina, de manera que no se creen regímenes inconsistentes de acceso a la información [Dokenia, 2013]. El International Council on Archives ha respaldado el principio de que los archivos nacionales y regionales deben jugar un papel principal en apoyo a la gestión documental en las administraciones públicas, incluyendo los archivos, documentos, registros y expedientes en formato digital.

Recomendaciones

1. Aprobar una ley que nombre a una autoridad registral. La ley debería garantizar:
 - Que la autoridad registral esté facultada para establecer una política de gestión documental para las administraciones públicas, en la que se definan estándares de buenas prácticas y controles de calidad para la gestión documental en las administraciones públicas, independientemente del formato.
 - La autoridad tendrá una posición central y transversal, y no estará ubicada en el sector cultural.
 - La función de la autoridad no será replicada en otras agencias, como la autoridad en materia de telecomunicaciones o el gabinete del comisionado de información, sino que se crearán lazos fuertes con estas y otras autoridades pertinentes.

- Para que pueda cumplir su cometido, en especial por lo que respecta a la imbricación con las políticas de Datos Abiertos, de acceso a la información, TIC y gobierno electrónico, la autoridad será apoyada, también en el aspecto presupuestario, por las más altas instancias.

Ejemplos por países

In Sierra Leone the records authority has developed standards and guidelines for keeping civil servants' and teachers' records

After the conflict in Sierra Leone (1991-2002), the country's records management system needed to be almost entirely rebuilt. A Record Management Improvement Project was initiated in 2005 with funding from the UK Department for International Development to improve the country's records management system.

As a starting point, a Records Management Improvement Team was appointed to build the basis for sustainable improvement in records management. The Team tackled many issues but made pay and personnel records in the public sector its highest priority. Under the previous records management system it had, for example, been difficult to identify ghost workers or workers past statutory retirement age, leaving the system open to abuse. The previous system also undermined efficient personnel administration and planning for long-term staff development as it was difficult to determine skills, staffing requirements and vacancies.

The Team set about organising personnel files in payroll order, both in the Employment Secretary's Office (which managed the Civil Service) and in employing ministries, departments and agencies. The aim was to make it easier and faster to verify the payroll, staff lists and social security forms. Organising the files in relation to the payroll also would make it possible to determine the employees for whom no files existed, so that files could be created for all civil servants, including non-established employees. This strategy enabled a reduction in ghost workers from the civil service payroll, and subsequent public expenditure savings.

- http://www.irmt.org/documents/building_integrity/case_studies/IRMT_Case_Study_Sierra%20Leone.pdf

In Tanzania modern legislation empowers the national archives to define standards for keeping government records

The Tanzanian Records and Archives Management Act, 2002 established a Records and Archives Management Department. The Department's role, which is set out in this Act, includes ensuring that public offices follow good record keeping practices; establishing and implementing procedures for the timely disposal of public records of no continuing value; advising on best practices and established standards in record keeping in the public service; and establishing and implementing procedures for the transfer of public records for preservation.

- <http://polis.parliament.go.tz/PAMS/docs/3-2002.pdf>

In the United Kingdom the National Archives and the Information Commissioner cooperated to develop a code of practice on records management

In the United Kingdom, a code of practice on records management was developed by the National Archives and the Information Commissioner as a supplement to the provisions stated in the UK's Freedom of Information Act from 2000. Its purpose is to help authorities comply with the freedom of information requirements relating to the creation, management, disposal, use and re-use of records and information.

- <http://www.justice.gov.uk/downloads/information-access-rights/foi/foi-section-46-code-of-practice.pdf>

 Several countries have mandated their national archives to serve as records authorities

Governments in Canada, China, Ghana, India, Malaysia, Tanzania, the United Kingdom, and the United States, are among those that have mandated national archives to serve as records authorities.

Intermedio Step: Capacitar a los profesionales en gestión documental


Justificación

La gestión documental es un campo técnico, y para acceder a él es necesario haber recibido formación especializada. La historia y la práctica de la gestión documental siguen desarrollándose con rapidez, y los especialistas en archivos trabajan cada vez más con profesionales TIC para diseñar e implementar sistemas nuevos o mejorados que transmiten la información al público. Al trabajar en equipos en los que se combinen expertos en Datos Abiertos/DAI y gobierno electrónico/TIC, debería ser posible mejorar el valor que tiene la información archivada tanto para los gobiernos como para la ciudadanía.

Recomendaciones

1. Identificar los desafíos a los que se deberá enfrentar la gestión documental en ámbitos tales como el cambio tecnológico, legislativo y político, las metodologías de trabajo, la teoría, las expectativas de los clientes, así como la especialización que se necesita para responder a estos desafíos.
2. Evaluar la diferencia entre la especialización demandada y la especialización de los expertos existentes.
3. Crear una estrategia para desarrollar la especialización necesaria mediante acciones de selección, formación, educación, programas de formación continuada, proyectos técnicos, alianzas internacionales o locales, así como alianzas con el sector privado allí donde sean pertinentes.
4. Asegurar apoyo presupuestario para la estrategia.
5. Revisar regímenes de empleos, estructuras organizativas, descripciones de puesto de trabajo, escalas salariales, etc. para garantizar que la función de gestión documental está representada entre los funcionarios de mayor nivel y que haya una trayectoria profesional claramente definida para especialistas en registros, archivos, documentos y expedientes.

Ejemplos por países

 National Archives Australia supports capability development in the Australian government

The National Archives of Australia supports capability development in the Australian government by offering a range of training programmes and resources, such as face-to-face training courses, e-learning, and professional events. The Archives also engages with information and records professionals and stakeholders across the Australian Government, industry and the education sector.

- <http://www.naa.gov.au/records-management/capability-development/index.aspx>

Intermedio Step: Incluir requisitos de gestión documental entre las especificaciones técnicas para sistemas TIC nuevos y para actualizaciones de sistemas existentes

Justificación

Se han automatizado parcial o completamente muchas de las actividades de las administraciones públicas que habían estado basadas en documentos y expedientes en papel. A medida que las administraciones migran a un entorno online, los documentos, expedientes y archivos digitales sirven como base para la gestión corriente, para servir a los ciudadanos, para gestionar los recursos del estado, para medir avances y resultados, o para proteger los derechos del gobierno o de cualquier ciudadano.

La tecnología está contribuyendo de forma muy significativa a la mejora de los programas y servicios de la administración, ya sea cumpliendo objetivos de desarrollo o a través de estrategias piloto de gobierno electrónico. Sin embargo, la introducción de nuevos sistemas TIC sin que se tengan en cuenta los procedimientos y los controles esenciales de captura, conservación a largo plazo y accesibilidad de la documentación electrónica sigue siendo muy habitual.

Con el fin de garantizar que los requisitos de gestión documental y de datos sean integrados plenamente en sistemas gubernamentales, ya sean nuevos o modificados, es importante que la autoridad en materia de gestión documental trabaje en estrecha colaboración tanto con expertos en Datos Abiertos y Acceso a la Información como con especialistas en TIC y gobierno electrónico. Además, es imprescindible incluir, entre los requisitos de gestión documental, una definición de la funcionalidad del sistema mediante la cual se vean salvaguardadas la autenticidad y la accesibilidad a largo plazo de los propios archivos. Estos pasos también sirven para que a las peticiones de información sean respondidas en forma y plazo, siguiendo los requisitos definidos por la ley.

Recomendaciones

1. Desarrollar requisitos funcionales a la altura de los estándares internacionales para todo el ciclo de vida de la gestión documental.
2. Tener en cuenta la posible adopción de sistemas y formatos de código abierto en el contexto de la conservación y el acceso a largo plazo de documentos y expedientes digitales. [enlace a 11 – Establish A Government Digital Repository]
3. Identificar sistemas de la administración, tanto existentes como previstos, que estén generando documentos y conjuntos de datos.
4. Garantizar que los requisitos funcionales se vean reflejados en el diseño de sistemas, tanto existentes como previstos, así como en las siguientes fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas (por ejemplo: prueba, implementación, producción, evaluación)
5. Indicar quién debe rendir cuentas por la gestión de los documentos y datos generados en los sistemas.
6. Desarrollar estándares y procedimientos para la gestión de documentos y conjuntos de datos a lo largo de todo su ciclo de vida, y aplicarlos.
7. Formar al cuerpo técnico, a los usuarios de los sistemas y a los pres responsables de divulgar documentos y conjuntos de datos, con el fin de garantizar un cumplimiento continuado a lo largo del tiempo de los requisitos de preservación documental.
8. Llevar a cabo auditorías de cumplimiento, a poder ser en el marco de auditorías de sistemas, en las que se demuestre que se están respetando los requisitos para el diseño de sistemas.

9. Revisar los requisitos funcionales y actualizarlos según sea necesario.

Estándares y directrices

- Integración de la gestión de archivos en sistemas TIC http://www.irmt.org/documents/educ_training/term_resources/IRMT_Good_Practice_Indicators.pdf
- MoReq2010 <http://www.moreq2.eu/home>
- Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos de oficina electrónica (ISO 16175) http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55791

Ejemplos por países

National Archives of Australia have developed guidelines on electronic records management

National Archives of Australia have developed a set of guidelines for Australian Government agency staff involved in considering an electronic records management system, planning and managing its implementation. These guidelines concern key considerations for implementing electronic document and records management system; lessons learned from Australian government agencies; an implementation checklist; information for senior management, and case studies from various agencies.

- <http://www.naa.gov.au/records-management/agency/digital/EDRMS/index.aspx>

National Archives of the Netherlands has developed a set of functional requirements for information and archives management in government organisations


The Dutch Archives School has developed a set of functional requirements for information and archives management in government organisations. This set of functional requirements establishes the mainstream condition with which archives must comply in the provision of information services, in observance of Dutch archival law, and in accordance with the Dutch [NEN-ISO 15489-1 standard](#).

- <http://en.nationaalarchief.nl/information-management-and-creation-of-archives/records-management/standards-for-records->

The New South Wales government has a strategy to ensure the protection and management of digital government records

Future Proof is a state records initiative for the New South Wales Government in Australia. In 2007, the [Future Proof strategy](#) was established to help ensure the protection and management of digital government records. Its website, futureproof.records.nsw.gov.au, has become a centralised information source on a range of record keeping issues relevant to the New South Wales public sector, and to digital record keeping more broadly. It also contains the Future Proof blog, which is a communication tool about digital record keeping issues.

- <http://futureproof.records.nsw.gov.au/our-top-10-tips-for-a-great-edrms-implementation>

 The Queensland State Archives has developed guidelines to assist public authorities to plan for the introduction of an electronic document and records management system

The Queensland State Archives has developed guidelines to assist public authorities to plan for the introduction of an electronic document and records management system. The tool is particularly written for Chief Information Officers and other Senior Information Management and IT Managers implementing or considering the implementation of an electronic records management system.

- <http://www.archives.qld.gov.au/recordkeeping/grkdownloads/documents/edrms.pdf>

Avanzado Step: Crear un repositorio digital centralizado que permita acceder de manera permanente a los archivos y datos del gobierno

Justificación

Aunque es muy recomendable preservar los registros digitales de las decisiones, acciones y transacciones emprendidas por cada gobierno por su valor probatorio, hay serias dificultades para generarlos y gestionarlos a lo largo del tiempo, pudiendo tratarse de documentos en formatos ofimáticos habituales, correos electrónicos, imágenes, vídeos u otros formatos. La conservación digital implica ciertos retos, como el reconocimiento de formatos, la supervivencia del software, así como la compatibilidad y la degradación de los medios digitales.

Los repositorios digitales son herramientas para garantizar a largo plazo el acceso a archivos digitales. Además de salvaguardar la fiabilidad de los archivos, sirven no solo para demostrar que los datos procedentes de dichos archivos pueden efectivamente ser trazados hasta su origen, sino también para garantizar que archivos y datos no han sido manipulados. Los archivos nacionales, desde su responsabilidad institucional hacia la protección y la preservación de los archivos y registros públicos, deberían ser la autoridad competente en el desarrollo de repositorios digitales de información pública.

Los repositorios deberían emplear estándares y formatos abiertos que garanticen el acceso abierto a los contenidos recopilados con el paso del tiempo. Existen estándares reconocidos de forma internacional que indican los criterios para la creación de Repositorios Digitales Fiables (TDR) (ISO 14721) y su certificación (ISO 16363), de manera que se garantice la solidez técnica y organizativa de las iniciativas de preservación a largo plazo y cuidado de los archivos digitales.

Recomendaciones

1. Evaluar la creación de archivos en el ámbito gubernamental, haciendo hincapié en aquellos puntos de transacción donde la información sea generada por procesos y sistemas.
2. Examinar qué formatos tienen los archivos digitales empleados por en el ámbito público, así como los requisitos para su administración y conservación.
3. En el ámbito de la tecnología de la información, evaluar la infraestructura y la capacidad a la vista de la producción actual y futura de información digital.
4. Identificar y desarrollar una solución de repositorio digital que cumpla con las necesidades de la información pública y esté adaptada al entorno normativo.
5. Desarrollar procesos de recepción de documentación digital remitida por los distintos ámbitos de la administración, detallando los requisitos de metadatos y de formato.

6. Desarrollar políticas y procedimientos que garanticen una correcta administración y preservación de los archivos digitales tras su entrada en el repositorio digital.
7. Definir normas para la identificación y la autorización de usuarios de sistema, la administración de derechos de acceso, y las pistas de registro y auditoría.
8. Obtener una certificación independiente TDR del repositorio digital Seek independent third-party certification of the digital repository as a TDR.
9. Implantar programas de seguimiento y auditoría que prueben el cumplimiento de los requisitos TDR.

Estándares y directrices

- Sistemas de información de archivos abiertos (OAIS) (ISO 14721) http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57284
- Archivos digitales seguros: Atributos y responsabilidades (2002) <http://www.oclc.org/content/dam/research/activities/trustedrep/repositories.pdf?urlm=161690>
- Auditoría y certificación de archivos fiables: Criterios y lista de control http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf
- Auditoría y certificación de repositorios digitales (ISO 16363) http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510
- Método de Auditoría de Repositorios Digitales Basado en la Evaluación de Riesgos (DRAMBORA) <http://www.repositoryaudit.eu/>
- Nestor- Catálogo de criterios para un repositorio digital fiable http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_08-eng.pdf

Ejemplos por países

New Zealand provides options for improving digital repository in its Digital Continuity Action Plan

Archives New Zealand has published a Digital Continuity Action Plan. The objective of the action plan, which applies to public sector digital information, is to ensure that public sector digital information is trusted and accessible when it is needed now and in the future. In terms of digital repository systems, the Action Plan sets out several action points for consideration: (1) Implementation of the National Digital Heritage Archive; (2) Leverage the public sector's investment in existing digital continuity initiatives; (3) Ensure New Zealand public sector has comprehensive digital archiving capacity; and (4) Investigate cross-agency infrastructure for storage and retrieval of digital information.

- <http://archives.govt.nz/advice/government-digital-archive-programme/digital-continuity-action-plan/html-version>

Norway has established a central digital repository through its Noark5 and digital archive initiatives

In Norway, the Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs offers an Electronic Public Records System as part of the Norwegian Government's commitment to transparency and democracy within the public sector. Central government agencies use this tool daily to publicise metadata about the records they create online so that users can identify documents relevant to their interests and submit requests to see them. When these documents are a few years old, the National Archives of Norway receives the records from the ministries through a digital repository structure. In 2011, National Archives developed a 'smartphone app' to enable public access to records and data direct from its repositories.

- <http://www.arkivverket.no/eng/Public-Sector/Noark/Noark-5-English>
- http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/VC_Thurston_26_plenary1.pdf

Avanzado Step: Definir requisitos de metadatos homogéneos para toda la administración

Justificación

Para poder ser discernibles y accesibles a largo plazo, archivos y conjuntos de datos digitales deben ir acompañados de suficiente información contextual (metadatos), de manera que el control de los registros de actividad permitan garantizar la fiabilidad del sistema. Si los requisitos de metadatos son homogéneos, se reduce el coste de la agregación de registros o la migración de registros entre sistemas, ya que no hace falta eliminar metadatos sobrantes o añadir información contextual complementaria. Muchas organizaciones han elevado sus requisitos de metadatos estandarizados a requisitos funcionales para la administración de archivos documentales.


Recomendaciones

1. Evaluar los procedimientos de la administración para la creación, conservación y el uso de datos y metadatos.
2. Identificar un conjunto básico de elementos de metadatos a partir del cual quede suficientemente documentado el contexto original y la función de los registros documentados.
3. Con el fin de garantizar que se hayan identificado los elementos de metadatos adecuados, consultar con las partes interesadas, como funcionarios alto rango y técnicos.
4. Desarrollar requisitos de metadatos y publicarlos en forma de estándar, o incorporarlos a los estándares existentes de administración de archivos.
5. Garantizar que cualquier contrato público cuyo objeto sea el desarrollo de sistemas de información y comunicación incluya el requisito de cumplir con el estándar de metadatos. Por ejemplo, podría aprobarse el carácter obligatorio del de los estándares para sistemas gubernamentales.
6. Trabajar con grupos de auditoría y evaluación para garantizar una adecuada observancia de los requisitos de metadatos.

Estándares y directrices

- ISO 23081-2:2009 Información y Documentación – Procesos de gestión de documentos – Metadatos para la gestión de documentos http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50863


Ejemplos por países

 In Norway software for government must meet the Norwegian Archive Standard

Noark, which stands for 'Norwegian Archive Standard', has been the mandatory standard across public bodies since 1999 when the Archives Regulation was introduced in Norway. Noark 5, which builds on previous Noark standards, sets out requirements concerning record structure, metadata and functionality, but does not contain any obligations concerning how these requirements should actually be met in system development. Noark 5 therefore does not define

a system, but facilitates for different solutions.

- <http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Noark/Noark-5/English-version>
- http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/VC_Thurston_26_plenary1.pdf

 The United States has developed discretionary record-keeping standards which include metadata schemas

Given the high-level endorsement of the Department of Defense Standard DOD 5015.2 standard by the Department of Defense, digital records management system vendors have voluntarily chosen to comply with the standard and use it as a marketing advantage when bidding to supply systems to the US Government.

- <http://www.archives.gov/records-mgmt/initiatives/dod-standard-5015-2.html>

Innovador Step: Desarrollar una estrategia de control de calidad para conjuntos de datos públicos

Justificación

Las iniciativas de datos abiertos dependen en gran medida de la calidad, la fiabilidad y la accesibilidad de los archivos públicos de los que se extraen los conjuntos de datos. Si los archivos fuente no son fiables, los datos extraídos de esos archivos tampoco lo serán. Si los procedimientos de administración, de evaluación de la calidad y la integridad de los archivos son débiles o incompletos, puede ser muy complicado determinar la calidad y la integridad de los datos. Pero cuando se trabaja con controles adecuados en la administración de archivos y datos, con estándares y procedimientos de control de calidad eficaces, tanto el público como los funcionarios pueden confiar no solo en la fiabilidad de los datos extraídos de los archivos, sino en la existencia de un registro documental completo de las actividades del gobierno.

Recomendaciones


1. Identificar actividades de la administración pública que estén generando conjuntos de datos publicables en el marco de las iniciativas de datos abiertos.
2. Evaluar la calidad y la integridad de los conjuntos de datos, teniendo en cuenta principalmente la calidad e integridad de los archivos fuente (emplear modelos y técnicas de evaluación del riesgo allí donde sea posible).
3. Desarrollar estándares y procedimientos de control de la calidad en la preservación de archivos que estén basados en estándares y prácticas internacionales, garantizando una relación estrecha con los estándares de control de la calidad de aplicación en los conjuntos de datos públicos.
4. Desarrollar y aplicar estándares y procedimientos para la gestión de la relación documental entre conjuntos de datos y otro tipo de archivos o registros que documenten una determinada actividad o programa del gobierno.
5. Garantizar que el personal que genera y publica los conjuntos de datos esté formada en la aplicación de estándares y procedimientos.
6. Definir una estrategia de seguimiento y cumplimiento que garantice a largo plazo, por una parte, el seguimiento de la integridad y la calidad de los conjuntos de datos y de los archivos fuente, y por la otra, la relevancia y efectividad de

los estándares y prácticas de control de calidad.

Estándares y directrices

- Centro de Comisariado Digital <http://www.dcc.ac.uk/>
- Directorio de fuentes para la gestión de conjuntos de datos de interés del archivo de datos del Reino Unido <http://data-archive.ac.uk/create-manage/document/resources>


Ejemplos por países

 Archives New Zealand has developed a guide, "Managing Datasets", which provides some guidance for the management of datasets in public sector organisations

Archives New Zealand has published a factsheet, 'Managing Datasets', which provides some guidance for the management of datasets in public sector organisations. It explains why managing datasets is important, and offers guidance on how to plan for effective datasets management.

- <http://archives.govt.nz/advice/continuum-resource-kit/continuum-publications-html/f20-managing-datasets>

Medio ambiente

 **Autor principal:** [The Access Initiative](#)

Introducción

La calidad de la vida de las personas depende de que su medio ambiente sea saludable. Sin embargo, a menudo se toman decisiones con consecuencias sociales y medioambientales importantes sin tener en cuenta a las personas cuyos intereses están en juego. Con el objeto de salvaguardar la calidad del medio ambiente, es esencial dar más poder a vecinos, particulares y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.

La participación pública mejora la legitimidad de las decisiones, ayuda a que las partes interesadas incrementen su capacidad, mejora la implementación y la sostenibilidad de las decisiones (UNEP, 2012). Cuando existen procesos abiertos y transparentes, la ciudadanía es capaz de detectar problemas y amenazas, de involucrarse en los procesos de toma de decisiones, y de exigir responsabilidades a las agencias públicas, a los funcionarios y a las empresas (Foti et al, 2008). Además, también se consigue que el sector privado se ocupe de los problemas medioambientales en fases más tempranas y con menor coste.

El décimo principio de la Declaración de Río, de 1992, afirma que los problemas medioambientales reciben un mejor tratamiento cuando se cuenta con la participación de todos los ciudadanos (CNUDS, 1992), y se declara que cada persona deberá tener:

- **Aceso a la información medioambiental**
- **La oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones, y**
- **Acceso real a la justicia**

Muchos países, independientemente de su grado de desarrollo económico, han promovido estos pilares como aspiraciones políticas, o incluso los han elevado a derechos jurídicos. Sin embargo, incluso en los lugares donde más se ha avanzado, queda mucho por hacer si se persigue que la implementación del marco legislativo tenga sentido para toda la ciudadanía.

References

UNCSD, 1992, Rio Declaration

UNEP, 2012, Bali Guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters, http://www.unep.org/civil-society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf

Foti, Joseph with Lalanath de Silva, Heather McGray, Linda Shaffer, Jonathan Talbot, and Jacob Werksman, 2008, Voice and Choice: Opening the Door to Environmental Democracy, Washington DC: WRI. http://pdf.wri.org/voice_and_choice.pdf

Organizaciones
especializadas

The Access Initiative <http://www.accessinitiative.org/>

United Nations Environmental Programme (UNEP) <http://www.unep.org/environmentalgovernance/>

United Nations Institute for Training and Research: Principle 10 Project <http://www.unitar.org/egg/rio-principle-10-projects>

United National Economic Commission for Europe <http://live.unece.org/env/pp/welcome.html>

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Establecer mecanismos independientes de acceso a la justicia en materia medioambiental
- Establecer obligaciones legales sobre la recogida y producción de información medioambiental
- Establecer procedimientos para incluir a grupos pobres y marginales en la toma de decisiones medioambientales
- Introducir comentarios públicos y audiencias públicas en decisiones relacionadas con el medio ambiente

Intermedio

- Publicar las decisiones, las respuestas y las razones de las aprobaciones medioambientales

Avanzado

- Apoyar el acceso y el uso de la información medioambiental por parte de ciudadanos y organizaciones
- Desarrollar programas de divulgación pública sobre el impacto ambiental de las corporaciones
- Reducir las costas que conlleva iniciar y llevar a cabo un litigio en materia medioambiental

Detailed Recommendations

Inicial Step: Establecer mecanismos independientes de acceso a la justicia en materia medioambiental

Justificación

Es fundamental que los ciudadanos puedan elevarse a árbitros imparciales, de manera que puedan resolver disputas sobre el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones en cuestiones medioambientales. Hay cuatro objetivos fundamentales en el contexto de la toma de decisiones medioambientales:

- Reforzar la libertad de información, permitiendo que la sociedad civil presione a los gobiernos para obtener la información que de otra manera se les oculta
- Dotar a la ciudadanía de los instrumentos necesarios para participar plenamente en la toma de decisiones en materia medioambiental
- Crear la oportunidad para que se vigile el cumplimiento de leyes que, de lo contrario, podrían no ser respetadas
- Incrementar las herramientas de la ciudadanía para exigir remedios y compensaciones por perjuicios ambientales, de manera que se puedan exigir responsabilidades a los funcionarios y fomentar que sigan los cauces adecuados en la toma de decisiones medioambientales y el cumplimiento de la legislación vigente.

Hay distintas instituciones que pueden sancionar fórmulas de compensación y remedio: el poder judicial, foros administrativos del poder ejecutivo, mecanismos extrajudiciales de resolución de controversias, o incluso formas tradicionales de mediación. Las instituciones con potestad judicial podrían ordenar al gobierno que revise o anule una decisión, obligar a que un agente contaminador interrumpa sus actividades, o compensar a las víctimas. El acceso a la justicia no significa que la parte demandante vaya a ganar siempre, sino que los derechos y valores ambientales están protegidos por la ley.

Recomendaciones

Al crear juzgados, tanto con carácter ordinario como especializado, con jurisprudencia en materia ambiental, se deben tomar ciertas decisiones en materia de diseño institucional. Estas decisiones afectarán notablemente al desempeño de los juzgados. Al crear estos juzgados, los gobiernos deberían tener en cuenta:

1. Si el tribunal o juzgado será un órgano administrativo o jurisdiccional, y con qué grado de independencia deberá actuar
2. Sobre qué leyes, políticas y principios tendrá jurisdicción el tribunal o juzgado
3. Si el tribunal o juzgado tendrá rango y jerarquía de primera instancia, intermedio (de apelación), o supremo (sentencia final), si pertenecerá al orden civil, al penal o al administrativo, o a una combinación de los tres
4. La jurisdicción territorial, que puede ir desde una población o ciudad a una región o estado, hasta la totalidad del país
5. Si la jurisdicción conllevará que la carga de trabajo sea muy baja, muy alta o la adecuada
6. En materia de participación jurídica, que deberá ser amplia, indicar qué tipo de cualificaciones se exigirán a las partes para que puedan emprender acciones en los juzgados o participar de alguna otra forma en un caso
7. Qué tasas tendrán que pagar las partes para iniciar un proceso y llevarlo hasta la decisión judicial, además de considerar medidas que puedan reducir estos costes
8. Por qué medios se procurará el juzgado o tribunal informaciones adecuadas e imparciales sobre los problemas científico técnicos, cada vez más complejos, relacionados con los casos ambientales

9. Establecer sistemas alternativos para la resolución de controversias, a menudo más económicos, más rápidos y mejores para resolver conflictos ambientales, y analizar cómo se pueden integrar en el procedimiento
10. Cualificaciones, formación, mandato, salario para los responsables de la toma de decisiones, son factores que garantizan la calidad de las decisiones judiciales.
11. Qué mecanismos procesales permitirán al juzgado o tribunal agilizar el proceso de manera eficaz, eficiente y económica
12. Qué poderes se necesitan para que las decisiones de los juzgados o tribunales tengan eficacia, desde acuerdos fruto de la mediación, como mandamientos judiciales, multas o penas de cárcel, y cualquier alternativa creativa.

Estándares y directrices

- Programa ambiental de las Naciones Unidas: directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales http://www.unep.org/civil-society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf
- Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente: Principios de Johannesburgo sobre el papel que juegan el Derecho y el Desarrollo Sostenible <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?ArticleID=3115&DocumentID=259>

Ejemplos por países

India's Green Tribunal enables citizens to get access to justice in environmental protection cases

India's National Green Tribunal was established in 2010 to ensure speedy disposal of cases relating to environmental protection and natural resources and facilitate the enforcement of legal rights relating to the environment. It handles a wide range of matters including the conservation of forests and providing compensation for damages and decisions on environmental permitting. The body is a specialised tribunal with the jurisdiction of higher courts. It grants wide standing for citizens to place cases before the tribunal and provides access to all its decisions online.

- <http://envfor.nic.in/rules-regulations/national-green-tribunal-ngt>

Inicial Step: Establecer obligaciones legales sobre la recogida y producción de información medioambiental

Justificación

Una ejecución eficaz de las leyes de Derecho de Acceso la Información (DAI) ayuda a expandir el acceso a la información medioambiental, que es fundamental para que las personas puedan hacer juicios bien fundados.

En muchos países donde se han aprobado leyes DAI, en realidad la información en manos del gobierno sigue estando sujeta a un proceso subjetivo e inconsistente. Aprobar legislación sobre las cuentas suele ser tan solo el primer paso en el proceso que lleva a garantizar la libertad de información. El área sobre [DAI](#) ofrece orientación sobre cómo puede reforzarse e implementarse esta legislación. Many countries have enacted RTI laws, but in practice obtaining government-held information can still be a subjective and inconsistent process.

Para que el acceso a la información medioambiental cobre pleno sentido, los gobiernos tienen que llevar la iniciativa al

recoger, analizar y difundir la información. Sin embargo, la mayor parte de las leyes sobre información solicitan a las agencias públicas que divulguen información de manera reactiva, en respuesta a peticiones concretas. Por ejemplo, más de 100 países cuentan con leyes que exigen que se evalúe el impacto ambiental de los proyectos, pero pocas indican con claridad que estos documentos públicos deban ser publicados activamente y sin costes. Los programas de publicidad activa que se centran en la información medioambiental, permiten un mejor acceso a este tipo fundamental de información, y fomentan la prevención de la contaminación, la reducción de las emisiones, el buen comportamiento corporativo, el cumplimiento de las leyes y la resolución de problemas.

Recomendaciones

1. Adoptar e implementar una ley de publicidad activa sobre información medioambiental. Con ella se debería garantizar la publicación oportuna, normalizada y accesible de los cinco tipos más importante de información:
 - **Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA)** sobre el emplazamiento, el alcance, el objeto y la naturaleza del proyecto, el impacto ambiental previsto y la evaluación de alternativas al proyecto menos perjudiciales para el medio ambiente
 - **Datos sobre la calidad del aire y el agua**, incluso los datos sobre la contaminación del aire y del agua, deberían publicarse en sitios web públicos y en lugares sobradamente conocidos.
 - **Permisos, concesiones y licencias para proyectos de desarrollo e instalaciones industriales.**
 - **Seguimiento de instalaciones y proyectos, y datos de la inspección**, recogidos durante el seguimiento de la conformidad y la investigación de reclamaciones. A menudo esta información se obtiene mediante registros de emisiones y transferencias de contaminantes (RETC).
 - **Informes de situación medioambiental** con carácter periódico (cada 2 o 3 años), **State of the environment reports** issued regularly (every 2–3 years) por la máxima autoridad ministerial del ramo. Estos informes evalúan aspectos tales como la calidad del aire y del agua en todo el país, las amenazas y los desafíos medioambientales, los indicadores medioambientales, las tendencias y los cambios de política pública que se consideran necesarios para proteger, preservar y mejorar el medio ambiente.
2. Garantizar que las autoridades públicas competentes recojan y actualicen con regularidad la información medioambiental pertinente, estableciendo sistemas que aseguren un flujo de información adecuado sobre las actividades, tanto existentes como proyectadas, que puedan afectar de manera sensible al medio ambiente. La información debe tener un carácter sistemático, oportuno, fiable, completo, accesible y exacto, además de ser fácil de manejar y libre de coste para el usuario.
3. Poner la información en internet a disposición del público, y en la medida de lo posible en formatos estandarizados y legibles a máquina. Además, debe divulgarse la información a la población local interesada en formatos masivos, como la televisión, la radio, la prensa, cartelería y teléfonos móviles.
4. Exigir al los empleados de las Administraciones Públicas que rindan cuentas por sus obligaciones en materia de acceso a la información, incluyéndolas en los perfiles de los puestos, evaluando el rendimiento según su cumplimiento de dichas obligaciones (y ajustando la retribución en función del mismo).

Estándares y directrices


- CEPE: Convención de Aarhus: Guía para la implementación <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/acig.pdf>
- Declaración de Yakarta para reforzar el Derecho a información ambiental para las personas y el medio ambiente <http://insights.wri.org/news/2013/05/new-jakarta-declaration-aims-strengthen-rights-environmental-information-asia>
- Programa ambiental de las Naciones Unidas: directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales http://www.unep.org/civil-society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf

Ejemplos por países

 Chile requires that environmental information is published in an accessible form

In Chile a law was approved in 2012 which created the Agency for Environmental Assessment. Specific language in the Law establishes the obligation for the government and the investors to deliver information to local communities in a format which is accessible, taking into account their socio and cultural background as well as their level of education.

- <http://www.eldinamo.cl/blog/mejorar-la-informacion-y-la-participacion-en-las-decisiones-ambientales-no-puede-esperar-mas/>

 Ghana has developed an environmental law database and placed all its environmental legislation online

Ghana is also the first African country to create AKOBEN an environmental performance rating and disclosure initiative of pollution by the Environmental Protection Agency (EPA), which provides access to information on the release of mining and other wastes into the environment.

- <http://www.epaghanaakoben.org/>

 Hungary publishes a state of the environment report

Hungary's Ministry of the Environment and Water produces three publications: State of the Environment Indicators, The Environmental Data Compendium, and The Statistical Compendium (joint publication with other ministries). The Ministry designates a team of scientists and specialists to gather the data for the three reports, and the reports contain a wide range of indicators and data. However less progress has been made in communicating these reports in user friendly ways.

- http://pdf.wri.org/voice_and_choice.pdf

 Thailand requires environmental information to be proactively released

Thailand has adopted rules that specify the type of environmental and health information that must be proactively released under their [Official Information Act art 9\(8\)](#).

- <http://www.accessinitiative.org/blog/2011/10/partner-spotlight-thailand-environment-institute>

Inicial Step: Establecer procedimientos para incluir a grupos pobres y marginales en la toma de decisiones medioambientales

Justificación

A menudo se toman decisiones con consecuencias sociales y medioambientales importantes sin tener en cuenta a las personas cuyos intereses están en juego. Es muy habitual no contar con las personas más afectadas por la contaminación local, la pérdida de terreno de acceso a los recursos naturales. La subsistencia y la forma de vida de las personas en situación de pobreza depende con frecuencia de los recursos naturales, lo que además de hacerlas más vulnerables ante los riesgos ambientales, provoca que las consecuencias de la exclusión puedan ser especialmente graves.

Las personas en situación de pobreza se enfrentan a un conjunto de barreras de acceso de gran envergadura, entre las cuales es obligado citar los bajos niveles de alfabetización, costes elevados (incluyendo el coste de la corrupción), el riesgo que puede suponer la participación, la falta de documentación, documentos legales o derechos reconocidos a la explotación de un recurso, y las dificultades al enfrentarse a información técnica. Además, las normas culturales que regulan de quién se espera que hable en público pueden agravar la exclusión.

Recomendaciones

1. Especificar el derecho de las personas en situación de pobreza, grupos marginales y comunidades tribales a participar en las consultas medioambientales, haciendo obligatoria la consulta a estos grupos por parte de los responsables de la toma de decisiones
2. Establecer directrices operativas para que las agencias cuenten con las comunidades pobres y excluidas. Por ejemplo, se puede entregar documentación de referencia sencilla pero exacta redactada en las lenguas locales o identificar a intermediarios, además de tratar los costes y otras barreras que bloquean la participación.
3. Orientar los esfuerzos a la entrega de información, con carácter prioritario, a quienes se vean más afectados por las decisiones sobre los recursos naturales. Esto pasa por que los empleados públicos dediquen tiempo y energía a detectar el público al que debe ir dirigida la información, y crear campañas informativas adaptadas a las necesidades de dicha audiencia.

Estándares y directrices

- ONU: Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos <http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>
- CEPE: Convención de Aarhus <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>
- ONU: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>
- ONU: Declaración del Milenio <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>
- ONU: Declaración sobre el Derecho al Desarrollo <http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>
- ONU: Declaración sobre los Derechos de los pueblos indígenas http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
- WRI: Un asiento en la mesa http://pdf.wri.org/a_seat_at_the_table.pdf

Ejemplos por países

 Environmental impact assessment regulations in Chile make special provisions for indigenous people

According to recently enacted Environmental Impact Assessment Procedures in Chile, indigenous people are considered protected populations. Every time that a project or activity may affect them, they have the right to engage in the decision-making process.

- <http://www.iaia.org/conferences/iaia13/proceedings/Final%20papers%20review%20process%2013/Indigenous%20Consultation%20and%20Participation%20under%20Chilean%20Environmental%20Impact%20Assessment%20.pdf>

In the Philippines local people's organisations must be included in the management board for protected areas

The Philippines has enacted a law on the establishment of national protected areas. The law explicitly acknowledges that many poor people (and, in some areas, communities of indigenous peoples) have either settled within national park boundaries or use national park resources to support livelihoods including slash-and-burn agriculture and the gathering of timber and non-timber products.

To engage poor users in national park management and to improve a sense of community ownership for park protection, the law established a Protected Area Management Board which must include members of people's organisations or local non-governmental organisations.

- http://pdf.wri.org/a_seat_at_the_table.pdf

South Africa has guidelines on involving excluded groups in environmental decision-making

In South Africa, there are legal provisions for citizens to contribute in environmental impact assessment processes. The government has a constitutional obligation to encourage public participation by local communities in matters that affects their day to day lives. Several relevant departments have also developed guidelines and policies on public participation in environmental impact assessments, particularly on how to engage excluded groups, such as rural population, poor people, black women, illiterate people, and young people.

- <http://www.dwaf.gov.za/Documents/Other/GPPG/guide.pdf>
- <http://www.saiea.com/calabash/html/South%20Africa.html#2>

The US established an executive order on environmental justice for minority and poor populations

In 1994, following public concern that toxic waste sites were disproportionately located near low-income and minority populations, the US Government enacted Executive Order 12898 '[Federal Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations](#)'.

The regulation requires specific efforts to inform and involve poor and minority communities in agency decisions that affect the environment, and established an Interagency Working Group on Environmental Justice to design a set of operational guidelines for federal agencies. It also mandated that federal agencies develop strategies to improve and ensure enforcement of environmental laws in poor and minority communities; foster greater public participation; and improve information collection on environmental health and resource consumption in poor and minority communities.

There have been some challenges in the implementation of the law as a result of lack of funding and political will. The presidential memorandum exempted the regulation from any sort of legal action, stating that it, "is not intended to create any right, benefit, or trust responsibility, substantive or procedural, enforceable by law or by equity by a party against the United States, its agencies, its officers or any person." Because of this, the Order is arguably not reviewable by any court.

- http://pdf.wri.org/a_seat_at_the_table.pdf

Inicial Step: Introducir comentarios públicos y audiencias públicas en decisiones relacionadas con el medio ambiente

Justificación

La toma de decisiones relacionada con asuntos medioambientales tiene lugar mediante la preparación de evaluaciones de impacto ambiental y procesos de autorización, pero también mediante legislación, políticas públicas y organismos de planificación.

La toma de decisiones puede llevarse a cabo de muchas formas. A un extremo del espectro, se puede tratar de decisiones directas en las cuales los agentes interesados toman una decisión de manera colectiva, ya sea por mayoría o por consenso. Al otro extremo del espectro se encuentra la toma de decisiones indirecta, que tiene lugar cuando una tercera parte, generalmente un funcionario público, toma la decisión sin contar con la participación de las partes interesadas.

En cualquiera de los casos, las mejores decisiones se toman cuando se escucha a un número elevado de partes interesadas. Los responsables de la toma de decisiones deberían escuchar y responder, en la medida de lo posible, a estas voces. Los ciudadanos deberían conocer su derecho de participación y deberían recibir orientación sobre cómo, cuándo y dónde se puede ejercer ese derecho.

Recomendaciones

1. Introducir procedimientos obligatorios y de bajo coste para contar con comentarios públicos y audiencias públicas en los procedimientos de toma de decisiones que estén relacionados con nuevos proyectos de desarrollo, la ubicación y el cumplimiento operativo de las instalaciones industriales, así como la creación y la revisión de políticas, planes, legislación y reglamentos nacionales, estatales, provinciales o locales en materia medioambiental. Este punto debería aplicarse a todos los rangos de la administración
2. Garantizar que los procesos participativos se dan a conocer con el debido adelanto, minimizando las barreras logísticas.
3. Las decisiones deberían publicarse antes de ser implementadas, de manera que las personas afectadas puedan exigir compensaciones o medidas judiciales, si lo desean.

Estándares y directrices

- IAIA: Principios de mejores prácticas en materia de participación pública
http://https://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/SP4_spa.pdf
- Programa ambiental de las Naciones Unidas: directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales
http://www.unep.org/civil-society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf

Ejemplos por países

 Ghana has taken steps to strengthen participation in environmental impact assessments

Ghana's [Environmental Assessment Regulations](#) from 1999 established a framework for public participation in Environmental Impact Assessments (EIAs). This framework has been progressively strengthened. The regulations make it illegal for a project to proceed without an approved environmental impact statement and permit and require that developers make environmental management plans publicly available.

EIA processes must be announced ahead of time in a variety of ways, including newspaper ads and announcements on the national radio and television stations. Local media—such as the beating of the “gong gong”—are used in more remote areas of the country, and paper notices must be posted in areas likely to feel the effects of the project.

In addition, the project proponent must describe the project and the predicted environmental impact in the local language. Members of the local community—including invited leaders, farmers' organisations, and NGOs—are given time to air their opinions, and the project proponent is expected to respond.

The success of the EIA process is evident in a number of outcomes. Public hearings have affected many decisions in Ghana, including the size of a shopping mall, the siting of a Shell Company service station, and involuntary resettlement in gold mining projects. In an internal survey, the government of Ghana found that 76.2 percent of government institutions used EIA data, and that 66 percent of those did so regularly, including in the siting, design, and implementation of projects.

- http://pdf.wri.org/voice_and_choice.pdf

 In Austria the law provides for citizens groups to participate in Environmental Impact Assessment

Austria's Federal Act on Environmental Impact Assessment law from 2000 grants standing to neighbouring public, citizens' groups, and certain environmental organisations to participate and make appeals throughout the environment impact assessment process. The law also requires the government authority to publicly announce when a proposed project is subject to an environment impact assessment and provides that citizens may participate in post-approval monitoring of the development.

- http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1993_697/ERV_1993_697.pdf

Intermedio Step: Publicar las decisiones, las respuestas y las razones de las aprobaciones medioambientales

Justificación

El factor que, considerado de forma aislada, tiene una mayor importancia cuando se busca, por una parte, mejorar la rendición de cuentas en las decisiones relacionadas con el medio ambiente, y por la otra, paliar el abuso y las malas prácticas de las autoridades públicas, es la obligación de presentar por escrito las razones que fundamenta la decisión. Cuando los responsables de la toma de decisiones se ven obligados a publicar en forma escrita las razones de sus decisiones, se garantiza que tengan en cuenta aspectos pertinentes, que descarten aspectos irrelevantes y que se abran al escrutinio del público, de las partes interesadas y de otros mecanismos de rendición de cuentas.

Al involucrar al público en un proceso de aprobación medioambiental se le puede solicitar que envíe comentarios u objeciones al nuevo desarrollo, de manera que se pueda influir sobre el resultado de la decisión de la autoridad

competente. Las respuestas a los comentarios del público sirven para que el público comprenda que se le ha tenido en cuenta, al tiempo que establece una base desde la que juzgar si el proceso de toma de decisiones liderado por la autoridad competente ha sido razonable.

Recomendaciones

1. Establecer la obligación de publicar por escrito las razones que justifican las decisiones tomadas en relación con la aprobación, el rechazo o la modificación de proyectos de desarrollo y permisos ambientales.
2. Esto debería incluir el requisito de publicar un resumen de objeciones, comentarios y propuestas de cambios sobre las decisiones relativas a los permisos, la planificación y los aspectos regulativos.

Estándares y directrices

- Instituto de Recursos Mundiales: Principios y procedimientos administrativos
<http://www.wri.org/events/administrative-fairness-environmental-decision-making-stakeholder-workshop>
- Programa ambiental de las Naciones Unidas: directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales
http://www.unep.org/civil-society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf

Ejemplos por países

In Canada, members of the public can participate at various stages of the environmental assessment process.

To start with, when the Environment Agency receives a complete project description, it must consider whether or not an environmental assessment is required. During this time the public can comment on the proposed project and its potential for causing adverse environmental effects. When it has been decided that an environmental assessment is required, the public is given an opportunity to comment on which aspects of the environment may be affected by the project and what should be examined during the environmental assessment.

Once the proponent has submitted its environmental impact statement, the public is again invited to comment on the identified potential environmental effects and the measures to prevent or mitigate those effects. Finally, the public is provided an opportunity to comment on the draft environmental assessment report. This document includes the Agency's conclusions regarding the potential environmental effects of the project, the mitigation measures that were considered and the significance of the remaining adverse environmental effects.

At the end of the environmental assessment, a decision statement is issued that states whether the proposed project is likely to cause significant adverse environmental effects. It includes conditions, consisting of mitigation measures and a follow-up program that the proponent must fulfil to proceed with the project. If a proposed project is likely to cause significant adverse environmental effects, it is referred to the Governor in Council (Cabinet) to determine whether the environmental effects are justified in the circumstances. The conclusions of the Governor in Council would be included in the decision statement.

- <http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B053F859-1>

###

In the Netherlands, the process of conducting Strategic Environmental Assessments, for which the Ministry of Infrastructure and the Environment are responsible, builds on both transparency and participation. When a Strategic Environmental Assessment report gets published, the public is invited to submit their views. The public inputs, in turn, become part of the public record and fed into the work of the Netherlands Commission for Environmental Assessment (NCEA) which reviews all Strategic Environmental Assessment reports and publishes an assessment documenting the response to major concerns.

- <http://www.eia.nl/en/countries/eu/netherlands/sea>

Avanzado Step: Apoyar el acceso y el uso de la información medioambiental por parte de ciudadanos y organizaciones

Justificación

A menudo, la toma de decisiones medioambientales implica manejar datos complejos, conceptos técnicos y distintas alternativas. Muchos gobiernos, por lo tanto, han reconocido la necesidad de mejorar la capacidad de emplear dichos datos mediante orientación y educación dirigida a los ciudadanos. Las Organizaciones de la Sociedad Civil juegan un papel fundamental a la hora de organizar la demanda de acceso a la información medioambiental, ya que educar al público general acerca de los distintos conceptos y problemas de este ámbito, y a los funcionarios en materia de acceso y participación.


Recomendaciones

1. Exigir a las autoridades que mantengan y publiquen una lista de organizaciones y medios a los que sea importante enviar información ambiental y oportunidades de participación, de manera que toda la información medioambiental de una zona determinada llegue tanto a los cargos electos como a las organizaciones no gubernamentales y a los medios.
2. Con el objetivo de mejorar la capacidad de los ciudadanos de acceder a la información, aportar directrices y manuales de fácil comprensión en los que se trate cómo y dónde se puede acceder a la información medioambiental. En muchos países, los gobiernos han desarrollado directrices y manuales en colaboración estrecha con Organizaciones de la Sociedad Civil.
3. Considerar la concesión de ayudas para apoyar a la población, el establecimiento de institutos de formación, y la formación de las OSC, todo ello con rango local y vecinal.

Estándares y directrices

- Declaración de Yakarta para reforzar el Derecho a información ambiental para las personas y el medio ambiente <http://insights.wri.org/news/2013/05/new-jakarta-declaration-aims-strengthen-rights-environmental-information-asia>
- WRI: Un asiento en la mesa http://pdf.wri.org/a_seat_at_the_table.pdf

Ejemplos por países

 The Mexican government has established an outreach partnership with local NGOs

Several Mexican Non-governmental organisations have entered into a strategic partnership with the Mexican

government through the Secretary of Environment and Natural Resources (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT). The partnership has resulted in an agreement to implement outreach actions on access to environmental information and participation and justice, including workshops and guidelines.

- <http://www.accessinitiative.org/country/mexico>

Avanzado Step: Desarrollar programas de divulgación pública sobre el impacto ambiental de las corporaciones

Justificación

Las corporaciones tienen un gran impacto sobre el medio ambiente en todas las escalas: local, nacional e internacional. Es necesario contar con información sobre las políticas corporativas en materia de sostenibilidad, contaminación y uso de recursos naturales para exigir que cumplan con los estándares nacionales e internacionales de protección medioambiental. Sin embargo, en muchas ocasiones los actores corporativos tienen la capacidad de seguir actuando en secreto. Los países necesitan buenas herramientas de datos para tratar la problemática medioambiental y comunicar el riesgo que representan las corporaciones.

Recomendaciones

Pasos que deben tomar los gobiernos para mejorar el acceso a la información medioambiental en el ámbito corporativo:

1. Desarrollar programas de divulgación pública que comuniquen información sobre la calidad del aire y del agua, además de los desechos presentes en el medio ambiente. Estos programas serían desarrollados por corporaciones privadas y empresas de titularidad pública, que reconocerían su responsabilidad sobre la prevención de la contaminación y de las emisiones, además de sobre la propia ética corporativa.
2. Proporcionar información medioambiental en un formato reutilizable y comprensible, que realmente explique a los habitantes cuáles son los riesgos a los que se exponen.
3. Los datos sobre emisiones y desechos del sector corporativo deberían enviarse al gobierno, habilitando al seguimiento del medio ambiente. Esta información debería publicarse en aras del interés general, y nunca tener carácter de información confidencial de tipo mercantil, ya que está directamente relacionada con el medio ambiente y la salud pública.

Estándares y directrices

- CEPE: Convención de Aarhus <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>
- Declaración de Yakarta para reforzar el Derecho a información ambiental para las personas y el medio ambiente <http://insights.wri.org/news/2013/05/new-jakarta-declaration-aims-strengthen-rights-environmental-information-asia>
- FMI – Guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los recursos naturales <http://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/guides.pdf>
- Open Data Index <http://https://index.okfn.org/>
- UNITR: PRTR: Learn <http://prtr.unitar.org/en>

Avanzado Step: Reducir las costas que conlleva iniciar y llevar a cabo un litigio en materia medioambiental

Justificación

Los foros judiciales y administrativos pueden ser caros y lentos. Las personas en situación de pobreza pueden tener especiales dificultades para emplear mecanismos jurídicos debido a las costas, a problemas técnicos y a limitaciones legales.

Recomendaciones

Algunas de las medidas que se pueden tomar por parte de la administración para reducir el coste de los litigios medioambientales para personas físicas son:

1. Fomentar servicios jurídicos gratuitos, por ejemplo con códigos fiscales que permitan deducir las horas donadas
2. Eximir o subvencionar los costes de los litigios en casos de interés público
3. Prestar servicios legales subvencionales, ya sea directamente mediante el Defensor del Pueblo y defensores locales, o mediante el establecimiento de incentivos dirigidos a organizaciones intermediarias
4. Establecer mecanismos alternativos de resolución de controversias, como la conciliación, la mediación o el arbitraje.

Estándares y directrices

- CEPE: Convención de Aarhus <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente: Principios de Johannesburgo sobre el papel que juegan el Derecho y el Desarrollo Sostenible <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?ArticleID=3115&DocumentID=259>

Ejemplos por países

The Philippines has established special courts for environmental cases

In January 2008, the Philippines issued an Administrative Order Re: Designation of Special Courts to Hear, Try and Decide Environmental Cases. As a result, 117 environmental courts were created to hear a wide range of cases that addressed the protection of the environment and natural resources, including air, marine pollution forest and fisheries cases. Rules of procedure for environmental cases were especially designed to provide a simplified, speedy and inexpensive process for enforcing environmental rights and duties in line with the Constitution, existing laws, rules and regulations, and international agreements.

- <http://www.wri.org/our-work/top-outcome/india-and-philippines-improve-access-environmental-justice>

The US Toxics Release Inventory programme provides information on toxic discharges by corporations

Following the Bhopal tragedy in India and a serious chemical release in West Virginia in 1985, the US Toxic Release Inventory (TRI) Programme was created in 1986 as part of the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA).


The TRI was part of a new approach to environmental protection. By making information about industrial management of toxic chemicals available to the public it aims to create incentive for companies to improve environmental performance. There are currently over 650 chemicals covered by the TRI Program. Facilities that manufacture, process or otherwise use these chemicals in amounts above established levels must submit annual TRI reports on each chemical.

Since the TRI was launched, environmental agencies across the world have increasingly implemented their own programmes using TRI as a model. Currently, at least 50 countries have fully established Pollutant Release and Transfer Registers or have implemented pilot programmes.

- <http://www2.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program>
- <http://prtr.unitar.org/en/prtr-initiatives-map>

No hay compromisos en este nivel

Participación ciudadana

 Autor principal: [Involve](#)

Introducción

La participación ciudadana es el corazón del gobierno abierto, el factor bajo el que se incluyen muchas de las áreas de esta guía. La ciudadanía activa es un enlace vital entre la transparencia y la rendición de cuentas. La Alianza para el Gobierno Abierto reconoce este punto entre sus [criterios de elegibilidad](#), y afirma que "Un gobierno abierto requiere de apertura para la participación e interacción ciudadana en la creación de políticas y formas de gobernanza, lo cual incluye la protección básica de las libertades civiles" (Alianza para el Gobierno Abierto).

En un mundo de complejidad creciente, las contribuciones de la ciudadanía son un recurso imprescindible para el diseño de políticas. Una buena toma de decisiones necesita del conocimiento, las experiencias, puntos de vista y valores del público. La implementación de decisiones difíciles depende en buena medida de la aprobación y el apoyo de la ciudadanía. A menos que los ciudadanos comprendan la decisión y se involucren en la misma, la confianza pronto se echa a perder (OECD, 2009).

Las libertades civiles son los cimientos que permiten a las personas participar sin miedo y disentir pacíficamente entre ellos y con el gobierno. Los derechos humanos básicos, entre los cuales la libertad de expresión y de prensa, la libertad religiosa, la libertad de reunión y asociación, y el derecho a un juicio justo son vitales para alimentar una cultura política en la que los ciudadanos deseen participar en el debate público y puedan hacerlo.

Muchísimas personas en todo el planeta expresan con insistencia con un sistema político que solo les permite involucrarse en las tareas de gobierno mediante elecciones periódicas. Además, se ven desalentados por cómo la toma de decisiones parece estar controlada por estrechas élites políticas y económicas. Es importante que la participación ciudadana se diseñe correctamente, cuente con recursos adecuados y nazca del deseo genuino de involucrar al público y de tener en cuenta sus aportaciones. Unos cauces bien diseñados de participación ciudadana pueden promover un funcionamiento democrático más eficiente, legitimar al gobierno, implementar con éxito nuevas medidas y lograr nuevos resultados sociales. Una mala práctica participativa puede acarrear malas decisiones y el desengaño ciudadano (Brodie et al, 2011).

Para superar el desengaño ciudadano y la falta de participación, y para responder verdaderamente a la ciudadanía, es necesario un cambio cultural en el modo de interactuar y cooperar con el público de los gobiernos mediante la incorporación de nuevos mecanismos para escuchar las voces de los ciudadanos, tenerlas en cuenta e institucionalizarlas en el comportamiento y la cultura de las instituciones públicas.

NB: Nuestro uso de la palabra "ciudadano" en este capítulo debe entenderse en el sentido más amplio posible, que incluye a todos los habitantes de un país o localidad. Existe la preocupación razonable de que este término pueda ser utilizado para excluir a los grupos de personas sin derecho a voto o no nacionalizados en un país determinado, incluyendo a niños, jóvenes, migrantes y refugiados. No es esta nuestra intención: de hecho, deberían realizarse esfuerzos especiales para conseguir involucrar a estos grupos en las decisiones que afectan a sus vidas.

References

OECD, 2009, Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services

Brodie, E; Hughes, T; Jochum, V; Miller, S; Ockenden, N; & Warburton, D, 2011, Pathways through Participation: What creates and sustains active citizenship?

Organizaciones
especializadas

Civicus <http://www.civicus.org>

Involve <http://www.involve.org.uk>

Deliberative Democracy Consortium <http://www.deliberative-democracy.net>

International Association for Public Participation <http://www.iap2.org>

Society for Participatory Research in Asia <http://www.pria.org/>

Twaweza East Africa <http://www.twaweza.org>

MKSS India <http://www.mkssindia.org>

National Coalition for Dialogue and Deliberation US <http://ncdd.org>

Division for Public Administration and Development Management, United Nations Department of Economic and Social Affairs
<http://www.unpan.org/DPADM>

World Bank Social Development Department <http://www.worldbank.org/socialdevelopment>

International Center for Not-for-profit Law <http://www.icnl.org>

European Center for Not-for-profit Law <http://www.ecnl.org.hu>

International Association of Facilitators <http://www.iaf-world.org>

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Involucrar a los ciudadanos en la evaluación de las instituciones de gobierno y en la detección de reformas prioritarias
- Reformar la legislación para crear un ambiente que favorezca la actuación de organizaciones de la sociedad civil

Intermedio

- Desarrollar un pacto entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para alcanzar objetivos comunes
- Favorecer el uso ciudadano de herramientas digitales
- Involucrar a los ciudadanos en procesos deliberativos sobre un asunto político prioritario
- Promover legislación y directrices sobre consultas ciudadanas para el desarrollo de políticas públicas

Avanzado

- Crear y financiar un centro especializado para la institucionalización de la participación ciudadana
- Establecer mecanismos que permitan la plena integración participativa en la vida cívica de niños y jóvenes
- Incluir la participación ciudadana como una competencia principal de los cargos públicos

Innovador

- Diseñar nuevas fórmulas de participación ciudadana

Detailed Recommendations

Inicial Step: Involucrar a los ciudadanos en la evaluación de las instituciones de gobierno y en la detección de reformas prioritarias

Justificación

Durante las últimas tres décadas, la democracia ha echado raíces en muchas partes del mundo, siendo ahora la forma dominante de gobierno. Sin embargo, la democracia perfecta no existe, pudiendo asumir muchas formas determinadas por las realidades de cada país y las aspiraciones de sus gentes.

Para que una democracia sea eficiente, tiene que conectar las demandas y aspiraciones del pueblo con instituciones políticas responsables y representativas. La función del ciudadano como engranaje que puede mejorar la calidad de la gobernanza y exigir reformas políticas e institucionales es, por tanto, fundamental.

Evaluar la calidad de las instituciones y de los procesos democráticos es parte de un proceso largo y complejo de construcción y consolidación de las instituciones democráticas. Por muchas herramientas, metodologías, marcos, ratings e índices que se empleen para evaluar la forma de gobierno, la generación de procesos mediante los cuales la ciudadanía misma pueda examinar su propio sistema permite que la gente exprese sus prioridades y permite generar consensos amplios como punto de partida para agendas reformistas.

Recomendaciones

La ONG International IDEA llevó a cabo un enfoque pionero denominado ‘Estado de Democracia’, que ha sido aplicado hasta el momento a más de 20 países de todo el mundo. Las recomendaciones que siguen están extraídas de ese enfoque:

1. El proceso debería permitir que ciudadanos y otros habitantes del país evalúen la calidad de la democracia en la que viven.
2. El propósito primario de la evaluación democrática debe ser el fomento del debate público y de la concienciación ciudadana. El ejercicio debería permitir tanto la expresión del entendimiento ciudadano como el consenso de las élites.
3. La evaluación debería apoyar la identificación de prioridades para la reforma, así como el seguimiento de los avances en dicho sentido.
4. Los criterios de evaluación deberían ser deducidos de principios democráticos examinados con claridad, y deberían abarcar el mayor número posible de problemas democráticos, permitiendo al mismo tiempo a los asesores seleccionar prioridades para su discusión y examen en respuesta a las necesidades locales.
5. Las evaluaciones deben ser juicios cualitativos de las fortalezas y debilidades de cada área, reforzadas por medidas cuantitativas cuando sea oportuno.
6. Los asesores deberían elegir estándares comparativos que resulten útiles a efectos de evaluación. Pueden estar basados en la historia del país, en las prácticas regionales o en las normas internacionales, según se estime oportuno.
7. Los procesos de evaluación deberían incluir consultas a un público muy amplio, incluyendo un taller nacional de validación de los resultados.
8. La evaluación democrática no debería considerarse como un fin en sí misma, sino como un medio para apoyar los procesos de reforma democrática mediante la aportación sistemática de hechos, argumentos y datos comparativos en los que puedan ampararse las reformas.
9. Si los gobiernos emprenden una auditoria democrática, deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia de la evaluación y comprometerse con sinceridad a dar respuesta a sus resultados.

Estándares y directrices

- Criterios de elegibilidad de la OGP: Participación ciudadana <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>
- Evaluar la calidad de la democracia: Una guía práctica <http://www.idea.int/publications/aqd/>

Ejemplos por países

The government of Mongolia has institutionalised on-going national 'State of Democracy' audits

Mongolia has faced the challenge of introducing democratic institutions and procedures into a long-standing traditional society. In 2003 the then government, along with civil society, decided to conduct a State of Democracy assessment. An initial desk study compiled by three international experts was published in 2005. Further research was conducted by local experts and published in 2006 report which resulted in the creation of a National Plan of Action. The on-going assessment of the state of democracy became an institutionalized process through the establishment of the Mongolian Millennium Development Goal 9 (MDG-9) on democratic governance and human rights.

The State of Democracy reports have helped raise public awareness about what democracy involves as they have been broadcast throughout the print and electronic media. The wide dissemination of the findings has generated debates on what standards of democracy citizens should expect from their government.

- <http://www.idea.int/sod/profiles/mongolia.cfm>

The Netherlands carried out a 'State of Democracy' assessment

The Kingdom of the Netherlands is a constitutional monarchy and a parliamentary democracy with representation drawn broadly from all groups in the society. In 2005 the popular rejection of the EU constitution and two prominent political assassinations in generated political turbulence and a vibrant public debate on the functioning of political institutions and practices in Netherlands. At this point the Ministry of Interior and Kingdom Relations identified the need for a comprehensive review of the state of the Netherland's democracy. The ministry involved NGOs, journalists and civil servants in the assessment in order to record the situation and promote discussion on democracy and the need for reform. The final report was published in 2006.

The assessment revealed the need to reconsider issues such as Dutch citizenship and how government itself represents the needs and democratic aspirations of the population. The report was sent to 250 NGOs, government bodies, journalists and the Queen, (who even used one of the eight SoD topics in her Christmas speech). In addition, public debates were held, including on freedom of speech, the structure of government, the media and citizenship. An interactive web-based forum was established for online debate, and the media reported frequently on the findings of the report and the ensuing discussions. Finally, a conference was held, with the ministers present, to outline the steps for the future. The new Dutch government (in 2007) elaborated three broad reforms in the light of the assessment: including a 'charter for responsible citizenship', technical changes to the constitution and a pledge to reduce the complexity of government processes more generally.

- <http://www.idea.int/sod/profiles/netherlands.cfm>

Inicial Step: Reformar la legislación para crear un ambiente que favorezca la actuación de organizaciones de la sociedad civil

Justificación

Una sociedad civil fuerte e independiente (compuesta, al menos, por organizaciones no gubernamentales, grupos vecinales, organizaciones religiosas, sindicatos y grupos informales) es un factor imprescindible para el gobierno abierto. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel importante en la exigencia de rendición de cuentas al gobierno, además de proporcionar apoyos y prestar servicios a los ciudadanos, apoyando y defendiendo la movilización ciudadana.

A lo largo de la historia, los movimientos sociales han servido como incubadoras de nuevos problemas que más tarde han sido incorporados de lleno en los programas políticos: los derechos de las mujeres, el medio ambiente o los derechos de las poblaciones indígenas. Los estados que son conscientes y sensibles a estos movimientos de nuevo cuño pueden cortocircuitar décadas de conflicto y frustración (Green, 2013).

Los marcos legales en los que se permite la organización de la ciudadanía son a menudo restrictivos, ya sea por voluntad política o por haber heredado marcos legales y burocráticos que han dejado de cumplir su cometido. Cada vez hay más movimientos en muchos países para limitar la ambición, la independencia y las fuentes de financiación de las organizaciones de la sociedad civil mediante barreras legales, amenazas, acoso o violencia. La restricción de la capacidad operativa de las organizaciones de la sociedad civil viola los derechos fundamentales de libertad de asociación y reunión, además de coartar la libertad de expresión (ICNL/WMD/NED, 2012).

Aunque la seguridad pública y la prevención de la delincuencia y el terrorismo obligan a la existencia de leyes que regulen tanto la constitución y las actividades de las OSC como las protestas legales, estas leyes no deberían ser empleadas como obstáculos para el derecho a la libertad de asociación. En un ambiente favorable, la constitución y la actividad de las OSC deberían ser constructivas, no destructivas.

La función clave de las OSC ha sido reconocida por la Resolución sobre la protección de los defensores de los derechos humanos, del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. La resolución solicita a los estados que se aseguren de que los trámites necesarios para registrar a OSC de nueva constitución pueden completarse rápidamente, de forma asequible, sin condicionamientos discriminatorios y con la posibilidad de recurrir. Además, solicita a los gobiernos que garanticen que las obligaciones de presentación de informes no inhiban la autonomía funcional.

Recomendaciones

1. Las leyes sobre OSC deben ser claras y precisas.
2. La constitución como entidad con naturaleza jurídica propia debería ser voluntaria y estar basada en criterios objetivos.
3. El registro previo no debería ser una condición para acceder a los derechos universales de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
4. El proceso de registro debería ser rápido, fácil y asequible.
5. Debería definirse un plazo razonable para comunicar las decisiones relativas al registro, además de ser conveniente que las denegaciones del estatuto solicitado se justifiquen por escrito y sean recurribles.
6. Todo acto y decisión que afecte a las OSC debería ser revisable por una instancia judicial o administrativa independiente.
7. Los procedimientos de presentación de informes deberían ser tan sencillos como sea posible para organizaciones y asociaciones pequeñas, provinciales y vecinales.

Estándares y directrices

- Criterios de elegibilidad de la OGP: Participación ciudadana <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>
- Índice de ambientes propicios de Civicus <http://civicus.org/what-we-do-126/2013-05-06-10-38-39/1886-download-the-2013-enabling-environment-index-eei-report>
- Principios internacionales de protección de la sociedad civil <http://www.defendingcivilsociety.org>
- Resolución sobre la protección de los defensores de los Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=21380

Ejemplos por países

Ukraine has established laws to simplify CSO registration and improve access to resources

The Law on Public Organisations was adopted and went into effect in January 2013. The new law simplifies registration and allows CSOs to pursue any lawful aims, engage in economic activities for not-for-profit purposes and acquire membership in public associations.

The new provisions governing the legal status of non-governmental organizations (NGOs) provides for:

- simplification of the registration procedures for public associations;
 - the right of NGOs to pursue any lawful interest or objective (not only the interests of its members);
 - the right of legal entities to establish and to acquire membership in public associations;
 - right of public association to conduct activities throughout the territory of Ukraine, regardless of their place of registration; and
 - the right of NGOs to engage in entrepreneurial activities to support their not-for-profit activities.
- <http://www.icnl.org/news/2012/22-Mar.html>

Intermedio Step: Desarrollar un pacto entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para alcanzar objetivos comunes

Justificación

Aunque es cierto que la salud de la sociedad civil depende de su separación e independencia con respecto al estado, a menudo el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil tienen objetivos compartidos. Las organizaciones de la sociedad civil a menudo trabajan para el gobierno, como es el caso de los servicios sociales, la protección medioambiental o la ayuda al desarrollo.

En muchos países, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno han reconocido que los mecanismos de cooperación entre ambos son necesarios. Estos mecanismos se han desarrollado bajo la forma de acuerdos negociados entorno a principios clave, como el acceso a la información, la financiación pública, las consultas y la participación.

A menudo, la publicación de un acuerdo marco, o pacto general, es el momento culminante de un largo periodo de intensas relaciones y de consolidación de la confianza entre ambas partes. Los mecanismos reconocen las prácticas

existentes y sus beneficios, y envían un mensaje de compromiso político y apertura que establece la dirección para la cooperación en el futuro. Los acuerdos marco sientan las bases para establecer procesos de revisión anual, códigos de práctica y mecanismos de mediación. Todo acuerdo negociado debe tener en cuenta las diferencias de poder entre el gobierno y la sociedad civil, procurando no coartar la independencia y la diversidad de la sociedad civil. Para garantizar que realmente se estén teniendo en cuenta las necesidades reales y para constituir el pacto entre las partes, es fundamental crear un documento político de manera participativa.

Recomendaciones

1. El pacto debería estar participado por el ejecutivo junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil, bajo cuyo paraguas se encuentren tanto grupos de base como grandes ONG. Para asegurar la representatividad del pacto deberían participar representantes de organizaciones que reflejen a toda la sociedad civil
2. El pacto debería enunciar una serie de compromisos tanto para el gobierno como para la sociedad civil. Los compromisos deberían reconocer y promover la independencia de la sociedad civil, ser realistas y basarse en hechos.
3. El pacto debería incluir compromisos relacionados con el papel de la sociedad civil en el proceso de decisión de medidas políticas, en la provisión de servicios y en la exigencia de responsabilidades al gobierno.
4. Desarrollar herramientas para llevar a cabo un seguimiento de los mecanismos institucionales..
5. La clave para que los mecanismos de colaboración institucional se establezcan y funcionen debidamente es la progresiva capacitación de los agentes interesados (gobierno, cargos públicos, parlamentarios, OSC).
6. Revisar el pacto periódicamente.

Estándares y directrices

- ECNL: Mejorar la cooperación entre instituciones públicas y de la sociedad civil en los Balcanes Occidentales y Turquía <http://www.gamn.org/files/Report%20-%20Keeping%20up%20the%20Momentum.pdf>
- ICNL: Directrices sobre preparación de pactos http://www.icnl.org/research/journal/vol3iss4/special_5.htm

Ejemplos por países

Croatia has a programme of cooperation with the not-for-profit sector

The first document between the Croatian Government and NGOs was the “Program of Cooperation between the Government of the Republic of Croatia and the Non-Governmental, Non-Profit Sector” which was signed in 2001.

The Program of Cooperation is based on “common values of modern democracy and the values of civic initiatives founded on social changes, cooperation, solidarity, social justice, transparency, personal ability and responsibility, participation in decision-making, consideration for personality, self-organisation, consideration for organizational diversity and continuous learning. It aims to create effective mechanisms that will enhance the communication between the Government and the Sector.”

Although the Program for Cooperation listed the obligations of the Government and NGOs, it was not perceived as a legally binding document. The Program was conceived as a living document – “a starting point, not a conclusion” – with an “authority evolved from the confirmation” given by both sides. Additionally, the Program of Cooperation anticipated the creation of local and regional compacts so as to decentralize cross-sectoral cooperation.

The implementation of the Program of Cooperation has been evaluated positively. It led to legislative reforms benefiting NGOs, including the new Law on Associations, the Lottery Law, the Law on Volunteerism and draft Law on Foundations, the Code of Good Practice in Grant-Giving, tax law amendments providing deductions for donations to NGOs, and the creation of local compacts in cities throughout Croatia.

- http://www.icnl.org/research/journal/vol10iss4/art_1.htm

The Canadian government developed an Accord with the Voluntary Sector

The Accord is a framework that represents a public commitment by the Government of Canada and the voluntary sector to more open, transparent, consistent and collaborative ways for the two sectors to work together. It has as its base are the values of active citizenship, democracy, equality, diversity, inclusion and social justice.

The Accord establishes the following commitments to action for the Government of Canada and the voluntary sector:

- The Government will consider the implications of legislation, policies and programs on the sector and engage the sector in open, informed and sustained dialogue, and
- The voluntary sector will identify important or emerging issues and trends and bring them to the Government of Canada's attention and call upon the full depth and diversity of voluntary organizations when at the table.

A Code of Good Practice on Funding and the Code of Good Practice on Policy Dialogue were developed as a resource of tangible, concrete ideas about how to take the spirit and guidelines of the Accord and put them into action in both government and voluntary sector organisations.

- <http://publications.gc.ca/pub?id=106233&sl=0>

The Government of Macedonia includes a commitment to implement its Strategy for Cooperation with the Civil Sector as part of its OGP Plan.

The Government of Macedonia includes a commitment to implement its Strategy for Cooperation with the Civil Sector as part of its OGP Plan.

The UK Government has a longstanding compact with the voluntary sector

The UK Government's Compact with the voluntary sector was made in November 1998, and renewed in 2010. It considers areas such as involvement in policy design and consultation, funding arrangements (including grants and contracts), promoting equality, ensuring better involvement in delivering services, and strengthening independence. The Compact was developed by a Working Group including included representatives from leading voluntary and community sector umbrella bodies, representatives from community groups and organisations, volunteering organisations, Councils for Voluntary Service, the National Council for Voluntary Organisations and Black and Minority Ethnic organisations. The group consulted over 25,000 organisations about what the Compact should include and the text was agreed in 1998.

A Reference Group was also set up, with membership drawn from 65 voluntary organisations, to act as a sounding board to the activities of the Working Group before and during discussion with Government. Almost all local authority areas have now developed a similar local Compact in partnership with the voluntary and community sector.

The Compact was agreed by the Government in 1998 and was signed by the then Prime Minister, Tony Blair, but it is not in the statute books. It is not considered legally binding but there is a legitimate expectation that its signatories (both at the national and local levels) will abide by their commitments. The failure to live up to Compact commitments has

formed a part in judicial review cases but the Compact has not been the only basis for the challenge. A judge recently stated that the Compact is 'more than a wish list'. The compact is accompanied by an Accountability and Transparency Guide, which outlines steps to take at national and local level if these principles are not followed, including dispute resolution, internal complaints procedures and ombudsmen functions.

Voluntary sector bodies state that the compact has achieved a great deal, such the principle of Full Cost Recovery and 12-week consultation. However, implementation of the Compact is still patchy and the inequality in power between Government and voluntary organisations means there is sometimes need for a separate body to step in.

- <http://www.ncvo-vol.org.uk/thecomcompact>
- <https://www.gov.uk/government/publications/compact-the-agreement-between-government-and-the-voluntary-community-sector>

Intermedio Step: Favorecer el uso ciudadano de herramientas digitales

Justificación

Las herramientas digitales, como las redes sociales, son un canal que los legisladores pueden emplear para comunicarse con la ciudadanía directamente y en tiempo real. El empleo de herramientas digitales no debería considerarse un fin en sí mismo, sino a partir de los beneficios que pueda suponer en una situación determinada. Por lo tanto, es importante analizar con cuidado no solo la adecuación de la herramienta al propósito que se persigue, el contexto y la naturaleza de los participantes, sino también como encajan éstos en los procesos institucionales, cómo se trabajará con la participación y cómo se responderá a las contribuciones que se reciban. Para garantizar un uso adecuado, las herramientas digitales deberían considerarse en el entramado de un conjunto de enfoques y herramientas muy distintas.

Dicho esto, los propios ciudadanos de muchos países hacen un uso cada vez mayor de las herramientas digitales para involucrarse con distintas organizaciones (ya sea realizando preguntas o proporcionando información de primera mano), además de compartir sus experiencias sobre los servicios públicos, realizando comentarios sobre las distintas medidas políticas y sobre las decisiones de sus gobernantes. En ese contexto de amplio uso de las herramientas digitales y las redes sociales, éstas pueden:

- Dar la posibilidad de que los gobiernos se comuniquen con los ciudadanos en aquellos lugares que ya ocupa la ciudadanía participativa
- Permitir a los legisladores que escuchen los puntos de vista de los ciudadanos sobre sus distintas áreas, e incluso intercambiar impresiones a título individual
- Participar en conversaciones que se están desarrollando en los medios sociales, crear comunidades online y aportar una voz dotada de autoridad.
- Aumentar el impacto de las comunicaciones oficiales mediante el multiplicador que pueden tener las redes sociales.

Pese a todo lo anterior, existen barreras culturales y técnicas que obstaculizan un uso eficaz de las herramientas digitales. También existen riesgos para las personas y para las organizaciones, y los gobiernos deben intentar alcanzar un equilibrio. El desarrollo de guías para el uso de redes sociales es un importante avance, ya que dota a los cargos públicos de la información necesaria para usar las redes sociales con confianza, disminuyendo riesgos y pudiendo enfrentarse a los obstáculos de naturaleza técnica

Recomendaciones

1. Deberían explorarse nuevos canales de comunicación en tiempo real con la ciudadanía y con otras partes interesadas – especialmente los que ya tengan una buena aceptación popular.

2. Cuando sea oportuno, debería fomentarse que los cargos públicos empleen nuevas herramientas digitales para informar al público y comunicarse con él.
3. En los contextos en los que segmentos amplios del público utiliza redes sociales, el ejecutivo debería publicar guías de redes sociales para los cargos públicos, apoyando así la comunicación directa con la ciudadanía a través de los nuevos medios.
 - La orientación debería desarrollarse en colaboración con los distintos agentes interesados
 - La orientación debería diseñarse a partir de una revisión de las buenas prácticas existentes, pero siempre con la correcta consideración de la especificidad nacional.
 - La orientación debería incluir referencias a las barreras prácticas y culturales para el uso eficaz de las redes sociales.
 - Deberían desarrollarse y mantenerse otros canales y oportunidades para la participación, de manera que no se excluya a otros sectores del público con menor implantación de las herramientas digitales.
4. Las herramientas digitales solo deberían utilizarse cuando resulte adecuado por el objetivo de la comunicación, su contexto y la naturaleza de los participantes.

Estándares y directrices

- Center for Technology in Government – Diseñar políticas de social media para las administraciones públicas: Ocho elementos esenciales http://www.ctg.albany.edu/publications/guides/social_media_policy/social_media_policy.pdf
- Delib: Cómo y cuándo usar canales de social media para apoyar estratégicamente los fines gubernamentales http://www.delib.net/delib_shared_assets/shared_documents/Delib_Social_Media_for_Government_2012.pdf
- IBM Centre for The Business of Government: Uso de herramientas en línea para la interacción con el público <http://www.businessofgovernment.org/report/using-online-tools-engage-public>

Ejemplos por países

Australia has developed guidance on online consultation

In July 2010 the Australian Government published the [Declaration of Open Government](#). The Declaration states that: "the Australian government now declares that, in order to promote greater participation in Australia's democracy, it is committed to open government based on a culture of engagement, built on better access to and use of government held information, and sustained by the innovative use of technology." In support of these goals the government developed a guidance on online consultation and the use of social media.

- <http://webguide.gov.au/web-2-0/online-consultation/>

In Tanzania the government established wanachi.go.tz a website to submit and track complaints and feedback

Wananchi.go.tz is a website was developed by the government to enable Tanzanian citizens to send feedback, opinions, complaints to the government and to track and follow up on queries.

The system aims:

1. To help improve citizen awareness and satisfaction about the services they receive or believe they should be

receive by enabling fast and efficient resolutions of relevant citizen submissions

2. To collect data that will assist the Government of Tanzania to identify opportunities for improvement and change, to optimise service and minimise complaint in the future

As part of its OGP commitment the government has committed to improve the website to make it more robust and responsive as a platform for citizens to participate in the running of Government, and produce monthly reports on effectiveness of the citizen's website.

- <http://www.Wananchi.go.tz>

In the US the House and Senate and House removed restrictive rules governing Members' use of social media

Before the digital age, Congress established 'franking rules' on communication to constituents. These governed how Members could use public funds to send mass mailings to constituents, while guarding against incumbents using this privilege to advance political campaigns. When these rules were extended to include social media, at first they were restrictively applied, effectively making popular social media services such as Facebook and Twitter out of bounds. This reflected fears that using social media would imply a commercial endorsement through association with advertising, could tarnish the status of the institution, might create security issues, and would make inappropriate political activity harder to catch.

Following emerging experience, debates and a campaign led by the Sunlight Foundation, in 2008, the House and Senate revised these rules and allowed members and staff to use social media to correspond with constituents more freely, while still maintaining the principles of *no product endorsement*, *no partisan material* and *no unrelated personal information*.

While there is no overall social media policy, the [House](#) and [Senate](#) rules now makes clear that Federal law and House Rules on communication apply to all 'official content of material posted by the Member on any website', but not to the broader social media platform itself.

- <http://sunlightfoundation.com/blog/2008/10/03/web-use-reform-happy-ending/>
- [http:// cha.house.gov/member-services/handbooks](http://cha.house.gov/member-services/handbooks)
- <http://www.senate.gov/usage/internetpolicy.htm>

Mexico set up a digital platform to 'improve your school'

Mexico spends more per student than most industrialized nations but has the lowest levels of academic achievement in the OECD. As part of its OGP Action Plan the government-civil society working group set out to improve the information that parents have about schools, and enable them to 'improve your school'.

The Mexican Institute for Competitiveness (IMCO) cross referenced test results with basic data on all schools and made them accessible on a new website 'Mejora tu Escuela'. Users can search and compare schools, and provide their own comments. Where problems are identified, like deteriorating infrastructure or principals that mismanage the school budget, they are linked to possible solutions that can be implemented by parents and local CSOs. "The more information you have on schools, the more likely you are to demand higher quality education", says Gabriela Segovia of the Federal Institute on Access to Information and Data Protection (IFAI).

- <http://www.mejoratuescuela.org/>
- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Mexico_0.pdf

The New Zealand Government has developed social media guidance

The aim is to encourage best practice social media use by government agencies, provide useful templates and tools for planning, and give an overview of the strengths, weaknesses, benefits and risks of this very important and rapidly growing toolset. The intent of the guidance is to encourage best practice social media use by government agencies, provide useful templates and tools for planning, and give an overview of the strengths, weaknesses, benefits and risks of this very important and rapidly growing toolset. Example in practice include a Facebook campaign by the Ministry of Health to provide support and advice to breastfeeding mothers.

- <https://webtoolkit.govt.nz/guidance/social-media/>

The UK is establishing a fund to support developers to produce tools to make use of open aid data

The Open Data Strategy for the UK Department for International Development includes the establishment of a fund to support developers to produce innovative and useful tools to make use of IATI data. As part of the Strategy, the UK has also developed the Development Tracker which allows users to find and explore detailed information on international development projects funded by the UK Government. The site uses data published to IATI, and can also import and use data from other publishers. The site also incorporates data published by the Department for International Development's delivery partners, initially on a small-scale, to prove the concept that aid can be traced through the aid delivery chain using open data.

- http://data.gov.uk/sites/default/files/DFID_Open_Data_Strategy.pdf
- <http://devtracker.dfid.gov.uk/about/>

The US government established a public open source project to facilitate the implementation and evolution of its Open Data Policy

When the US Government established its Open Data Policy it recognised that technology moves much faster than policy ever could. Often when writing policy for technology, agencies are stuck with outdated methods as soon as they publish new policies.

It therefore established Project Open Data on GitHub, a popular code-sharing website used by the 'open source' community. Project Open Data is an online collection of code, tools, and case studies to help U.S. agencies adopt the [Open Data Policy](#). Anyone – government employees, contractors, developers, the general public – can view and contribute by editing the content, adding new pages, or adding tools.

At the onset, the General Services Administration is providing a moderator role – giving oversight and support, but over time, the vision is that contributors both inside and outside of government can be empowered to take on additional leadership roles.

- <http://project-open-data.github.io/>

Intermedio Step: Involucrar a los ciudadanos en procesos deliberativos sobre un asunto político prioritario

Justificación

Se deberían institucionalizar mecanismos para escuchar los puntos de vista de ciudadanos y demás actores interesados en todas las decisiones sobre políticas públicas. Sin embargo, algunas decisiones necesitan una participación ciudadana más amplia o más profunda que otros. Esto es especialmente cierto cuando se están considerando cambios institucionales, cuando el asunto en cuestión tiene una gran complejidad y requiere la actuación de muchos actores, y cuando los asuntos vayan a afectar o preocupar a los ciudadanos de manera significativa.

Con respecto a estos asuntos, puede resultar conveniente el empleo de métodos deliberativos de participación ciudadana, en los que grupos de ciudadanos tienen la oportunidad de enfrentarse en profundidad con el asunto en cuestión. La extracción de los puntos de vista, los valores, el conocimiento y las experiencias del público puede ofrecer puntos de vista novedosos sobre los asuntos tratados y ser una fuente importante de información e ideas nuevas. Los resultados pueden ser políticas y servicios mejor diseñados, una implementación eficaz y eficiente, y un mayor apoyo del público (Andersson et al, 2013).

La participación del público puede reforzar la legitimidad del proceso de toma de decisiones, generando en la ciudadanía una sensación de pertenencia con respecto a la decisión final, y rebajando, por tanto, la probabilidad de que ésta sea rechazada o confrontada. Además, la participación puede dar a la ciudadanía la sensación de haber sido escuchada y haber contribuido a un proceso importante, lo que aumenta su confianza en su gobierno y la sensación de contribuir a la vida política del país. También es importante señalar que la publicación de las respuestas a las contribuciones ciudadanas mejora la transparencia y contribuye a difundir la visión de que las decisiones del gobierno se basan en criterios y hechos adecuados.

Recomendaciones

1. La participación debería ser prioritaria en los asuntos que más importan a los ciudadanos, ya sea porque afecten directamente a sus vidas o porque tengan un amplio impacto social, ético, ambiental o económico. Esta priorización aumenta el significado de la participación y aumenta la motivación para que la ciudadanía actúe.
2. Las contribuciones de ciudadanos y demás partes interesadas deben tener la capacidad de ejercer su influencia sobre la decisión en cuestión.
3. El asunto puede ser una única decisión, o parte de un proceso de gobernanza. Sin embargo, es importante asegurarse de que la participación ciudadana no depende en exceso de eventos intermitentes y carentes de continuidad, ya que pueden generar expectativas irreales.
4. El proceso de participación debe ser diseñado cuidadosamente para adecuarse al propósito, el contexto y la naturaleza de los participantes. Para los ciudadanos, los métodos que se empleen deben tener sentido y ser atractivo.
5. Hay que sopesar con atención quién debería participar, y cómo se puede involucrar a los participantes.
6. Los resultados del proceso deberían evaluarse con cuidado, informando de los resultados a los participantes y al conjunto de la sociedad.
7. No se debe subestimar el poder de la diversión. La mayor parte de la gente asocia la participación con aburridas asambleas municipales: los mismos participantes hablando cada vez sobre las mismas cosas en un ambiente y con un tono que hace que la mayor parte de los ciudadanos se sienta alienada (por desgracia, a menudo esta imagen se corresponde con la realidad). El primer paso para cambiar esto es hacer que la participación sea divertida, sin que

esto deba perjudicar su significado profundo.

Estándares y directrices

- Civicus – Diseño participativo de políticas http://www.pgexchange.org/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=132
- IBM Centre for the Business of Government: Guía para administradores sobre evaluación de la participación ciudadana <http://www.businessofgovernment.org/report/manager%E2%80%99s-guide-evaluating-citizen-participation>
- La brújula de la participación <http://participationcompass.org/>
- NCDD: Guía de recursos sobre participación pública http://www.ncdd.org/files/NCDD2010_Resource_Guide.pdf
- NCDD: Marcos jurídicos para la participación ciudadana <http://ncdd.org/rc/wp-content/uploads/2010/09/LogoLink-LegalFrameworks2003.pdf>
- Participedia <http://participedia.net>

Ejemplos por países

Estonia set up an online 'People's Assembly' to make proposals for government reform

The People's Assembly Rahvakogu (www.rahvakogu.ee) is an online platform for crowd-sourcing ideas and proposals to amend Estonia's electoral laws, political party law, and other issues related to the future of democracy in Estonia. The Assembly focuses on five political sore spots: party financing, political parties, the electoral system, civil participation in politics and the politicization of public offices.

In a structured process proposals were collected and discussed online, before being worked through by experts and clustered into a series of topics and scenarios, backed by impact analysis. This was then put forward for debate during a one-day 'deliberation day' involving members of the public, selected to proportionally represent (voting) age groups, regions, ethnicities and genders.

1,800 registered users posted nearly 6,000 ideas and 300 people participated in the deliberation day. Parliament has since set a timetable for the most popular proposals to be introduced in the formal proceedings.

The initiative was developed by the President following a series of scandals involving senior politicians widespread criticism of the government and the development of 'Charter 12' an Estonian citizens' initiative signed by 17 prominent public figures, calling for greater democratic accountability. The assembly was organized by volunteers from NGOs such as the Estonian Cooperation Assembly, the Praxis Center for Policy Studies, the Network of Estonian Nonprofit Organizations (EMSL), the e-Governance Academy and the Open Estonia Foundation, with the support of the government. It will not necessarily become a permanent institution.

- <http://www.rahvakogu.ee>

In Madagascar the government established a mediation process to address tensions over a large infrastructure project

Nosy Be is a remote island off the North Western coast of Madagascar that was ear-marked for a large, privately-funded infrastructure project in the mid-2000s. The project catalyzed social tensions between different layers of government and local communities. In response, the national government development programme and the World Bank commissioned a consultancy firm to facilitate a mediation process and find a way forward using a tool called the Local

Governance Barometer (LGB).

They took participatory approach, engaging Government, civil society and the private sector to identify an appropriate local governance model. Over a three-month period the different stakeholders were able to air their grievances and come up with an action plan to increase government accountability and social responsibility within infrastructure development on the island, improve civil society and private sector participation in development planning, and increase awareness about and enforcement of legislation on land rights, women's rights and corruption. A mixed committee was then tasked with taking the plan to national Government and relevant donors.

The initiative increased channels for collaboration and communication between the municipality and local communities, improved awareness of complaints procedures.

Source: DUFILS, J.-M. 2010. The Local Governance Barometer – Measuring Governance in Madagascar. In: CLAASEN, M. & ALPÍN-LARDIÉS, C. (eds.) Social Accountability in Africa: Practitioners Experiences and Lessons. Pretoria: Institute for Democracy in South Africa (IDASA).

- <http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2013/EmpowermentPolicies/Background%20Paper.pdf>

The City of Geraldton developed a plan for the city's future through participation

The Greater Geraldton City Region in Western Australia is at a crossroads. It faces big challenges for its future growth and sustainability, with depleting fishing and agriculture on the one hand, and new developments – port and rail, large scale renewable energy and mining – on the other, each having significant implications for the city region. Geraldton is using the challenges that face them environmentally, socially and economically to revitalise their democratic governance, providing opportunities for ordinary people to play their part in co-creating their future.

Over 2,000 people (approximately 6% of the population) have been involved in deliberations. This effort has been supported by 40 volunteer Community Champions, ordinary citizens who have been trained to organise and facilitate small-scale deliberative techniques. In 2010/11, this included 36 World Cafes fostering lively discussions about the region, where people would like to see it in 2029, and how change could be implemented to reach this vision; this was followed by around 20 Conversation Cafes (in local cafes) to help understand what people meant by “the Gero feel” (often mentioned), i.e. Geraldton's identity.

Importantly, socio-economic inclusivity and full engagement of the community was ensured through the participation of young people and local Aboriginal people in seven separate World Cafes and numerous Conversation Cafes, where they constituted the majority, as well as concerted efforts to elicit their participation in the large-scale public deliberations. Digital deliberative democracy is being generated through an innovative platform, CivicEvolution, which enables self managed groups to develop ideas that interest them into proposals that can be considered by the Alliance Group. Aided by the local newspaper's social media site, and focusing each week on one of the deliberative proposals generated, over 4,000 residents have been attracted to comment.

These face-to-face and online deliberative processes during 2010/11 resulted in prioritised proposals (by citizens and the Alliance Group) being implemented. These included planting one million trees, now well in progress, plans for both youth and indigenous centres, more cycle pathways and better communication about 2029. Longer-term initiatives have been incorporated into the City Region Strategic Plan, including improvement of public transport and a focus on renewable energy.

A one-day event with over 150 randomly sampled residents deliberated two big issues facing the community. Unexpectedly, they determined that the City Region should focus on becoming carbon neutral, and it should not be supportive of the mining companies' push for a fly-in-fly-out workforce. Later in 2011, there was a focus on city regional planning. Small-scale deliberations culminated in an Enquiry by Design process involving 250 participants (citizens and stakeholders) over a three-day period. Extraordinarily, over 200 community participants remained engaged from

the first full day of deliberation through to the end of the two afternoons/evenings. This process resulted in an agreed overall City Regional Plan with clear guidelines to underlie any future plans. Based on the outcomes of the 2029 process to date, a Community Action Plan was developed and has now become a 'Community Charter'. This documents the community's aspirations together with a series of practical reforms, to be jointly 'owned' by the citizens, industry and the government departments involved.

- <http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/From-Fairy-Tale-to-Reality.pdf>

The Danish Ministry of Foreign Affairs will conduct public hearings on the design of foreign aid programmes

The Danish Ministry of Foreign Affairs will conduct public hearings on the design of future foreign aid programmes, allowing citizens and civil society to contribute input and suggestions to key development assistance issues and budgets of a certain size. This is part of the government's OGP Action Plan.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/commitment/involvement-civil-society-and-new-approaches-public-service>

Turkey sought broad public inputs into development a new constitution

The process was initiated with the call of the Government to all stakeholders to make the "Civil Constitution" that Turkey needed. CSOs set up platforms, networks and civic initiatives to engage in this dialogue and submitted their comments and proposals to the Parliamentary Committee for Developing the Constitution Proposal. The Commission established a website for sharing those comments and proposals. Overall, 401 civil society initiatives and 82.232 citizens submitted their comments and proposals on the new constitution.

- <http://www.gamn.org/files/Report%20-%20Keeping%20up%20the%20Momentum.pdf>

Intermedio Step: Promover legislación y directrices sobre consultas ciudadanas para el desarrollo de políticas públicas

Justificación

La institucionalización de un mínimo de participación ciudadana en el proceso de elaboración de políticas públicas es importante para asegurar que las concepciones de los ciudadanos y demás partes interesadas sean tomadas en consideración durante la toma de decisiones y que, por consiguiente, las decisiones se tomen sobre la base de una mejor información.

Las consultas públicas son un proceso formal mediante el cual los ciudadanos y demás partes interesadas pueden expresar su opinión con respecto al análisis de políticas, propuestas y alternativas presentadas por el brazo ejecutivo del estado. Las consultas pueden tener lugar en distintos momentos del proceso de elaboración de políticas públicas, desde la exploración de ideas plasmado en documentos de orientación, hasta el escrutinio público de anteproyectos de ley. Por lo

general, ciudadanos y otros actores responden al material presentado por el gobierno, motivo por el cual se considera que el grado de participación y de capacidad de influencia ciudadana en el proceso es relativamente bajo. Sin embargo, es esencial para todo proceso de elaboración de políticas públicas hacer un uso adecuado de esta herramienta, ya que, al permitir que los afectados expresen sus puntos de vista, se asegura que las decisiones estén tomadas con información suficiente sobre cuál sería el impacto de las distintas propuestas.

Las técnicas empleadas para realizar consultas incluyen respuestas escritas, crowdsourcing de comentarios sobre la propuesta legislativa, grupos de discusión, jurados ciudadanos, reuniones públicas y mesas de usuarios. Sin embargo, y aunque muchas técnicas son muy conocidas, el potencial y los inconvenientes prácticos de la participación son más desconocidos. La eficacia de los procesos de consultas públicas se ven determinadas por la calidad de la planificación que las precede, y en especial por la planificación sobre cómo llegar hasta los participantes pertinentes, cómo manejar los resultados y cómo vincular la iniciativa con los procesos y sistemas, muchos más amplios, de toma de decisiones.

Los motivos de preocupación durante los procesos consultivos incluyen el riesgo de que la participación de representantes ciudadanos no pase de ser un gesto simbólico, que recursos y decisiones locales sean acaparados por las élites locales, tanto políticas como económicas, y que las relaciones de poder preexistentes se reproduzcan en nuevos espacios participativos, como cuando los hombres dominan un nuevo espacio o los socialmente humildes muestran su reticencia a desafiar públicamente a aquellos de quienes depende su empleo o su vivienda. Por lo tanto, la participación ciudadana debe estar bien diseñada y contar con recursos suficientes para mitigar estos desafíos.

Recomendaciones

1. Comprometerse con la institucionalización de las consultas públicas en el proceso de elaboración de políticas públicas, incorporando buenas prácticas
2. Desarrollar legislación que exija la realización de auténticos procesos de consulta con tiempos razonables. Deberían establecerse criterios mínimos para las consultas, reconociendo que las consultas formalizadas de esta manera constituyen únicamente una forma de participación pública en el proceso de toma de decisiones. La norma legal debería contemplar, por lo menos, los siguientes aspectos:
 - En qué tipos de decisiones es de aplicación obligada la consulta
 - En qué fases del proceso de toma de decisiones debe producirse
 - Quién debería ser consultado
 - Requisitos de igualdad y confidencialidad
 - Publicidad y difusión del proceso de consulta
 - Información acerca del propósito de la consulta
 - Información para ciudadanos y otras partes interesadas (p. e., evaluaciones de impacto de las medidas)
 - Plazo y duración de la consulta
 - La intención publicar las aportaciones a la consulta
 - Cómo se responderá a la información recabada con la consulta
 - Cómo ciudadanos y otras partes interesadas pueden intentar modificar las decisiones, en el caso de que el proceso no se haya llevado a cabo debidamente.
3. Desarrollar orientación más completa sobre la participación en colaboración con las partes interesadas (desde la sociedad civil hasta el mundo empresarial o el propio gobierno). Debería delinear una serie de principios que permitan evaluar los procesos consultivos, reconociendo al mismo tiempo que los ejercicios de consulta variarán dependiendo del contexto, del propósito y de los participantes.
4. Considerar el desarrollo de un portal en el que ciudadanos y otros actores puedan responder a los problemas y realizar un seguimiento de los mismos, y que aloje todas las consultas, tanto en activo como

terminadas.

Estándares y directrices

- Deliberación pública: Una guía sobre participación ciudadana para administradores <http://www.businessofgovernment.org/report/public-deliberation-managers-guide-citizen-engagement>
- Involve: Personas y participación – Cómo colocar a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones <http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/People-and-Participation.pdf>
- NCDD: Marcos jurídicos para la participación ciudadana <http://ncdd.org/rc/wp-content/uploads/2010/09/LogoLink-LegalFrameworks2003.pdf>
- OCDE: Focus on Citizens – Participación pública para mejorar políticas y servicios <http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/focusoncitizenspublicengagementforbetterpolicyandservices.htm>

Ejemplos por países

Croatia requires public consultation in policy making

Croatia made improving the quality of their public consultations a key tenet of their OGP Action Plan; ensuring citizens are given every opportunity to discuss new laws, regulations and acts. The Croatian government developed a law requiring consultation in legislation and regulation. It was later amended to ensure that not only must consultation take place, but the results are recognized as an integral part of decision making, and are reported on with feedback.

- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Inspiring%20Story%20-%20Croatia.pdf>

In Australia consultation is required before any regulatory change

A Regulation Impact Statement (RIS) is required, under the Australian Government's requirements, when a regulatory proposal is likely to have an impact on business or the not-for-profit sector, unless that impact is minor or does not substantially alter existing arrangements. The primary role of the RIS is to improve government decision-making processes by ensuring that all relevant information is presented to the decision maker when a policy decision is being made.

Departments are required to demonstrate that a consultation commensurate with the magnitude of the problem and the size of the potential impact of the proposal has been undertaken, and guidelines and support are in place to assist them.

Public participation is enshrined in the Constitution of South Africa

The South African Constitution enshrines the principle that 'The public must be encouraged to participate in policy making'. The Constitutional Court interprets this principle to include the responsibility to build public capacity for involvement and to give weight to public responses. Courts may strike down as invalid any legislation passed without adequate public participation

Parliamentary rules require the publication of a notice of intention to introduce a bill in the *Government Gazette* before it is tabled. The notice will usually contain an invitation to submit written submissions on the draft bill. In addition to oral and written submissions, public participation is enabled through setting up of public participation offices, increasing access to constituency offices and conducting parliamentary roadshows.

The Public Service Commission (PSC) has over the years investigated the mechanisms implemented by government departments to facilitate public participation in the Public Service. Overall, the PSC's studies have found that the nature and extent of public participation is generally adhoc and inadequate, and that concerted efforts are necessary to improve the situation. One of the critical measures it identified was the need for departmental guidelines on how public participation is carried out and used to inform policy and practice. The PSC therefore developed a generic template which departments can in turn use to develop their own internal guidelines.

- http://www.parliament.gov.za/live/content.php?Item_ID=299
- <http://www.psc.gov.za/documents/docs/guidelines/Temp%20Develop%20Guide.pdf>

The UK government has issued guidance on consultation

In the UK there are a range of laws establishing requirements for the Government to consult certain groups on certain issues. The UK Government first established a Code of Practice on Consultation in 2000 to provide guidance above and beyond these statutory requirements. The guidance has been updated several times since.

The current guidelines adopted in 2012 commits the government to improving policy making and implementation with a greater focus on robust evidence, transparency and engaging with key groups earlier in the process. The emphasis is on understanding the effects of a proposal and focussing on real engagement with key groups rather than following a set process.

The key Consultation Principles are:

- departments will follow a range of timescales rather than defaulting to a 12-week period, particularly where extensive engagement has occurred before;
- departments will need to give more thought to how they engage with and consult with those who are affected;
- consultation should be 'digital by default', but other forms should be used where these are needed to reach the groups affected by a policy; and
- the principles of the Compact between government and the voluntary and community sector will continue to be respected.

- <https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance>

Tuscany established a law promoting participation in development of regional policies

At the end of 2007 the Region of Tuscany passed Law no. 69 defining Rules on the Promotion of Participation in the Formulation of Regional and Local Policies, an innovative legal provision explicitly aimed at pro-actively promoting citizen engagement in local and regional decision making. This law institutionalizes citizen participation; through group dialogue of citizens and stakeholders in decision-making about issues or problems of public interest.

- <http://www.publicdeliberation.net/cgi/viewcontent.cgi?article=1185&context=jpd>

Avanzado Step: Crear y financiar un centro especializado para la institucionalización de la participación ciudadana

Justificación

La constitución de un organismo especializado y con experiencia práctica en la participación ciudadana, así como la apertura de organizaciones, estructuras, procesos y culturas son elementos esenciales para que las organizaciones gubernamentales sean más abiertas.


Las organizaciones gubernamentales cuentan con una larga historia de introversión y opacidad, con estructuras organizativas, procesos y culturas que ahondan en esta forma de trabajar. Habida cuenta de que el cambio de cualquier tipo de organización tenga visos de éxito necesita tiempo y recursos adecuados, la institucionalización de la participación ciudadana y su incorporación al funcionamiento habitual del gobierno no puede ser una excepción. Diseñar, encargar, proporcionar y evaluar una auténtica participación ciudadana no es sencillo. Para empezar, hay que considerar atentamente el propósito de la participación, el contexto en el cual se desarrolla, y cómo deben participar los ciudadanos y demás agentes interesados. Por lo tanto, la práctica de la participación ciudadana se beneficia considerablemente de la presencia de un órgano especializado y con experiencia práctica en el que puedan apoyarse los cargos públicos.

Aunque la participación *ad hoc* y de corto alcance puede desarrollarse cabe las estructuras organizativas actuales, el empleo generalizado de la participación ciudadana no puede llegar a buen puerto sin que las organizaciones se comprometan plenamente con la apertura, algo que pasa de inicio por ser transparentes con lo que se hace y ágiles en responder a las aportaciones de la ciudadanía. Para la mayor parte de las organizaciones, esto conlleva un profundo cambio cultura. Además de comprometerse con reforzar la memoria de las organizaciones, un centro especializado puede ayudar a construir el cuerpo de conocimiento y experiencia en participación ciudadana que se necesita para asegurar que las prácticas se basan en hechos y crecen a lo largo del tiempo. Además, el organismo también puede apoyar la evaluación de las prácticas, ensayar nuevos tipos de iniciativas, desarrollar el atractivo de la participación para el mundo empresarial y difundir el conocimiento y las competencias pertinentes, además de eliminar las barreras que persisten en las organizaciones. La presencia de esta referencia especializada en participación complementa el desarrollo de la capacidad de involucrar a la ciudadanía por parte de los cargos públicos, pero nunca podrá sustituirla.

Recomendaciones

1. Constituir un órgano especializado en participación ciudadana.
2. Diseñar nuevos tipos de iniciativas de participación ciudadana y evaluarlas.
3. Apoyar públicamente la participación ciudadana y apoyar su adopción en instituciones gubernamentales.
4. Desarrollar la capacidad organizativa y su capacidad de generar participación ciudadana a través de actividades de tutorial, formación y networking.
5. Apoyar el crecimiento de procesos y culturas organizativas que permitan y promuevan la participación ciudadana.

Ejemplos por países

 Denmark set up a centre of expertise on collaborative democracy, starting with a focus on technology issues

The Danish Board of Technology (DBT) (now the Danish Board of Technology Foundation) was set up by the Danish parliament to disseminate knowledge about technology, including the potential impact of technology innovation on society and on the environment. The DBT conceived its central mission as promoting debate and public enlightenment in order to evaluate technology and to advise the Danish Parliament and other governmental bodies. The Board pioneered a range of different methods for engaging citizens in the evaluation of new technologies.

It has also established the Center for Collaborative Democracy (CfSD) to strengthen the Danish tradition for democratic dialogue and cooperation among citizens, elected officials, experts, businesses and organizations. CfSD offer advice to municipalities, regions, agencies, ministries, associations, organizations and companies on planning and execution of participatory processes and on using the results. CfSD's ambition is to improve decision-culture by providing professional involvement;

The purpose of CfSD is to apply this knowledge and methodological expertise in new areas that do not need to have to do with technology. It may be, for example in "Participatory Budgeting", with people involved in local government budgeting, employee involvement in innovation in the welfare sector, the development of associations and organizations strategies, urban planning, CSR and many other areas.

- <http://participedia.net/en/cases/board-technology-denmark>
- <http://www.tekno.dk/>
- <http://cfsd.tekno.dk/>

Denmark's Mindlab involves citizens and business in in problem solving with government ministries

MindLab is a Danish cross-governmental innovation unit which involves citizens and businesses in developing new solutions for the public sector. MindLab is instrumental in helping key decision-makers and employees from its parent ministries view their efforts from the outside-in, to see them from a citizen's perspective. MindLab uses this approach as a platform for co-creating better ideas.

It works with service users, citizens and other stakeholders at early planning stages of service delivery. For example, Mindlab worked with users to test mobile devices for doing tax returns and collected their feedback, which resulted in changing government plans and avoiding costly service mistakes. It developed social networks with and for highly skilled migrant workers to motivate them to stay in Denmark.

MindLab was created in 2002 for the Ministry of Economic and Business Affairs as an internal incubator for invention and innovation. At that time, the vision of an in-house laboratory as a centre of creativity and innovation was unique for a ministry.

In 2007, a new strategy and a new goal were set for MindLab: its focus would be the active involvement of both citizens and companies in developing new public-sector solutions. At the same time, MindLab acquired two additional parent ministries, namely the Ministries of Taxation and Employment. In this manner MindLab also became a fulcrum of intra-governmental cooperation. Finally, the strategy involved MindLab taking on a number of professional researchers, with the aim of establishing a more robust methodological foundation for its work.

Today, MindLab has considerable experience with innovation processes that are based on the realities experienced by citizens and businesses, and which also promote collaboration across the public sector. MindLab has become a part of three ministries and one municipality: the Ministry of Business and Growth, the Ministry of Education, the Ministry of Employment and Odense Municipality and form a collaboration with the Ministry for Economic Affairs and the Interior.


- <http://www.mind-lab.dk/>

 The City of Edmonton has set up a Centre for Public Involvement

The Centre for Public Involvement was proposed in 2009 as a partnership between the City of Edmonton and University of Alberta. It was proposed in response to a demonstrated and recognized need for decision-makers and the public to actively seek, consider and apply the most effective means for public involvement. The collaboration is designed to advance research and learning in the area of public involvement, with the objective of enhanced decision-making at all levels.

As an independent and non-aligned third-party organization, the Centre for Public Involvement (CPI) is focused on building the will and capacity for innovation in public involvement. Using this foundation, CPI facilitates a rich collaboration, identifying best practices, and seeking and achieving results locally, nationally and internationally.

The Centre promotes innovation and identifies and tests new models and processes in partnership with public involvement professionals, researchers, organizations, and the public. At its base, the Centre links University of Alberta faculty and students with City of Edmonton staff and decision makers. This is enhanced through additional collaborations whereby the Centre works in partnership with members of the public involvement industry to accelerate evidence based, emerging and innovative public involvement applications.

 The UK government set up a center for public engagement on science policy following a national controversy

In the UK in the late 1998 Genetically Modified (GM) foods became a hot topic in the UK, when a televised documentary claimed that GM had potentially harmful effects on health, followed in 1999 by a staged protest event led by Greenpeace. The ensuing public outcry would ensure GM occupied the headlines for several months. By mid-1999, supermarkets withdrew all GM products from their shelves under heavy public pressure. Following the public controversy around GM technology and the House of Lords 'Science and Society' report, a new policy of upstream engagement was pursued by the UK government. It set up the Sciencewise programme in 2004 which aims to enable better policy making by fostering capacity within the policy making community to commission and use excellent public dialogue.

Sciencewise Expert Resource Centre established in May 2007, provides co-funding and specialist advice and support to government departments and agencies to develop and commission public dialogue activities in emerging areas of science and technology. Sciencewise is managed on behalf of the Department for Business Innovation and skills (BIS) by a consultancy in partnership with the British Science Association and the community participation charity, Involve. It is managed by a Programme Board and a Programme Management Team, who are supported by the Sciencewise Steering Group, which provides strategic advice and guidance. Two stakeholder advisory sub-groups – the Citizens' Group and the Business Insight Group – report directly to the Steering Group.

The main aim of Sciencewise is to enable better policy-making by fostering capacity within the policy-making community to commission and use excellent public dialogue. This will ensure that all future policy involving science, technology and innovation is robustly developed, informed by public concerns and aspirations and based on all the available evidence. It offers an online resource of information, advice and guidance together with a wide range of support services aimed at policy makers and all stakeholders concerned with policy involving science and technology issues, including the public. It provides co-funding to Government departments and agencies to develop and commission public dialogue projects, helps to build capacity among departments to carry out dialogue and develops and promotes best practice. Sciencewise also provides general dialogue training and mentoring to policy makers across Government departments involved in science and technology policy issues.

- <http://www.sciencewise-erc.org.uk/>

Avanzado Step: Establecer mecanismos que permitan la plena integración participativa en la vida cívica de niños y jóvenes

Justificación

Los gobiernos deberían dar una especial importancia a la participación de sectores del público que habitualmente están excluidos de la vida cívica o son incapaces de expresar sus puntos de vista por otras vías. Centramos este compromiso ilustrativo en niños y jóvenes debido a la importancia de fomentar una ciudadanía activa desde edades tempranas, pero se podrían formar compromisos semejantes para otros segmentos de la población, como mujeres, minorías religiosas, migrantes, refugiados y personas de la tercera edad.

Los menores de 18 años suponen el 30% de la población mundial, un porcentaje que llega a alcanzar el 50% en muchos países en vías de desarrollo. El artículo 12 de la [Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño](#), niños y menores tienen el derecho de ser escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones que los afectan.

Aunque la mayoría de los jóvenes en todo el mundo no tienen el derecho al voto, los gobiernos toman cada día decisiones sobre políticas públicas que los afectan, ya se trate de salud, educación o bienestar. Atender a los puntos de vista de niños y jóvenes puede:

- contribuir a un menor diseño de las políticas públicas, al tener en cuenta la experiencia vivida, las opiniones y las ideas innovadoras de la juventud
- establecer una alianza con toda la población menor a favor del desarrollo y la sostenibilidad de nuevos mecanismos sociales, ya se trate de informar cuando los profesores se ausentan de sus obligaciones docentes, de aportar su visión sobre distintos proyectos o de involucrarse en la implementación de programas sociales
- permitir que niños y jóvenes tengan mayor peso en la sociedad, incrementando la posibilidad de que sean individuos cívicamente activos a lo largo de sus vidas

Promover el compromiso de niños y jóvenes puede comportar:

- la accesibilidad de las oportunidades de consulta. Por ejemplo, empleando un lenguaje comprensible o permitiendo otras maneras de expresar opiniones que complementen a los escritos formales.
- una comunicación específica con el público, con consultas, eventos y actividades que den a los jóvenes la oportunidad de compartir sus puntos de vista y participar en el ejercicio de influenciar las políticas públicas.
- young people an opportunity to share their feedback, express their views and get involved in influencing policy.

El establecimiento de estructuras formales para la participación juvenil, tales como un Consejo Nacional de la Juventud creíble, apoyado por toda una serie de estructuras locales que apoyen la participación de niños y jóvenes.

Además, en muchos países donde los jóvenes con la mayoría de edad (de los 18 a los 30 años) tienen el derecho formal de votar, también suelen ser excluidos de los procesos de consulta pública y las oportunidades de toma de decisión. Muchas de las recomendaciones recogidas a continuación también deberían aplicarse a este sector juvenil.

Recomendaciones

1. Compartir valores y liderazgo. El gobierno debería declarar públicamente su compromiso con la participación de niños, jóvenes y jóvenes con la mayoría de edad en todas las decisiones que les afectan.
2. Establecer estándares claros para la participación de niños y jóvenes, con inspiración en buenas prácticas internacionales.
3. Trabajar con grupos de niños y jóvenes para evaluar oportunidades de participación en el context actual y futuras áreas de desarrollo y mejora.
4. Impartir formación sobre participación infantil y juvenil para profesionales que trabajen con jóvenes y para los responsables de la toma decisiones.

Estándares y directrices

- Guía de participación juvenil en el desarrollo <http://ygproject.org/>
- UNICEF: Guía de recursos para la participación infantil y juvenil http://www.unicef.org/adolescence/cypguide/index_intro.html

Ejemplos por países

In Uganda a consultation with young people provided inputs to the National Development Plan

In Uganda a consultation process was carried out to involve youth in the development of Uganda's Five-Year National Development Plan (2009 to 2014), especially regarding the key issues affecting young people, such as unemployment, education, health and poverty. Fifty-two young people (providing national representation for Uganda's districts and youth-led organisations), were recruited from youth NGOs, student associations and youth disability groups. This group discussed the key thematic areas of the NDP and formulated recommendations for the government. Key members of the staff team responsible for the consultation were also young people.

National newspaper advertisement invited contributions via SMS, and the young people involved were provided with training on strategy analysis. Four groups created strategies in the key areas of education, employment, health and population, and gender and social development and twelve key strategic recommendations were agreed. Two young people presented the recommendations to the National Planning Authority and Ministry of Children and Youth and consultation outcomes were disseminated across all key ministries and decision-makers in Uganda.

The draft NDP mentions youth entrepreneurship (USD\$5m earmarked for start-ups); vocational skills for out-of-school youth with attention to quality and moral aspects and youth-friendly sexual and reproductive health and rights. There is an emphasis on vulnerable youth in the sections on gender and social protection. The government is now considering follow-up regional consultations, and youth participation in monitoring and evaluation of the plan.

- <http://ygproject.org/case-study/national-development-plan>

Avanzado Step: Incluir la participación ciudadana como una competencia principal de los cargos públicos

Justificación

El contexto cambiante en el que actúan los gobiernos obliga a una mayor colaboración con la ciudadanía y con otros agentes interesados por parte de los cargos públicos. Este cambio en la concepción de la gobernanza no puede ocurrir sin que cambien también de manera acorde las competencias y habilidades de los cargos públicos. Entre otras cosas, será necesaria una concepción mucho más abierta del proceso de diseño de políticas públicas, lo que implica:

- desarrollar un análisis compartido del problema en cuestión entre los agentes interesados pertinentes (incluyendo a los ciudadanos)
- contar con la participación de los agentes interesados pertinentes (incluyendo a los ciudadanos) para el desarrollo de posibles soluciones de políticas públicas, complementadas con soluciones colaborativas
- que las decisiones de políticas públicas estén informadas por los puntos de vista y la experiencia de un amplio espectro de agentes interesados (incluyendo a los ciudadanos), y que los razonamientos y los datos que sientan las bases para la toma de decisiones sean accesibles para todos
- que la implementación de una decisión sobre políticas públicas sea informada y conducida en colaboración con los agentes interesados pertinentes (incluyendo a los ciudadanos)
- que el impacto de las decisiones sobre políticas públicas sea evaluado debidamente, incluyendo la evaluación del impacto sobre los afectados

La habilidad de los cargos públicos para involucrar a la ciudadanía y a otros agentes interesados debería, por tanto, formar parte de los procesos de selección, evaluación de méritos y desarrollo personal.


Recomendaciones

1. Revisar las habilidades y competencias necesarias para el diseño de políticas públicas eficientes y crear oportunidades accesibles para que las partes interesadas contribuyan a su revisión
2. Tratar de resolver las barreras a la participación y la colaboración que presenten los sistemas y procesos organizativos.
3. Explorar el papel de la ciudadanía en la participación pública dentro del proceso de conformación de políticas públicas, teniendo en cuenta las competencias y habilidades necesarias para llevar a cabo procesos efectivos de participación ciudadana.
4. Incluir estas competencias y habilidades en las descripciones de puestos de trabajo, los procesos de evaluación de méritos y los objetivos de desarrollo personal de los cargos públicos
5. Desarrollar un programa de aprendizaje dirigido a construir el conocimiento y las habilidades necesarias para una Buena participación ciudadana

Estándares y directrices

- IBM Centre for the Business of Government: Guía para administradores sobre evaluación de la participación ciudadana <http://www.businessofgovernment.org/report/manager%E2%80%99s-guide-evaluating-citizen-participation>

Ejemplos por países

 Finland is committed to developing dialogue skills in public administration as part of its OGP action plan

Finland OGP Action Plan includes a commitment to emphasizing dialogue skills in the job descriptions of civil servants. Competences needed to enhance open government will be specified and the importance of dialogue skills will be highlighted in job descriptions, in recruitment criteria and in assessing personal performance in positions demanding such competences. In addition training in customer oriented service design will be arranged for civil servants and citizens.

Using a simple and low cost blog, the UK Government's Open Policymaking team, in partnership with the civil society organisation The Democratic Society, have been hosting an online discussion space exploring: 'what open policymaking means in practice, and how we make it excellent and democratic.'

As part of this, they conducted a light touch review of 'Ideal Policy Team Behaviours', asking 'policymakers- and anyone involved in delivering policy or influencing its creation- to vote on what policy teams should be doing to ensure that policymaking gets better.'

The top five to emerge were:

1. Marketing the engagement exercises so that relevant stakeholders are able to contribute to the process
 2. Understanding how an end-user interacts with a policy area in practice
 3. Prototyping proposed solutions and processes
 4. Clearly stating (in plain English) the scope of any related consultation or engagement exercises as well as the desired outcomes
 5. Asking the right questions
- <http://openpolicy.demsoc.org/policymaking-behaviours/>

Innovador Step: Diseñar nuevas fórmulas de participación ciudadana

Justificación

La participación ciudadana es un campo en continuo desarrollo, en el que surgen constantemente nuevos datos sobre beneficios y limitaciones en distintos contextos. No hay un solo modelo "correcto" que deba ser adoptado en toda circunstancia, sino un abanico de modelos posibles, cuyo diseño puede ser retocado para alcanzar distintos resultados. Una conclusión común en todas las evaluaciones de programas de participación ciudadana es la importancia capital del contexto.

Así pues, es importante que los gobiernos, acompañados de otros actores, sigan explorando la eficacia de los distintos modelos de participación ciudadana en distintas situaciones, sin perder la agilidad necesaria para seguir desarrollando el nuevo enfoque según van apareciendo datos sobre su impacto. Por ello, es imprescindible contar con procesos de evaluación de la mayor calidad, ya que de lo contrario resulta imposible garantizar que los nuevos modelos se estén desarrollando en la mejor dirección posible y realmente puedan añadir información al cuerpo de conocimiento creado entre las aportaciones de distintas iniciativas.

Recomendaciones

1. Tener en cuenta lo que otras iniciativas han intentado en contextos semejantes, sopesando sus ventajas y sus debilidades.
2. Comprometerse con sistemas de evaluación continua que permitan desarrollar la iniciativa de la mejor manera posible.
3. Apoyar la evaluación independiente de la iniciativa para conseguir reunir datos suficientes sobre qué funciona, en qué contextos y por qué funciona.

Estándares y directrices

- IBM Centre for the Business of Government: Guía para administradores sobre evaluación de la participación ciudadana <http://www.businessofgovernment.org/report/manager%E2%80%99s-guide-evaluating-citizen-participation>
- La brújula de la participación <http://participationcompass.org/>
- Participedia <http://participedia.net>

Ejemplos por países

 The plan for rebuilding New Orleans was developed through participation with people across 16 cities

Hurricane Katrina shattered the city of New Orleans and exposed deep racial and economic disparities. Much of the city's infrastructure was decimated: more than 70% of housing was damaged and entire neighborhoods were virtually destroyed; schools, hospitals and police stations were shut down. Almost 100,000 jobs were lost and 18 months later more than half of the city's population had not returned. In the aftermath, plans to rebuild New Orleans faced a ravaged infrastructure, financial losses of enormous scale, decision-makers scrambling in crisis mode, and a citizenry whose trust in government had been abused. City officials' early planning efforts were met with anger and protest as the community struggled with the challenges of distributing resources and reviving an entire city.

After a number of unsuccessful attempts, New Orleans approved a blueprint for rebuilding. The foundation-funded Unified New Orleans Plan would be run by the Community Support Foundation and overseen by a community advisory board comprised of neighborhood representatives and delegates from the Mayor's office, the City Council, and the City Planning Commission. The Unified Plan would address all city-wide systems, tackling infrastructure needs like housing, flood protection, transportation and public services. It would also produce 13 district-level plans with recovery priorities for the city's neighborhoods. The urgent need to revive the city left a remarkably short time frame for this process: the city-wide and 13 district plans were to be completed – with full community participation – in less than five months.

At the heart of the Unified Plan process were two public forums unprecedented in their size and scope. The "Community Congresses" engaged 4,000 New Orleanians across the country in developing collective recovery priorities for their city. With key decision-makers listening, citizens discussed how to ensure safety from future flooding, empower residents to rebuild safe and stable neighborhoods, provide incentives and housing so people could return, and establish sustainable, equitable public services.


To ensure the Community Congresses had representative participation, AmericaSpeaks partnered with a wide array of grassroots organizations, service providers and leaders in diaspora cities across the country. Registrants received pre-recorded calls from the Mayor; Public Service Announcements featured celebrities and free meals, childcare, transportation, and translation into Spanish and Vietnamese enabled participation for many who might otherwise have been left out.

AmericaSpeaks' 21st Century Town Meeting methodology used networked laptops and individualised keypad polling to

support facilitated, small-group discussions at diverse tables. These discussions fed into large-group sharing and decision-making. Interactive television connected participants in New Orleans with those in Baton Rouge, Houston, Dallas, and Atlanta. At the December Community Congress, participants in 16 other cities viewed the program through a webcast and submitted their views in real-time over the internet. Public television viewers in New Orleans were able to follow the programming from their homes. At day's end, the citizens' collective priorities were provided in writing to every participant.

- <http://americaspeaks.org/projects/case-studies/unified-new-orleans-plan/>
-

Presupuestos

 **Autor principal:** [International Budget Partnership](#)

Introducción

Los gobiernos de todo el mundo recaudan y gastan cada año miles de millones de dólares en dinero de los contribuyentes, motivo por el cual los ciudadanos tienen el derecho de saber cómo recaudan y cómo gastan dinero sus gobiernos.

Los gobiernos implementan políticas públicas a través de ministerios, secretarías y agencias con carácter central o local. Estas entidades públicas y quienes las dirigen responden ante el poder político. Los políticos, a su vez, deben ser considerados responsables ante sus ciudadanos por la implementación de políticas públicas nacionales, como es el caso de la sanidad y la educación. Los presupuestos son el vínculo entre las políticas públicas y su implementación, entre las ideas y los programas de los políticos y su realización: asignan recursos a los planes en términos de tiempo y dinero.

Como parte de la gestión presupuestaria, los gobiernos elaboran en determinados momentos del año presupuestario una serie de informes, como son el documento preliminar, el proyecto de presupuesto del ejecutivo, los presupuestos aprobados, los presupuestos ciudadanos, informe semestral de ejecución, la revisión de mediados de año, el informe anual y el informe de auditoría.

Para que los ciudadanos puedan saber cómo recaudan y gastan dinero sus gobiernos, necesitan acceso a estos informes presupuestarios. La transparencia fiscal puede dar lugar a un debate más informado, tanto por parte de los responsables de las políticas públicas como por parte del público, acerca del diseño y los resultados de las políticas fiscales, además de servir como instrumento de control sobre su implementación.

Muchos informes presupuestarios ya son preparados por los gobiernos para uso interno, por lo que pueden ser divulgados en los portales oficiales sin apenas coste adicional. Además, las discusiones legislativas sobre el presupuesto se suceden en todos los países, y no es complejo hacerlas públicas permitiendo a los medios de comunicación que las cubran. A menudo la transparencia fiscal se ve favorecida como efecto de transiciones políticas o como respuesta a crisis económicas o de corrupción. También pueden tener un papel destacado las influencias externas que promueven la adopción de normas universales y refuerzan el papel de los agentes que promueven la reforma en el país, así como de los actores de la sociedad civil (Khagram et al, 2013).

Estudios recientes muestran que la transparencia puede facilitar que los gobiernos obtengan crédito de los mercados internacionales con tipos de interés más bajos (Hameed, 2011). También puede arrojar luz sobre el grado de eficiencia del gasto público. Además, la transparencia puede ayudar a promover el equilibrio y a ajustar los recursos nacionales con las prioridades del país. Además de dar una voz digna a la ciudadanía, la transparencia y la participación pública pueden dotar a los gobiernos de mayor confianza (IBP, 2013). Por el contrario, la opacidad fiscal puede desincentivar la disciplina fiscal y, como ha ilustrado recientemente una publicación del Fondo Monetario Internacional, puede llevar a deudas elevadas e inesperadas (Cottarelli, 2012).

References

Cottarelli, 2012, 'Fiscal Transparency, Accountability, and Risk, IMF Fiscal Affairs Department
<http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/080712.pdf>

Hameed, 2011, 'Budget Transparency and Financial Markets, OGP Working Paper 1, Open Budget Partnership'.
<http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/IBP-Working-Paper-1-Budget-Transparency-and-Financial-Markets.pdf>

IBP, 2013 Learning Program: Case Examples, http://internationalbudget.org/ibp_publication_categories/learning-program/
Khagram, S., A. Fung and P. De Renzio, 2013, Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability, Washington DC: Brookings Institute.

Organizaciones
especializadas

International Budget Partnership <http://www.internationalbudget.org>

Global Initiative for Fiscal Transparency <http://fiscaltransparency.net/>

Global Movement for Budget Transparency, Accountability, and Participation (BTAP) <http://www.globalbtap.org/>

Organization for Economic Cooperation and Development <http://www.oecd.org/gov/budgeting/>

International Monetary Fund <http://www.imf.org/external/np/fad/tran>

Public Expenditure and Financial Accountability Program <http://www.pefa.org/>

Collaborative Africa Budget Reform Initiative <http://www.cabri-sbo.org/>

OGP Working Group: Fiscal Openness <http://fiscaltransparency.net/category/ogp-gift-fowg/>

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Permitir el público acceso a las sesiones parlamentarias dedicadas a los presupuestos
- Publicar los cuatro documentos presupuestarios fundamentales
- Publicar una versión del presupuesto para los ciudadanos
- Publish Executive's Budget Proposal and Audit Reports

Intermedio

- Consultar a la ciudadanía durante la preparación de los presupuestos
- Habilitar procedimientos eficaces de control parlamentario y de auditoría
- Publicar los ocho informes presupuestarios más importantes
- Publicar todos los informes presupuestarios con datos abiertos

Avanzado

- Habilitar procesos de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos públicos
- Publicar información financiera no incluida en los presupuestos
- Publicar información sobre los recursos recibidos por los centros que prestan servicios públicos a la ciudadanía

Innovador

- Implementar todos los principios de la Iniciativa mundial para la Transparencia Fiscal (GIFT)

Detailed Recommendations

Inicial Step: Permitir el público acceso a las sesiones parlamentarias dedicadas a los presupuestos

Justificación

En casi todos los países los presupuestos son discutidos en el parlamento. No es caro que estas discusiones tengan carácter público, lo que se puede conseguir dando acceso público al parlamento durante las sesiones como difundíendolas por los medios.


Recomendaciones

- El parlamento nacional debería organizar sesiones públicas cuando vaya a discutir el presupuesto presentado por el ejecutivo, y con carácter previo a su aprobación.
- Los medios deberían contar con el permiso de transmitir estas audiencias para alcanzar a un público más amplio
- Deberían publicarse informes con los resultados de estas audiencias

Estándares y directrices

- Encuesta de Presupuesto Abierto IBP <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/>

Ejemplos por países

 Increasing numbers of countries permit some form of public hearings during budget discussions in the legislature

According to the 2012 survey by the International Budget Partnership 67 countries out of 100 surveyed hold some form of public hearings on the macroeconomic and fiscal framework presented in the budget in which testimony from the executive branch (and in some cases the public) is heard.

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>

Inicial Step: Publicar los cuatro documentos presupuestarios fundamentales

Justificación

Los gobiernos que elaboran sus documentos presupuestarios fundamentales, pero no los publican, podrían hacerlo con un coste muy moderado. Los cuatro documentos más importantes son:

- **El proyecto de presupuestos del Ejecutivo** describe los planes de ingresos y gastos del gobierno. Una rápida publicación de este documento es fundamental para que el público puede participar en el debate sobre las propuestas del gobierno.

- **Los presupuestos aprobados** resultantes del sometimiento de la propuesta del Ejecutivo a trámite parlamentario. Al documentar los compromisos que han sido aprobados, este informe sirve como punto de partida de cualquier acción para supervisar la ejecución de los presupuestos.
- **Los informes de auditoría**, que contiene la evaluación formal e independiente de la institución auditora, por la cual se indica si el gobierno ha ingresado y gastado según lo previsto en los presupuestos aprobados y en observancia de la ley. Los ciudadanos deben tener acceso a este documento para poder valorar adecuadamente la actividad del gobierno.
- **Un presupuesto para ciudadanos** que provea una presentación no técnica de los presupuestos (es decir, del Proyecto de presupuestos del Ejecutivo o de los Presupuestos aprobados) y resulte fácilmente accesible para todos los ciudadanos.

Estos cuatro documentos forman los ladrillos básicos de la rendición de cuentas presupuestaria. Su publicación es el requisito mínimo para un sistema de presupuesto abierto.

Recomendaciones

- Para mejorar el acceso del público a estos informes y evitar un acceso desigual a los mismos, los informes presupuestarios deberían ser publicados, por lo menos, en la página web del gobierno. Allí donde el acceso a internet esté poco extendido, los gobiernos pueden imprimir copias en papel de sus presupuestos y difundirlos en todo el país a través de una red de bibliotecas públicas y puntos de información.
- En países con más de una lengua oficial, los informes presupuestarios deberían publicarse en las lenguas cooficiales.
- Cada documento debe ser publicado obedeciendo a un calendario estricto y sin incurrir en retrasos. La publicación tardía de estos informes niega a la ciudadanía la capacidad de usar la información para participar en los procesos de toma de decisiones.

Estándares y directrices

- Código de transparencia fiscal del FMI <http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm>
- Criterios de elegibilidad de la OGP: Transparencia fiscal <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>
- Encuesta de Presupuesto Abierto IBP <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/>
- Guía de la IBP sobre transparencia en informes de presupuestos públicos http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Government_Transparency_Guide1.pdf
- OCDE: Directrices de mejores prácticas en transparencia presupuestaria <http://www.oecd.org/gov/budgeting/best-practices-budget-transparency.htm>

Ejemplos por países

Increasing numbers of countries publish the Executive Budget, Enacted Budget, Audit Report and Citizen's Budget

According to the 2012 survey by the International Budget Partnership, 22 countries out of 100 surveyed publish all four documents.

- <http://survey.internationalbudget.org/#availability>

Mexico has established a budget transparency portal

In Mexico the Ministry of Finance has historically published information on public finance. Some of this information was published as part of its regulatory obligations. However, information such as monthly data on of the revenue, expenditure, debt, transfers to local government, etc. was also published by the Executive initiative, as “Public Finance Statistics”.

In 2012 the Government decided to create a website with useful information on how resources are spent. The aims were to provide:

- Greater transparency in public-resource management
- Fiscal transparency in citizen language
- Thematic transparency, with particular attention to citizens interests

The portal's design serves to gathered budget information in one place and present it in plain language and open formats. It was developed through dialogue with social organisations and members of academia, and provides a front-end designed for easy user access and a back-end data warehouse to integrate budget information from the information systems of the Ministry, in real time, as it is updated internally. The data can be found in open file format “Excel” or “CSV” that let the users analyse and play with the information.

The portal seeks to link all stages of the budget process: planning, programming, budgeting, exercise and control, monitoring, evaluation and accountability. It includes government finance statistics, resources transferred to local governments, quarterly reports in open formats, year-end report, citizens budget and year end report as well as details of investment projects, indicators, goals and external evaluations.

Social media and a short ‘magazine’ style presentation of the highlights of the citizen’s budget have been used to increase accessibility

- <http://fiscaltransparency.net/wp-content/uploads/2013/11/Mexico-Presentation.pptx>
- <http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/>
- <http://www.opengovpartnership.org/country/mexico/case-study/inspiring-story-budget-transparency-portal>

The Philippines has developed a Citizen’s Budget Portal

As part of its first OGP Action Plan the Government of the Philippines committed to develop and launch a website, which will serve as an interactive platform for citizens to learn about and find information on the National Budget. The website budgetnngbayan.com includes a section called Budget 101 which explains the budget cycle in plain language. Budgets are available to download as pdf or Excel files, along with a ‘People’s Budget’ which provides explanation. Users of the site can comment and ask questions using Facebook. ‘Faith’ a Foreign Aid Transparency Hub is also under development.

The 2012 National Budget contains a general provision (Section 91) that requires agencies to disclose information on their mandates and the functions and designations of their key officials; their approved budgets and corresponding targets; funding, key beneficiaries and status of programs and projects; and annual accomplishment and accountability reports, among others. The 2012 Budget also contains special provisions that require the disclosure of additional information.

The Independent Review of the Philippines OGP progress found that Stakeholders, particularly those involved in budget

transparency work, found the website useful as a research tool. Citizens who posted queries on the website received feedback from the site administrator and recommended making the website even more interactive.

- <http://budgetngbayan.com/>
- <http://www.opengovpartnership.org/country/philippines/commitment/technology-and-innovation>
- <http://www.opengovpartnership.org/blog/blog-editor/2013/10/09/irm-releases-philippine-report-public-comment>

Inicial Step: Publicar una versión del presupuesto para los ciudadanos

Justificación

Los presupuestos del gobierno están tan repletos de números y jerga técnica que un lector medio apenas comprende su contenido. Para poder entender lo que hace el gobierno con el dinero y para poder participar en los asuntos del gobierno, la gente necesita que la información esté presentada de una manera accesible y comprensible.

En su Manual sobre Transparencia Fiscal, el Fondo Monetario Internacional afirma que "durante los presupuestos anuales se debería dar una amplia distribución a una guía resumida, sencilla y simple del presupuesto".

Este *presupuesto para ciudadanos* es útil para el público general, pero también para el gobierno, ya que mejora el conocimiento sobre el presupuesto y sobre los razonamientos que explican las decisiones en las que se basa.

Los presupuestos para ciudadanos suelen presentar una versión accesible del Proyecto de Presupuestos o del Presupuesto ejecutado. La creación de un presupuesto para ciudadanos mejora la capacidad del gobierno de que la información técnica resulte accesible a un público más amplio.

Recomendaciones

- Crear una estrategia para preparar un presupuesto para ciudadanos. Definir objetivos generales, objetivos específicos y plan de producción.
- Asegurarse de que el ministerio responsable cuenta con la estructura, los recursos y la capacidad para desarrollar y difundir adecuadamente un presupuesto para ciudadanos.
- Consultar a los usuarios potenciales con el fin de comprender sus intereses y sus necesidades.
- Diseñar y redactar un presupuesto para ciudadanos que responda a las necesidades de los usuarios e incluya información básica de interés sobre el presupuesto, como los supuestos en los que se basa, el proceso de aprobación, las prioridades en la asignación de recursos y de gasto, información sectorial, información sobre programas específicos e información de contacto para facilitar el seguimiento ciudadano.
- Publicarlo en distintos idiomas y a través de los medios de comunicación (periódicos, radio, televisión y vídeo) para darle mayor difusión, además de publicarlo en versión web y en formato impreso.
- Publicar el presupuesto para ciudadanos en un plazo que permita consultarlo al mismo tiempo que el documento oficial.
- Difundirlo lo mejor posible.
- Evaluar el proceso y la planificación para el presupuesto ciudadano del año sucesivo.

Estándares y directrices

- The Power Of Making It Simple: Una Guía para gobiernos que quieren presentar presupuestos ciudadanos <http://internationalbudget.org/publications/the-power-of-making-it-simple-a-government-guide-to-developing-citizens-budgets/>

Ejemplos por países

Brazil provides citizens education on public budgets

Brazil publishes an annual Citizen's Budget. However it also backs this up with several other innovative communication streams.

To better explain to citizens what the budget is, its importance and other aspects of the subject, a radio program titled Moment Budget is produced to provide information to the listener in a simple and direct language.

The Virtual School of the Federal Budget Secretariat (SOF) was created in 2008 by the Ministry of Planning, Budget and Management. It provides online courses on the understanding public budgets. Courses are aimed at both government employees and members of the public, and civil society. By 2011 the Virtual School graduated approximately 2000 citizens.

The government also created a specific Public Budget Primer for children, available as a booklet and a website. In the form of a comic, the booklet provides an introduction to the idea of the Public Budget in relation to children and their concerns.

- <http://www.orcamentofederal.gov.br/educacao-orcamentaria>
- <http://fiscaltransparency.net/wp-content/uploads/2013/11/Brazil-Experience-Public-Participation.ppt>

Guatemala developed a Citizens' Budget

In 2010 the Ministry of Finance in Guatemala decided to produce its first Citizens Budget in order to comply with laws that require it to make information available. The Ministry's initiative was aided by the support of the country's President, who was committed to budget transparency. His endorsement was very important because the initiative faced some considerable opposition from within the ministry itself.

The ministry also received an offer of cooperation and assistance from civil society groups, most particularly the Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos and the International Budget Partnership to help with translating the technical aspects of the budget into accessible language. It also consulted with media and other stakeholders. Publication of the Citizens Budget was supported by the German aid agency, GIZ.

The document was launched with a public event and with media attention. It was published in English Spanish and four Mayan language. However maintaining the sustainability of this approach has proved to be a challenge.

- http://www.opengovguide.com/wp-content/uploads/2013/09/citizen_budget11.pdf
- <http://www.opengovpartnership.org/calendar/webinar-citizen's-budget-dialogue-citizens>
- <http://www.youtube.com/watch?v=bNdGjsysHrM>

Kazakhstan's Citizen's Budget is mandated by legislation

In 2011, the government of Kazakhstan passed into law the Citizen's Budget Law, which covers the development of Citizens Budgets at both the central and local levels. What is unique about the Kazakh legislation is that Citizens Budgets will not only be published when the government publishes the Executive's Budget Proposal but also after the formulation, approval, implementation, and evaluation stages of the budget process. Relevant chapters of the Law are available on official websites of state agencies, including that of the Ministry of Finance, as well as local governments.

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizen-Budget-Guide.pdf>

Mexico has established a budget transparency portal

In Mexico the Ministry of Finance has historically published information on public finance. Some of this information was published as part of its regulatory obligations. However, information such as monthly data on of the revenue, expenditure, debt, transfers to local government, etc. was also published by the Executive initiative, as "Public Finance Statistics".

In 2012 the Government decided to create a website with useful information on how resources are spent. The aims were to provide:

- Greater transparency in public-resource management
- Fiscal transparency in citizen language
- Thematic transparency, with particular attention to citizens interests

The portal's design serves to gathered budget information in one place and present it in plain language and open formats. It was developed through dialogue with social organisations and members of academia, and provides a front-end designed for easy user access and a back-end data warehouse to integrate budget information from the information systems of the Ministry, in real time, as it is updated internally. The data can be found in open file format "Excel" or "CSV" that let the users analyse and play with the information.

The portal seeks to link all stages of the budget process: planning, programming, budgeting, exercise and control, monitoring, evaluation and accountability. It includes government finance statistics, resources transferred to local governments, quarterly reports in open formats, year-end report, citizens budget and year end report as well as details of investment projects, indicators, goals and external evaluations.

Social media and a short 'magazine' style presentation of the highlights of the citizen's budget have been used to increase accessibility

- <http://fiscaltransparency.net/wp-content/uploads/2013/11/Mexico-Presentation.pptx>
- <http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/>
- <http://www.opengovpartnership.org/country/mexico/case-study/inspiring-story-budget-transparency-portal>

Rwanda started publishing a Citizen's Guide to the Budget in 2009

Rwanda's Ministry of Finance first published a Citizen's Guide to the Budget in June 2009. The first edition was quite dense and not tailored to non-specialist readers. However in 2010 they produced a more user-friendly guide, using less technical language and including cartoons. It was produced in French, English, and Kinyarwanda and more than 10,000 copies were distributed. It also highlighted how citizens can get involved in developing and monitoring the

national budget.

- http://www.opengovguide.com/wp-content/uploads/2013/09/Rwanda_2011-12.pdf
- http://www.opengovguide.com/wp-content/uploads/2013/09/Rwanda_transparency_and_citizens_guide.pdf

Tanzania produced a Citizen's Budget Handbook

In Tanzania the Ministry of Finance (MoF) worked with the Policy Forum network of NGOs to produce a Citizen's Budget Handbook — a simplified digest of the national budget. It explains concepts, avoids using too much technical jargon, and uses cartoons and simple graphs to make it easy to understand. It is produced in English and Swahili, and gives a particular focus to those areas that have a direct impact on citizens livelihoods such as education, health, water, energy and transport.

- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Tanzania_0.pdf
- <http://www.mof.go.tz/mofdocs/budget/Citizens%20Budget/CITIZENS%20BUDGET%202012-2013%20-%20English.pdf>

Tanzania promotes citizen's awareness of the national budget

The Tanzanian Ministry of Finance in cooperation with Policy Forum, a network of over 100 NGOs in Tanzania, have started producing a Citizen's Budget Handbook. The Handbook is a simplified digest of the national budget explaining the main features of the national budget in non-technical jargon. For the 2012 financial year, 50,000 Handbooks were printed and disseminated to the public in both of Tanzania's official languages (English and Swahili).

- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Tanzania.pdf>

The Philippines has developed a Citizen's Budget Portal

As part of its first OGP Action Plan the Government of the Philippines committed to develop and launch a website, which will serve as an interactive platform for citizens to learn about and find information on the National Budget. The website budgetngbayan.com includes a section called Budget 101 which explains the budget cycle in plain language. Budgets are available to download as pdf or Excel files, along with a 'People's Budget' which provides explanation. Users of the site can comment and ask questions using Facebook. 'Faith' a Foreign Aid Transparency Hub is also under development.

The 2012 National Budget contains a general provision (Section 91) that requires agencies to disclose information on their mandates and the functions and designations of their key officials; their approved budgets and corresponding targets; funding, key beneficiaries and status of programs and projects; and annual accomplishment and accountability reports, among others. The 2012 Budget also contains special provisions that require the disclosure of additional information.

The Independent Review of the Philippines OGP progress found that Stakeholders, particularly those involved in budget transparency work, found the website useful as a research tool. Citizens who posted queries on the website received feedback from the site administrator and recommended making the website even more interactive.

- <http://budgetngbayan.com/>
- <http://www.opengovpartnership.org/country/philippines/commitment/technology-and-innovation>
- <http://www.opengovpartnership.org/blog/blog-editor/2013/10/09/irm-releases-philippine-report-public-comment>

Inicial Step: Publish Executive's Budget Proposal and Audit Reports

Justificación

Una rápida publicación de la documentación presupuestaria básica pone los fundamentos para la rendición de cuentas y la apertura en el sistema presupuestario. Tanto el código de transparencia fiscal del FMI como las directrices de la OCDE sobre mejores prácticas en transparencia presupuestaria recomiendan la publicación del proyecto de presupuestos del Ejecutivo y los informes de fiscalización. INTOSAI (Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores) recomienda la publicación de informes de auditoría. Además, el Índice de Presupuesto Abierto de International Budget Partnership evalúa estos informes.


Recomendaciones

- El Ejecutivo, bajo la iniciativa del Ministro de Finanzas, debería publicar el Proyecto de Presupuestos del Ejecutivo, a ser posible tres meses antes del comienzo del ejercicio. Este informe presenta los planes del gobierno en detalle, atendiendo a las prioridades y a los presupuestos de cada ministerio y cada entidad pública para el siguiente año fiscal.
- La máxima autoridad auditora debería publicar un informe de auditoría, a ser posible en el término de entre seis meses y un año después del cierre del ejercicio en cuestión. Esta entidad debe ser independiente del Ejecutivo y recibir el mandato de revisar mediante un proceso de auditoría la ejecución financiera del presupuesto del ejercicio anterior por parte del gobierno. Las auditorías también pueden extenderse a entidades concretas y centrarse en aspectos no financieros de la actuación del Ejecutivo.

Estándares y directrices

- Código de transparencia fiscal del FMI <http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm>
- Criterios de elegibilidad de la OGP: Transparencia fiscal <http://www.opengovpartnership.org/eligibility>
- Criterios de elegibilidad de la OGP: Transparencia fiscal <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>
- Encuesta de Presupuesto Abierto IBP <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/>
- INTOSAI: Principios básicos de auditoría pública http://www.issai.org/media/12943/issai_100_e.pdf
- OCDE: Directrices de mejores prácticas en transparencia presupuestaria <http://www.oecd.org/gov/budgeting/best-practices-budget-transparency.htm>

Ejemplos por países

 Afghanistan has established a roadmap to improve public financial management

In 2010 the Afghanistan government drafted a Public Financial Management (PFM) Roadmap focused on

“strengthening the budget in driving effective delivery of key priority [development] outcomes; improving budget execution; and increasing accountability and transparency.

Key factors were the political will of the leadership of the Ministry of Finance, as well as the government’s desire to improve its international image. Donor organizations and international financial institutions also increasingly focused their attention on fiscal transparency as a means to reduce corruption in the country. Their pressure, coupled with technical assistance provided to the Ministry of Finance, facilitated quick improvements. The pre-budget statement and executive’s budget proposal were previously produced for internal use but withheld from the public, so making them publicly available was a quick and easy step toward substantial improvement.

As part and parcel of these developments, civil society organizations and researchers have started engaging with the government, primarily through the Ministry of Finance, on budget-related issues, publishing budget analyses and organizing public awareness campaigns through the media, and conducting meetings and workshops to highlight the importance of budget transparency for citizen monitoring and government accountability.

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>

Many countries publish the Executive’s Budget Proposal and Audit Report

According to the 2012 survey by the International Budget Partnership 62 countries out of 100 surveyed publish both the Executive’s Budget Proposal and the Audit Reports.

- <http://survey.internationalbudget.org/#availability>

Mexico has established a budget transparency portal

In Mexico the Ministry of Finance has historically published information on public finance. Some of this information was published as part of its regulatory obligations. However, information such as monthly data on of the revenue, expenditure, debt, transfers to local government, etc.was also published by the Executive initiative, as “Public Finance Statistics”.

In 2012 the Government decided to create a website with useful information on how resources are spent. The aims were to provide:

- Greater transparency in public-resource management
- Fiscal transparency in citizen language
- Thematic transparency, with particular attention to citizens interests

The portal’s design serves to gathered budget information in one place and present it in plain language and open formats. It was developed through dialogue with social organisations and members of academia, and provides a front-end designed for easy user access and a back-end data warehouse to integrate budget information from the information systems of the Ministry, in real time, as it is updated internally. The data can be found in open file format “Excel” or “CSV” that let the users analyse and play with the information.

The portal seeks to link all stages of the budget process: planning, programming, budgeting, exercise and control, monitoring, evaluation and accountability. It includes government finance statistics, resources transferred to local governments, quarterly reports in open formats, year-end report, citizens budget and year end report as well as details of investment projects, indicators, goals and external evaluations.

Social media and a short 'magazine' style presentation of the highlights of the citizen's budget have been used to increase accessibility

- <http://fiscaltransparency.net/wp-content/uploads/2013/11/Mexico-Presentation.pptx>
- <http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/>
- <http://www.opengovpartnership.org/country/mexico/case-study/inspiring-story-budget-transparency-portal>

The Philippines has developed a Citizen's Budget Portal

As part of its first OGP Action Plan the Government of the Philippines committed to develop and launch a website, which will serve as an interactive platform for citizens to learn about and find information on the National Budget. The website budgetngbayan.com includes a section called Budget 101 which explains the budget cycle in plain language. Budgets are available to download as pdf or Excel files, along with a 'People's Budget' which provides explanation. Users of the site can comment and ask questions using Facebook. 'Faith' a Foreign Aid Transparency Hub is also under development.

The 2012 National Budget contains a general provision (Section 91) that requires agencies to disclose information on their mandates and the functions and designations of their key officials; their approved budgets and corresponding targets; funding, key beneficiaries and status of programs and projects; and annual accomplishment and accountability reports, among others. The 2012 Budget also contains special provisions that require the disclosure of additional information.

The Independent Review of the Philippines OGP progress found that Stakeholders, particularly those involved in budget transparency work, found the website useful as a research tool. Citizens who posted queries on the website received feedback from the site administrator and recommended making the website even more interactive.

- <http://budgetngbayan.com/>
- <http://www.opengovpartnership.org/country/philippines/commitment/technology-and-innovation>
- <http://www.opengovpartnership.org/blog/blog-editor/2013/10/09/irm-releases-philippine-report-public-comment>

Intermedio Step: Consultar a la ciudadanía durante la preparación de los presupuestos

Justificación

Pese a tener la responsabilidad de tomar las decisiones más importantes sobre los problemas del país y su desarrollo en el futuro, a menudo los gobiernos ignoran información importante y no tienen la capacidad de investigar y analizar todas las cuestiones relacionadas con la recaudación y el gasto. Al incrementar las opciones que las organizaciones de la sociedad civil tienen de participar directamente en los procesos de gobierno, los gobiernos pueden beneficiarse de sus conocimientos.

Recomendaciones

Organizar reuniones sectoriales y ministeriales para consultar al público sobre las prioridades presupuestarias generales, las políticas macroeconómicas y los problemas relacionados con la asignación de recursos en los distintos programas presupuestarios, además de proveer al público con información detallada sobre cómo se han empleado sus aportaciones.

Estándares y directrices

- Encuesta de Presupuesto Abierto IBP <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/>
- Principios GIFT de alto nivel sobre transparencia financiera <http://fiscaltransparency.net/wp-content/uploads/2012/09/GIFT-High-Level-Principles-2012-08-ENG.pdf>

Ejemplos por países

New Zealand uses a wide range of mechanisms to seek public input

New Zealand has adopted a number of mechanisms to seek public input on various aspects of budget implementation and service delivery. Individual government departments and agencies collect information from client surveys, hold public consultations before the government publishes statements and rulings, and maintain hot links on the Inland Revenue website for public consultation, feedback, 'report tax evasion or fraud anonymously', and complaints.

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>

Intermedio Step: Habilitar procedimientos eficaces de control parlamentario y de auditoría

Justificación

Los parlamentos y las Instituciones Superiores de Auditoría (ISA) tiene una importancia capital en la responsabilización del ejecutivo en materia de política fiscal. El parlamento necesita de una autoridad clara, además de tiempo, información y recursos, tanto financieros como no financieros. Si el parlamento aspira a contar con toda la legitimidad que confiere la confianza de la ciudadanía, deberá actuar en un entorno claro, participativo y responsable.

En muchos países, el ejecutivo apenas consulta al parlamento durante la configuración de los presupuestos, y en algunos países los diputados reciben el proyecto de presupuestos de manos del Ejecutivo a tan solo seis semanas del comienzo del ejercicio, o incluso al comienzo del ejercicio, si es que llegan a recibirlo.

En muchos países, los miembros del Poder Legislativo dependen de equipos de investigación demasiado exiguos o se ven obligados a recurrir a investigadores externos para preparar los debates. En algunos casos, no existe ningún tipo de capacidad investigadora en la que puedan apoyarse.

Por ello es de crucial importancia que exista una institución superior de auditoría, que sea independiente y que esté debidamente equipada. Las Instituciones Superiores de Auditoría (ISA) garantizan la integridad y la veracidad de la información financiera, además de su adecuación a las reglas presupuestarias. Las SAI también pueden participar en la auditoría de la ejecución o en el seguimiento y la evaluación de la información, tanto financiera como no financiera, en el proceso presupuestario.

Recomendaciones

- El Ejecutivo o el Legislativo (dependiendo del país) debería promover la creación de una unidad independiente de investigación que sirva de apoyo al parlamento durante el análisis de los presupuestos presentados por el Ejecutivo.
- Tras la aprobación parlamentaria de los presupuestos, el visto bueno de las cámaras se debe seguir buscando cada vez que el Ejecutivo decida imputar nuevos ingresos o se proponga recurrir fondos de contingencia.
- Las instituciones superiores de auditoría necesitan recursos suficientes que les permitan cumplir con su mandato con la eficacia esperada. También deben ser independientes del Ejecutivo, (motivo por el cual, por ejemplo, el Ejecutivo no debería poder cesar a la dirección de la institución superior de auditoría sin el consentimiento previo del poder legislativo o el judicial.

Estándares y directrices


- Declaraciones de la INTOSAI de Lima y de México sobre la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores <http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html>
- Encuesta de Presupuesto Abierto IBP <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/>
- INTOSAI: Principios básicos de auditoría pública http://www.issai.org/media/12943/issai_100_e.pdf

Ejemplos por países

 In 2011, the Parliamentary Budget Office was established in Kenya


Kenya's Parliamentary Budget Office, established by the 2009 Fiscal Management Act, is a non-partisan office of the Kenya National Assembly. Its primary function is to provide timely and objective information and analysis concerning the national budget and economy.

- <http://www.marsgroupkenya.org/pdfs/2012/11/Kenya%20MPs%20Budget%20Watch%20September%202012.pdf>

 In many countries, fiscal councils are providing independent analysis of government budgets and policies

Fiscal councils are independent bodies set up by governments to evaluate fiscal policy and provide advice. As such, they can be seen as fiscal watchdogs. In the last few years, five countries (Sweden, Canada, Hungary, Slovenia, and the United Kingdom) have established fiscal councils, and the United States and Netherlands have had such institutions in place for longer than that.

- <http://www.voxeu.org/article/what-are-fiscal-councils-and-what-do-they-do>

 The Congressional Budget Office in the United States offers credible and impartial support to legislators across party lines

The US Congressional Budget Office, established in 1974, produces independent analyses of budgetary and economic issues to support the Congressional budget process. The agency is strictly non-partisan and conducts objective, impartial analysis.

- <http://www.cbo.gov/>

Intermedio Step: Publicar los ocho informes presupuestarios más importantes

Justificación

Las buenas prácticas que gozan de reconocimiento internacional exigen que los gobiernos publiquen al menos ocho informes presupuestarios en varios momentos a lo largo del año:

- **El documento preliminar** presenta los parámetros generales y los supuestos macroeconómicos que enmarcan el Proyecto de presupuestos del Ejecutivo.
- **El Proyecto de presupuestos del Ejecutivo** delinea los planes de ingresos y gastos del gobierno.
- **Los Presupuestos aprobados** son el resultado de la discusión de la propuesta del Ejecutivo en el Parlamento.
- **Los informes de auditoría** contienen la evaluación formal e independiente de la institución auditora, en la que se indica si el gobierno ha recaudado y gastado fondos de acuerdo con los presupuestos aprobados y en cumplimiento de la ley. Los ciudadanos deben tener acceso a este documento para poder valorar adecuadamente la actividad del gobierno.
- **Un presupuesto para ciudadanos** que provea una presentación no técnica de los presupuestos (es decir, del Proyecto de presupuestos del Ejecutivo o de los Presupuestos aprobados) y resulte fácilmente accesible para todos los ciudadanos.
- **Los informes de ejecución (Informe de seguimiento de la ejecución y Revisión de mediados de año)** proporcionan información actual sobre la ejecución real de los presupuestos, permitiendo que se lleven a cabo correcciones de medio plazo, que se vuelvan a asignar ciertas partidas o se realicen aportaciones adicionales allí donde sea necesario.
- **Los informes anuales** permiten comparar entre el gasto previsto y el gasto real, mejorando el proceso de rendición de cuentas y proporcionando información fehaciente que debe servir como punto de partida para la toma de decisiones sobre el siguiente ejercicio.

Para que estos informes sean útiles es importante que proporcionen detalles adecuados que permitan a la ciudadanía tener una imagen cabal y completa de cómo la administración recauda y gasta el dinero. Ello implica que los informes presupuestarios deberán proporcionar información sobre los flujos (gastos, ingresos y balances), pero también sobre las existencias (deuda pública, activos financieros y no financieros y responsabilidades) Los informes presupuestarios también deberían incluir información sobre la ejecución (objetivos y resultados) de los programas más importantes. Esta información debería ser completada con documentos sobre la estrategia fiscal e informes sobre su cumplimiento. Por último, los gobiernos deberían informar acerca de cómo están gestionando los riesgos fiscales, como las garantías gubernamentales, las crisis macroeconómicas y los riesgos del sector financiero

El código de transparencia fiscal de la FMI, las directrices de mejores prácticas de la OCDE sobre transparencia presupuestaria y la Encuesta de presupuestos abiertos de la IBP recomiendan la publicación de los informes más importantes durante la planificación, la implementación y la evaluación de los presupuestos. Además, la encuesta de la IBP detalla la información que se debería incluir en estos informes. El FMI realiza evaluaciones periódicas de la transparencia fiscal a través de sus ROSC (informes sobre el cumplimiento de estándares y códigos). La OCDE y la IBP evalúan la transparencia presupuestaria con sendas encuestas. El marco de la PEFA, que dirige el Banco Mundial, también evalúa algunos de estos asuntos. Tanto la IBP en su Encuesta de presupuestos abiertos, como el FMI en su Código de transparencia fiscal y la OCDE en sus directrices de mejores prácticas indican buenas prácticas sobre el cumplimiento de plazos y la amplitud de los informes presupuestarios.

Recomendaciones

1. Publicar un documento preliminar y completo al menos un mes antes de la publicación del Proyecto de presupuestos del Ejecutivo
2. Publicar el Proyecto de presupuestos del Ejecutivo complete. Es de desear que la publicación ocurra al menos tres meses antes del inicio del ejercicio
3. Publicar unos Presupuestos aprobados completos. Es de desear que se publiquen en cuanto el presupuesto sea aprobado en el Parlamento.
4. Publicar un Presupuesto para ciudadanos complete. Es de desear que la publicación coincida con la del Proyecto de presupuestos del Ejecutivo o con la de los Presupuestos aprobados.
5. Publicar informes de seguimiento de la ejecución mensuales o trimestrales en los que figure la recaudación, los gastos incurridos y la deuda. Es de desear que se publiquen en el plazo de 30 días a seis semanas desde el final del periodo analizado en el informe.
6. Publicar una Revisión de mediados de año completa. Es de desear se publiquen en el plazo de 30 días a seis semanas desde la fecha media del año presupuestario.
7. Publicar un informe anual completo. Es de desear que se publique en el plazo de seis meses a un año después del cierre del ejercicio.
8. Publicar un Informe de auditoría completo. Es de desear que se publique en el plazo de seis meses a un año después del cierre del ejercicio. Además de los informes de auditoría, el gobierno debería publicar informes sobre las medidas realizadas para seguir las recomendaciones resultantes de la auditoría.

Estándares y directrices

- Código de transparencia fiscal del FMI <http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm>
- Encuesta de Presupuesto Abierto IBP <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/>
- Guía de la IBP sobre transparencia en informes de presupuestos públicos http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Government_Transparency_Guide1.pdf
- OCDE: Directrices de mejores prácticas en transparencia presupuestaria <http://www.oecd.org/gov/budgeting/best-practices-budget-transparency.htm>

Ejemplos por países

A few countries publish all eight key budget documents

France, Honduras, Italy, New Zealand, the UK, Uganda, Slovakia and South Africa are among the countries that publish all eight key budget documents. The Executive Budget Proposals in countries New Zealand, South Africa, and the United Kingdom also meet international best practice criteria.

- <http://survey.internationalbudget.org/#availability>

Honduras publishes all eight key budget documents

Until recently the Honduran government produced most of the budget documents for internal use, but only made limited information public.

After a political crisis in 2009, the new Honduran government began to focus on improving its financial management practices, including making the budget more transparent. It undertook these efforts in order to establish legitimacy with the international community, secure foreign assistance, reduce the fiscal deficit, and tackle development problems more effectively.

An interagency commission was set up under the coordination of the President's office to draw up a plan to improve fiscal transparency and management and requested technical assistance from the International Budget Partnership. This included bringing government and local civil society organisations together to discuss budget transparency issues.

- <http://http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>
- <http://www.opengovpartnership.org/country/honduras/action-plan>

Mexico has established a budget transparency portal

In Mexico the Ministry of Finance has historically published information on public finance. Some of this information was published as part of its regulatory obligations. However, information such as monthly data on of the revenue, expenditure, debt, transfers to local government, etc. was also published by the Executive initiative, as "Public Finance Statistics".

In 2012 the Government decided to create a website with useful information on how resources are spent. The aims were to provide:

- Greater transparency in public-resource management
- Fiscal transparency in citizen language
- Thematic transparency, with particular attention to citizens interests

The portal's design serves to gathered budget information in one place and present it in plain language and open formats. It was developed through dialogue with social organisations and members of academia, and provides a front-end designed for easy user access and a back-end data warehouse to integrate budget information from the information systems of the Ministry, in real time, as it is updated internally. The data can be found in open file format "Excel" or "CSV" that let the users analyse and play with the information.

The portal seeks to link all stages of the budget process: planning, programming, budgeting, exercise and control, monitoring, evaluation and accountability. It includes government finance statistics, resources transferred to local governments, quarterly reports in open formats, year-end report, citizens budget and year end report as well as details of investment projects, indicators, goals and external evaluations.

Social media and a short 'magazine' style presentation of the highlights of the citizen's budget have been used to increase accessibility

- <http://fiscaltransparency.net/wp-content/uploads/2013/11/Mexico-Presentation.pptx>
- <http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/>
- <http://www.opengovpartnership.org/country/mexico/case-study/inspiring-story-budget-transparency-portal>

Justificación

Los informes presupuestarios nacionales incluyen, por lo general, miles de elementos de ingresos y gastos. Para poder entender correctamente estos números, ciudadanos e investigadores necesitan poder analizar y manipular los datos que contienen los informes. Con la tecnología actual, los datos se pueden estructurar en formatos fácilmente manipulables. Por consiguiente, los gobiernos deberían facilitar el uso de datos presupuestarios y publicar dichos datos en formatos legibles a máquina que todos los buscadores web más comunes puedan recuperarlos, descargarlos, indexarlos y buscarlos.

Los formatos abiertos, como los archivos CSV no sujetos a derechos, son aquellos cuyas especificaciones son accesibles para todo el mundo de forma gratuita, permitiendo que los datos contenidos en un archivo concreto puedan ser leídos por distintos programas de software.


Recomendaciones

1. Como primer paso, se deberían publicar todos los documentos presupuestarios en hojas de cálculo de Excel.
2. A largo plazo, los datos presupuestarios pertinentes deberían publicarse directamente en sistemas de administración de la información financiera (en inglés FMIS, o Financial Management Information Systems) y cumplir con los estándares de datos.

Estándares y directrices

- Banco Mundial: Sistemas de información de gestión financiera y datos financieros abiertos <http://www.worldbank.org/publicfinance/FMIS>
- Open Data Index <http://https://index.okfn.org/>

Ejemplos por países

 The Brazilian ministry of finance publishes large amount of budget data in machine-readable formats

Brazil has developed a number of instruments for fiscal transparency. The most well known initiative perhaps is the transparency portal www.portaltransparencia.gov.br/, which was started in 2004 and which draws together information from across the federal government. The portal includes information on public revenues, budgets and spending as well as income and assets of public servants and information on procurement. It is updated daily and provides searchable, open access to the data, as well as offering specific sections focused on areas of particular interest such as the World Cup and the Olympics.

The portal aims to provide information which can be easily accessed and used. For example budget lines are tagged with popular names (for example 'bolsa familia' as well as the official title 'Transferência de renda e apoio à família no acesso à saúde e a à educação'). The information in the budget portal is provided in the form of open, machine readable data, so that it can be used and reused by civil society, media and other organisations to create analysis, visualisations and tools to navigate the information.

As the practice of transparency has developed, so too has the legal framework. In 2012 Brazil established a new Transparency Law obliging all Brazilian public entities (executive, judiciary and legislative bodies at the federal, state and municipality levels, as well as in the federal district) to publish detailed budget data online in real time. The transparency initiative is led by the Office of the Comptroller General. Significant effort has been put into education and dialogue, both within and outside of government, to understand user information needs, to support users to use the data and to generate high quality information flows.

As part of its first OGP Action Plan Brazil has been providing more budget information on its transparency portal,

improving data on social benefits and on contracts. In its second Action Plan there is a plan to rebuild the Transparency Portal completely, based on learning from the first ten years, to improve quality and usability and to connect budget information to datasets on actions. The federal government is now working to encourage states and municipalities to develop their own portals.

[Source: Based on a webinar presentation by Otavio Castro Neves, July 30 2013]

- <http://www.opengovpartnership.org/webinar-introducing-fiscal-openness-working-group>

Avanzado Step: Habilitar procesos de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos públicos

Justificación

Los presupuestos ciudadanos son un concepto relativamente nuevo en el campo de la administración de las finanzas públicas.

La participación ciudadana en el proceso de confección de los presupuestos es importante por toda una serie de razones. En ese sentido, una publicación de la OCDE (Tanaka, 2007) señala varias razones importantes para la participación pública en la elaboración de presupuestos.

- Las decisiones presupuestarias tienen un impacto importante en las vidas de los ciudadanos, por lo que deberían asimilar los puntos de vista y los valores de los ciudadanos.
- La participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos aumenta la información sobre los efectos que puedan tener en la población las decisiones del gobierno, ayudando a evitar consecuencias imprevistas
- El escrutinio ciudadano ayuda a que los responsables de la toma de decisiones sean diligentes en su cometido. Puede mejorar la eficiencia, la agilidad en la respuesta y la rendición de cuentas del gobierno, además de ayudar en la lucha contra la corrupción.
- Al involucrar a la ciudadanía en la elaboración de los presupuestos, esta puede verse enfrentada a los mismos dilemas que debe resolver el gobierno, lo que puede contribuir a un debate más fructífero entre el gobierno y los ciudadanos.
- La participación ciudadana en decisiones tan vitales como las presupuestarias puede paliar el cinismo y la desconfianza en el sistema público, aumentando la legitimidad del gobierno.
- La participación ciudadana favorece que el gobierno escuche las necesidades, los puntos de vista y los valores de la ciudadanía.

Recomendaciones

Desarrollar un sistema de peticiones de auditoría ciudadana, mecanismos de auditoría social y sistemas de presupuestos participativos.

A continuación señalamos algunos de los principios que pueden guiar al gobierno en el desarrollo de mecanismos para la participación ciudadana en materia presupuestaria. Estos principios se han usado como indicadores de participación ciudadana en la Encuesta de presupuestos abiertos, y son responsabilidad de los ministerios de economía.

1. Asumir la responsabilidad de desarrollar e implementar una estrategia de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos públicos.
2. Identificar ejemplos de buenas prácticas internacionales, nacionales y locales.
3. Definir un objetivo o conjunto de objetivos claros para la participación de la ciudadanía en la elaboración de los presupuestos, y definir claramente la profundidad de la participación.
4. Identificar barreras institucionales y culturales que frenen la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos, y diseñar alternativas para superarlas.
5. Considerar con atención quién debería participar en la elaboración de los presupuestos, y en qué fase del proceso de elaboración debería hacerlo.
6. Desarrollar distintas oportunidades para que los ciudadanos, la sociedad civil y otros actores puedan participar en la elaboración de los presupuestos.
7. Garantizar que la participación en la elaboración de los presupuestos es un proceso abierto y transparente.
8. Informar a los participantes sobre los resultados y el impacto de las consultas, y publicar dichos resultados para mejorar la visibilidad pública.

Estándares y directrices

- Encuesta de Presupuesto Abierto IBP <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/>
- Guía de presupuestos participativos de la IBP <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/A-Guide-to-Participatory-Budgeting.pdf>
- Libro sobre presupuestos participativos del Banco Mundial <http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ParticipatoryBudgeting.pdf>

Ejemplos por países

Botswana has developed a “budget pitso” forum


Botswana has introduced a promising initiative that uses an innovative “budget pitso” (or consultation forum) system to enable the public to be part of budget formulation. This “pitso” has its origins in the community participation “kgotla” system, which is one of the oldest forms of public participation in governance in the world.

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>

Citizens in South Korea can submit requests for audits of programs or agencies

The Board of Audit and Inspection (BAI) in South Korea has introduced various arrangements that help to incorporate citizen opinions and input into its audit activities. One such arrangement is the Citizens’ Audit Request System, which was introduced in 2001 to promote timely and efficient audits and trust in the national audit agency. Citizens may request audits related to public sector organizations in which the violation of laws or corruption could seriously undermine the public interest. A Citizens Audit Request Screening Committee, established within the BAI, decides for or against a request. For those requests that are approved, the BAI conducts audits and notifies the requesting parties of the results. The system has become widely known among the general public, and the number of audit requests is increasing.

- <http://www.intosajournal.org/technicalarticles/technicalapr06.html>

 Germany invites economists, business and trade unions to give testimony to budget hearings

In Germany the parliament's budget committee holds public hearings in which testimony from economists, trade associations, labor unions, employer federations, and civil service employee associations, among others, is heard. The budget committee determines the focus of these talks.

[NB: this example is drawn from the information collected in the Open Budget Survey. While the Survey references these examples, it does not assess the quality of public engagement as a result of these mechanisms. The Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) has recently commissioned case studies to assess the quality of public participation in budget decision-making in a number of countries. This guide will be updated with information from these case studies when the case studies are published.]

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>

 South Africa invites interested parties to present on budget proposals

The South African Money Bill Amendment Procedure and Related Matters Act requires parliament to hold public hearings on the fiscal framework and revenue proposals. Interested parties are invited to make oral presentations during the hearings.

[NB: this example is drawn from the information collected in the Open Budget Survey. While the Survey references these examples, it does not assess the quality of public engagement as a result of these mechanisms. The Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) has recently commissioned case studies to assess the quality of public participation in budget decision-making in a number of countries. This guide will be updated with information from these case studies when the case studies are published.]

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>

 South Korea has systems to enable citizens to participate in budget decisions

In South Korea the Budget Office introduced significant public financial management (PFM) reforms in 2003, including a medium term expenditure framework, performance based budgeting and integrated financial management system. This improved the budget process but posed a potential problem. Without credible mechanisms for setting multi-year budget ceilings and sticking to them they could easily be undermined. . In order to help make the budget ceilings effective the authorities developed a process of participation in the budget formulation process . This allows the government to assert that a realistic expenditure ceiling has been established, and the government's hands are tied in any attempt to renegotiate the ceiling. Citizen's involvement has also been encouraged to improve the execution of the budget and to enhance fiscal transparency between national and local government.

There are six main mechanisms for participation, formalised Open Discussions, field trips for central government officials to meet local government officials, a fiscal policy advisory council made up of civil society representatives and officials from national and local government, an assembly of experts, a budget waste report centre and public participation in audit. These processes are integrated into the annual budget formulation cycle.

Through the Budget Waste Report Center citizens can report any suspected cases of budget waste using an online form or a telephone hotline. Citizens can suggest creative ways to save budget resources. Retired Budget Officials manage

the hotline, sending cases to relevant departments. Advertising has been used to increase awareness and encourage participation. Public participation in auditing takes place in three ways. Citizens are encouraged to suggest what public entity should be audited. They can request the audit board examines any reports of impropriety and can gather to collectively request audits, not only on budget waste, but also on delays in program implementation and completion and unreasonable public policy. In 2012 the budget office launched its first contest to gather creative ideas from the public on new fiscal projects. A total of 866 ideas were submitted and 12 suggestions were reflected in the budget.

[Source: World Bank, PREM Notes]

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>
- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Kang-and-Min-Public-Participation-in-the-Budget-Process-in-ROK.pdf>
- <http://fiscaltransparency.net/wp-content/uploads/2013/11/Korea-Public-Participation-Case.pptx>
- <http://blogs.worldbank.org/governance/public-participation-budget-process-republic-korea>

State governments in India use social audit techniques to monitor government programs

In the Indian state of Andhra Pradesh, social audits techniques are being used to hold government accountable. Social audits, apart from including audit of expenses or decisions, also cover issues of equity and quality in programme implementation, and are conducted jointly by government and civil society. The social audit process used here includes public vigilance and verification at the various stages of project implementation. Social audit forums, or public hearings, are also organised as part of the process. In these forums information is read out publicly and people are given the opportunity to question officials, seek and obtain information, verify financial expenditure, examine the provision of entitlements, discuss the priorities reflected in choices made, and critically evaluate the quality of works as well as the functioning of the programme staff.

- <http://125.22.8.66/SocialAudit/>

Trinidad and Tobago uses stakeholder forums and Facebook to gather budget input

In Trinidad and Tobago the Ministry of Finance holds “post-budget forums” to gather input from and respond to the public. Key groups such as agriculture, youths, etc. are invited to give their perspectives on the budget. All members of the public are invited to call or send text messages to the Minister of Finance; and make comments publicly through Facebook and the ministry's website.

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBI2012-Report-English.pdf>

Avanzado Step: Publicar información financiera no incluida en los presupuestos

Justificación

A menudo, los gobiernos llevan a cabo acciones financieras no incluidas en los presupuestos nacionales a través de

distintas vías, como los fondos de pensiones y de la seguridad social, las empresas públicas, la banca, la extracción de recursos naturales, la ayuda para el desarrollo, la cancelación de la deuda o las privatizaciones de entes públicos. Algunas de estas operaciones, o todas ellas, pueden no aparecer en los presupuestos nacionales. Durante los últimos años se ha puesto un especial hincapié en que los gobiernos tengan presupuestos equilibrados con bajos niveles de deuda. Este tipo de mandamientos pueden incentivar el uso de actividades cuasi-fiscales que enmascaren el coste real de las políticas públicas.

Las actividades fiscales son subsidios y déficits que no figuran en las cuentas financieras del gobierno, como los préstamos financiados de la banca, proporcionados por el banco central, los servicios públicos no comerciales proveídos por empresas de titularidad pública, o el empleo de muchas tasas distintas para el cambio de divisas.

El gasto fiscal es otra medida financiera que generalmente no es bien comprendida y se suele esconder a los ojos del público. Se suele definir como la estimación de la pérdida de recaudación resultante de la concesión de beneficios o privilegios fiscales a cierto tipo de contribuyente o de actividad. La pérdida de recaudación, o "gasto" de naturaleza fiscal se calcula como la diferencia entre lo que se hubiera pagado por el impuesto que fuere bajo la ley fiscal correspondiente (en virtud de la cual se identifica la estructura impositiva que debería aplicarse a los contribuyentes) y la tasa reducida que fue pagada realmente después de la exención.


Recomendaciones

1. Publicar información actualizada, periódica, completa, accesible precisa sobre las actividades financieras que no entran dentro de los elementos incluidos en el presupuesto nacional, con especial atención a la financiación extrapresupuestaria, los gastos fiscales y las actividades cuasi-fiscales.
2. La documentación presupuestaria debería incluir declaraciones sobre el objetivo, la duración y los beneficiarios de casi cualquier actividad cuasi-fiscal. Para ello puede basarse en la información que proporcionen las organizaciones que realicen dichas actividades, ya se trate de empresas de titularidad pública o del banco central.
3. Las grandes empresas públicas deberían incluir ciertas informaciones en sus informes, como los servicios no comerciales que les exija el gobierno o los préstamos a otras organizaciones de titularidad pública. Los bancos centrales, a su vez, deberían informar sobre cualquier actividad de políticas públicas no monetarias que lleven a cabo en nombre de su gobierno.

Estándares y directrices


- Código de transparencia fiscal del FMI <http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm>
- IBP - Más allá de los presupuestos <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf>
- OCDE: Directrices en materia de gobernanza corporativa de empresas públicas <http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/34803211.pdf>

Ejemplos por países

 In Azerbaijan, fuel subsidies provided by the national oil company were put on the budget

In Azerbaijan, fuel subsidies provided by the national oil company, SOCAR, were put on budget by recognizing the amount of the subsidy in the budget and granting SOCAR tax credits for the same amount.

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget-3-Quasi-Fiscal-Activities.pdf>

 In South Africa information on quasi-fiscal activities is provided in the main budget or the budgets of the relevant agencies

In South Africa all quasi-fiscal activities are included either in the main budget or in the budgets of the relevant extra-budgetary agencies. In terms of accounting for extra-budgetary funds, the South African executive's budget and supporting documentation present extensive information on extra-budgetary funds, including both a narrative discussion and quantitative estimates of such funds. The bulk of extra-budgetary funds in South Africa are composed of social security funds, such as the Road Accident Fund, the Unemployment Insurance Fund, and the Compensation Funds. The money for these items is not included in the budget, but information on their payments and receipts is included in the accompanying document, the Budget Review. The Office of the Auditor General of South Africa publicises its reports of audits of all extra-budgetary funds. The reports include all charges against the Revenue Fund, including extra-budgetary funds.

- <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf>

Avanzado Step: Publicar información sobre los recursos recibidos por los centros que prestan servicios públicos a la ciudadanía

Justificación

A menudo, los centros que prestan servicios públicos a la ciudadanía en los distintos vecindarios, como las escuelas o los centros de salud, tienen dificultades para hacerse con los recursos que necesitan para su funcionamiento, ya se trate de transferencias de fondos, de la distribución de materiales (como medicamentos o libros de texto) o de personal, que suele ser seleccionado y pagado por la administración central. Todos estos recursos pueden no figurar en los documentos presupuestarios, o al menos no hacerlo explícitamente, pero es probable que sí aparezcan en la preparación de las estimaciones presupuestarias internas del ministerio del ramo. Las instituciones que prestan servicio con mayor contacto con el ciudadano, al ser las últimas en la cadena de distribución, pueden sufrir con mayor severidad la escasez de recursos, especialmente cuando las estimaciones presupuestarias se muestran demasiado optimistas con respecto a la realidad, o cuando el ministerio correspondiente decida reasignar los recursos a otros propósitos, como pueden ser los administrativos. Pueden producirse importantes retrasos en la transferencia de recursos monetarios o materiales a estos centros. La trazabilidad de esta información resulta de vital importancia para averiguar si los sistemas públicos de administración financiera realmente dan soporte a los servicios públicos a la ciudadanía.

Recomendaciones

Publicar datos sobre los recursos (monetarios y materiales) recibidos por los centros que prestan servicios públicos a la ciudadanía (como escuelas primarias o centros de salud).

Estándares y directrices

- Guía de campo sobre gasto público y responsabilidad financiera
<http://siteresources.worldbank.org/PEFA/Resources/PEFAFieldguide.pdf>

Innovador Step: Implementar todos los principios de la Iniciativa mundial para la

Transparencia Fiscal (GIFT)

Justificación

La Iniciativa Mundial para la Transparencia Fiscal (GIFT) es una red de multilateral que trabaja con países de todo el mundo para avanzar en la institucionalización de normas globales y mejoras continuas y de calado en el ámbito de la transparencia fiscal, la participación y la rendición de cuentas. Los principios de actuación que sirven de fundamento a la iniciativa versan sobre transparencia fiscal, rendición de cuentas y participación, y representan un intento de extraer un núcleo reducido de principios ampliamente reconocidos a partir del corpus de estándares y normas existentes. Su objetivo es servir como guía que los responsables del diseño de políticas públicas y otros agentes interesados en la política fiscal puedan emplear en sus iniciativas para mejorar la transparencia fiscal, la participación y la rendición de cuentas.

En diciembre de 2012, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución titulada “Promoción de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en el ámbito de las políticas fiscales” respaldaba los Principios GIFT para la transparencia fiscal y la participación, y animaba a los Estados miembros a que aumentaran sus esfuerzos para promoverla transparencia, la participación y la rendición de cuentas en las políticas fiscales.

Recomendaciones

Implementar los 10 principios sobre *transparencia fiscal, participación y rendición de cuentas* desarrollados por GIFT y resumidos a continuación:


1. Establecer una clara presunción sin lugar a discriminaciones a favor de la disponibilidad pública de la información fiscal
2. Publicar objetivos claros y medibles sobre las políticas fiscales agregadas, e informar con regularidad sobre la marcha fiscal, explicando las desviaciones.
3. Presentar información financiera y no financiera acerca de: las actividades fiscales en el pasado, en la actualidad y de acuerdo con los pronósticos; el rendimiento; los riesgos financieros, y los activos públicos, asegurando la máxima calidad de la información.
4. Comunicar cuáles son los objetivos, qué resultados se están obteniendo, e intentar divulgar los resultados de la política fiscal en la esfera social, económica y medioambiental, tanto los reales como los previstos.
5. Garantizar que todas las transacciones financieras del sector público son conformes a la legalidad. Las leyes, los reglamentos y los procedimientos administrativos deberían ser accesibles al público, y su evaluación debería ser sometida a una revisión independiente.
6. Se deberían divulgar las relaciones financieras del gobierno con el sector privado, dirigiéndolas de una manera transparente y de acuerdo con reglas claras y establecidas.
7. Asignar funciones y responsabilidades claros que establezcan quién debe recaudar de fondos, soportar responsabilidades, consumir recursos, invertir y administrar los recursos públicos.
8. No se deberá recaudar cuantía alguna ni incurrirse en algún gasto sin la aprobación del presupuesto o instrument legal equivalente por parte del parlamento
9. La máxima institución de auditoría debería tener independencia legal, contar con la obligación de acceder a la información pertinente y con los recursos adecuados para auditor y para informar al público.
10. Los ciudadanos deberían tener el derecho de participar en el debate público sobre los presupuestos, y tanto ellos como todos los actores no estatales deberían tener oportunidades reales para ejercer ese derecho.

Estándares y directrices

- Principios GIFT de alto nivel sobre transparencia financiera <http://fiscaltransparency.net/wp->

[content/uploads/2012/09/GIFT-High-Level-Principles-2012-08-ENG.pdf](#)

Servicios públicos

 **Autor principal:** [Twaweza](#) y [Involve](#)

Introducción

La prestación de servicios públicos tales como la sanidad, la educación, el tratamiento de residuos y la justicia es una de las labores principales del gobierno. Las personas se preocupan por el buen funcionamiento del servicio público, pues su vida depende en buena medida de ellos. Los servicios públicos son el marco de interacción más habitual entre ciudadanos y estado, por lo que su funcionamiento configura la confianza en el gobierno y las expectativas depositadas en el mismo. Los servicios públicos de rango nacional apoyan el bienestar humano y el crecimiento económico.

Los servicios públicos deben prestarse con integridad, diseñarse pensando en los ciudadanos y en la respuesta a sus necesidades, con especial atención hacia los más débiles. Al promover un mayor grado de transparencia y permitir que los ciudadanos de a pie evalúen si los servicios básicos son adecuados, eficientes y de calidad, expresen sus necesidades y sus preferencias y se involucren en procesos de mejora e innovación, se crea una oportunidad para mejorar el aprovechamiento de los fondos públicos y la prestación de los servicios (Ringold et al, 2013).

Los servicios públicos representan una buena porción de los presupuestos públicos, pero a menudo el incremento del gasto no se ha visto correspondido con una mejoría de los resultados. En el peor de los casos, los servicios públicos pueden verse abrasados por los efectos de la corrupción, que puede llegar a retener en manos de funcionarios o contratistas privados el dinero presupuestado para libros, profesores, dispensarios y medicamentos (Banco Mundial, 2004). En muchos lugares del mundo sigue habiendo niños que terminan el colegio sin haber aprendido ni a leer ni a realizar operaciones básicas de aritmética; además, la sanidad sigue teniendo una calidad desigual. Los datos muestran que el mero aumento de recursos financieros, equipo o personal no garantizan un aumento de la calidad de la educación o la sanidad. La calidad en la provisión del servicio es fundamental.

Incluso allí donde la integridad del flujo de recursos públicos parece garantizada, las formas de comprender los servicios públicos diseñadas en épocas pasadas tienen dificultades para responder a las necesidades presentes, que están motivadas por desafíos complejos, como el que supone el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, las megaciudades, la pobreza y la desigualdad.

Tradicionalmente, los servicios públicos se han organizado colocando al público en un lugar pasivo, como receptor de un servicio homogeneizado. El contraste es notable con las innovaciones de otras áreas, como el comercio minorista, los viajes y los medios de comunicación, en los cuales el usuario está acostumbrado a dar su opinión sobre los bienes y servicios que recibe, por lo que ha asumido con tranquilidad una función activa como tomador de decisiones. Los ciudadanos están más conectados que nunca, y cuentan con las habilidades y la pasión suficiente para resolver problemas. Los habitantes de cada lugar suelen saber cómo se podrían solucionar los problemas que afectan a su zona, pero al no tener la capacidad de incidir sobre la burocracia, acaban por aceptar servicios públicos que pueden ser impersonales, ineficaces y superfluos.

Las administraciones públicas están experimentando, volviendo a diseñar partes del sistema para que los ciudadanos puedan tener un papel más activo como comunidades de usuarios de los servicios públicos. Puede tratarse de procesos participativos y foros, de seguimiento de comunidades y presupuestos ciudadanos, o de nuevas formas de puesta en servicio. La tecnología y los datos abiertos hacen que sea posible activar distintas formas de participación. Las APIs [link to topic] de datos de gobierno abierto permiten que cualquiera escriba una aplicación para uso ciudadano con datos gubernamentales, creando nuevas formas de interacción con el gobierno y abriendo nuevas posibilidades (Lathrop et al, 2010).

De todas formas, traducir la información en acción es un reto muy complicado. Las relaciones entre ciudadanos, políticos,

gestores públicos y proveedores de servicios son complicadas, y es difícil que sean alteradas por una única intervención, como una campaña de información o una acción con tarjetas de puntuaciones (Ringold et al, 2012).

Hay que poner especial atención a la motivación humana y los incentivos. Las investigaciones llevadas a cabo en Uganda por Twaweza, por ejemplo, muestran que las fuentes de información formal eran poco influyentes y que los ciudadanos o bien estaban demasiado atemorizados como para actuar, o bien no lo consideraban su responsabilidad o no sabían qué hacer (Twaweza, 2013).

References

Lathrop, Daniel and Laurel Ruma, 2010, Open Government, Collaboration, Transparency and Participation in Practice, O'Reilly Media https://github.com/oreillymedia/open_government

Ringold, Dena, Alaka Holla, Margaret Koziol and Santhosh Srinivasan, 2012, Citizens and Service Delivery: Assessing the Use of Social Accountability Approaches in Human Development, Washington DC: World Bank

World Bank, 2004, World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People, Washington D.C.: World Bank

Twaweza, 2013, Uganda baseline report <http://twaweza.org/uploads/files/TwawezaBaselineReport-AIID-18April13.pdf>

Organizaciones especializadas

World Bank The Participation and Civic Engagement Group <http://go.worldbank.org/FMRAMWVYV0>

OECD <http://www.oecd.org/gov/publicengagement.htm>

Twaweza <http://www.twaweza.org>

Involve <http://www.involve.org.uk>

Feedback labs <http://feedbacklabs.org>

Govlab <http://thegovlab.org/>

South Asia Social Accountability network <http://www.sasanet.org/>

Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific <http://www.ansa-eap.net/>

Affiliated Network for Social Accountability <http://www.ansa-africa.net>

Resumen de compromisos ilustrativos

Inicial

- Establecer mecanismos sencillos para la recogida de pareceres en servicios públicos
- Publicar y divulgar información sobre los servicios públicos a los que tenga derecho la ciudadanía

Intermedio

- Cooperar con iniciativas independientes de seguimiento y tomar medidas sobre los problemas que se detecten
- Involucrar a los ciudadanos en la comisión, el diseño, la prestación y la evaluación de los servicios públicos
- Publicar los datos fundamentales sobre el rendimiento de los servicios públicos

Avanzado

- Medir y publicar de manera sistemática indicadores sobre la actuación y el rendimiento de los servicios públicos

Detailed Recommendations

Inicial Step: Establecer mecanismos sencillos para la recogida de pareceres en servicios públicos

Justificación

La opinión de los usuarios es muy importante en los procesos de mejora de servicios públicos, ya que puede:

- ayudar a mejorar la eficiencia y la eficacia de los proveedores del servicio
- aportar ideas innovadoras para la mejora de los servicios
- ayudar a que los responsables de la puesta en marcha y del diseño de políticas sepan identificar cuáles son los males que achacan a las propias políticas o a la prestación del servicio.
- garantizar que los recursos públicos se gasten con efectividad
- descubrir casos de negligencia o corrupción

A menudo los servicios públicos sí que cuentan con mecanismos formales de reclamación (incluyendo la opción de ponerse en contacto con representantes políticos), pero los ciudadanos suelen verse obligados a un esfuerzo agotador si quieren conseguir llevar a término la queja, además de considerarse como desafíos a instituciones y profesionales poderosos. El problema reside en que los ciudadanos pueden no ser capaces ni estar dispuestos a desafiar a los proveedores si les falta la información o el tiempo necesarios, o si no se sienten empoderados para hacerlo. Si los proveedores tienen un trasfondo más poderoso o bien avenido, los ciudadanos pueden considerar que son demasiado débiles para cuestionarlos, o pueden preocuparse por las repercusiones de una opinión negativa. Mucha gente refunfuñará y aceptará los servicios, por pobres que sean. Entre tanto, los responsables políticos suelen tener muy poco acceso a las experiencias cotidianas y a las realidades de la mayor parte de la ciudadanía, lo que hace complicado saber si las políticas se están implementando correctamente y si realmente funcionan.

Se puede crear un poderoso mecanismo de retroalimentación informativa en los servicios públicos facilitando a los usuarios la expresión de su parecer, permitiéndoles que informen de situaciones que no funcionan sin verse obligados a recurrir a mecanismos formales de reclamación. Este tipo de mecanismos de opinión deben construirse alrededor de las herramientas que la gente usa y disfruta (como los teléfonos móviles, los mercados, los grupos de oración o las escuelas). La tecnología (como los SMS o internet) inaugura nuevos caminos a través de los cuales la ciudadanía puede expresar su opinión.

La recopilación de los pareceres de los usuarios solo es el principio: los prestadores del servicio deben responder. Para que esto ocurra, suele ser necesario un cambio cultural en parte de los prestadores de servicios públicos. Aunque a menudo cuando se reciben impresiones de usuarios la sensación no es de interés, sino de cansancio, las organizaciones que prestan servicios públicos y deseen ser eficientes no deben ver las quejas y reclamaciones como un problema que conviene ignorar, subestimar o desestimar, sino como señales tempranas y útiles de que algo ha ido mal, y como una oportunidad de establecer un diálogo real con los ciudadanos (Simmons et al, 2013).

Recomendaciones

Los gobiernos deberían:

1. Exigir a los prestadores de servicios públicos la puesta en marcha de mecanismos de recogida de opinión y de quejas, paso tras el cual deberán proporcionar datos sobre las mismas
2. Realizar comparaciones entre servicios.
3. Agregar la información de la ciudadanía sobre los servicios para informar las decisiones sobre políticas públicas y

puesta en marcha

4. Apoyar el desarrollo de canales operados con independencia del gobierno y de la entidad que preste el servicio, y responder a las opiniones ciudadanas expresadas a través de mecanismos de desarrollo independiente.


Aunque los mecanismos de recogida de pareceres deberían adaptarse a cada contexto, la mejor práctica por lo general pasa por:

- Tener varios canales abiertos para la recogida de pareceres y de reclamaciones, de manera que el usuario pueda escoger cómo comunica su punto de vista. Los canales deben adecuarse a las necesidades de los usuarios, con especial atención a los grupos con desventajas objetivas.
- Facilitar la comunicación de reclamaciones y pareceres, por ejemplo empleando nuevas tecnologías (SMS, portales web) o recurriendo a organizaciones intermediarias.
- Asegurarse de que existen procesos exigentes y factibles para que los prestadores del servicio y los responsables políticos trabajen con las aportaciones de la ciudadanía.
- Asegurarse de que el resultado de la información proporcionada por los usuarios se comunica de nuevo, tanto a cada usuario de origen (siempre que sea posible) como de forma colectiva. Evaluar el uso y la efectividad de los mecanismos, adaptando o sustituyendo cuando sea necesario.

Estándares y directrices

- Civicus – Seguimiento y evaluación de servicios públicos http://www.pgexchange.org/index.php?option=com_content&view=category&id=59&Itemid=135
- El Banco Mundial: Ciudadanos y provisión de servicios <http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821389805>

Ejemplos por países

 A Mexican initiative gives parents a chance to improve their children's education through service feedback

Mexico has created a digital platform, *Mejora tu Escuela*, which seeks to enhance the engagement of parents in transforming the country's educational system. The initiative encourages parents to demand better educational services for their children by releasing information about the schools and providing parents with feedback tools.

Mejora tu Escuela covers all public and private schools from elementary to high school levels and has four main tools:

- 'Know your school' which lets people search for a school by name or geographic location and reveals the quality of education as well as a state ranking based on test results;
 - 'Compare your school' which allows comparisons with other schools by educational quality, state and national ranking, performance over time and performance of students;
 - 'Grade your school' which invites the community to shed light on the strength and weaknesses of each school; and
 - 'Improve your school' which provides concrete tools and suggestions to parents on how to participate in addressing problems at their child's school.
- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Mexico.pdf>

 In Tanzania the government established wanachi.go.tz a website to submit and track complaints and feedback


Wananchi.go.tz is a website was developed by the government to enable Tanzanian citizens to send feedback,opinions,complaints to the government and to track and follow up on queries.

The system aims:

1. To help improve citizen awareness and satisfaction about the services they receive or believe they should be receive by enabling fast and efficient resolutions of relevant citizen submissions
2. To collect data that will assist the Government of Tanzania to identify opportunities for improvement and change, to optimise service and minimise complaint in the future

As part of its OGP commitment the government has committed to improve the website to make it more robust and responsive as a platform for citizens to participate in the running of Government, and produce monthly reports on effectiveness of the citizen"s website.


- <http://www.Wananchi.go.tz>

 In the UK the National Health Service asks all patients leaving hospital if they would recommend it to their friends and family

Since 2012 patients leaving NHS hospitals are asked whether they would recommend their ward to friends and family. This is what is known as a 'Net Promoter' question which is often used by companies in customer service programmes. The overall score for each ward can be positive or negative depending on the number of 'promoters' (people who would recommend the service) and 'detractors' (people who would not).

The anonymous survey covers around 4,500 NHS wards and 144 A&E services. It allows hospital trusts to gain real time feedback on their services down to individual ward level Results are reported weekly to hospital managers and boards, and overall scores are published each quarter.

- <https://www.gov.uk/government/news/nhs-friends-and-family-test-giving-patients-a-greater-voice>

 Indonesia set up a social media channel for complaints

LAPOR! ("to report", in Indonesian) is a social media channel where Indonesian citizens can submit complaints and enquiries about development programmes and public services. Comments are transferred directly to relevant ministries or government agencies, which can respond via the website. Users can access the system through the web, through SMS, through facebook and twitter and mobile applications, and each report is given an ID number so that users can track it to resolution.

Examples of issues reported include potholes, and difficulties in accessing government services, comments on projects and infrastructure developments. LAPOR! now has more than 225,350 registered users and receives an average of 1,435 inputs per day. It is connected with 64 ministries and the Ministry of Non-Government Institutions. It has also been connected with the Local Government and the Provincial Government of Jakarta.

- <http://lapor.ukp.go.id/>

- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia.pdf>
- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_0.pdf
- <http://>

Mexico set up a digital platform to 'improve your school'

Mexico spends more per student than most industrialized nations but has the lowest levels of academic achievement in the OECD. As part of its OGP Action Plan the government-civil society working group set out to improve the information that parents have about schools, and enable them to 'improve your school'.

The Mexican Institute for Competitiveness (IMCO) cross referenced test results with basic data on all schools and made them accessible on a new website 'Mejora tu Escuela'. Users can search and compare schools, and provide their own comments. Where problems are identified, like deteriorating infrastructure or principals that mismanage the school budget, they are linked to possible solutions that can be implemented by parents and local CSOs. "The more information you have on schools, the more likely you are to demand higher quality education", says Gabriela Segovia of the Federal Institute on Access to Information and Data Protection (IFAI).

- <http://www.mejoratuescuola.org/>
- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Mexico_0.pdf

Montenegro developed a mobile app to allow citizens to report local problems

The Be Responsible app is a mobile app that allows citizens to report local problems – from illegal waste dumps, misuse of official vehicles and irregular parking, to failure to comply with tax regulations, failure to issue fiscal receipts. The most popular categories to date have been ecology and improper parking.

- <http://www.budiodgovoran.me/>

Tanzania carried out water point mapping

Working with local stakeholders, the government has created an information system which can link every level of the water supply chain to rural communities, highlighting issues of equity and functionality at all levels. Water point mapping provides a baseline of information for improving performance of the water system.

- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Inspiring%20Story%20-%20Tanzania.pdf>

Tanzania uses open data and citizen feedback to improve water services

Tanzania has included in its Open Government Partnership Action Plan a commitment to implement a Water Point

Mapping System to make rural water supply services more efficient and accountable. Apart from showing people where water points are and if they are working, the mapping system also has a participatory element encouraging citizens in rural areas to help improve water service delivery by providing feedback.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/tanzania/case-study/inspiring-story-water-point-mapping>

Inicial Step: Publicar y divulgar información sobre los servicios públicos a los que tenga derecho la ciudadanía

Justificación

Es demasiado habitual que los ciudadanos no conozcan sus derechos y obligaciones básicas, o cuáles son los mínimos exigibles en la prestación de ciertos servicios públicos. La falta de información provoca que la gente no acuda a los servicios, produce permisividad con el bajo rendimiento de los servicios, y facilita la tarea a los funcionarios y prestadores de servicios que se vean tentados de desviar fondos para obtener beneficios ilícitos. Muchos países han establecido cartas de servicios respaldadas por campañas informativas, mediante las cuales se comunica con claridad cuáles son los servicios y cuáles las prestaciones a las que tiene derecho la ciudadanía, los mínimos de calidad que deberían esperar en el servicio, y los canales a través de los cuales pueden expresar sus reclamaciones y exigir reparación en el caso de que las cosas vayan mal (Centre for Good Governance, 2008).

Este tipo de iniciativas informan a la ciudadanía sobre servicios y programas disponibles, armándolos con información que puede ser empleada para exigir a los prestadores de servicios que rindan cuentas de los servicios prestados. Los ciudadanos pueden usar la información para estar más preparados a la hora de interactuar con profesionales, como los médicos, o con organizaciones, como comisiones educativas municipales, además de poder basar su interacción con los responsables políticos, incluyendo el voto, en ese mayor grado de información.

Recomendaciones

1. **Exigir que las organizaciones públicas (ministerios, direcciones generales, agencias o gobiernos municipales) publiquen información sobre los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos.** La información puede publicarse como una carta de servicios, que explique con detalle las funciones de la organización, los servicios que presta a cada tipo de clientes, los costes para los usuarios, en su caso, los mecanismos de reparación de agravios y las expectativas que los clientes pueden tener de forma razonable.
2. **No desarrollar la carta solamente con expertos de alto rango,** sino especialmente plasmando la realidad de los profesionales que están de cara al público.
3. **Desglosar hasta el menor rango las condiciones de los servicios** (p.e. 'los servicios x e y son gratuitos para mujeres embarazadas, se enviarán z dólares por estudiante a cada colegio, en una enfermería hay x puntos de agua potable por cada 1.000 personas). Esto no significa que la carta deba imponer un patrón homogéneo sobre todos y cada uno de los servicios. Además, debería poder señalar las decisiones del usuario, en su caso.
4. **Comunicar la información dentro de cada organismo público y organización estatal,** integrándola en la gestión interna del rendimiento.
5. **Establecer objetivos específicos para la comunicación:** p.e. 'Al menos el 80% de todos los ciudadanos accederán a esta información sin esfuerzo'.
6. **Mejorar el impacto de la información por combinación de un lenguaje sencillo y presentaciones visuales.** Divulgar la información en tabloneros de anuncios públicos en las sedes de las unidades que atienden al público y en las sedes

ministeriales, a través de la televisión, por internet y en plataformas móviles. La información también debería publicarse como datos abiertos para permitir la reutilización y divulgación ulterior de terceras partes.

7. **Trabajar con organizaciones de la sociedad civil y con los medios de comunicación para informar a la ciudadanía** de sus derechos, los servicios y los beneficios que pueden exigir, los mínimos de calidad que deberían esperar, y los canales para la reparación de agravios que puedan utilizarse cuando algo vaya mal. Cooperar con las iniciativas independientes de seguimiento y evaluación del alcance y la calidad (significatividad, valor) de la divulgación de la información pública, comprometiéndose con la rápida resolución de los problemas que se detecten.

Ejemplos por países

Albania has set up an e-Government portal containing information about public services

Albania has set up an e-Government portal *e-Albania.al*, which aims to provide a one-stop online access point to all government services. The overall aim of the portal is integrated delivery of all government services for citizens, businesses, state employees, and visitors alike (information is provided both in Albanian and in English). Service users can get information on the documents needed to get a particular service, including any tariffs or costs, addresses and locations of the official office and the contact information.

Thus far, one of the most popular services provided by the portal is helping students to access higher education through online registration for the state entrance exam. Other popular services include registration to driving licence theory and practical exams, tracking the status of business registration and licensing applications, tracking the status of public procurement procedures for businesses and tracking the complaints regarding public procurements.

- <http://www.opengovpartnership.org/country/albania/case-study/inspiring-story-e-government-portal-albania-e-albaniaal>

Azerbaijan has created a single-window access to public services

Azerbaijan has created ASAN: a one-stop shop where the services of various government agencies are provided. Currently nine government agencies are rendering 25 services through ASAN, including registering civil status, issuance and renewal of various IDs, notary services and tax and customs declarations. Private companies providing banking, medical, insurance and other subsidiary services are also represented, and these private entities charge a lower fee than they would have done outside of the ASAN service centre.

Since its inauguration in January 2013, three ASAN service centres have opened in the country and ASAN Mobile Services buses fill the gap where centres are absent. ASAN's official Facebook page also provides updates on new services, feedback from citizens, and photos documenting state-citizen interactions.

The ASAN model ensures better governance in public services because the standardisation of services for citizens reduces information asymmetry, which is often the cause of petty corruption, and there are no hand-in-hand cash payments for services. Also, the ASAN model makes government more transparent as citizens are able to know exactly which services they will receive and at what cost.

- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Azerbaijan_0.pdf

Azerbaijan set up a one stop shop for public services

ASAN is Azerbaijani for 'Easy'. It is a one-stop shop where people can access the services of various government agencies. Service centres in major cities, mobile busses, an online service and telephone hotline.

- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Azerbaijan_1.pdf
- <http://asan.gov.az/en/contactinfo>

Brazil's Bolsa Família program is backed by a widespread information campaign

Brazil's Bolsa Família program of family income support covers 12.7 million families. The program relies on diverse approaches to inform people about their rights and obligations. The program, and its payment calendar is advertised on the internet, local radio ads, and pamphlets and posters that are distributed around poor neighborhoods and public offices. Once a family is admitted in the program, social assistance professionals provide guidance on how the program works using a document called the Agenda da Família, which is provided to all new beneficiary families. Targeted efforts have been made to improve outreach to highly disadvantaged groups, such as indigenous populations, quilombolas (African descendant groups), and the homeless, using material in local dialects and using appropriate graphic design and training local agents on how to reach each group.

- <http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/15499676/citizens-service-delivery-assessing-use-social-accountability-approaches-human-development-sectors>

Chile set up a one-stop shop for accessing public services

ChileAtiende is the multi service network which was created in 2012 to bring the benefits and services of public institutions to individuals, through in-person service points and mobile offices, a website and a call center that provides guidance on the services and benefits provided by the state by dialing '101'.

The system started out by using the infrastructure of the Social Security Institute, but brings together services from many government departments including the national health fund (Fondo Nacional de Salud, Fonasa), the national consumer protection agency (Servicio Nacional del Consumidor, Sernac), the Civil Registry, the Social Investment Fund (Fondo Solidario de Inversión Social, FOSIS), the Housing and Urban Development Ministry (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu) and the Health Ministry. Citizens can apply for services and subsidies, pay social security contributions, obtain medical vouchers and register for certificates at the same office.

- <http://www.chileatiende.cl/>
- <http://www.gob.cl/english/featured/2013/09/03/president-pinera-signs-bill-to-set-up-the-chileatiende-national-citizens-attention-service.htm>
- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Chile.pdf>
- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Chile_0.pdf

Chile's healthcare system sets out guarantees on access, quality and cost of public healthcare

Chile's Regime of Explicit Health Guarantees (AUGE) guarantees a certain set of services for all users. It prioritises health problems based medical criteria and defines a maximum waiting period for receiving services at each stage ("access") the set of activities, procedures, and technologies necessary for treating the medical condition ("quality");

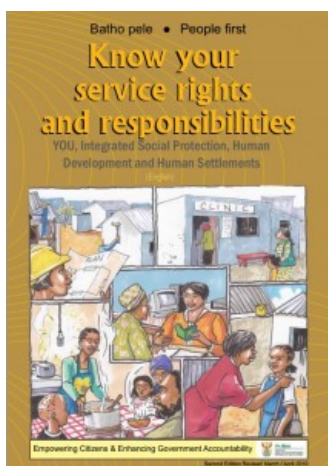
and the maximum that a family can spend per year on health (“financial protection”).

- <http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEV/Resources/3177394-1168615404141/3328201-1192042053459/Chile.pdf>

More than 600 government organizations in India have issued Citizen’s Charters

- <http://goicharters.nic.in/faq.htm>

South Africa has carried out a national public education campaign on Know Your Service Rights and Responsibilities



The campaign aims to inform citizens about their service rights, responsibilities, and legal mechanisms available to hold government accountable. The “Know Your Service Rights and Responsibilities” booklet was developed in 2010 and more than 35,000 brochures were distributed with the aim to distribute more through 2013 and 2014.

As part of the national OGP Action Plan the Department of Public Service and Administration intensified engagements with communities on the campaign for example informing people about how to apply for housing subsidies and each government department has an outreach programme. However a key weakness of the booklet is that it has only been produced in English.

- <http://www.dpsa.gov.za/batho-pele/docs/Know%20your%20Service%20rights/English.pdf>
- <http://www.opengovpartnership.org/country/south-africa/irm>

The UK Government’s Choice Charter sets out what users should receive from their services

The Choice Charter, published in 2013 sets out four basic principles for public service users:

- You can have a say in how a public service is provided to you.

- You will be given the opportunity to take up and exercise the choices
- available.
- You will be given clear, accessible and high-quality information and advice to inform your choices
- You have clear avenues to complain if you do not receive the choices you are entitled to.

Individual Choice Frameworks have been developed for a number of public services in healthcare, education and social housing, which, set out what choices should be available to people, who is be responsible for providing this choice, relevant quality standards, inspections and licensing requirements, sources of information to help people make informed decisions and details of complaints procedures.

- <https://www.gov.uk/government/publications/choice-charter>

Intermedio Step: Cooperar con iniciativas independientes de seguimiento y tomar medidas sobre los problemas que se detecten

Justificación

Como la calidad y la integridad de los datos empleados por los gobiernos tenderá a ser irregular, las iniciativas independientes de seguimiento, al suponer un seguimiento de los trabajos y los servicios públicos por parte de grupos de ciudadanos, suponen un medio adicional para obtener información y datos. En muchos países existen grupos de la sociedad civil que son pioneros en el desarrollo de enfoques centrados en la recogida de aportaciones ciudadanas, como las cartas-informes sobre servicios públicos, las auditorías ciudadanas y el seguimiento de agrupaciones vecinales.

Las auditorías ciudadanas permiten que sean los ciudadanos quienes, tras recibir el servicio, puedan examinar y cotejar la información divulgada por el prestador con la información recabada por los propios usuarios del servicio. Esta forma de seguimiento puede extenderse a todos los aspectos del proceso de prestación del servicio, como la financiación asignada, los materiales y los contratos laborales. Los resultados de las auditorías suelen ser compartidos con todos los interesados mediante encuentros públicos, con asistencia de los usuarios, pero también de los funcionarios con responsabilidades sobre la gestión del centro analizado.

Tecnologías como los SMS, aplicaciones, redes sociales, foros online y sitios web pueden facilitar la participación de los ciudadanos. Por ejemplo, Twaweza puso en marcha en Tanzania un grupo nacional de teléfonos móviles compuesto por 2.000 residentes escogidos aleatoriamente, a los cuales se invitó a participar durante dos años. Los participantes recibían teléfonos móviles y daban su consentimiento para participar en encuestas mensuales sobre temas como las escuelas y los centros de salud.

Recomendaciones

1. **Promover y apoyar que la sociedad civil y la ciudadanía en general lleven a cabo procesos de seguimiento y evaluación**, de forma independiente o en colaboración con responsables políticos

Ejemplos por países

 In Ethiopia the Protection of Basic Services Project is working to empower citizens to assess public services

In Ethiopia starting in 2006 the Federal Government, with international support, has carried out a project to address this deficit. Working with 45 CSOs across 86 districts the project piloted Community Score Cards, Citizens Report Cards, and Participatory Budgeting as a basis for face-to-face discussions between citizen groups and service providers. The World Bank reports that these regular discussions provided the opportunity for stakeholders to review the service delivery scores and discuss deficiencies, produce common performance indicators, agree on service delivery scores, develop joint action plans, and form joint committees to follow up on the implementation of the action plans. Government officials and service providers have been required to take account of citizens' demands and to respond, as feasible, with appropriate policies and solutions. The program is now being scaled up 172 districts implemented by 60-90 CSOs.

- <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/02/13/empowering-citizens-increasing-accountability-improving-service-delivery> <http://vimeo.com/15160542>

 In India the National Rural Employment Guarantee Act is monitored through social audits

The NREGA program guarantees 100 days of employment per year to rural households whose adult members are willing to do unskilled manual work. Such programs are often bedevilled by large scale misappropriations by contractors, local political bosses and officials. Proactive disclosure of information, and citizen participation in monitoring was therefore designed into the program, and institutionalised through the legislation that created it in order to expose and prevent corruption.


The National Rural Employment Guarantee Act mandates that regular social audits be conducted at local level every six months. The NREGA guidelines identify 11 stages of the program where an individual or group can intervene to ensure public vigilance. The accountability and transparency measures enshrined in the NREGA have proved to be a catalyst for some state governments and civil society organizations to take innovative steps towards developing and institutionalizing accountability tools into the governance system

The government of Andhra Pradesh set up a separate unit to design and implement social audits of the NREGA program. The core of the social audit approach is to involve the entire affected group or community in the process. In most cases, the members carrying out the social audits are volunteers who are directly affected by the program, and these volunteers are generally trained in the social audit process by a civil society organization. This extensive involvement of civil society organizations ensures that there is a high degree of autonomy and objectivity to the exercise. It is one of the most important checks and balances that have been built in to the process.

The village social auditors go from house to house cross verifying official records, scrutinizing job cards, examining the worksites, and gathering information through interviews with wage seekers. They then organize a village level meeting where findings from the audit are shared with the villagers, local political bosses, and officials. The presence of senior government officials enables immediate and effective grievance redressal albeit only where cases of petty corruption are unearthed. Over 500 field assistants and 10 technical assistants have been dismissed, and inquiries initiated against higher level officials. Corrupt officials facing public scrutiny have actually begun to return embezzled funds.

Aside from unearthing corruption, the social audits also offer a formal setting for senior officials to interact with front line staff and service users. This allows for real time feedback on the status of the scheme implementation. Through interactions with senior officials, front line workers can clarify doubts, and resolve problems. Moreover, because information on the NREGA is disseminated during the forum, both officials and wage seekers come away with a better understanding of the NREGA.

- http://knowledge.nrega.net/193/1/transparency-accountability_Andhra.pdf

 In the Philippines the Department for Education cooperates with the Checkmyschool monitoring initiative



Started in 2011, Checkmyschool (CMS), is a participatory monitoring initiative that aims to improve service delivery in public education. It was established as a joint initiative of the Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific (ANSA—EAP) Foundation Inc. and the Department of Education (DepEd), the branch of government that is responsible for regulating and managing the Philippine system of basic education..

CMS is an interactive and hybrid online platform used to validate the government's educational services on the ground, report on issues, and provide solutions. With access to the Department of Education's database, citizens can monitor funds and report on any discrepancies that are fed back into the platform through various channels, including Facebook and SMS. For those who don't have internet access, CMS has mobilized infomediaries to interact with stakeholders, and facilitate community involvement. CMS has also attracted a thousand plus volunteers, including students, to disseminate and validate information offline.

The platform uses Google Maps to map schools and allows users to report issues about textbooks, seats, toilets, teachers and computers. These issues are brought to the attention of the Department of Education's attention for action. Requests so far have been responded to fairly quickly.

- <http://wbi.worldbank.org/wbi/stories/check-my-school-not-just-website>
- <http://www.checkmyschool.org/>
- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y2HAeePMKOl#t=12

Intermedio Step: Involucrar a los ciudadanos en la comisión, el diseño, la prestación y la evaluación de los servicios públicos

Justificación

La circunscripción más afectada por las realidades, las limitaciones y las oportunidades de los servicios prestados, y a menudo la que más sabe sobre ellos, son los millones de ciudadanos y OSC de raigambre local (y que incluye a grupos religiosos y asociaciones empresariales) Sin embargo, esta circunscripción es, a menudo, la más ignorada y a la que menos se tiene en cuenta a la hora de resolver desafíos endémicos relacionados con la prestación de los servicios.

Al crear oportunidades serias y prácticas para involucrar a la ciudadanía, se puede destapar un enorme silo de conocimiento y buena voluntad. Además, resulta más sencillo dar con los incentivos adecuados y generar un clima de

mayor confianza, dos aspectos esenciales para resolver los desafíos relacionados con los servicios públicos. Las nuevas tecnologías y los costes decrecientes de la comunicación han creado cauces sin precedentes para compartir información y colaborar en espacios contingentes, dependiendo de la demanda que se percibe a cada momento.

Una manera de hacer esto es permitir que los ciudadanos participen de forma activa en la gobernanza y de los servicios públicos, por ejemplo en los consejos administrativos de colegios o en el seguimiento de colaboraciones público privadas a las que se haya encomendado un servicio público.

Otra posibilidad es la coproducción de servicios públicos, de manera que los usuarios no sean receptores pasivos, sino personas competentes que comparten responsabilidades con los profesionales. Aunque se encuentra en fase de desarrollo en muchas áreas, la coproducción ha comenzado a imponerse en algunos ámbitos, como la sanidad y el cuidado social. Entre los ejemplos pueden citarse las guarderías de padres, la justicia comunitaria, la educación por pares y los grupos de auto-ayuda médica (OECD, 2011).

Los datos gubernamentales abiertos [link] son un paradigma desde el cual los usuarios pueden participar y construir nuevas formas de interacción con los servicios públicos.

Los gobiernos pueden tomar determinadas medidas, como la creación de departamentos de innovación, ayudas, premios y nuevos mecanismos de gobernanza. Pero los cambios en la cultura interna de los organismos y organizaciones públicas también son importantes para alentar el intercambio y la crítica, para una consideración seria de las voces ciudadanas y para dar respuesta a las mismas, para establecer incentivos y encontrar nuevas ideas, para resolver problemas mediante experimentación, una evaluación rigurosa y su adopción a mayor escala.

Recomendaciones

1. **Promover y apoyar el seguimiento y la evaluación de los servicios públicos por parte de la sociedad civil y de la ciudadanía**, ya sea independientemente o en colaboración con los responsables políticos
2. **Buscar oportunidades para involucrar a la ciudadanía en todas las fases del desarrollo y la prestación de servicios públicos o programas del gobierno**
3. **Cerciorarse de que la participación de la ciudadanía es inclusiva y no excluye a los menos poderosos.**
4. **Dar a ciudadanos y agentes interesados la capacidad de influir** sobre cuáles son los servicios cuya prestación se encarga a terceros, y, mediante los presupuestos participativos, sobre cómo se asigna el dinero público
5. **Asegurarse de que el encargo de servicios públicos a terceros permite la financiación de enfoques centrados en el usuario en la innovación del servicio**
6. **Promover los datos gubernamentales abiertos** como herramienta para la innovación del servicio público
7. **Documentar y compartir investigaciones e historias sobre cómo ocurre el cambio** (incluida esta guía)

Estándares y directrices

- OCDE: Together for Better Public Services – Partnering with citizens and civil society
<http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/4211131e.pdf>

Ejemplos por países

Brazil's Health Councils involve people in governing the health system

Brazil's Sistema Único de Saúde (SUS), is a universal, publicly-funded, rights-based health system. The Brazilian "Citizens' Constitution" established health as the right of all and guaranteed the right to participate in the governance of health. This is institutionalised through mechanisms for citizen engagement at municipal, state and national levels.

Across Brazil's 5,000-plus municipalities Health Councils are empowered by law to inspect public accounts and demand accountability. Each month tens of thousands of Brazilian citizens representing a spectrum of civic associations meet with those who run their health services and provide their health care. Every two or four years they come together in municipal health conferences, from which delegates are put forward for conferences at the state and national levels. At such events, proposed amendments collated from days of group work are debated, contested and voted for. Good ideas from citizens often become the basis for state and national policies. And when they do not, citizens who recognise the value of their ideas often continue to fight for them.

Research has found that the health councils are quite diverse and include representatives from social movements, disabled people's associations, religious groups, civil rights associations, trade unions and people with no associational ties. However breaking the grip of powerful actors on the councils often depends on a public manager who is willing to champion the cause of participation and work with civil society groups. The selection process of the councillors varies from council to council, with greater openness leading to more inclusivity. Inclusive measures include making information on the election process available, listing all the associations and movements in the region, using radio or newspapers to publicise elections and granting candidatures to individuals as well as organisations.

Discussion techniques are used to help groups to communicate and express themselves better. This include limiting the length of time people can speak, to ensure people who want to participate get a chance to speak and to vote where decisions need to be made. Training of councillors and the council chairs in their roles and providing them with information on the functioning of the health system also helps to make some councils work better than others.

[Source: Open Democracy]

- <http://www.opendemocracy.net/andrea-cornwall-vera-schattan-p-coelho-alex-shankland/taking-seat-on-brazils-health-councils>

Denmark's Mindlab involves citizens and business in in problem solving with government ministries

MindLab is a Danish cross-governmental innovation unit which involves citizens and businesses in developing new solutions for the public sector. MindLab is instrumental in helping key decision-makers and employees from its parent ministries view their efforts from the outside-in, to see them from a citizen's perspective. MindLab uses this approach as a platform for co-creating better ideas.

It works with service users, citizens and other stakeholders at early planning stages of service delivery. For example, Mindlab worked with users to test mobile devices for doing tax returns and collected their feedback, which resulted in changing government plans and avoiding costly service mistakes. It developed social networks with and for highly skilled migrant workers to motivate them to stay in Denmark.

MindLab was created in 2002 for the Ministry of Economic and Business Affairs as an internal incubator for invention and innovation. At that time, the vision of an in-house laboratory as a centre of creativity and innovation was unique for a ministry.

In 2007, a new strategy and a new goal were set for MindLab: its focus would be the active involvement of both citizens and companies in developing new public-sector solutions. At the same time, MindLab acquired two additional parent ministries, namely the Ministries of Taxation and Employment. In this manner MindLab also became a fulcrum of intra-governmental cooperation. Finally, the strategy involved MindLab taking on a number of professional researchers, with the aim of establishing a more robust methodological foundation for its work.

Today, MindLab has considerable experience with innovation processes that are based on the realities experienced by citizens and businesses, and which also promote collaboration across the public sector. MindLab has become a part of three ministries and one municipality: the Ministry of Business and Growth, the Ministry of Education, the Ministry of

Employment and Odense Municipality and form a collaboration with the Ministry for Economic Affairs and the Interior.

- <http://www.mind-lab.dk/>

 In Karachi, the local government adopted a co-management approach to sanitation


Orangi is a large informal settlement in Karachi, Pakistan. In 1982, residents suffered from high child mortality rates due to poor sanitation. Some of the communities were represented by residents' associations that followed clientelist strategies to try to improve services. They lobbied local politicians and promised votes in return for water pipes and public standpoints.

A local NGO called the Orangi Pilot Project (OPP argued that such a strategy was never going to work at the spatial scale that was required or with an adequate quality of investment). They developed a model of community-installed and managed sanitation where the residents of a lane or street paid for the lane investment in sanitation (and monitored the quality of the work) while the municipality took on responsibility for the wider sewer network and the waste treatment plants.

At first, the municipality refused to participate in this work and the people discharged the wastewater from the lane sewers into local streams. Over time, the authorities recognized the co-production model could work, if they played their role.

After initial reluctance, the municipality eventually agreed to this co-management arrangement and the idea of rapidly through the settlement. The process strengthened local organisations and made them more likely to engage with formal political structures than clientist networks. Overall residents of, 96,994 houses built their neighbourhood sanitation systems, by investing over half a million dollars collectively. 20 years after the work began in Orangi, the city of Karachi decided that the strategy should be supported throughout the city.

- http://www.sed.manchester.ac.uk/research/socialmovements/publications/papers/Mitlin_EnvironmentandUrbanization20.pdf

 US Citizen Corps trains volunteers to play a role in community safety and disaster preparedness

Following the tragic events that occurred on September 11, 2001, state and local government officials in the US increased opportunities for citizens to become involved in disaster preparedness and supporting local first responders.

Citizen Corps was created to help coordinate volunteer activities. It provides opportunities for people to participate in a range of measures to make their families, their homes, and their communities safer from the threats of crime, terrorism, and disasters of all kinds.

Citizen Corps programs build on local efforts to prevent crime and respond to emergencies. Programs that started through local innovation are the foundation for the national approach.

The Citizen Corps mission is accomplished through a national network of state, local, and tribal Citizen Corps Councils. These Councils build on community strengths to implement the Citizen Corps preparedness programs and carry out a local strategy to involve government, community leaders, and citizens in all-hazards preparedness and resilience.

- <http://www.ready.gov/>

Intermedio Step: Publicar los datos fundamentales sobre el rendimiento de los servicios públicos

Justificación

Los distintos sectores de la administración pública cuentan con muchos sistemas para gestionar y medir el rendimiento. Publicar estas metodologías junto con sus mediciones, mejorando la capacidad de ciudadanos (y autoridades) para comparar el rendimiento, evaluar la relación entre valor y coste y ejercitar la capacidad de elección, además de mejorar la rendición de cuentas.

A menudo, los datos sobre el rendimiento no son homogéneos, y su calidad puede ser muy variable. Sin embargo, la imperfección de los datos no debería ser excusa para la falta de transparencia. La medición del rendimiento en áreas clave y la publicación de los datos pueden ser un primer paso para mejorar la calidad de los datos y la gestión del rendimiento.


Recomendaciones

1. **Proporcionar información hasta el rango más bajo de la administración o hasta la dimensión vecinal** (p.e. colegios, centros de salud, municipio) para que tenga significado para los ciudadanos, aunque deberá salvaguardarse en todo momento la privacidad de los usuarios de los servicios.
2. **Presentar información sobre los mismos servicios y entidades empleando distintas fuentes** (p. ej. datos administrativos, resultados de encuestas, informes generales de auditoría, informes sobre contratación pública) de manera que sea fácil contrastar semejanzas y diferencias, empleando en todo caso fronteras institucionales comunes y siguiendo una nomenclatura consensuada.
3. **Divulgar la información en plataformas online** interactivas y atractivas para el usuario, en las cuales se puedan personalizar búsquedas, hacer comparaciones temporales, geográficas, sectoriales e intersectoriales para evaluar y medir la realidad y su concordancia con los objetivos de los compromisos políticos.
4. **Garantizar que se pueda consultar la información en paneles públicos de noticias y en las plataformas móviles más populares**, además de fomentar sinergias con otros medios de comunicación (por ejemplo, la radio) en instituciones de masas (grupos religiosos, empresas de bienes con gran capacidad de movilización). Esto es especialmente importante en los países en vías de desarrollo, donde el acceso a internet mediante ordenadores, a pesar de estar creciendo, sigue siendo limitado.
5. **Publicar la información en formatos de datos abiertos** para permitir su análisis y reutilización por parte de terceros.

Estándares y directrices

- Civicus – Seguimiento y evaluación de servicios públicos http://www.pgexchange.org/index.php?option=com_content&view=category&id=59&Itemid=135
- El Banco Mundial: Ciudadanos y provisión de servicios <http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821389805>
- OCDE: Focus on Citizens – Participación pública para mejorar políticas y servicios <http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/focusoncitizenspublicengagementforbetterpolicyandservices.htm>
- OCDE: Together for Better Public Services – Partnering with citizens and civil society <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/4211131e.pdf>

Ejemplos por países

 In Korea city residents get up to date information on water quality

In Seoul, Korea citizens were previously suspicious of the quality of the tap water and avoided drinking it. There was no monitoring system to assess the quality of tap water. This resulted in a low rate of consumption of tap water, high sales volume of bottled water, reckless underground water development, and indiscriminate use of purifiers which led to pollution. There was waste of a precious resource and potential public health problems.


The new water monitoring system allows citizens to access real-time data on water quality via the Internet at the city's public engagement website oasis.seoul.go.kr. They can also obtain data from water quality inspectors who visit houses for free. They can participate in the online assessment of the water quality; this has helped build trust and confidence in the water system. This programme uses citizen monitoring as part of a drinking water campaign, to help conserve resources. As a result, citizens confidence levels have risen, with a 20% increase in tap water consumption and greater conservation of ground water.

[Source: United Nations Public Service Awards (2009)]

- http://unpan3.un.org/unpsa/Public_NominationProfile.aspx?id=584

 In Peru the government introduced standardised tests in schools to improve school standards

In Peru in spite of high primary enrolments in education, many students were not able to read. Parents surveyed said they were satisfied with the quality of education their children received. This gap between true learning levels and perceptions of quality suggested a lack of awareness of quality standards and potentially weak accountability in school management. In 2006, the government of Peru established a universal standard system to test all children completing second grade and to inform each school, child, and parent about the results by issuing report cards through local education offices. Media campaigns encouraged parents to request their child's test scores from schools and discuss the results with the school authorities to plan improvement strategies. One of the products was a radio miniseries about education standards and parental empowerment, produced in Spanish and translated into the indigenous languages of Quechua, Aymara, and Asháninka. The government also linked teachers' pay to evaluation as part of the education sector reform process. In spite of opposition from teacher unions, the government was able to pass this law with support from the electorate.

 Several countries in Africa are working with the World Bank to collect Service Delivery Indicators on health and education

Service Delivery Indicators (SDI) is an Africa wide initiative being undertaken by governments together with the World Bank. It collects actionable data on service delivery in schools and health facilities. The SDI data are used to assess the quality and performance of education and health services for decision makers to track progress over time, and for citizens to hold governments accountable for public spending.

The Service Delivery Indicators are a set of 20 indicators that examine the effort and ability of staff and the availability of key inputs and resources that contribute to a functioning School or health facility. They seek to assess service delivery performance and quality at frontline schools and health facilities from the citizens' perspective.

A standardized survey is used allowing for data comparison across countries as well as in country regions, Data will be collected and analyzed every two years from a sample of 200-300 schools and clinics in each country.

SDI results will be published. In Kenya, Hivos is working to support Civil Society Organisations (CSOs), media organisations and journalists to present the information revealed by the data to the general public, in user friendly ways.

- <http://www.sdindicators.org/>
- <http://www.hivos.org/news/kenyan-launch-service-delivery-indicators-sdis-accountability-and-results>

Avanzado Step: Medir y publicar de manera sistemática indicadores sobre la actuación y el rendimiento de los servicios públicos

Justificación

Cada país gestiona sus servicios públicos de una manera diferente, en especial por lo que respecta al grado de centralización o descentralización, a la participación de actores privados o de actores del sector del voluntariado, o a si el usuario puede elegir entre distintos proveedores. Independientemente de cómo se prestan los servicios, el estado tiene una misión primordial en la definición de los resultados, la imposición de criterios mínimos y la garantía de cobertura universal de todos los servicios a los que la ciudadanía tenga derecho.

Se está haciendo mayor hincapié en la transparencia sobre el funcionamiento de los servicios por dos motivos: porque es una manera de que los usuarios puedan elegir, y para que puedan ejercer su influencia sobre los servicios de cuyo funcionamiento dependen, contribuyendo así a que el gobierno asuma la responsabilidad de su labor. La publicación sistemática de información que recoja cómo actúan los servicios públicos y cuál es el grado de satisfacción de los usuarios suele ser una parte central de este tipo de estrategias.

Hay un número limitado de investigaciones sobre el impacto que pueda llegar a tener la publicación de información sobre las actuaciones y el rendimiento, pero parece razonable pensar que la publicación de este tipo de datos puede contribuir a una mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Los efectos beneficiosos suelen deberse, en primera instancia, más a la información proporcionada por los profesionales del sector que a la proporcionada por el público; sin embargo, para ganar en eficacia y atraer la atención de los prestadores de los servicios, la información debería ser significativa, relevante y capaz de despertar el interés de los agentes interesados (Mulgan, 2012).

Las evaluaciones de la actuación y el rendimiento esconden juicios de valor sobre la naturaleza de la sociedad y las prioridades políticas. Es algo que debe tenerse en cuenta tanto al diseñar la naturaleza de los indicadores de rendimiento sobre los servicios públicos como al interpretarlos. Es posible que las medidas más sencillas sobre los resultados de los proveedores, como las tasas de aprobados o las tasas de mortalidad en hospitales, deban ser presentadas como indicadores de valor añadido para poder tener en cuenta factores como la salud y la capacidad adquisitiva de los usuarios. Indicadores compuestos, como los sistemas de puntuación por estrellas, pueden ser sencillos de comunicar, pero también pueden ser muy opacos en cuanto al contenido real de lo evaluado. Cualquier indicador puede llevar a tácticas manipuladoras, como sería el caso de un hospital que cierra las listas de espera para reducir el número de usuarios en las listas, o de un colegio que no somete a examen a los niños con posibilidades de suspender con el objetivo de mejorar las notas medias.

Recomendaciones

1. **Crear indicadores de actuación y rendimiento**, consultando para ello a políticos, usuarios, funcionarios y

profesionales que participen en los servicios públicos

2. **Generar indicadores con mucha atención, de manera que no sean fácilmente manipulables** por los proveedores que quieran mejorar sus puntuaciones sin mejorar la calidad real del servicio. Es recomendable confiar en un conjunto de medidas distintas, en lugar de en un solo indicador.
3. **Desarrollar indicadores de actuación y rendimiento público como parte de un régimen de gestión del rendimiento más amplio** en el que los responsables de la toma de decisiones tengan en cuenta los datos de forma crítica, sometidos a discusión y a valoración pública.
4. **Patrocinar proyectos de investigación para evaluar las diferencias entre "el antes y el después"** antes de desplegar un nuevo marco de indicadores de actuación y rendimiento.
5. **Proporcionar información hasta el rango más bajo de la administración o hasta la dimensión vecinal** (p.e. colegios, centros de salud, municipio) para que tenga significado para los ciudadanos, aunque deberá salvaguardarse en todo momento la privacidad de los usuarios de los servicios.
6. **Presentar información sobre los mismos servicios y entidades de distintas fuentes** (p. ej. datos administrativos, resultados de encuestas, informes generales de auditoría, informes sobre contratación pública) de manera que sea fácil contrastar semejanzas y diferencias, empleando en todo caso fronteras institucionales comunes y siguiendo una nomenclatura consensuada.
7. **Divulgar la información en plataformas online interactivas y atractivas para el usuario**, en las cuales se puedan personalizar búsquedas, hacer comparaciones temporales, geográficas, sectoriales e intersectoriales para evaluar y medir la realidad y su concordancia con los objetivos de los compromisos políticos.
8. **Comunicar los indicadores** en los medios de comunicación y a través de cartelería en lugares públicos, folletos, cartas a padres y pacientes, además de en internet.
9. **Publicar la información en formatos de datos abiertos** para permitir su análisis y reutilización por parte de terceros.

Estándares y directrices

- Civicus – Seguimiento y evaluación de servicios públicos http://www.pgexchange.org/index.php?option=com_content&view=category&id=59&Itemid=135
- El Banco Mundial: Ciudadanos y provisión de servicios <http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821389805>
- OCDE: Focus on Citizens – Participación pública para mejorar políticas y servicios <http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/focusoncitizenspublicengagementforbetterpolicyandservices.htm>
- OCDE: Together for Better Public Services – Partnering with citizens and civil society <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/4211131e.pdf>

Ejemplos por países

 In Sweden the government publishes performance reports on social services, health and medical care

Public performance reports have been a core part of the Swedish government's strategy for public service improvement. The vision is to provide up-to-date knowledge when you want it, the way you want it in order to support: the ability of citizens and patients to choose care providers; policy decisions and independent examinations; and in-depth analyses and comparisons that encourage care providers and the social services to improve quality and efficiency. Areas covered include substance abuse and dependency care, dental care, cardiac care, elderly care, public health and primary care. In each area a set of indicators has been agreed and are regularly reported and that describe facilities with regard to quality and efficiency. Transparency has led to improvements in care. For example when mortality data for myocardial infarction patients prompted the lowest-performing hospitals to institute major improvement programs; within two years, they had cut their mortality rates in half.

- <http://www.government.se/sb/d/15660/a/182988>
- <http://>

Mexico set up a digital platform to 'improve your school'

Mexico spends more per student than most industrialized nations but has the lowest levels of academic achievement in the OECD. As part of its OGP Action Plan the government-civil society working group set out to improve the information that parents have about schools, and enable them to 'improve your school'.

The Mexican Institute for Competitiveness (IMCO) cross referenced test results with basic data on all schools and made them accessible on a new website 'Mejora tu Escuela'. Users can search and compare schools, and provide their own comments. Where problems are identified, like deteriorating infrastructure or principals that mismanage the school budget, they are linked to possible solutions that can be implemented by parents and local CSOs. "The more information you have on schools, the more likely you are to demand higher quality education", says Gabriela Segovia of the Federal Institute on Access to Information and Data Protection (IFAI).

- <http://www.mejoratuescuela.org/>
- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Mexico_0.pdf

Uganda publishes comprehensive national data on the performance of the rural water sector

With 35% of rural people still lacking access to an improved drinking water supply, deciding where to invest, how to develop services and which policies and strategies actually work is critical for Uganda. It requires data, analysis and the joint reflection of different stakeholders.

Water sector performance measurement in Uganda has been established in Uganda over the past ten years. In 2003 through meetings with stakeholders, and consultative workshops eight 'golden indicators' were selected such as % of people within 1.5 km (rural) and 0.2km (urban) of an improved water source, and % of improved water sources that are functional at time of spot-check Sanitation Sector.

Based on reports from local government, surveys and spot checks each year, an annual Sector Performance Report is prepared, consolidating the status, investment, progress and challenges on rural water supplies for the entire country.

Summary information from the Sector Performance Report feeds into the Government Annual Performance Report and the full report is uploaded on the Ministry website (<http://www.mwe.go.ug>). A simple, summarized version of the report is also put in the national newspapers for information to the public.

- <http://www.rural-water-supply.net/ressources/documents/default/1-383-3-1354809704.pdf>

Anexo: Estándares y directrices

Declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses

Biblioteca jurídica del Banco Mundial sobre divulgación de información financiera

INTER-GOVERNMENT GENERAL REFERENCE

La Biblioteca jurídica del Banco Mundial sobre divulgación de información financiera es una colección de leyes y normas sobre declaraciones patrimoniales y de activos. Da acceso a más de un millar de leyes y normas de 176 sistemas jurídicos de todo el mundo. La Biblioteca también proporciona información sobre asuntos relacionados, como la restricción a las actividades de los oficiales públicos. La misión de la librería consiste en servir como una fuente jurídica neutral para profesionales del sector, responsables políticos e investigadores involucrados en el campo de la declaración patrimonial, ya sea en gobiernos nacionales, organizaciones internacionales, agencias de desarrollo, medios, universidades y centros de investigación, o el sector privado.

<http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org>

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2003, incluye disposiciones sobre la divulgación de declaraciones patrimoniales y reglamentos sobre conflictos de intereses como una vía para combatir la corrupción.

El artículo 8(5) de la Convención declara que "Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos." Y el artículo 52(5) declara que "Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar".

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf

Criterios de elegibilidad de la OGP: Publicación de información relativa a los ingresos y activos de funcionarios electos/públicos

OGPELIGIBILITY CRITERIA RATING

Para poder participar en la OGP, los gobiernos deben demostrar su compromiso con el gobierno abierto en cuatro áreas clave, que se miden por medio de indicadores objetivos posteriormente validados por expertos independientes. Cualquier gobierno que obtenga una puntuación de, al menos, el 75% de todos los puntos posibles puede ingresar en OGP en cualquier momento una vez que demuestra que cumple con los criterios de mínimos.

Uno de los cuatro criterios de elegibilidad corresponde a las reglas sobre publicación de información relativa a los

ingresos y activos de funcionarios públicos de alto rango y de cargos electos. Se asignan cuatro puntos a los países que cuentan con legislación que obligue a la publicación de las declaraciones patrimoniales de políticos y funcionarios de alto rango, tres puntos a los países con legislación que obligue a la publicación de las declaraciones patrimoniales de políticos o de funcionarios de alto rango, y dos puntos por leyes que exijan a cargos electos y funcionarios de alto rango la presentación de declaraciones sin el requisito de su publicación.

Esta evaluación se basa en estudios del Banco Mundial, y en la base de datos del Banco Mundial sobre divulgación de información financiera relativa a cargos públicos, que se actualiza de forma periódica.

<http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>

Declaraciones patrimoniales y de activos: factores a tener en cuenta al desarrollar un régimen de divulgación

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE

Este artículo, publicado en 2009 por Centro de Recursos Anticorrupción de U4, describe los factores que los responsables políticos deberían tener en cuenta a la hora de decidir acerca de la promulgación y el contenido de una ley sobre publicidad financiera.

<http://www.cmi.no/publications/file/3396-income-and-assets-declarations.pdf>

Directrices para la resolución de conflictos de interés en el sector público

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

Las Directrices de la OCDE para la resolución de conflictos de interés en el sector público (Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service), de 2003, representan un completo recurso internacional para gobiernos y organizaciones públicas, que pueden revisar sus políticas y sus prácticas en materia de conflictos de intereses de empleados de las administraciones públicas nacionales. Las directrices establecen cuatro principios básicos que, de ser respetados por los funcionarios en situaciones de conflictos de intereses, pueden preservar la confianza del público en las instituciones: servir el interés público, apoyar la transparencia, fomentar la responsabilidad personal y crear una cultura organizativa que intolerante hacia los conflictos de intereses.

<http://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf>

Post-Public Employment: Buenas prácticas para evitar los conflictos de intereses

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

A partir de las buenas prácticas detectadas, el propósito de este informe, publicado por la OCDE en 2010, consiste en ofrecer orientación para que responsables y gestores políticos puedan revisar y modernizar los reglamentos, las políticas y las prácticas existentes dirigidas a la prevención y la gestión de los conflictos de intereses en la contratación de antiguos cargos públicos.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/post-public-employment_9789264056701-en

Public Office, Private Interests: Rendir cuentas con declaraciones patrimoniales y de activos

INTER-GOVERNMENT

DETAILED GUIDANCE

GENERAL REFERENCE

Esta es una publicación del año 2012 de la Iniciativa para la recuperación de activos robados. Se centra y la obligación de publicar las declaraciones patrimoniales de los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno, y está pensado (al igual que su publicación hermana, [Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations](#)) como una guía para profesionales y responsables políticos, además de otros agentes interesados en herramientas y procedimientos para luchar contra la corrupción. En la publicación se incluyen los elementos básicos de los sistemas de publicación de declaraciones patrimoniales, así como las consideraciones más importantes que pueden influir, en distintos contextos, en el diseño, la implementación y la vigilancia del cumplimiento de mecanismo para la publicación de declaraciones patrimoniales.

[http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public Office Private Interests.pdf](http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf)

Revolving Doors, Accountability and Transparency – Problemas regulatorios y soluciones políticas en la crisis financiera

INTER-GOVERNMENT

GENERAL REFERENCE

Este informe, publicado por la OCDE en 2009, examina el fenómeno de las "puertas giratorias" en el sector financiero (banca, aseguradoras, mercado de valores) tras la crisis financiera de 2008. Examina las "puertas giratorias" tanto desde el punto de vista de las personas, atendiendo al nombramiento de asesores y autoridades en entes reguladores, como desde el punto de vista institucional, y con especial atención hacia los rescates y la nacionalización de entidades bancarias. El objetivo del informe es ayudar a los responsables políticos y de toma de decisiones a entender la amplitud del problema provocado por las "puertas giratorias" en entidades responsables de la regulación, especialmente en el sector financiero, y apoyar un debate político informado sobre posibles soluciones alternativas.

[http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH\(2009\)2&docLanguage=En](http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH(2009)2&docLanguage=En)

Presupuestos

Banco Mundial: Sistemas de información de gestión financiera y datos financieros abiertos

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

GENERAL REFERENCE

Se trata de un estudio que presenta datos abiertos financieros tomados sistemas públicos de información de gestión financiera. El estudio presenta en forma abreviada 100 casos de varias páginas web gubernamentales de 53 países, extrae buenas prácticas y lecciones aprendidas. El estudio concluye siete principios rectores para la publicación de datos abiertos gubernamentales en plataformas FMIS:

1. Disponibilidad y oportunidad de la información financiera al completo
2. Divulgación de los detalles sobre los sistemas de información subyacentes
3. Disponibilidad de consultas definidas por los usuarios (dinámicas) y capacidad de producir informes
4. Publicación de datos presupuestarios abiertos fiables y vinculados entre sí
5. Autenticación de las fuentes de los datos de las finanzas públicas

6. Mejora de la calidad de la presentación
7. Promoción de un uso eficiente de los datos presupuestarios abiertos

<http://www.worldbank.org/publicfinance/FMIS>

Código de transparencia fiscal del FMI

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

El Código de buenas prácticas de transparencia fiscal del FMI se publicó en 1998 y fue actualizado en 2007. En él se identifican una serie de principios y prácticas a través de los cuales las administraciones pueden generar una visión clara de la estructura y las finanzas del sistema público.

El FMI ha revisado el código en 2013 mediante un proceso de consultas públicas que finalizará en 2014.

La estructura y el contenido del *Código de Transparencia Fiscal* en su última revisión han cambiado en aspectos importantes con respecto a la versión de 2007. En concreto, se aprecia:

- Mayor importancia de la calidad de los informes fiscales.
- Actualización de los principios de transparencia fiscal.
- Las prácticas se han colocado en una escala: buenas y avanzadas
- Indicadores cuantitativos de la transparencia fiscal
- Alcance y carácter complementario del marco de evaluación de los gastos públicos y responsabilidad financiera (PEFA)

Además de servir como estándar actualizado para la divulgación de información fiscal, el Código revisado, una vez terminado, también servirá de fundamento para la elaboración de una nueva evaluación de la transparencia fiscal (FTA). Estas evaluaciones se están poniendo a prueba actualmente en varios países tanto de ingresos bajos, como emergentes y avanzados.

<http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm>

Criterios de elegibilidad de la OGP: Transparencia fiscal

MULTI-STAKEHOLDER RATING

Para poder participar en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), los gobiernos deben demostrar su compromiso con el gobierno abierto en cuatro áreas clave, que son medidas de acuerdo con indicadores objetivos validados por expertos independientes.

Cada país puede conseguir un total de 16 puntos. Para poder participar el OGP, los países deben obtener, al menos, el 75% de los puntos a los que aspiran.

El indicador de transparencia fiscal se basa en el Open Budget Index de 2012, realizado por la International Budget Partnership. Este índice abarca 100 países, de modo que los países que no están incluidos no son evaluados en este criterio.

Se asignan dos puntos por la publicación de cada uno de los siguientes documentos esenciales:

- Borrador de presupuestos del ejecutivo
- Informe de auditoría

<http://www.opengovpartnership.org/eligibility>

Criterios de elegibilidad de la OGP: Transparencia fiscal

OGPELIGIBILITY CRITERIA RATING

Para poder participar en la OGP, los gobiernos deben demostrar su compromiso con el gobierno abierto en cuatro áreas clave, que se miden por medio de indicadores objetivos posteriormente validados por expertos independientes. Cualquier gobierno que obtenga una puntuación de, al menos, el 75% de todos los puntos posibles puede ingresar en OGP en cualquier momento una vez que demuestra que cumple con los criterios de mínimos.

La transparencia fiscal es uno de los cuatro criterios de elegibilidad. Se otorgan dos puntos por cada uno de los dos elementos esenciales: proyecto de presupuesto del ejecutivo y el informe de auditoría.

La puntuación se asigna mediante un subconjunto de indicadores extraídos del 2012 Open Budget Index, realizado por la International Budget Partnership con un alcance de 100 países. Como el Open Budget Index solo tiene en cuenta a 100 países, algunos países no obtienen puntuación en este criterio.

<http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>

Declaraciones de la INTOSAI de Lima y de México sobre la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

EXPERT / OTHER PRINCIPLES

La [Declaración de Lima](#) de 1977 indica cuáles son las condiciones necesarias para que las auditorías y las instituciones auditoras lleguen a resultados independientes y objetivos. La finalidad última de esta declaración no es otra que reivindicar la realización de auditorías independientes a los sistemas públicos. Cualquier Entidad Fiscalizadora Superior que no satisfaga esta existencia no está a la altura de la norma. La [Declaración de México](#) de 2007 establece ocho principios básicos para la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, que emanan directamente de la Declaración de Lima.

<http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html>

Encuesta de Presupuesto Abierto IBP

EXPERT / OTHER RATING

La Encuesta de Presupuesto Abierto mide el estado de la transparencia, la participación y la supervisión presupuestarias en países de todo el mundo, y está realizada por investigadores independientes de los países evaluados. El Índice de Presupuesto Abierto asigna a cada país encuestado una puntuación de transparencia, en una escala máxima de 100 puntos, que se basa en la información presupuestaria publicada por el gobierno mediante ocho documentos presupuestarios fundamentales, cuya divulgación debe ser exhaustiva y oportuna.

<http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/>

Guía de campo sobre gasto público y responsabilidad financiera

EXPERT / OTHER

DETAILED GUIDANCE

COMMUNITY OF PRACTICE

La "Guía de campo" de la asociación PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), publicada en 2012, es el resultado de la recopilación de todo el material de orientación y de las notas técnicas generadas por la Secretaría de la organización. El objetivo de la guía de campo es apoyar el trabajo técnico de los asesores en este campo.

<http://siteresources.worldbank.org/PEFA/Resources/PEFAFieldguide.pdf>

Guía de la IBP sobre transparencia en informes de presupuestos públicos

EXPERT / OTHER

DETAILED GUIDANCE

La Guía de la IBP sobre transparencia en informes de presupuestos públicos se diseñó para apoyar las iniciativas de los gobiernos en el sentido de cumplir con los estándares de buenas prácticas internacionales en transparencia presupuestaria, y ofrece orientación sobre el tipo de informes y demás documentos que los gobiernos deberían preparar y divulgar a lo largo del ciclo presupuestario, así como la información que debe figurar en dichos informes, y enlaces a modelos de documentos de otros países.

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Government_Transparency_Guide1.pdf

Guía de presupuestos participativos de la IBP

CIVIL SOCIETY

GENERAL REFERENCE

La Guía de presupuestos participativos de 2000 examina los programas brasileños de presupuestos participativos diseñados para incorporar a los ciudadanos al proceso político, alentando reformas administrativas, y distribuyendo recursos públicos a áreas de rentas bajas. Este artículo explora los mecanismos de los presupuestos participativos, los resultados de este enfoque, y su aplicación potencial en otros lugares.

<http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/A-Guide-to-Participatory-Budgeting.pdf>

IBP – Más allá de los presupuestos

CIVIL SOCIETY

GENERAL REFERENCE

El informe "Looking Beyond the Budget" va más allá de los ocho tipos de documentos fundamentales en base a los cuales se mide la transparencia presupuestaria, y se ocupa de cinco áreas de las finanzas públicas menos conocidas por el público y, por lo tanto, más vulnerables a los esfuerzos de ocultarlos a los ojos públicos. Estas cinco áreas son los fondos extra-presupuestarios, los gastos fiscales, las actividades cuasifiscales, los pasivos contingentes y los pasivos futuros.

<http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Looking-Beyond-the-Budget.pdf>

INTOSAI: Principios básicos de auditoría pública

EXPERT / OTHER PRINCIPLES

Los Principios básicos de auditoría pública de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) constituyen un marco de referencia a partir del cual se pueden establecer procedimientos y prácticas para la realización de auditorías. El propósito de los Principios no es otro que contribuir al desarrollo de principios de auditoría que auxilien el trabajo de los auditores y la presentación de informes de auditoría sólidos, especialmente en situaciones en las que no haya estándares ni normas de aplicación.

http://www.issai.org/media/12943/issai_100_e.pdf

Libro sobre presupuestos participativos del Banco Mundial

INTER-GOVERNMENT GENERAL REFERENCE

"Participatory Budgeting" es el título de un libro publicado en 2007 por el Banco Mundial en la colección sobre gobernanza del sector público y rendición de cuentas. Ofrece una visión panorámica de los principios que rigen los presupuestos participativos, y analiza los méritos y las debilidades de prácticas en este campo en todo el mundo con el objetivo de orientar a responsables políticos y profesionales en la mejora de estas prácticas y en aras de una gobernanza más inclusiva.

<http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ParticipatoryBudgeting.pdf>

OCDE: Directrices de mejores prácticas en transparencia presupuestaria

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

Las mejores prácticas en transparencia presupuestaria de la OCDE, publicadas en 2002, son una herramienta que los gobiernos pueden emplear a modo de referencia para incrementar la transparencia presupuestaria. Las mejores prácticas se basan en las experiencias de los estados miembros de la OCDE, sin que constituyan formalmente ningún tipo de estándar o norma formal de transparencia presupuestaria.

<http://www.oecd.org/gov/budgeting/best-practices-budget-transparency.htm>

OCDE: Directrices en materia de gobernanza corporativa de empresas públicas

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

Este documento contiene directrices vinculantes y mejores prácticas desarrolladas por el Grupo de Trabajo en Materia de Privatización y Gobernanza Corporativa de Empresas Públicas. El objetivo de estas directrices es ofrecer asesoramiento con carácter genérico para contribuir a un mejor funcionamiento de las empresas de titularidad pública. Las directrices descansan sobre orientación más específica en el documento de la OCDE: [Accountability and](#)

[transparency - A Guide for State Ownership.](#)

<http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/34803211.pdf>

Open Data Index

CIVIL SOCIETY RATING

El Open Data Index fue desarrollado en 2013 con el fin de servir como referencia mundial acerca del estado de la publicación de datos abiertos por los gobiernos nacionales. Aporta una evaluación independiente, sometida a revisión por pares, de la apertura en toda una gama de áreas fundamentales, además de reflejar la realidad y las prácticas de la publicación de información pública en más de 60 países. Se han evaluado más de 80 conjuntos de datos en diez áreas que incluyen transporte, presupuestos nacionales, resultados de las elecciones, registros mercantiles, mapas y estadísticas nacionales, legislación, códigos postales y emisiones contaminantes.

<https://index.okfn.org/>

Principios GIFT de alto nivel sobre transparencia financiera

MULTI-STAKEHOLDER PRINCIPLES

Los Principios GIFT de alto nivel sobre transparencia financiera son un conjunto de principios y normas mundiales sobre transparencia financiera formuladas el 2012 por una red compuesta por múltiples actores. La finalidad de los principios es servir como guía para que los responsables políticos y demás agentes interesados en la política fiscal puedan perseguir la transparencia fiscal, la participación y la rendición de cuentas. Además, fomenta mejoras en el alcance, la consistencia y la coherencia de los estándares y normas existentes en materia de transparencia fiscal. Existe una [versión ampliada de los Principios de alto nivel](#) que explica cada uno de los principios de forma detallada, proporcionando información adicional y fuentes de orientación para quienes quieran aplicar a la práctica los Principios.

<http://fiscaltransparency.net/wp-content/uploads/2012/09/GIFT-High-Level-Principles-2012-08-ENG.pdf>

The Power Of Making It Simple: Una Guía para gobiernos que quieren presentar presupuestos ciudadanos

CIVIL SOCIETY DETAILED GUIDANCE

El informe de International Budget Partnership's (IBP) "The Power of Making It Simple" remite a las experiencias de gobiernos que han preparado presupuestos ciudadanos y a la propia experiencia de IBP en el asesoramiento a gobiernos. El informe proporciona a los gobiernos orientación paso a paso sobre cómo preparar presupuestos ciudadanos, e incluye sugerencias sobre cómo puede hacerse frente a los problemas que suelen aparecer en el camino.

<http://internationalbudget.org/publications/the-power-of-making-it-simple-a-government-guide-to-developing-citizens-budgets/>

Center for Technology in Government – Diseñar políticas de social media para las administraciones públicas: Ocho elementos esenciales

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE

El informe "Designing Social Media Policy for Government: Eight essential elements" contiene una revisión de las políticas para el uso de social media en el ámbito de las administraciones públicas en Estados Unidos. El análisis identifica ocho elementos esenciales en toda política de social media:

1. Acceso de los empleados
2. Gestión de cuentas
3. Uso adecuado
4. Comportamiento del empleado
5. Contenido
6. Seguridad
7. Problemas legales
8. Comportamiento del ciudadano

http://www.ctg.albany.edu/publications/guides/social_media_policy/social_media_policy.pdf

Civicus – Diseño participativo de políticas

CIVIL SOCIETY GENERAL REFERENCE COMMUNITY OF PRACTICE

PG Exchange es una iniciativa de CIVICUS, la Alianza mundial para la participación ciudadana. Esta página web es parte del trabajo de CIVICUS para incrementar la influencia de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de gobernanza. El Proyecto de gobernanza participativa de CIVICUS trabaja para mejorar la capacidad de actores gubernamentales y de la sociedad civil en países del sur, y su finalidad es fomentar, tanto a escala local como nacional, instituciones públicas gobernadas de forma participativa y responsable.

http://www.pgexchange.org/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=132

Criterios de elegibilidad de la OGP: Participación ciudadana

OGPELIGIBILITY CRITERIA RATING

Para poder participar en la OGP, los gobiernos deben demostrar su compromiso con el gobierno abierto en cuatro áreas clave, que se miden por medio de indicadores objetivos posteriormente validados por expertos independientes. Cualquier gobierno que obtenga una puntuación de, al menos, el 75% de todos los puntos posibles puede ingresar en OGP en cualquier momento una vez que demuestra que cumple con los criterios de mínimos.

La apertura a la participación ciudadana, incluida la protección básica de las libertades civiles, es uno de los cuatro criterios que componen la elegibilidad, y se mide por medio del sub-indicador del Índice de 2012 de derechos civiles de la Unidad de Inteligencia de The Economist. Con 10 como valor máximo y 0 como mínimo, se asignan cuatro puntos a

los países que tienen un resultado por encima de 7,5 puntos; 3 a los países que puntúan por encima del 5; 2 puntos a los países con puntuaciones por encima del 2,5; y 0 al resto. El índice de Democracia de 2012 de la Unidad de Inteligencia de The Economist abarca a 167 países.

<http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>

Delib: Cómo y cuándo usar canales de social media para apoyar estratégicamente los fines gubernamentales

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

Esta guía, titulada "How and When to Use Social Media Channels to Strategically Support Government Goals", contiene una visión panorámica, a modo de introducción básica, sobre los canales de social media a disposición de los gobiernos, e incluye consejos sobre cómo pueden ser aprovechados para promover los fines de la administración y de sus agencias.

http://www.delib.net/delib_shared_assets/shared_documents/Delib_Social_Media_for_Government_2012.pdf

Deliberación pública: Una guía sobre participación ciudadana para administradores

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE

Desarrollado en 2006 por el IBM Center for Business and Government, el informe "Public Deliberation: A manager's guide to citizen engagement" documenta un espectro de herramientas ampliamente desarrolladas por el sector sin ánimo de lucro para aumentar la interacción entre ciudadanía y gobierno. Por ejemplo, se resalta el uso de encuestas online y herramientas de comunicación P2P, como los blogs y las wikis.

También subraya cómo los administradores públicos pueden desarrollar un enfoque activo para aumentar la participación ciudadana en todos los rangos del gobierno.

<http://www.businessofgovernment.org/report/public-deliberation-managers-guide-citizen-engagement>

ECNL: Mejorar la cooperación entre instituciones públicas y de la sociedad civil en los Balcanes Occidentales y Turquía

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE

El informe "Improving Cooperation Between Public Institutions and Civil Society in the Western Balkans and Turkey" sobre el estado de la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil (CSO) y autoridades públicas en los países de los Balcanes Occidentales y Turquía, fue desarrollado en 2012 para el proyecto Technical Assistance for Civil Society in Europe (TACSO) gracias al trabajo de investigación y redacción del Centro Europeo de Derecho No Mercantil (ECNL). El informe abarca los siguientes países: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo*, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía, y se centra en las políticas y los mecanismos nacionales para la cooperación entre ambos sectores.

<http://www.gamn.org/files/Report%20-%20Keeping%20up%20the%20Momentum.pdf>

Evaluar la calidad de la democracia: Una guía práctica

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE GENERAL REFERENCE

Esta guía práctica presenta el marco de trabajo para la evaluación de la democracia de IDEA Internacional. Desarrollado para su uso en todo el mundo, este marco se ha aplicado en unos 20 países desde su lanzamiento en 2000.

El marco permite una evaluación exhaustiva de la democracia liderada y controlada por actores locales. El compromiso con los principios de la democracia se combina con el diálogo, y se mira más allá de la existencia formal de las instituciones democráticas para centrarse en su funcionamiento real.

Existe una introducción al marco de trabajo en inglés, español y francés.

<http://www.idea.int/publications/aqd/>

Guía de participación juvenil en el desarrollo

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE GENERAL REFERENCE

Desarrollado por DFID / CSO Youth Working Group, esta guía ha sido creada para apoyar a las agencias de cooperación (multilaterales o bilaterales) y a asesores políticos de organizaciones que trabajen con los jóvenes y para los jóvenes, además de para socios gubernamentales y de la sociedad civil. La guía se realizó con la misión de mejorar la comprensión sobre la importancia creciente y el gran potencial de la participación juvenil en la práctica del desarrollo, y explora problemáticas y enfoques fundamentales en este campo.

<http://ygproject.org/>

IBM Centre for the Business of Government: Guía para administradores sobre evaluación de la participación ciudadana

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

Una guía práctica para administradores y gestores de programa que quieran evaluar si sus esfuerzos para incrementar la participación ciudadana en los programas que gestionan están obteniendo el impacto deseado. Incluye pasos para la evaluación, tanto de la implementación y la administración de las iniciativas de participación ciudadana en general como del impacto de una iniciativa concreta.

<http://www.businessofgovernment.org/report/manager%E2%80%99s-guide-evaluating-citizen-participation>

IBM Centre for The Business of Government: Uso de herramientas en línea para la interacción con el público

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

El informe "Using Online Tools to Engage - and be Engaged by - The Public" describe situaciones habituales en las cuales los gestores públicos pueden necesitar o hacer uso de aportaciones del público. Se describe una combinación de diez tácticas diferentes que los gestores pueden aprovechar para animar a la participación en línea del público, y resalta más de 40 tecnologías diferentes que actualmente se están empleando para apoyar ese tipo de participación.

<http://www.businessofgovernment.org/report/using-online-tools-engage-public>

 ICNL: Directrices sobre preparación de pactos

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

El artículo "Guidelines on the Preparation of Compacts" fue publicado en The International Journal of Not-for-Profit Law, volumen 3, número 4, marzo de 2001. Contiene orientación sobre aspectos organizativos y sobre el contenido del pacto.

http://www.icnl.org/research/journal/vol3iss4/special_5.htm


 Índice de ambientes propicios de Civicus

CIVIL SOCIETY RATING

El Enabling Environment Index (EEI) desarrollado por CIVICUS, la red mundial de la sociedad civil, es el primer intento riguroso de medir y comparar las condiciones que afectan al potencial participativo de la ciudadanía, y establece un ranking de varios factores (gobernanza, ambiente sociocultural, ambiente socioeconómico) de la sociedad civil de 109 países.

El índice tiene en cuenta los factores a largo plazo que condicionan una participación ciudadana sana. Se trata de un índice global compuesto para cuya confección se emplean datos secundarios que permiten comprender cuál es el grado de propensión de los ciudadanos a participar en la sociedad civil.

<http://civicus.org/what-we-do-126/2013-05-06-10-38-39/1886-download-the-2013-enabling-environment-index-eei-report>

 Involve: Personas y participación – Cómo colocar a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE GENERAL REFERENCE

La publicación "People and Participation - How to put citizens at the heart of decision-making" proporciona información práctica y detallada a partir de la experiencia de más de un centenar de expertos en el sector, que han empleado nuevos métodos para conseguir involucrar al público en una serie de cuestiones, desde la planificación local hasta la nanotecnología. El punto de partida es que la profundización y el refuerzo de la democracia depende del éxito con el que aprendamos las lecciones sobre por qué cierto tipo de participación lleva a decisiones mejores y más legítimas, mientras que otros tipos no obtienen estos resultados.

Este recurso ofrece algunos parámetros básicos para describir los métodos participativos y los aplica a métodos ampliamente conocidos. Se busca tanto ofrecer descripciones útiles de esos métodos, como facilitar a otros el empleo del marco de análisis para que puedan recoger sus propios datos sobre "qué funciona" para ellos en según qué circunstancias.

<http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/People-and-Participation.pdf>

 La brújula de la participación

EXPERT / OTHER

DETAILED GUIDANCE

GENERAL REFERENCE

COMMUNITY OF PRACTICE

Participationcompass.org apoya a esas personas que, desde el sector público, el privado o el tercer sector, necesitan involucrar en su trabajo a grupos amplios de personas. El sitio web y la app proporcionan información consejos, estudios de caso y oportunidades para compartir experiencias con otros. El sitio está dirigido fundamentalmente a personas directamente involucradas en la planificación, la gestión o la comisión de actividades participativas. La brújula de la participación contiene información sobre métodos de participación, estudios de caso de acciones participativas, recursos y guías sobre participación, organizaciones que pueden aportar su experiencia en este ámbito, y noticias relacionadas.

<http://participationcompass.org/>

NCDD: Guía de recursos sobre participación pública

EXPERT / OTHER

GENERAL REFERENCE

US National Coalition for Dialogue & Deliberation (NCDD) es una red activa y una comunidad de práctica que trabaja en las problemáticas relacionadas con la solución de conflictos y prácticas de participación pública. En 2010, NCDD creó la "Resource Guide on Public Engagement", un catálogo sobre participación pública en el que se muestran los mejores recursos desarrollados de forma colaborativa por la comunidad NCDD y otros agentes.

http://www.ncdd.org/files/NCDD2010_Resource_Guide.pdf

NCDD: Marcos jurídicos para la participación ciudadana

EXPERT / OTHER

GENERAL REFERENCE

Realizado en 2003, "Legal Frameworks for Citizen Participation" es un exhaustivo estudio comparativo sobre los marcos jurídicos y políticos para la participación en la gobernanza local en cuatro regiones mundiales (África Oriental, Latinoamérica, Sur de Asia, Sureste Asiático). Su objetivo era sintetizar el conocimiento existente sobre cómo funcionan estos marcos en la práctica diaria, extrayendo conclusiones sobre la efectividad de determinados marcos jurídicos y políticos para promover la participación ciudadana.

It aimed to synthesize existing knowledge about how these frameworks work in practice and to draw lessons about the effectiveness of particular kinds of legal and policy framework for promoting citizen participation.

[http:// http://ncdd.org/rc/wp-content/uploads/2010/09/LogoLink-LegalFrameworks2003.pdf](http://ncdd.org/rc/wp-content/uploads/2010/09/LogoLink-LegalFrameworks2003.pdf)

OCDE: Focus on Citizens – Participación pública para mejorar políticas y servicios

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

GENERAL REFERENCE

Este libro, publicado en 2009 a partir de una encuesta realizada a gobiernos de 25 países, 14 estudios de caso pormenorizados y 18 aportaciones de opinión de expertos de la sociedad civil y al ámbito gubernamental, repasa en cómo los gobiernos de países miembros de la OCDE ponen en práctica los principios sobre diseño abierto e inclusivo de políticas, y en cómo pueden garantizar una participación más amplia e inclusiva.

El informe de la OCDE propone 10 principios rectores para hacer posible que tanto las políticas públicas como la provisión efectiva de los servicios sean procesos más abiertos e inclusivos:

1. Compromiso

2. Derechos
3. Claridad
4. Tiempo
5. Inclusividad
6. Recursos
7. Coordinación
8. Rendición de cuentas
9. Evaluación
10. Ciudadanía activa

<http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/focusoncitizenspublicengagementforbetterpolicyandservices.htm>

Participedia

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE COMMUNITY OF PRACTICE

Participedia es una comunidad global de conocimiento para investigadores y profesionales en el área de la innovación democrática y la participación pública. Cuenta con bases de datos con casos, métodos y organizaciones en las que se admiten búsquedas.

<http://participedia.net>

Principios internacionales de protección de la sociedad civil

CIVIL SOCIETY PRINCIPLES DETAILED GUIDANCE COMMUNITY OF PRACTICE

Los Principios internacionales de protección de la sociedad civil es un informe en el que se articulan dichos principios y el entramado de las relaciones entre gobierno y sociedad civil que propician el desarrollo de dichos principios, de acuerdo con el Derecho Internacional

1. El derecho de admisión (libertad de asociación)
2. El derecho a funcionar sin intromisiones estatales infundadas
3. El derecho a la libre expresión
4. El derecho a la comunicación y la cooperación
5. El derecho a la libre reunión pacífica
6. El derecho a buscar y a obtener recursos
7. El deber estatal de brindar protección

Estos Principios fueron desarrollados conjuntamente por el Centro Internacional de Derecho no Lucrativo (ICNL) y la Secretaría del Movimiento Mundial para la Democracia, que funciona con el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), como parte del proyecto "En defensa de la sociedad civil". El objetivo del proyecto es desarrollar estrategias y generar solidaridad entre activistas y grupos que luchan contra legislación y normativas restrictivas. Los

principios están respaldados por un conjunto de herramientas y por orientación detallada.

Aemás de en inglés y español, el informe también está disponible en francés, ruso y árabe.

<http://www.defendingcivilsociety.org>

Resolución sobre la protección de los defensores de los Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

La Resolución sobre la protección de los defensores de los Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (A/HRC/22/L.13) fue aprobada en marzo de 2013. En ella se insta a apoyar el trabajo de los defensores de Derechos Humanos y a protegerlos ante casos de acoso, amenazas y ataques.

La resolución:

- Insta con vehemencia a que los Estados pongan fin a la impunidad de los actos de intimidación y represalias contra los defensores de los derechos humanos, y que eviten su criminalización y otros impedimentos a los que deben enfrentarse en el desarrollo de su trabajo
- Reconoce la importancia de nuevas formas de comunicación dentro y fuera de internet para el trabajo de los defensores de los Derechos Humanos en la promoción y la lucha por la protección de los mismos
- Insta a que los Estados no impongan restricciones discriminatorias sobre fuentes de financiación con potencial para apoyar el trabajo de los defensores de los Derechos Humanos
- Reconoce que el acceso a la información es un Derecho Humano, y pide a las autoridades públicas que den publicidad activa a los casos de abusos de los Derechos Humanos

The resolución apoya que los Estados asuman las siguientes obligaciones y compromisos:

- Crear un ambiente seguro y propicio en el que los defensores de los Derechos Humanos puedan desarrollar sus actividades sin impedimentos ni falta de seguridad, teniendo en la debida consideración la obligación de acabar con la impunidad
- Garantizar que las leyes no impidan que los funcionarios sean responsables de sus actos, y que las penas y sanciones por difamación sean proporcionadas
- Garantizar que la legislación en materia de seguridad nacional no se aplique maliciosamente a los defensores de los Derechos Humanos, y que las medidas antiterroristas cumplan con las normas internacionales en materia de Derechos Humanos;
- Garantizar que los defensores de los Derechos Humanos puedan realizar su importante labor cuando se celebren manifestaciones pacíficas de protesta
- Garantizar que los requisitos para la presentación de informes no sean un impedimento para la autonomía funcional, y que ninguna ley criminalice o imponga restricciones discriminatorias a las fuentes de financiación
- Fortalecer la consideración como Derecho Humano del acceso a la información y solicitar a las autoridades públicas que activen regímenes de publicidad activa en los que se incluya a las violaciones graves de los Derechos Humanos
- Proteger la expresión de opiniones divergentes
- Proteger el derecho universal de acceso y uso de Internet.

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=21380

UNICEF: Guía de recursos para la participación infantil y juvenil

INTER-GOVERNMENT

DETAILED GUIDANCE

Esta guía contiene recursos sobre participación infantil y juvenil en Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, África, Australia y el Pacífico. Esta guía de recursos está dirigida principalmente a profesionales y gestores relacionados con el fomento de la participación infantil y juvenil, ya desarrollen sus funciones en el gobierno, en organizaciones locales, en organizaciones infantiles, ONG y agencias de cooperación.

http://www.unicef.org/adolescence/cypguide/index_intro.html

Elecciones

Carta Democrática Interamericana

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

La Carta Democrática Interamericana fue adoptada en 2001. Contiene declaraciones sobre la democracia y su relación con los Derechos Humanos, el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Además, contiene disposiciones sobre el refuerzo y la conservación de las instituciones democráticas y el fomento de una cultura democrática. Los artículos 23 y 25 están dedicados a los procesos electorales e incluyen disposiciones sobre el uso de misiones de observación de elecciones. Por ejemplo, se afirma que los estados miembros pueden solicitar la presencia de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos.

http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), adoptada en 2003, contiene una serie de medidas que pueden ser tomadas por los estados signatarios de la Convención para evitar y luchar contra la corrupción. Los artículos 8 (códigos de conducta para funcionarios públicos), 9 (Contratación pública y gestión de la hacienda pública), 10 (información pública), 12 (sector privado), 13 (participación de la sociedad) y 33 (protección de los denunciantes) tienen especial importancia para salvaguardar la confianza en la legitimidad de los procesos electorales.

http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

El Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966, contiene disposiciones sobre el derecho a manifestar opiniones y la libertad de expresión.

<http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>

Borrador de resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre protección de denunciantes

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

En este borrador de resolución de 2009 sobre protección de denunciantes, el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos subraya la importancia de los denunciantes, a las que caracteriza como una oportunidad para reforzar la responsabilidad y luchar contra la corrupción y la mala administración en el sector público y el privado. Además, invita a que los Estados miembro emprendan una revisión de su jurisdicción en materia de protección de denunciantes.

http://fairwhistleblower.ca/files/fair/docs/ti/Council_of_Europe_Draft_WB_Resolution.pdf

Carta africana de las elecciones, la democracia y la gobernanza

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

En 2007, la Unión Africana aprobó una Carta africana de las elecciones, la democracia y la gobernanza. Entre los objetivos de la Carta se encuentran la promoción de la adhesión a los principios democráticos, del respeto a los Derechos Humanos y el imperio de la ley, además del apoyo a elecciones libres y legítimas y la condena a los cambios de gobierno no constitucionales.

<http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/text/Charter%20on%20Democracy.pdf>

Código de buenas prácticas en el ámbito electoral del Consejo de Europa

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES GENERAL REFERENCE

Tras haber apreciado la falta de un código de buenas prácticas en el ámbito electoral europeo, este Código de buenas prácticas en el ámbito electoral, emitido en 2001, solicitaba a La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), que diseñara un código de prácticas para el ámbito electoral.

<http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=9544&Language=en>

Código de conducta profesional y ético para la administración de elecciones

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

Este código de conducta fue publicado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) en 1997. Tiene por objeto apoyar a los administradores electorales mediante orientación general sobre sus responsabilidades. El informe tiene dos partes: la primera parte contiene un resumen del propósito, las funciones, los

objetivos y los principios éticos fundamentales de la administración electoral. La segunda parte contiene directrices específicas.

http://www.idea.int/publications/conduct_admin/

Comentario general 25 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

GENERAL REFERENCE

Este documento, de 1996, contiene comentarios del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al artículo 25: Derecho a participar en los asuntos públicos, a votar y a tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.

<http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iue72QY8oFMq1RR28eUM15DmOG%2BUkA42vZzn8xBgKE72kZ%2B%2FG27cNpuBZ8Wlla%2BJ4SJOBYskMpcZa%2BR0%2BP3tAWg%3D%3D>

Comentario general 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

GENERAL REFERENCE

Este documento, de 2011, contiene comentarios del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al artículo 19: Libertades de opinión y expresión, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.

http://www.ccprcentre.org/wp-content/uploads/2012/09/A.66.40_Vol.I_S.pdf

Compendio de normas internacionales para las elecciones de la Unión Europea

INTER-GOVERNMENT

DETAILED GUIDANCE

El Compendio de normas internacionales para las elecciones fue publicado por la Comisión Europea en 2007 con el objetivo de apoyar a las misiones de observadores electorales de la UE y otros agentes interesados involucrados en la tarea de evaluar el desarrollo de las elecciones y su cumplimiento de las normas internacionales. Además, se perseguía que el trabajo de las distintas misiones de observación de las elecciones de la UE fuera coherente. El compendio incluye una guía práctica para agilizar las labores de evaluación.

http://www.needsproject.eu/files/Compendium_of_Int_Standards_3_ES.pdf

Compromisos con las elecciones democráticas adquiridos por los países integrantes de la OSCE

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

GENERAL REFERENCE

Este informe fue publicado en 2003 por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en 2003. Es un informe de progreso sobre un proyecto iniciado por la Oficina de la OSCE de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos con el objetivo de generar un inventario con las normas, compromisos, principios y "buenas prácticas" existentes en materia de elecciones. El informe contiene las normas universales ya existentes, relacionadas con documentos de la ONU, etcétera, con comentarios explicativos.

<http://www.osce.org/odihr/elections/13957>

Contratación abierta: Una nueva frontera para la transparencia y la rendición de cuentas

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE

Este informe, preparado por el Instituto del Banco Mundial en el nombre de la Open Contracting Partnership, presenta una visión panorámica de las prácticas y las metodologías que están apareciendo en el ámbito de la divulgación y la participación en la contratación pública. Además, indica qué tipo de acciones ya se están poniendo en práctica por parte de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los donantes con el objetivo de apoyar la contratación abierta, indicando tanto ejemplos concretos de todo el mundo como su fundamentación.

<http://pro-act.org/profiles/blogs/research-highlights-open-contracting-practices-from-around-the-wo>

Convención Americana sobre Derechos Humanos

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada en 1969. El artículo 23 de la Convención (Derecho a participar en el Gobierno) contiene el derecho a participar en la vida pública, a votar y a ser elegido en elecciones legítimas, periódicas y universales.

<http://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm>

Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

La Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción fue adoptada en 2003 para luchar contra la corrupción en el continente africano. Tienen particular importancia en relación con la confianza en el proceso electoral los artículos 7 (lucha contra la corrupción y delitos relacionados de funcionarios), 9 (acceso a la información), 10 (financiación de los partidos políticos) y 12 (la sociedad civil y los medios).

[http://www.africa-union.org/Official documents/Treaties %20Conventions %20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf](http://www.africa-union.org/Official%20documents/Treaties%20Conventions%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf)

Diseño de la administración electoral: Manual internacional de IDEA

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

Este manual sobre el diseño de la administración electoral fue publicado en 2006 por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia a las Elecciones (IDEA). Está dirigido a administradores electorales, diseñadores de la administración electoral y otros profesionales del campo que estén involucrados en la creación de sistemas de administración de elecciones con el objetivo de celebrar elecciones libres, creíbles y legítimas. Se trata de un estudio comparativo que divulga buenas prácticas y know-how de todo el mundo sobre la financiación, la estructura y la evaluación de los Organismos de Administración Electoral (EMB).

<http://www.idea.int/publications/emd/>

Diseño de sistemas electorales: el nuevo manual internacional de IDEA

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

Este manual, publicado en 2005 por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia a las Elecciones (IDEA), amplía y actualiza el Manual de diseño de sistemas electorales de 1997. El Manual está dirigido a responsables políticos, cargos públicos y administradores electorales, y ofrece información práctica en la que se explica por qué ciertos países han escogido diferentes sistemas, y cómo otros países han reformado los sistemas que habían heredado. Además, describe qué sistemas electorales han funcionado mejor en determinadas condiciones culturales, sociales y económicas, y cómo se puede incrementar la participación, involucrar a las minorías y reducir el escepticismo a través del propio diseño del sistema electoral.

<http://www.idea.int/publications/esd/index.cfm>

Documento de 1990 de la Conferencia de Copenhague [actualmente la Organización] sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

En este documento, publicado por la OSCE en 1990 los países participantes declararon, entre otros Derechos Humanos, el derecho a elecciones libres con voto secreto celebradas a intervalos regulares. Además, el documento contiene una disposición sobre observadores electorales en la que se afirma que la presencia de observadores, tanto domésticos como internacionales, puede mejorar la calidad de los procesos electorales.

<http://www.osce.org/odihr/elections/14304>

Herramientas de control parlamentario de la Unión Interparlamentaria

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

Este informe sobre el control parlamentario fue publicado en 2007 por la Unión Interparlamentaria. Basado en datos de 88 parlamentos de todo el mundo, ofrece ejemplos concretos de las herramientas que son empleadas por distintas instituciones parlamentarias para controlar a sus gobiernos. El objeto del informe es proporcionar orientación práctica a las personas que desarrollan sus labores en el poder legislativo, y a todos aquellos que trabajan para reforzar los parlamentos y mejorar la capacidad de control de estas instituciones.

<http://www.ipu.org/PDF/publications/oversight08-e.pdf>

Justicia electoral: Manual internacional de IDEA

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

Este manual de justicia electoral fue publicado en 2010 por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia a las Elecciones (IDEA). El manual examina el concepto de justicia electoral y cómo evitar disputas electorales. A través de ejemplos de países tales como Afganistán, Argentina, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Francia, Indonesia, Japón, México, Reino Unido y Estados Unidos, tiene por objeto prestar asistencia para el diseño y la

implementación de un sistema de justicia electoral que se ajuste a su situación específica.

http://www.idea.int/publications/electoral_justice/

La base de datos del Centro Carter de obligaciones en materia de elecciones democráticas

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE

La base de datos del Centro Carter de obligaciones en materia de elecciones democráticas es un catálogo de citas de tratados y demás instrumentos jurídicos, como decisiones judiciales, decisiones y recomendaciones de comités de supervisión de tratados internacionales, y guías y manuales. Su objetivo es apoyar a quienes prestan asistencia a las elecciones, a observadores electorales y demás agentes comprometidos con el empleo de las obligaciones en materia de Derechos Humanos para evaluar la calidad de los procesos electorales. El material está clasificado en una base de datos electrónicas que permite realizar búsquedas según una serie de criterios.

<http://www.cartercenter.org/des-search/des/Introduction.aspx>

La Convención Interamericana contra la corrupción

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

La Convención Interamericana contra la corrupción, aprobada in 1996, fue la primera convención internacional dedicada al problema de la corrupción. Los artículos 5-7 y 11 son especialmente importantes para salvaguardar la confianza en el proceso electoral, al incluir disposiciones orientadas a la tipificación como delito en el derecho interno de varias formas de corrupción.

<http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html>

Managing Conflict of Interests: Marcos, herramientas e instrumentos para evitar, detectar y gestionar el conflicto de intereses

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

Este informe es parte de l Iniciativa contra la corrupción del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y la OCDE para Asia y el Pacífico, que se puso en marcha en 1999. El informe se centra en los conflictos de intereses en la región de Asia y el Pacífico. Se basa en un seminario regional sobre el conflicto de intereses, celebrado en Yakarta en 2007, y en el cual se reunieron más de 150 expertos de 23 de los países miembros de la iniciativa.

<http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/40838870.pdf>

Open Data Index

CIVIL SOCIETY RATING

El Open Data Index fue desarrollado en 2013 con el fin de servir como referencia mundial acerca del estado de la publicación de datos abiertos por los gobiernos nacionales. Aporta una evaluación independiente, sometida a revisión por pares, de la apertura en toda una gama de áreas fundamentales, además de reflejar la realidad y las prácticas de la

publicación de información pública en más de 60 países. Se han evaluado más de 80 conjuntos de datos en diez áreas que incluyen transporte, presupuestos nacionales, resultados de las elecciones, registros mercantiles, mapas y estadísticas nacionales, legislación, códigos postales y emisiones contaminantes.

<https://index.okfn.org/>

Profundizar en la democracia: una estrategia mundial para mejorar la legitimidad de las elecciones

INTER-GOVERNMENT GENERAL REFERENCE

Este informe, publicado en 2012 por la Comisión Mundial de Elecciones, Democracia y Seguridad, defiende la necesidad de mejorar la legitimidad de los procesos electorales, para lo cual aporta una serie de recomendaciones dirigidas a los distintos actores nacionales e internacionales, además de una recomendación en el sentido de mejorar la acción nacional mediante el empoderamiento ciudadano y las alianzas transnacionales.

<http://www.global-commission.org/report>

Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections- Una Guía de la NDI para desarrollar legislación y comentario jurídico en materia de elecciones

CIVIL SOCIETY DETAILED GUIDANCE

Este informe versa sobre leyes electorales, y fue publicado en 2008 por el National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Contiene una serie de herramientas diseñadas para apoyar a partidos políticos, grupos de apoyo a candidatos, organizaciones de la sociedad civil y activistas jurídicos en la evaluación de la legislación electoral. Además, aporta comentarios, recomendaciones y defensa para el progreso de los marcos jurídicos necesarios para la celebración de elecciones democráticas. Esta guía refleja 25 años de experiencia del NDI en más de 90 países de todo el mundo, y reseña las iniciativas para garantizar la legitimidad de las elecciones, la participación popular y el gobierno democrático.

<http://www.ndi.org/node/14905>

Proyecto de voto electrónico del Consejo de Europa

INTER-GOVERNMENT COMMUNITY OF PRACTICE

El proyecto de voto electrónico del Consejo de Europa comenzó para que los Estados miembro pudieran utilizar este instrumento como respuesta al aumento del abstencionismo en elecciones y referenda; y en concreto, para solucionar los riesgos potenciales que el voto electrónico supone en materia de seguridad y secreto. El enfoque fundamental de este proyecto es servir como continuación de la Recomendación sobre voto electrónico de 2004 emitida por el propio Consejo.

<http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/E-voting/>

Recomendación del Consejo de Europa sobre estándares jurídicos, operativos y técnicos para el voto electrónico (2004)

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

El Consejo de Europa realizó en 2004 una serie de recomendaciones sobre el voto electrónico. Las recomendaciones subrayan, entre otros aspectos, que el voto electrónico debe convertirse en un instrumento tan fiable y seguro como las elecciones democráticas y los referendos que no recurren a medios electrónicos, y que los Estados miembro deberían considerar la posibilidad de revisar su legislación interna relacionada con los votos electrónicos.

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=778189>

Red de conocimientos electorales ACE

MULTI-STAKEHOLDER

GENERAL REFERENCE

ACE se fundó en 1998 y cambió su nombre a Red de conocimientos electorales ACE en 2006. Es una iniciativa con carácter colaborativo en el que están involucradas nueve organizaciones. Se ofrecen servicios relacionados con el conocimiento electoral, la asesoría y el desarrollo de la capacidad. Entre otras cosas, la web de ACE es un repositorio de conocimiento online que contiene información exhaustiva y consejos personalizados sobre los procesos electorales.

<http://www.aceproject.org>

Medio ambiente

ONU: Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

El artículo 25 del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, de 1966, otorga a todo ciudadano el derecho de participar en la gestión de la vida pública, ya sea de forma directa o a través de representantes electos.

<http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>

CEPE: Convención de Aarhus

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

La Convención sobre Acceso a la Información, Participación Pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia ambiental, también conocida como Convención de Aarhus, se firmó en Aarhus, Dinamarca, en junio de 1998, y ha sido ratificada por 45 países y por la Unión Europea. La Convención garantiza los derechos públicos en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia y procesos gubernamentales de toma de decisiones en materia ambiental y a escala local, nacional y transnacional. Se centra en la interacción del público con la administración.

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>

CEPE: Convención de Aarhus: Guía para la implementación

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

Esta es una guía para la implementación del [Convenio relativo al acceso a la información, a la participación del público y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente](#), de 1998, de la Comisión para Europa de la ONU (CEPE), también conocido como Convenio de Aarhus. La guía proporciona tanto una visión general como un análisis detallado de cada artículo del Convenio de Aarhus. Está dirigido a legisladores y políticos responsables de la transposición del Convenio a la legislación nacional, y a otras autoridades públicas sujetas a las obligaciones fijadas en dicho documento.

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/acig.pdf>

Declaración de Yakarta para reforzar el Derecho a información ambiental para las personas y el medio ambiente

MULTI-STAKEHOLDER PRINCIPLES DETAILED GUIDANCE

La Declaración de Yakarta fue el resultado de un encuentro regional celebrado entre abril y mayo de 2013, al que acudieron representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de China, Indonesia, Japón, Filipinas y Tailandia. La Declaración urge a que los gobiernos mejoren el acceso a la información sobre la contaminación del aire y el agua en Asia, y ofrece una hoja de ruta sobre al respecto. Además, la Declaración también perfila cómo pueden las naciones asiáticas mejorar su transparencia y la participación ciudadana en materia medioambiental.

<http://insights.wri.org/news/2013/05/new-jakarta-declaration-aims-strengthen-rights-environmental-information-asia>

FMI – Guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los recursos naturales

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

La Guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los recursos naturales del FMI, publicada en 2005 y revisada en 2007, contiene directrices pormenorizadas en materia de transparencia, y las acompaña con textos explicativos y ejemplos de buenas prácticas en países productores. El objetivo de la guía es apoyar a los países ricos en recursos para que puedan orientarse en las problemáticas derivadas de la complejidad técnica y la volatilidad de los flujos de ingresos proveniente de la explotación de los recursos naturales y por la propia magnitud de estas transacciones. La Guía propone una serie de referencias autorizadas de buenas y mejores prácticas en materia de transparencia del ingreso proveniente de los recursos naturales para su aprovechamiento por parte de la sociedad civil y expertos técnicos.

<http://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/guides.pdf>

IAIA: Principios de mejores prácticas en materia de participación pública

MULTI-STAKEHOLDER PRINCIPLES

Estos principios de mejores prácticas, desarrollados en 2006 por la Asociación Internacional de Evaluación del Impacto (IAIA), tienen por objeto la promoción de prácticas de participación pública significativas entre profesionales y expertos del ámbito de la evaluación del impacto. Los principios, que son amplios, genéricos y no tienen naturaleza prescriptiva, están diseñados fundamentalmente para el uso de quienes están relacionados con la participación pública en procesos de evaluación de impacto, y están pensados para el uso en intervenciones de todo tipo y escala.

A propósito de las audiencias públicas, los principios indican que "todas las personas afectadas por la propuesta e interesadas en participar deberían tener acceso a información relevante, independientemente de su origen étnico,

género y nivel de rentas. Los legos en la materia deben ser capaces de participar en grupos de trabajo, talleres, reuniones y audiencias relacionadas con el proceso de evaluación de impacto. Se debe proporcionar información y facilitación para este tipo de participación."

https://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/SP4_spa.pdf

Instituto de Recursos Mundiales: Principios y procedimientos administrativos

EXPERT / OTHER PRINCIPLES

El Instituto de Recursos Mundiales, a través de su proyecto *Public Administrative Fairness*, ha identificado un conjunto de principios generales de amplia aplicación que miran a garantizar la justicia procedimental en la toma de decisiones medioambientales. El proyecto tiene por objeto la creación de un conjunto de principios glosados que ilustren su aplicación mediante ejemplos de buenas prácticas.

<http://www.wri.org/events/administrative-fairness-environmental-decision-making-stakeholder-workshop>

ONU: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

El artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, obliga a que los países firmantes de la Convención tomen todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

ONU: Declaración del Milenio

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

El párrafo 25 de la Declaración del Milenio de la ONU incluye una disposición que llama al trabajo colectivo en aras de procesos políticos más integradores que favorezcan una genuina participación de la ciudadanía.

<http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>

ONU: Declaración sobre el Derecho al Desarrollo

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

El artículo 8.2 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 reconoce la importancia de la participación pública, al afirmar que "los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos."

<http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>

ONU: Declaración sobre los Derechos de los pueblos indígenas

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

La Declaración sobre los Derechos de los pueblos indígenas fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2007. Afirma que los pueblos indígenas tienen el derecho a participar de forma plena en la vida política, económica, social y cultural del Estado (artículo 5); que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en en la toma de decisiones sobre asuntos que puedan afectar a sus derechos (artículo 18); que los Estados deben consultar a los pueblos indígenas afectados y cooperar con ellos de buena fe antes de adoptar o de mplementar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos (artículo 19) y que deben establecerse fórmulas y maneras para asegurar la participación de pueblos indígenas en asintos que los afecten (artículos 41).

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Open Data Index

CIVIL SOCIETY RATING

El Open Data Index fue desarrollado en 2013 con el fin de servir como referencia mundial acerca del estado de la publicación de datos abiertos por los gobiernos nacionales. Aporta una evaluación independiente, sometida a revisión por pares, de la apertura en toda una gama de áreas fundamentales, además de reflejar la realidad y las prácticas de la publicación de información pública en más de 60 países. Se han evaluado más de 80 conjuntos de datos en diez áreas que incluyen transporte, presupuestos nacionales, resultados de las elecciones, registros mercantiles, mapas y estadísticas nacionales, legislación, códigos postales y emisiones contaminantes.

<https://index.okfn.org/>

Programa ambiental de las Naciones Unidas: directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

Estas directrices, también conocidas como Directrices de Bali, se desarrollaron en 2010 con el objetivo de acelerar la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, en la que se afirma que "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados..."

Estas directrices, aunque voluntarias, demuestran la voluntad de los gobiernos por alcanzar un grado más fuerte de interacción con el público a todos los niveles y de proteger y gestionar el ambiente y otros recursos relacionados. También se subraya la necesidad de que, en el marco de la legislación y los procedimientos nacionales, se puedan colmar vacíos legales y de carácter práctico con la finalidad de fomentar un acceso más amplio a la información, un mayor grado de participación pública y un mejor acceso a la justicia en materia medioambiental.

http://www.unep.org/civil-society/Portals/24105/documents/Guidelines/GUIDELINES_TO_ACCESS_TO_ENV_INFO_2.pdf

Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente: Principios de Johannesburgo sobre el papel que juegan el Derecho y el Desarrollo Sostenible

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

LosPrincipios de Johannesburgo sobre el papel que juega el Derecho y el Desarrollo Sostenible fueron adoptados en 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica. El enfoque de los principios consiste en enfrentarse a los desafíos ambientales

mediante la mejora de los sistemas jurídicos de los distintos países. Los países firmantes de los Principios se comprometen a mejorar los niveles de participación pública en la toma de decisiones ambientales, en el acceso a la justicia para dirimir disputas ambientales y para la defensa y el respeto de los derechos ambientales, así como en el acceso público a información relevante. Además, también se comprometen a mejorar la capacidad de los agentes involucrados en las fases de promoción, implementación, desarrollo y cumplimiento del derecho ambiental, como jueces, fiscales y legisladores.

<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?ArticleID=3115&DocumentID=259>

UNITR: PRTR: Learn

INTER-GOVERNMENT COMMUNITY OF PRACTICE

PRTR:Learn es un sitio web interactivo del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITR) sobre registros de emisiones y transferencias contaminantes (PRTR). Su objetivo principal es compartir puntos de vista, información, conocimiento y recursos sobre PRTR. La plataforma sirve como un espacio en el que los países que están implementando y diseñando PRTR pueden compartir sus experiencias sobre la publicación de información sobre sustancias contaminantes en sus territorios, potenciando el intercambio lecciones aprendidas y facilitando la adquisición de conocimiento por parte de países que desarrollarán PRTR en el futuro. También sirve como un espacio donde el público puede obtener información sobre los últimos PRTR, incrementando su participación en asuntos medioambientales.

<http://prtr.unitar.org/en>

WRI: Un asiento en la mesa

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE

Este informe, publicado en 2010 por el Instituto de Recursos Mundiales, examina los derechos y prácticas de acceso a través de cuatro estudios de caso: Camerún, Paraguay, Filipinas y Sri Lanka. Los estudios de caso abarcan una serie de problemáticas medioambientales, como la calidad del agua, el uso de los suelos, la disponibilidad de datos, y el uso y la falta de evaluaciones de impacto ambiental. Presenta ejemplos en los que organizaciones de la sociedad civil, grupos locales y gobiernos han tomado medidas para superar distintas barreras de acceso, como bajas tasas de alfabetización, costes elevados, riesgos derivados de la participación, falta de documentación, de identidad jurídica o del derecho a un recurso que es necesario para influir en las decisiones, y normas culturales adversas. El informe propone un conjunto de respuestas políticas para superar estas barreras.

http://pdf.wri.org/a_seat_at_the_table.pdf

Datos de gobierno abierto

6 grados corporativos

CIVIL SOCIETY DETAILED GUIDANCE GENERAL REFERENCE

6 Degrees of Corporations es una iniciativa de Sunlight Foundation que se dedica de manera exclusiva a la mejora de la rendición de cuentas de las corporaciones mediante Identificadores Corporativos Únicos. La página web permite

visualizar el problema que genera la ausencia de este tipo de indicadores mediante la utilización de los identificadores corporativos más habituales (números DUNS). También contiene una visión panorámica de los sistemas federales más importantes en los Estados Unidos, además de el estudio de caso de un país que ha conseguido solucionar este problema.

<http://sunlightfoundation.com/sixdegrees/resources/>

Conjunto de herramientas de datos abiertos del Banco Mundial

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

El conjunto de herramientas de datos abiertos contiene información dividida en cinco secciones: 1) Fundamentos de open data; 2) opciones de tecnología para sistemas de datos abiertos; 3) cómo producir demanda y participación; 4) cómo gestionar el suministro y la calidad de los datos y 5) una herramienta de evaluación al estado de preparación.

<http://data.worldbank.org/open-government-data-toolkit>

Definición de datos abiertos

EXPERT / OTHER PRINCIPLES

La Definición de datos abiertos contiene todos los detalles y requisitos para que datos y contenido puedan considerarse "abiertos". Las características principales son: disponibilidad y acceso, reutilización y redistribución, así como participación universal.

<http://opendefinition.org/>

Directrices de datos abiertos para contratación pública

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

Sunlight Foundation ha creado un conjunto de directrices para promover las modalidades a las que se acogen los gobiernos a la hora de liberar datos sobre el proceso de contratación. Las directrices se centran en cómo se puede conseguir un proceso de contratación más transparente, qué se necesita para supervisar los datos de forma distribuida, además de otros aspectos como la competencia justa y la accesibilidad del mercado de contratación pública.

<http://sunlightfoundation.com/procurement/opendataguidelines>

Los 10 principios de los datos abiertos

EXPERT / OTHER PRINCIPLES

Los *10 principios para abrir la información gubernamental*, de Sunlight Foundation, sirven para evaluar hasta qué punto los datos públicos son abiertos y están disponibles a la ciudadanía. Los principios son exhaustividad, datos primarios,

oportunidad, facilidad de acceso físico y electrónico, legibilidad por máquinas, no discriminación, uso de estándares compartidos, licencias, permanencia y costes de uso.

<http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/>

Manual de datos abiertos de la Open Knowledge Foundation

EXPERT / OTHER

DETAILED GUIDANCE

GENERAL REFERENCE

El Manual de datos abiertos de la Open Knowledge Foundation es una introducción a los aspectos jurídicos, sociales y técnicos de los datos abiertos, y es especialmente útil para quienes trabajen con datos gubernamentales. El manual explica los conceptos básicos de los datos abiertos, especialmente en su relación con el gobierno, e indica de qué manera pueden los datos abiertos crear valor y tener un impacto positivo en muchas áreas diferentes. Además de servir como una introducción al contexto general, el manual también ofrece información concreta sobre cómo producir datos abiertos.

<http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf>

OpenGovData.io

EXPERT / OTHER

GENERAL REFERENCE

En su libro de 2012 'Open Government Data', el autor Joshua Tauberer discute los principios que sustentan el movimiento de datos abiertos en los Estados Unidos, incluyendo los diferentes usos que se puede dar a los datos abiertos para fomentar la transparencia y la participación pública, una breve historia jurídica, una sección dedicada a la calidad de los datos , otra al movimiento de *civic hacking*, y otra a las paradojas de la transparencia.

<http://opengovdata.io/>

Sunlight Foundation: Directrices para políticas de datos abiertos

EXPERT / OTHER

DETAILED GUIDANCE

Las Directrices para políticas de datos abiertos tratan de responder una pregunta muy concreta: ¿Qué puede y qué debería hacer una política de datos abiertos? Las Directrices están organizadas entorno a la definición de (i) qué datos deberían ser abiertos (ii) cómo se pueden publicar los datos y (iii) cómo implementar las políticas - tres elementos centrales a cualquier legislación, decreto o cualquier otro elemento legislativo que incluya elementos de datos abiertos.

<http://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/>

World Wide Web Consortium: Datos vinculados

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

El artículo sobre datos vinculados publicado por el World Wide Web Consortium (W3C), discute cómo se pueden resolver varios problemas que aparecen cuando los datos no están vinculados, y proporciona detalles sobre la implementación y el tipo de decisiones que pueden aparecer cuando se decide publicar datos vinculados.

<http://WWW.W3.ORG/DESIGNISSUES/LINKEDDATA.html>

World Wide Web Consortium: Publicar datos gubernamentales abiertos

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

El documento 'Publicar datos gubernamentales abiertos', con fecha de 2009, contiene un conjunto de directrices desarrolladas por el Grupo de interés en gobierno electrónico del World Wide Web Consortium eGov Interest Group. Las directrices perfilan estándares y metodologías que animan a la publicación de datos gubernamentales.

<http://www.w3.org/TR/gov-data/>

Fuerzas policiales y seguridad ciudadana

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas y directrices complementarias

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

El código de conducta se dirige a la rendición de cuenta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a través de su representación y su respuesta al conjunto de la sociedad. Este código fue introducido por vez primera en 1979 y complementado una década más tarde. Es el estándar de mayor nivel en materia de policía a escala global.

<http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Background%20documents/CodeofConductforlawEnfOfficials-E.pdf>

Consejo de Europa: Código Europeo de Ética de la Policía

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

Este código trata problemáticas tales como los objetivos de la policía, los fundamentos jurídicos de la acción policial bajo el imperio de la ley, la relación entre la policía y el sistema de la justicia penal, las estructuras organizativas de la policía, la acción y la intervención policiales, la rendición de cuentas y el control de la policía, así como la cooperación en el marco de la investigación y las redes internacionales.

<http://polis.osce.org/library/f/2687/500/CoE-FRA-RPT-2687-EN-500>

Criterios de elegibilidad de la OGP: Participación ciudadana

OGPELIGIBILITY CRITERIA

RATING

Para poder participar en la OGP, los gobiernos deben demostrar su compromiso con el gobierno abierto en cuatro áreas clave, que se miden por medio de indicadores objetivos posteriormente validados por expertos independientes. Cualquier gobierno que obtenga una puntuación de, al menos, el 75% de todos los puntos posibles puede ingresar en OGP en cualquier momento una vez que demuestra que cumple con los criterios de mínimos.

La apertura a la participación ciudadana, incluida la protección básica de las libertades civiles, es uno de los cuatro criterios que componen la elegibilidad, y se mide por medio del sub-indicador del Índice de 2012 de derechos civiles de la Unidad de Inteligencia de The Economist. Con 10 como valor máximo y 0 como mínimo, se asignan cuatro puntos a los países que tienen un resultado por encima de 7,5 puntos; 3 a los países que puntúan por encima del 5; 2 puntos a los países con puntuaciones por encima del 2,5; y 0 al resto. El índice de Democracia de 2012 de la Unidad de Inteligencia de The Economist abarca a 167 países.

<http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>

DCAF: Kit de supervisión de servicios de inteligencia

CIVIL SOCIETY

DETAILED GUIDANCE

El kit de DCAF proporciona orientación detallada sobre cómo supervisar determinadas áreas de actividades de los servicios de inteligencia. Está especialmente dirigido a comités parlamentarios y órganos extraparlamentarios (como instituciones superiores de auditoría, agencias de protección de datos, etcétera) y, en menor medida, a órganos (cuasi)judiciales.

<http://www.dcaf.ch/Publications/Overseeing-Intelligence-Services-A-Toolkit>

Government Accountability Project: Mejores prácticas internacionales en políticas de protección de denunciantes

CIVIL SOCIETY

DETAILED GUIDANCE

Este documento publicado en 2013 por el Government Accountability Project proporciona una lista de 20 requisitos que garantizan que las leyes sobre protección de denunciantes están a la altura de las mejores prácticas internacionales. Estas normativas de "mejores prácticas" se basan en una recopilación de todas las leyes nacionales y políticas de Organizaciones Intergubernamentales, como las que existen en las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

http://www.whistleblower.org/storage/documents/Best_Practices_Document_for_website_March_13_2013.pdf

Interpol: Estándares Globales para combatir la Corrupción en las Fuerzas y Servicios Policiales

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

El objetivo de estos códigos y protocolos es el de promover y reforzar medidas para la prevención, detección, castigo y erradicación de la corrupción en las fuerzas y servicios policiales dentro del territorio nacional, y de facilitar que se pueda procesar judicialmente a agentes de policía, u otros empleados de las fuerzas y servicios policiales, cuando existan indicios de prácticas corruptas.

<http://www.interpol.int/Media/Files/Crime-areas/Corruption/Global-standards-to-combat-corruption-in-police-forces>

OCDE: G20, Marcos de protección de los informantes, compendio de mejores prácticas y principios rectores aplicables a la legislación

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

Este estudio de la OCDE publicado en el año 2011 se centra en las principales características de las leyes de protección de denunciantes de irregularidades, y proporciona ejemplos de mejores prácticas extraídos de países del G20 con especial atención a su alcance y aplicación. El informe también incluye un conjunto de principios rectores que sirven como referencia para los países que tengan previsto establecer, modificar o complementar sus propios marcos para la protección de informantes.

<http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf>

ONUDD: Conjunto de instrumentos de evaluación de la justicia penal

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE

El conjunto de instrumentos está diseñado para que las agencias de las Naciones Unidas, los funcionarios públicos con responsabilidades en las reformas de la justicia judicial, así otras organizaciones o individuos puedan llevar a cabo evaluaciones completas de los sistemas de justicia penal. Está diseñado para identificar áreas de asistencia técnica, ayudar a las agencias en el diseño de las intervenciones que permitan alcanzar la integración con los estándares y las normas de las Naciones Unidas en justicia penal y prevención del delito, además de apoyar la formación en este campo.

<http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html>

Principios de Tshwane sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información

CIVIL SOCIETY PRINCIPLES

Los Principios de Tshwane sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información fueron presentados en junio de 2013 por 22 organizaciones y centros académicos de todo el mundo. Los principios se desarrollaron con el fin de orientar a quienes estén involucrados en la redacción, la revisión o la implementación de leyes y disposiciones relacionadas con la autoridad del estado para ocultar información por motivos de seguridad o castigar la divulgación de la misma. Se fundamenta en el derecho internacional, el derecho y los estándares regionales, la evolución de la práctica del estado, los principios generales del Derecho reconocidos por la comunidad internacional, y la producción escrita de expertos en la materia.

<http://www.right2info.org/exceptions-to-access/national-security>

Principios Internacionales para la aplicación de los Derechos Humanos a la vigilancia de las comunicaciones

MULTI-STAKEHOLDER PRINCIPLES

Estos principios se desarrollaron a través de consultas con la sociedad civil y con expertos en privacidad y tecnología, y han sido firmados por más de un centenar de organizaciones alrededor del mundo. El proceso fue liderado por Privacy International, Access, y la Electronic Frontier Foundation. Los Principios señalan cómo debe aplicarse la legislación en Derechos Humanos al actual entorno digital, especialmente en relación con las tecnologías y técnicas de vigilancia de

las comunicaciones. Para grupos de la sociedad civil, pero también para el sector privado, el estado u otros actores, estos principios pueden aportar un marco de referencia desde el cual evaluar si las actuales leyes o los borradores de ley sobre vigilancia, así como las prácticas en la materia, son consistentes con los Derechos Humanos.

<https://en.necessaryandproportionate.org/text>

Public Office, Private Interests: Rendir cuentas con declaraciones patrimoniales y de activos

INTER-GOVERNMENT

DETAILED GUIDANCE

GENERAL REFERENCE

Esta es una publicación del año 2012 de la Iniciativa para la recuperación de activos robados. Se centra y la obligación de publicar las declaraciones patrimoniales de los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno, y está pensado (al igual que su publicación hermana, [Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations](#)) como una guía para profesionales y responsables políticos, además de otros agentes interesados en herramientas y procedimientos para luchar contra la corrupción. En la publicación se incluyen los elementos básicos de los sistemas de publicación de declaraciones patrimoniales, así como las consideraciones más importantes que pueden influir, en distintos contextos, en el diseño, la implementación y la vigilancia del cumplimiento de mecanismo para la publicación de declaraciones patrimoniales.

[http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public Office Private Interests.pdf](http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf)

TI: Detener la corrupción de la policía – La experiencia global de las iniciativas para reformar la corrupción policial

CIVIL SOCIETY

DETAILED GUIDANCE

Este informe es el resultado de una encuesta sobre la experiencia mundial en reformas de la policía y para la lucha contra la corrupción. En él se analiza la corrupción policial y se examinan reformas cuyo objetivo era atajar este problema. El estudio presenta un método para el análisis sistemático de la corrupción por medio de una "tipología policial", y presenta ejemplos de reformas policiales en 10 países de todo el mundo: Australia, Afganistán, China, Georgia, Honduras, Jamaica, Kenya, Serbia, Singapur y Venezuela.

http://issuu.com/tidefence/docs/2012-11_arrestingcorruptioninpolice

Servicios públicos

Civicus – Seguimiento y evaluación de servicios públicos

CIVIL SOCIETY

DETAILED GUIDANCE

COMMUNITY OF PRACTICE

PG Exchange es una iniciativa de CIVICUS, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana. La página web es parte del trabajo de CIVICUS para aumentar la influencia de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de gobernanza. El Proyecto de Gobernanza Participativa de CIVICUS se esfuerza en mejorar la capacidad de actores escogidos gubernamentales y de la sociedad civil en países del sur para promover una gobernanza participativa y responsable de las instituciones públicos a escala local y nacional.

La sección de seguimiento y evaluación de los servicios públicos incluye detalles sobre encuestas a agentes

interesados, tarjetas ciudadanas de calificaciones, tarjetas de puntuación para grupos locales, seguimiento comunitario, evaluación y auditorías sociales.

http://www.pgexchange.org/index.php?option=com_content&view=category&id=59&Itemid=135

El Banco Mundial: Ciudadanos y provisión de servicios

INTER-GOVERNMENT

GENERAL REFERENCE

Este libro del Banco Mundial revisa cómo los ciudadanos pueden influir en la provisión de servicios mediante el acceso a la información y las oportunidades necesarias para exigir que los proveedores de los servicios rindan cuentas. Se centra en medidas de responsabilidad social para promover el uso de información y asistir a un mayor uso de la misma por parte de la ciudadanía, de manera que aumenten los mecanismos de transparencia, de provisión de servicios y de atención de las reclamaciones. El informe extrae contenido obtenido de experiencias reales y subraya la complejidad de las relaciones entre ciudadanos, legisladores, gestores y proveedores de servicios. Estas relaciones no siempre son directas, y pueden verse alteradas con facilidad mediante intervenciones únicas, como campañas informativas o ejercicios de puntuación.

<http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821389805>

OCDE: Focus on Citizens – Participación pública para mejorar políticas y servicios

INTER-GOVERNMENT

PRINCIPLES

GENERAL REFERENCE

Este libro, publicado en 2009 a partir de una encuesta realizada a gobiernos de 25 países, 14 estudios de caso pormenorizados y 18 aportaciones de opinión de expertos de la sociedad civil y al ámbito gubernamental, repasa en cómo los gobiernos de países miembros de la OCDE ponen en práctica los principios sobre diseño abierto e inclusivo de políticas, y en cómo pueden garantizar una participación más amplia e inclusiva.

El informe de la OCDE propone 10 principios rectores para hacer posible que tanto las políticas públicas como la provisión efectiva de los servicios sean procesos más abiertos e inclusivos:

1. Compromiso
2. Derechos
3. Claridad
4. Tiempo
5. Inclusividad
6. Recursos
7. Coordinación
8. Rendición de cuentas
9. Evaluación
10. Ciudadanía activa

<http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/focusoncitizenspublicengagementforbetterpolicyandservices.htm>

 OCDE: Together for Better Public Services – Partnering with citizens and civil societyEXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE

Este informe analiza las alianzas entre gobiernos y ciudadanos, usuarios y OSC que tienen por objeto innovar y mejorar la calidad de los servicios públicos. Se identifican los riesgos que entraña la participación de ciudadanos y usuarios en la provisión de servicios, así como las barreras que deben superarse para que estos modelos funcionen. Además, se enumeran tres factores de éxito: compromiso político de máximo nivel, un sector público con la capacidad suficiente, e incentivos financieros adecuados.

<http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/4211131e.pdf>

Gestión documental

 Sistemas de información de archivos abiertos (OAIS) (ISO 14721)EXPERT / OTHER PRINCIPLES DATA STANDARD

La norma ISO 14721:2012, publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), define el modelo de referencia para sistemas de información de archivos abiertos (OAIS).

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57284

 Archivos digitales seguros: Atributos y responsabilidades (2002)EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

Este informe de 2002 proporciona un marco de atributos y responsabilidades para los archivos digitales seguros, fiables y sostenibles con el que se hace posible manejar el volumen de materiales en posesión de instituciones de investigaciones, tanto grandes como pequeñas.

<http://www.oclc.org/content/dam/research/activities/trustedrep/repositories.pdf?urlm=161690>

 ARTICLE19: Curso de formación para funcionariosEXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE GENERAL REFERENCE

El Manual de formación en libertad de información para funcionarios fue diseñado por ARTICLE 19 como un recurso al que pueden recurrir los funcionarios que quieran adoptar prácticas administrativas que estén a la altura de los más exigentes estándares en materia de libertad de información.

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Publikacije_ostalih_pooblascencev/Article_19_foitainersmanual.pdf

Auditoría y certificación de archivos fiables: Criterios y lista de control

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

El "Trustworthy Repository Audit & Certification: Criteria and Checklist", publicado en 2007 por el Center for Research Libraries y el Online Computer Library Center, contiene un conjunto de criterios, así como una lista de control, cuyo objetivo es facilitar la certificación de archivos digitales.

http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf

Auditoría y certificación de repositorios digitales (ISO 16363)

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

ISO 16363:2012 define prácticas recomendadas para evaluar la fiabilidad de los repositorios digitales. Es de aplicación a todo tipo de repositorios digitales y puede usarse como punto de partida para la certificación.

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510

Centro de Comisariado Digital

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE

El Centro de Comisariado Digital DCC (<http://www.dcc.ac.uk/>) es una buena fuente de información sobre gestión y conservación de conjuntos de datos.

<http://www.dcc.ac.uk/>

Curso de formación para funcionarios de CLD

EXPERT / OTHER GENERAL REFERENCE COMMUNITY OF PRACTICE

Curso de formación para funcionarios de CLD

<http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2012/08/Manual-Final.docx>

Directorio de fuentes para la gestión de conjuntos de datos de interés del archivo de datos del Reino Unido

EXPERT / OTHER DATA STANDARD GENERAL REFERENCE

El archivo de datos del Reino Unido ha producido un directorio con enlaces a fuentes para la gestión de conjuntos de datos de interés.

<http://data-archive.ac.uk/create-manage/document/resources>

Integración de la gestión de archivos en sistemas TIC

EXPERT / OTHER

DETAILED GUIDANCE

Esta herramienta del International Records Management Trust está diseñada para ayudar a los gobiernos que quieran diagnosticar si los requerimientos de gestión de documentos están integrados en sus sistemas TIC. Se identifican buenas prácticas y medidas para determinar la adquisición de las buenas prácticas, desde las fases de planificación y diseño hasta la implementación final.

http://www.irmt.org/documents/educ_training/term_resources/IRMT_Good_Practice_Indicators.pdf

ISO 15489:2001 Información y documentación – Gestión de documentos

EXPERT / OTHER

DETAILED GUIDANCE

GENERAL REFERENCE

Esta norma de gestión de documentos de 2001 consta de dos partes. La parte 1 es un documento de carácter informativo, define un marco de referencia para las mejores prácticas y presenta los principios básicos de gestión de documentos para su uso por toda la plantilla y la dirección de una organización. La parte 2 contiene recomendaciones más detalladas para la gestión de documentos.

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31908

ISO 23081-2:2009 Información y Documentación – Procesos de gestión de documentos – Metadatos para la gestión de documentos

EXPERT / OTHER

PRINCIPLES

DETAILED GUIDANCE

DATA STANDARD

Tanto las estrategias para gestionar los metadatos de objetos digitales como los correspondientes sistemas de control deberían cumplir con las normas internacionales, como ISO 23081-2:2009 Información y Documentación - Procesos de gestión de documentos - Metadatos para la gestión de documentos. Esta norma tiene 3 partes: Parte 1 - Principios; Parte 2 - problemas conceptuales y de implementación; parte 3 - Métodos de autoevaluación.

Nota del Traductor: Existe una norma equivalente en español: [AENOR PNE-ISO 23081-2](#)

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50863

ISO 30300:2011 Información y documentación – Sistema de gestión para los documentos

EXPERT / OTHER

PRINCIPLES

DETAILED GUIDANCE

GENERAL REFERENCE

Esta publicación de la Organización Internacional de Normalización define términos y definiciones que son aplicables a los estándares de sistemas de gestión para los documentos (MSR), establece objetivos y principios para la utilización de MSR, describe una metodología centrada en el proceso y especifica las funciones que debe desempeñar la dirección.

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=53732

Método de Auditoría de Repositorios Digitales Basado en la Evaluación de Riesgos (DRAMBORA)

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

Digital Curation Centre y Digital Preservation Europe han desarrollado Método de Auditoría de Repositorios Digitales Basado en la Evaluación de Riesgos (DRAMBORA) . El objetivo de este conjunto de herramientas es facilitar las auditorías internas, al proporcionar un método con el que los administradores de los repositorios pueden evaluar las capacidades, identificar las debilidades y reconocer las fortalezas.

<http://www.repositoryaudit.eu/>

MoReq2010

INTER-GOVERNMENT DETAILED GUIDANCE DATA STANDARD

La Comisión Europea ha desarrollado MoReq2010, un estándar de requerimientos ampliamente empleado por otros gobiernos. Existen dos páginas web con información sobre MoReq2010. El Foro DLM, que administra MoReq2010, tiene su propia web en <http://www.moreq.info/>. Inforesight Ltd., una consultora independiente, mantiene asimismo otra web (<http://www.moreq2.eu/home>) con numerosos recursos relacionados con MoReq2010.

<http://www.moreq2.eu/home>

Nestor- Catálogo de criterios para un repositorio digital fiable

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

Este informe de 2006 se centra en la fiabilidad en la gestión de archivos digitales. En concreto, identifica criterios que facilitan la evaluación de la fiabilidad de repositorios digitales, tanto desde el punto de vista organizativo como técnico.

http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_08-eng.pdf

Principios y requisitos funcionales para documentos en entornos de oficina electrónica (ISO 16175)

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE DATA STANDARD

Este documento, publicado en 2011 por la Organización Internacional de Normalización (ISO), articula un conjunto de requisitos funcionales para sistemas de gestión de documentos digitales.

Nota del traductor: Existe una versión castellana de esta norma, [ISO 16175-2:2012](#), publicada por AENOR.

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55791

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África fue firmada en octubre de 2002 en Banjul, Gambia. La Declaración afirma que la libertad de expresión y la información son un derecho humano fundamental e inalienable. Con respecto a las leyes de secreto, además, afirma que deberían ser enmendadas convenientemente para cumplir con los principios de libertad de información.

<http://www1.umn.edu/humanrts/achpr/expressionfreedomdec.html>

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: Ley modelo para África sobre acceso a la información

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES DETAILED GUIDANCE

Esta Ley modelo sobre acceso a la información para África, de 2012, es un documento no vinculante creado con el propósito de orientar a los legisladores en países africanos a la hora de transponer las obligaciones reflejadas en tratados internacionales en instrumentos normativos concretos de la legislación nacional.

El propósito de la Ley modelo consiste en guiar el desarrollo de nueva legislación en materia de acceso a la información, y también de revisar la legislación ya existente. También tiene por objeto servir como instrumento para la defensa del acceso a la información y busca incentivar la adopción de nuevas leyes con su recopilación de mejores prácticas, además de ayudar a reforzar la creación de un punto de vista compartido que permita la armonización de las leyes de acceso a la información en el continente y el resto del mundo.

http://www.achpr.org/files/news/2013/04/d84/model_law.pdf

ARTICLE19: Curso de formación para funcionarios

MULTI-STAKEHOLDER DETAILED GUIDANCE

El Manual de formación en libertad de información para funcionarios fue diseñado por ARTICLE 19 como un recurso al que pueden recurrir los funcionarios que quieran adoptar prácticas administrativas que estén a la altura de los más exigentes estándares en materia de libertad de información.

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Publikacije_ostalih_pooblascencev/Article_19_foitainersmanual.pdf

Centro Carter: Herramienta para evaluar la implementación de la legislación en materia de acceso a la información

EXPERT / OTHER DETAILED GUIDANCE

La herramienta para evaluar la implementación de la legislación en materia de acceso a la información, desarrollada por el Centro Carter, tiene un objetivo doble. Por una parte, sirve para diagnosticar cuánta capacidad tiene la administración para responder a las peticiones de información; por otra, sirve como una hoja de ruta para que los gobiernos implementen sus políticas en esta materia. La herramienta de evaluación está diseñada para su uso en cada agencia, pero no sirve para generar índices comparativos entre países. Los objetivos de la herramienta de evaluación

son los siguientes:

- Establecer un conjunto completo de puntos de referencia para la implementación de mecanismos de acceso a la información
- Identificar el grado de implementación de la ley en cada ministerio/agencia
- Generar una guía para la introducción de mejoras
- Contribuir al conocimiento técnico sobre la implementación y la comprensión de los éxitos y las dificultades de la misma.

http://www.cartercenter.org/peace/americas/access_to_information/IAT/index.html

Criterios de elegibilidad de la OGP: Acceso a la información

OGPELIGIBILITY CRITERIA RATING

Para poder participar en la OGP, los gobiernos deben demostrar su compromiso con el gobierno abierto en cuatro áreas clave, que se miden por medio de indicadores objetivos posteriormente validados por expertos independientes. Cualquier gobierno que obtenga una puntuación de, al menos, el 75% de todos los puntos posibles puede ingresar en OGP en cualquier momento una vez que demuestra que cumple con los criterios de mínimos.

Uno de los cuatros criterios de elegibilidad es contar con una ley que regule el acceso a la información. Este criterio se evalúa a partir de la información incluida en un estudio de Right2Info.org, que cubre 197 países y está en permanente evolución. Se asignan cuatro puntos a los países con leyes de acceso a la información, tres si el país cuenta con elementos constitucionales que garanticen el acceso a la información, y uno si el país está tiene un borrador de ley de acceso a la información en fase de tramitación parlamentaria. Los países que cuentan tanto con salvaguardias constitucionales como con borradores en fase de tramitación parlamentaria solo reciben los 3 puntos por la protección constitucional.

<http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>

Declaración de los mandatos especiales de 2004

INTER-GOVERNMENT PRINCIPLES

En 2004, el Relator especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, el Representante de la OSCE sobre la Libertad de los medios de comunicación social y el Relator especial de la OEA sobre la libertad de expresión aprobaron una Declaración conjunta sobre el acceso a la información y la legislación que regula el secreto.

<http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=319&IID=2>

Principios de ARTICLE 19

MULTI-STAKEHOLDER PRINCIPLES

ARTICLE 19 ha publicado un conjunto de principios internacionales sobre legislación en materia de libertad de información bajo el título 'The Public's Right to Know - Principles on Freedom of Information Legislation'. Estos principios establecen las maneras en las que los gobiernos pueden maximizar su aperturismo y ponerse a la altura de los estándares y las prácticas internacionales más avanzadas. Diseñados fundamentalmente para orientar en el ámbito de la legislación nacional en materia de libertad de información y acceso a la información oficial, los principios también pueden hallar aplicación a la información en manos de organismos intergubernamentales, como las Naciones Unidas o la Unión Europea.

<http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf>

Principios de Tshwane sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información

CIVIL SOCIETY PRINCIPLES

Los Principios de Tshwane sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información fueron presentados en junio de 2013 por 22 organizaciones y centros académicos de todo el mundo. Los principios se desarrollaron con el fin de orientar a quienes estén involucrados en la redacción, la revisión o la implementación de leyes y disposiciones relacionadas con la autoridad del estado para ocultar información por motivos de seguridad o castigar la divulgación de la misma. Se fundamental en el derecho internacional, el derecho y los estándares regionales, la evolución de la práctica del estado, los principios generales del Derecho reconocidos por la comunidad internacional, y la producción escrita de expertos en la materia.

<http://www.right2info.org/exceptions-to-access/national-security>

Rating de RTI

CIVIL SOCIETY RATING

El Rating de RTI, publicado por Access Info y el Centre for Law and Democracy, analiza la calidad de las leyes de acceso a la información de todo el mundo. Abarca 89 países con leyes DAI. El Rating RTI evalúa la fortaleza general del marco normativo de los distintos países en materia de acceso a la información, e indica debilidades y fortalezas del mismo en siete categorías diferentes: Derecho de acceso, alcance, procedimientos de petición, excepciones y negativas, alegaciones, sanciones y protecciones y medidas de promoción.

<http://www.rti-rating.org/>

Web del Banco Mundial sobre mecanismos públicos de rendición de cuentas

INTER-GOVERNMENT GENERAL REFERENCE

La página Web del Banco Mundial sobre mecanismos públicos de rendición de cuentas ofrece volúmenes elevados de información sobre varios aspectos relacionados con el derecho de acceso a la información, entre las que se encuentran las medidas para la implementación.

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:23352107~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305,00.html>

Anexo: Agradecimientos

Contribuyentes a esta área

Datos de gobierno abierto

Este asunto ha sido preparado por [Sunlight Foundation](#) con aportaciones de la [Open Knowledge Foundation](#) y de la [Global Open Data Initiative](#).

Declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses

Esta área ha sido desarrollada por Abhinav Bahl, de [Global Integrity](#), con aportaciones de David Banisar, de [Article 19](#), Stephanie Trapnell y Francesca Cantini del [Banco Mundial](#), y xxx de [Integrity Action](#).

Derecho a la Información

Este área ha sido preparada por Helen Darbishire of [Access Info Europe](#) y Toby Mendel del [Centre for Law and Democracy](#), con comentarios de Venkatesh Nayak de [Human Rights Initiative](#), Rachel Rank de [Publish What You Fund](#), David Goldberg, Andres Meija, Allison Tilley de [Open Democracy Advice Centre](#), Codru Vrabie, Javier Casas de Suma Ciudadana, Carole Excell de [Access Initiative](#), Mark Weiler, Luis F. Esquivel y Marcos Mendiburu del [Instituto del Banco Mundial](#) y Tania Sánchez Andrade de [IFAI](#), Mexico.

Elecciones

Este área ha sido preparada por el National Democratic Institute. El autor principal fue Patrick Merloe, con la contribución de Michelle Brown y Tova Wang. Puedes enviar tus comentarios a pat@ndi.org

Fuerzas policiales y seguridad ciudadana

This topic was developed by Rachel Neild, Vonda Brown and Sandy Coliver of the Open Society Justice Initiative, with inputs from Ivanka Ivanova, Maya Forstater, Carly Nyst, G.P. Joshi, Gergana Jouleva, Robert Davis, Bruno Langeani, and Sanjay Patel among others. These sample commitments will be updated, and we welcome comments. Please send any feedback to Rachel.neild@opensocietyfoundations.org or Rebekah.delsol@opensocietyfoundations.org.

Gestión documental

Este área ha sido preparada por Anne Thurston, James Lowry, John McDonald, Andrew Griffin y Anthea Seles de [International Records Management Trust](#), con la contribución de algunos miembros de [International Council on Archives](#) y de la [Association of Commonwealth Archivists and Records Managers](#).

Medio ambiente

Este área fue preparada por The Access Initiative.

Participación ciudadana

Esta área ha sido desarrollada por Involve (Tim Hughes y Simon Burall) con aportaciones de Tim Davies (Practical Participation), Claire-Marie Foulquier-Gazagnes (Sciences Po Paris & HEC Paris), Rikki Dean (London School of Economics), Claudia Cappelli (UNIRIO - Federal University of State of Rio de Janeiro, Brazil, Informatic Department), Rakesh Rajani (Twaweza), Rodrigo Davies (Center for Civic Media, MIT), Rebecca M. Townsend (Manchester Community College, Connecticut), Craig Thomler (Delib Australia), Lorna Ahlquist (Empowering Practice, Escocia), Benjamin Allen (Democracy and Good Governance Consulting), Adam Fletcher (CommonAction Consulting), Bill Badham (Co-Director de Practical Participation) y Gilbert Sendugwa (Africa Freedom of Information Centre).

Presupuestos

Este área ha sido preparada por [International Budget Partnership](#) con las aportaciones de Vivek Ramkumar y Warren Krafchik (IBP), Jay Kruuse, [Public Service Accountability Monitor, South Africa](#); Claire Schouten, [Integrity Action](#); Rocío Moreno, Global Movement for Budget Transparency Accountability and Participation (BTAP); Katarina Ott, [Institute of Public Finance, Croatia](#); Nicola Smithers y otros, del Banco Mundial; y Jason Haris, del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Servicios públicos

Este área ha sido preparada por Twaweza e Involve, gracias al trabajo de Rakesh Rajani (Twaweza), Tim Hughes (Involve) y Maya Forstater (Transparency and Accountability Initiative).

Guía sobre Gobierno Abierto

The Open Government Guide has been developed and edited by Maya Forstater, (consultant) under the direction of Vanessa Herringshaw (Director, T/AI) with support from Linnea Mills. T/AI is grateful to all the authors who generously contributed their time and expertise to the project, and to those who have provided comments, case studies and resources.

An advisory group provided high level comments to the development of the guide. Thank-you to Linda Frey and Paul Maassen from the Open Government Partnership, Martin Tisne from Omidyar Network, Julie McCarthy from the Open Society Foundations, Katarina Ott from the Institute for Public Finance in Croatia and Joel Salas.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

